

2.
EDICIÓN

EL SUBSUELO DE LA PATRIA

Historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos

SANTIAGO LIAUDAT • MAGDALENA TÓFFOLI • JUAN MANUEL FONTANA



Palabras preliminares Juan Grabois
Prólogo Paula Abal Medina

prometeo
editorial

EL SUBSUELO DE LA PATRIA

SANTIAGO LIAUDAT, MAGDALENA TÓFFOLI,
JUAN MANUEL FONTANA

EL SUBSUELO DE LA PATRIA
Historia del Movimiento
de Trabajadores Excluidos

Palabras preliminares Juan Grabois
Prólogo Paula Abal Medina

The logo for Prometeo editorial features a stylized lowercase 'p' enclosed within a circular shape that resembles a lightning bolt or a stylized letter 'P'. To the right of this symbol, the word 'prometeo' is written in a lowercase, serif font, with 'editorial' in a smaller, lowercase, sans-serif font directly beneath it.

prometeo
editorial

Liaudat, Santiago

El subsuelo de la patria : historia del movimiento de trabajadores excluidos / Santiago Liaudat ; Magdalena Tóffoli ; Juan Manuel Fontana ; prólogo de Juan Grabois ; Paula Abal Medina. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Prometeo 30/10, 2023.

339 p. ; 23 x 16 cm.

ISBN 978-987-8267-64-7

I. Trabajadores. 2. Reciclaje. 3. Movimiento Obrero. I. Tóffoli, Magdalena. II. Fontana, Juan Manuel. III. Grabois, Juan, prolog. IV. Abal Medina, Paula, prolog. V. Título.

CDD 304.81

Los autores de este libro donan las regalías por derechos de autor al MTE.

Diagramación: María Victoria Ramírez

Corrección: Beatriz Rodríguez

Diseño de portada y contraportada: Paula Manrupe

Fotografía de portada: Pedro Palacios

1era edición: Septiembre 2023

2da re-impresión: Abril 2024

© De esta edición, Prometeo Libros, 2023

Pringles 521 (C11183AEJ), Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4862-6794/Fax: (54-11) 4864-3297

info@prometeolibros.com

www.prometeolibros.com

www.prometeoeditorial.com

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Derechos reservados.

Índice

Palabras preliminares, por <i>Juan Grabois</i>	9
Prólogo, por <i>Paula Abal Medina</i>	15
Introducción.....	21
Orden de exposición	27
Aclaraciones	30
Agradecimientos	33
Capítulo 1	
La organización	37
Un país hundido en la crisis	37
La política está en otra parte	42
De cirujas a cartoneros	47
Emerge la “cuestión cartonera”	53
Los cinco locos	57
Café con leche	61
El ecosistema organizativo	65
Influencias y contrainfluencias.....	70
Capítulo 2	
La lucha	79
¿Un país normal?	79
Si tocan a uno, tocan a todos	84
Los niños primero	89
Idas y vueltas	94
Un sueño cumplido	99
Luchamos por un cambio social	106
Por una patria sin esclavos ni excluidos	112
Rara avis	116
Capítulo 3	
La expansión	123
Los dos lados de la muralla invisible.....	123
Una nueva estrella en el cielo de los pobres	128
Al que no le gusta... ..	139
Sin salud popular no hay justicia social	146
La FACCyR viene al mundo, ¡y es algo bueno!.....	154
Un movimiento peregrino	159
Educar es la tarea... de los más humildes	162

Capítulo 4	
El desborde	169
Seguir sembrando, aun en la adversidad	169
Una marea popular para la <i>fábrica de sueños</i>	173
La “Suiza patagónica” y sus frutos comunitarios	175
¡Criollos y nativos empobrecidos, sean unidos!	178
La universidad de los excluidos abres sus puertas	181
Nuestro amigo el papa	185
Yo no tengo sueños, tengo planes	189
En el camino de las 3-T	193
Encuentro Mundial de los Movimientos Populares	195
Fiorito “planta bandera” en la OIT	200
De la Red LACRE a la Alianza Global	209
Capítulo 5	
La diversificación	213
Un país neoliberal	213
Un salto en la organización de la economía popular	216
La casa para habitar, el polo para trabajar	223
Una lucha contra el silencio de la a-dicción	228
Nuestro trabajo es el alimento del pueblo	235
A la cárcel no volvemos más	241
Todo lo que no hace el Estado, lo hacemos nosotras	246
Ninguna familia sin techo, ningún trabajador sin derechos	249
El trabajo no es delito	254
Capítulo 6	
La proyección	261
Un país jaqueado	261
¿Somos esenciales?	267
Marchas y contramarchas de la economía popular	273
Un Plan Marshall criollo	279
Sacudir las estructuras del Estado	283
Traducir el poder popular a la gestión estatal	289
La acción directa no pasa de moda	296
Palabras finales	303
Anexo metodológico	321
Cronología	329
Acerca de los autores	339

Palabras preliminares

Juan Grabois

“La historia de un partido, en suma, no podrá ser menos que la historia de un determinado grupo social (...). Escribir la historia de un partido no significa otra cosa que escribir la historia general de un país desde un punto de vista monográfico, para subrayar un aspecto característico. Un partido habrá tenido mayor o menor significado y peso justamente en la medida en que su actividad particular haya pesado más o menos en la determinación de la historia de un país”, dice esa lúcida mente encerrada en las mazmorras de Mussolini. Fue aquel fascismo italiano el precursor de la maquinaria de destrucción que provocó la más terrible masacre registrada por la historia de la humanidad, cuya ideología de muerte y crueldad resurge hoy con la banalidad de motosierras y negacionistas, frente al aburguesamiento del campo nacional, popular y progresista que no ha sabido defender ni a sus banderas ni a sus líderes ni a su pueblo.

Quien haya seguido el pensamiento de Gramsci sabe que la expresión “partido” no se refiere a lo que institucionalmente se entiende por tal, sino fundamentalmente a la expresión organizativa de un grupo social. El Movimiento de Trabajadores Excluidos es, sin dudas, una de las más potentes expresiones de las capas más sumergidas de la clase trabajadora de la Argentina en el naciente siglo XXI, surgidas de los procesos desatados tras la ofensiva neoliberal de los setenta, la caída del muro de Berlín, la imposición del mundo unipolar, el fin de la historia y el Consenso de Washington.

En Nuestra América, la inigualable capacidad de anticipación histórica del General Perón lo profetizó con la frase “el año 2000 nos encontrará unidos o dominados”. Y vaya si nos encontró dominados,

privatizados y profundamente desunidos, con la división más grande que puede tener un pueblo: la dualización de su clase trabajadora con la conformación de un segmento completamente excluido de los derechos conquistados por el movimiento obrero internacional y despojado de sus herramientas organizativas. Una masa dispersa de humanidad, vetada definitivamente de la mera posibilidad de vender su trabajo-mercancía en el mercado laboral a un precio equivalente a su propia reproducción, y condenada a vivir como el pobre Lázaro de las migajas que caían de la mesa de aquel Rico... El tan mentado derrame que disfrutarán las mayorías apostadas en la tierra yerma bajo el florido paraíso consumista de minorías cada vez más restringidas.

El clímax trágico de ese proceso de concentración y desigualdad que fue anidando subterráneamente desde el segundo lustro de los noventa fueron las jornadas del 2001 con sus saqueos, puebladas y manifestaciones, sus muertes y helicópteros, sus piquetes y cacerolas. El espejismo neoliberal se resquebrajaba, la convertibilidad estallaba en pedazos, el corralito mostraba la insostenibilidad de las pretensiones de los Chicago Boys porteños, quienes descargaban el peso de su estupidez en la confiscación de la propiedad de la clase media que había confiado en ellos y de los pobres que los habían padecido.

En ese contexto, resurgió dentro de la clase trabajadora como forma de subsistencia una modalidad laboral que podría calificarse de precapitalista, pero que sugiere, en realidad, un universo poscapitalista. Se trata de un nuevo artesanado socialmente extendido, sostenido con medios de producción de precariedad distópica y una creatividad popular extraordinaria, ocupando el espacio público con una inmensa gama de actividades productivas que operan en las periferias del capitalismo dependiente. Se trata de un verdadero mercado pericapitalista.

La tarea del Movimiento fue organizarlas con base en la solidaridad social de grupo en el plano económico e identitario, pasando de una realidad individual de subsistencia a un camino colectivo de resistencia a partir de pequeñas reivindicaciones económicas y la recuperación de la autoestima de quien sabe que, por precaria que sea su actividad, se trata de un trabajo. El cartoneo, labor asimilada a la delincuencia –recuérdese la famosa frase de Macri, cuando en pleno 2002 afirmó que “los cartoneros se roban la basura”–, fue la rama paradigmática de esa

economía popular que sostuvo y sostiene a una enorme porción de la clase trabajadora.

Esta primera fase de organización derivó en una serie de alianzas con grupos del mismo sector social: campesinos, empresas recuperadas, costureros, feriantes, vendedores ambulantes, cooperativistas de infraestructura social, centros de trabajo sociocomunitario, etcétera, y sobre todo, de aquellas organizaciones nacionales, que se habían constituido sobre la base de las políticas nacionales de transferencia de ingresos, con las que habíamos tenido y seguimos teniendo contrapuntos, pero de las que aprendimos y seguimos aprendiendo. Con ellas iniciamos un camino que no tiene retorno en la conformación de una férrea unidad para la dignificación de nuestros compañeros en tanto trabajadores, actores sociales y sujetos políticos.

Así, con independencia de la posición política de los núcleos de dirigentes de cada agrupación, logramos constituir primero la CTEP y después la UTEP. La orientación del Movimiento fue siempre disociar las luchas reivindicativas, fueran sectoriales o generales, de la instancia político-partidaria para evitar el terrible vicio del militante popular quebrado, que utiliza a los pobres como mera escenografía para su despliegue político, excusándose en que eso implica una politización del sector, en que de eso se trata la “política de masas”, en que eso es peronismo..., vicios de los que nadie está exento y que solo una constante práctica de la autocrítica y la reflexión en el plano intelectual pero, sobre todo, de la práctica espiritual cotidiana de un sincero amor por cada compañero concreto en su dignidad inalienable como ser humano, en su libertad y sus derechos, en que él, ella y su familia tienen nombre y rostro, son un fin en sí mismo y nunca un medio para nuestros fines. Solo eso puede conservar nuestra humanidad en un mundo que nos lleva a la deshumanización.

En ocasiones, logramos que esa orientación –disociar la lucha por reivindicaciones sectoriales y políticas públicas específicas– prevalezca en el conjunto. A mi juicio, fueron los mejores años para el sector, los momentos en los que logramos condensar nuestra potencia en políticas públicas y mejoras materiales duraderas como las leyes de salario social complementario o integración socio urbana de barrios populares, las unidades de gestión multirrama de Potenciar Trabajo, la política de

casas convivenciales comunitarias, la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP), entre otras.

Del mismo modo, creo que hemos tenido éxito en empoderar políticamente a emergentes de la economía popular y los territorios donde se despliega, promoviendo como diputada nacional a una cartonera de Villa Fiorito, o como secretaria de Estado a una vecina del barrio Villa La Cava, e impulsando la fundación de un partido que respete la participación protagónica de este sector de la clase y no su mera aparición como objeto de pequeñas ambiciones ajenas. No afirmo que nuestro método sea el único ni el mejor, pero es un método razonado y probado. Funcionamos como un ecosistema donde cada una de sus partes –el Movimiento, la fuerza política, la estatalidad– tiene su rol, con base en una orientación estratégica afincada en la misión de hacer efectiva la agenda de los de abajo: tierra, techo y trabajo.

La historia de nuestro movimiento es un pedacito de la historia de una patria en disputa con pocas victorias y muchas derrotas. Un país que supo ser de los indios que resistieron a la conquista y lucharon junto a gauchos, criollos, curas, negros, pobres, abogados y militares, bajo el sable de San Martín en miras a construir la Patria Grande, después balcanizada por los intereses geopolíticos británicos; un país que supo ser de los “cabecitas negras” que abrieron metiendo sus patas en las fuentes la era dorada de Perón y Evita con los derechos sociales y laborales, la reforma agraria y urbana, el control nacional sobre el comercio exterior y los recursos estratégicos; esa Argentina grande que fue luego bombardeada, fusilada, detenida y desaparecida por la oligarquía y las potencias neocoloniales; una patria que supo ser de los jóvenes militantes de los movimientos sociales que abrieron con su sangre las puertas de la Casa Rosada para que Néstor y Cristina no dejaran sus convicciones en la puerta y recuperaran un poquito de lo que el neoliberalismo nos robó durante las décadas anteriores, ampliando los derechos de los niños y ancianos excluidos, creando los primeros programas masivos de cooperativas, recuperando la perspectiva latinoamericana y algunas de las empresas estratégicas; un país que supo ser de los cartoneros y costureros que acompañaron a Bergoglio en aquellas misas en Constitución “por una Argentina sin esclavos ni excluidos”, en donde comenzó a revelar masivamente lo que luego sería su magisterio social como Papa (sin dudas, la voz más

potente y profunda contra la devastación humana y ambiental de la globalización capitalista que asola el planeta).

Felicito a los autores de este libro y espero que sea de utilidad para todos como una experiencia útil de organización comunitaria. Que florezca en nuestro pueblo el deseo de organizarnos desde abajo para conquistar la felicidad que nos merecemos nosotros y, sobre todo, nuestros hijos, y la grandeza que merece nuestra patria. Una Argentina humana, sin esclavos ni excluidos, es posible y de nosotros depende.

Prólogo

Paula Abal Medina

“Me lo crucé en una esquina cuando vi a unos cartoneros que, con sus hijos a cuestas, luchaban por el pan cotidiano revolviendo la basura nuestra de cada día”. El cruce fue con El Movimiento, escrito exactamente así: con mayúsculas. La frase es de Juan Grabois y está en un libro que es el diario personal de una experiencia colectiva.

El MTE se originó como un hacer de montones completamente a la intemperie. Llegando “desde afuera”, el conurbano, través del Tren Blanco o encima de camiones destartalados para lidiar con la extenuación física, las incontables enfermedades de la basura y quien sabe cuántas lágrimas y cuánto miedo en las historias que atesoraban. Lo que no te mata, te fortalece. Dice así la sabiduría callejera y se confirmó. Todo sucediendo dentro de los confines de la basura. Como bandoleros urbanos justo cuando la democracia, que hoy cumple cuarenta años, registró una ruptura abismal entre código legal y código popular: “este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura”. Parecía imposible encontrar una frase que encerrara en tan pocas palabras aquel abismo. La formuló Mauricio Macri, habitante del 1%, muchos años antes de ser presidente por un solo mandato.

Quién hubiera imaginado que esas acciones cartoneras desesperadas contenían un futuro y un bautismo en ciernes. El MTE cumplió veinte años y asistí a un acto que tuvo lugar en Ezeiza, en los predios que inauguró Perón en 1950. Un momento especial ocurrió durante la teatralización de la historia del movimiento: cartoneros entre el público, con velas encendidas y en alto, y cartoneros en el escenario actuando los veinte años que nadie les contó. La obra cerró con los más chiquitos

cantando “Cartoneros, carajo”, tan fuerte, se fue prolongando con los decibeles en aumento, contagiando un sentimiento de orgullo que traspasó el telón para apoderarse del aire que respiramos al unísono todos los presentes en el salón de los viejos piletones.

“Hasta los once años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de los labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos; y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte (...). Nunca pude pensar, desde entonces, en esa injusticia sin indignarme, y pensar en ella me produjo siempre una rara sensación de asfixia, como si no pudiendo remediar el mal que yo veía, me faltase el aire para respirar”. Lo dijo Evita.

La identidad cartonera es “me sobra aguante”, empuja el carro, cruje el asfalto, se las rebusca por los rincones urbanos, encuentra los mejores desechos, fabrica el gancho que toca fondo todos los días, se pasea por la ciudad hostil con aire de arreglárselas. “Si tocan a uno, nos tocan a todos”. Es la dignidad de inventarse el trabajo en la sociedad del descarte. Esa terquedad que fuimos es este Movimiento de Trabajadores Excluidos. Tres días de rondas, talleres, debate programático. Fueron 2.500 acampando bajo las estrellas de la historia de El Movimiento.

“Yo, en tu lugar, buscaría en el pueblo la vieja sustancia del héroe. Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio”, decía Megafón con la pluma de Leopoldo Marechal. Juan dice en su diario que El Movimiento lo atrapó en su marea: “tal vez sea una ilusión o una realidad concreta, tenga mil años o unos pocos lustros”.

Las marchas contra el hambre y la movilización *Paz, Pan y Trabajo* encabezada por Ubaldini, las Abuelas y las rondas de las Madres y también las rondas de los Barrios del Fondo con el movimiento de tomas de tierra, originado en Quilmes y Almirante Brown pero desparramado por los terrenos abandonados del conurbano infinito, las puebladas de los desocupados y los movimientos piqueteros, la UTD de Mosconi y sus proyectos productivos sobre las ruinas de YPF, el tejido comunitario de los barrios enfrentando el empobrecimiento y también la experiencia reunida en la marcha federal de 1994 o en aquella consigna de la CTA “la fábrica es el barrio”.

Un antecedente que vale la pena nombrar. Con el regreso de Perón la organización villera crece vertiginosamente y se produce en 1973 un encuentro nacional en Santa Fe con la siguiente declaración que ya contenía una idea de Economía Popular: “Nuestra participación en este proceso será a través de las cooperativas que se convertirán en el futuro en Empresas Populares para ir logrando: 1) ahorro al país, abaratando el costo de producción de obra por eliminación de intermediarios; 2) creación de fuentes de trabajo, eliminando la desocupación en las villas; 3) participación en el gobierno popular, discutiendo con él, de igual a igual, la política de tierras, vivienda, salud...”.

Es importante recordarlo porque ya se formulaba la creación de empresas populares en el mejor momento del país del subdesarrollo: fifty-fifty, industrialización y villas miseria. Es un debate añejo que nadie quiere mirar de frente para reconocer de una vez los límites absolutos de los circuitos virtuosos de la economía mercantil.

Muy impactante incluso resulta recordar las imágenes de una Federación de Box rebalsada, reunidos en asamblea villera, y la figura de Carlos Mugica allí dando lectura al texto de renuncia al cargo de asesor ministerial que desempeñó por apenas tres meses: “los villeros tienen derecho a reclamar un papel protagónico en la cuestión de la vivienda (...) discrepo fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas miseria ya que se les niega a los villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas y, a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de ese ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el General Perón trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señalan nuestros obispos”.

En conjunto estos movimientos fueron dibujando un diagrama de subsuelo, vasos comunicantes que de formas inesperadas conectan distintas luchas. Me gusta pensar que todas estas experiencias viven amalgamadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Vive el movimiento villero y su deseo de ser partícipe de un gobierno popular, por ejemplo, en la Ley de Integración Socio Urbana que establece que el 25% de las obras de los 5.687 barrios populares tienen que ser realizadas por cooperativas de trabajadores integradas por los propios habitantes de los barrios.

Se conquistan estas dos o tres líneas de reconocimiento en una ley que impulsó el MTE varias décadas después de que fuera demostrada esta capacidad en el campo minado de la dictadura militar, cuando se ocupan las tierras ya mencionadas en Quilmes y Brown y, durante varios meses, un cerco represivo buscó “ahogar la toma” y mueren muchos niños porque los milicos impedían el ingreso de agua y de médicos. Hasta que varios meses después, fue un 31 de diciembre de 1981, una ronda de enorme diámetro –son 230 delegados manzaneros– tras muchas horas de asamblea encuentra su fórmula: “hay que cercar el cerco”. ¿Cómo? Con una red de solidaridades internas y externas muy grande. Entonces la CGT instaló clandestinamente una bomba de agua. Y los vecinos construían por la noche la casa del otro. SERPAJ y sus abogados actuando y la mensura con una regla de oro: once pasos al frente, treinta pasos al fondo, trazado de calles y espacios comunes. Entonces 211 hectáreas que eran basurales, baldíos sin función social de ningún tipo, se transformaron en seis barrios ordenados desde el punto de vista urbano.

Me apunté esta frase de un artículo académico sobre las favelas de Río de Janeiro: “la exigencia de una vivienda, más que la necesidad de un empleo o de un ingreso, es lo que ha politizado efectivamente al pobre”. ¿Territorio o producción? ¿Cuál es la esfera? El feminismo barrial dice: la reproducción de la vida.

El MTE junto a los curas villeros censaron 5.687 barrios donde viven más de cinco millones de personas. Un número puesto sobre la mesa. Contante y sonante. Hace unos años conversé sobre esto con Juan en su oficina, estaba rodeado por cientos de anillados, eufórico realmente, me mostró uno como ejemplo, el “masterplan” con el estado de situación y concretamente qué faltaba: las obras, los servicios, hasta por dónde pasarían no sé qué caños (disculpen mi imprecisión). Los costos de financiamiento y de dónde podrían salir los fondos. Mapas, cuadros y planillas. En este libro se cuenta rigurosamente la experiencia completa. Los fondos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas votados en el 2020, gracias a la fuerza política parlamentaria del kirchnerismo, permitieron muchos avances que nos llevan hasta la capacidad de Fernanda Miño, Secretaria de Integración Socio Urbana, para asegurar como una aguja en un pajar de burocracia estatal más de 1.300 obras.

El MTE es un movimiento que sale a la calle, se interna en oficinas, objetiva saberes populares, identifica sus lagunas y pifies, crea un método, abre una universidad con pedagogías desde abajo, funda una mutual y luego una obra social. El 31 de diciembre organiza, también bajo las estrellas, la cena de fin de año en Plaza Congreso para todos los trabajadores que no tienen otro lugar donde recibir el año nuevo y para quienes teniéndolo de todas formas eligen ser comensales de estas mesas. El MTE se agranda organizándose en nuevas provincias con miras a abarcar todo el territorio nacional. Finalmente, el MTE ingresó al Estado bajo tres preceptos: binomios “café con leche”, la condición de asumirse como parte de un todo con una planificación para la transformación humana integral, rendición de cuentas.

El trabajo y la gremialidad fueron desde los inicios el corazón de este movimiento. Argentina es un país de movimientos obreros recurrentes. Como hemos dicho, el punto de partida del MTE fue la rama de reciclado y recuperación de residuos. Y de esa experiencia acumulada nacieron otras: textil, consumos problemáticos, agricultura familiar, manteros y ambulantes, rural, construcción, sociocomunitario y liberados.

Cada rama es un mundo lidiando con dispositivos de –llamémosle acá– acumulación flexible y financiera: lógicas centrífugas de grandes empresas que se deshacen de costos y responsabilidades, patrones ocultos, intermediaciones predatorias, circuitos de expropiación, fraude laboral, ilegalizaciones, subcontratación en varios eslabones que van degradando la condición de trabajador como sujeto de derechos. En términos generales esta forma de producción opaca y fragmentada tiene como efecto evidente el empobrecimiento de quienes trabajan. Esta caracterización es el fundamento de iniciativas impulsadas por el MTE, y en general por la UTEP, como el salario social o el salario básico universal.

En esta historia la rama de recuperadores urbanos fue generando un proceso de trabajo que María Castillo, actual Directora Nacional de Economía Popular, define hace años como de “excelencia cartonera”: distribución de calles y manzanas para la recolección y para la promoción ambiental en empresas y comercios, acciones más amplias puerta a puerta o en escuelas, creación y atención de puntos verdes, convenios con grandes generadores, logística de traslado de bolsones,

separación en plantas, compactación, venta colectiva a industrias para la reutilización efectiva de los residuos. Son decenas de miles de cartoneros y toneladas de basura recuperada. Producen un valor económico y ambiental evidente que nadie está dispuesto a reconocer. Ni las empresas de recolección, ni los municipios, ni las multinacionales responsables de multiplicar la basura, ni los consumidores, ni la sociedad en su conjunto por el cuidado que hacen los cartoneros de eso que Francisco llama “la casa común”.

El lector tendrá en estas páginas la oportunidad de adentrarse en el vértigo, la historia viva de un movimiento subestimado que, desplegando una energía descomunal, logró mover montañas.

El reverso de la historia del MTE es el peligro de extenuación, porque una y otra vez recrudescen la miseria obligando a empezar de nuevo. A esta altura de la historia del deterioro argentino la injusticia social es una muralla maciza y asfixiante. Por eso este libro es también una convocatoria para refundar una Argentina humana.

Introducción

La situación social de la Argentina es dramática. De acuerdo a los indicadores oficiales, a fines de 2022 la pobreza rozó el 40 % de la población, mientras que la indigencia sobrepasó el 8 %. Detrás de esos fríos dígitos se encuentran, respectivamente, 18 000 000 y 3 500 000 de personas. Entretanto, la pobreza infantil comprendió a más de la mitad de los menores de catorce años de edad, de los cuales 1 300 000 están en condición de indigencia. Es decir, viven en hogares cuyos ingresos totales no superan el valor de la canasta básica de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Evidentemente, algo anda muy mal en nuestra patria. En el otro extremo de la pirámide social, las cosas han ido, sin embargo, bastante bien. Según el Informe sobre la Desigualdad Mundial publicado en 2022, el decil más adinerado del país concentró casi el 60 % de la riqueza nacional. Y, en el mismo año, figuraron seis argentinos en la lista *Forbes* de las personas más ricas del mundo, superando entre todos ellos los doce mil millones de dólares de patrimonio.

Frente a lo brutal de estos contrastes, cabría esperar un sentimiento generalizado de indignación por lo obscuro de tal opulencia en un contexto de miseria extendida. Sin embargo, la maquinaria mediática, cultural e intelectual opera infatigablemente dirigiendo el malestar social hacia los pobres, haciéndolos responsables no solo de su desgracia personal sino también del retroceso nacional. En una perversa inversión de roles, la víctima se vuelve victimaria, el oprimido se torna opresor. Así pues, una familia hacinada en una casilla de madera a la vera de un arroyo contaminado se vuelve culpable del sufrimiento que ocasiona a una supuesta Argentina emprendedora, inversora y productiva; la porción de la sociedad que, de no cargar con aquel lastre, nos llevaría hacia un futuro luminoso. Por eso los pobres son vistos, al decir de

Juan Grabois en su último libro, como “los peores”: chorros, ocupas, violentos, planeros, negros, vagos, mugrientos... son solo algunas de las expresiones que sintetizan ese imaginario dominante en los sectores de ingresos altos.

Lamentablemente, esta mirada permea también a una parte de los pobres y a la mayoría de las clases medias de la sociedad, esa capa de ingresos intermedios cada vez más angosta. En este último sector, determinante en la formación de la opinión pública, a la añoranza de un pasado dorado y la pretensión de alcanzar los consumos asociados al éxito, se le suma el temor a caer hacia el subsuelo de la patria. Y es inducido, mediante discursos asociados al individualismo, la antipolítica y la indiferencia social, a encontrar un chivo expiatorio de esos miedos en los rostros de los excluidos. Así como también a no pensar ni en las causas estructurales, ni que el esplendor de los ricos pueda tener que ver con el deterioro de su propia condición. Mientras tanto, buena parte de los intelectuales deambulan, ensimismados, por las universidades y los circuitos culturales, mayormente ajenos a la realidad circundante. En su estado de mayor alienación son capaces de preocuparse por temas de la agenda académica de los países centrales, pero no de extender una mano solidaria a los excluidos de carne y hueso que los interpelan en la calle. Por supuesto, quienes nos inscribimos dentro de miradas críticas solemos hablar sobre —o en nombre de— los pobres, pero rara vez cruzamos la frontera invisible que nos separa de esos otros.

Si tales son las tendencias generales hacia la fragmentación social y la colonización cultural en el marco del capitalismo dependiente en que vivimos, son doblemente admirables los esfuerzos concretos, palpables, de quienes caminan en un sentido contrario. En épocas de consumismo, exitismo, individualismo y sálvese quien pueda, existen cientos de miles de mujeres y hombres que construyen comunidad, que enfrentan la injusticia, que ofrecen su tiempo y exponen sus vidas por una causa solidaria. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué piensan y cuáles son sus sueños? En este libro no se pretende abordar estas preguntas en toda su amplitud, aunque sí esbozar algunas respuestas parciales a partir de una de las experiencias de organización popular más novedosas de la Argentina reciente: el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Quien lea estas páginas se va a sumergir en sus veinte años de historia, pero sobre todo tendrá la posibilidad de adoptar la perspectiva de “los de abajo”. Ofrecer ese ángulo acaso sirva para romper los prejuicios y tender los puentes que tanta falta hacen para zanzar el abismo social producto de la desigualdad. Además, esperamos que sirva para dotar de mayor fortaleza a los proyectos populares. Es indudable que uno de los déficits que han tenido ciertos avances sociales, económicos y políticos logrados en las últimas décadas ha sido su endeble articulación con el poder del pueblo organizado. Por lo que otro de los objetivos de esta obra es mostrar que el poder popular es condición necesaria para que las políticas públicas sean exitosas en términos de su eficacia en el territorio y de su permanencia en el tiempo. Y, más allá de esto, rescatar el potencial reparador y transformador que tiene la participación colectiva en sí misma. De hecho, si en algún lado se amasan los valores para una nueva forma de habitar el mundo como seres humanos, es en el seno de la comunidad organizada.

A diferencia de otras organizaciones populares en Argentina, el MTE ha sido escasamente estudiado desde el ámbito académico, aun dentro de los campos de estudio de la acción colectiva, el sindicalismo y el trabajo. Es posible identificar distintos factores que condujeron a esta vacancia en cada área. En primer lugar, la centralidad que adquirieron en la resistencia al neoliberalismo las investigaciones acerca del movimiento piquetero y luego particularmente sobre aquellas organizaciones de matriz nacional popular que se incorporaron al gobierno kirchnerista. En ese marco, la reconfiguración del vínculo entre “lo social y lo político” capturó la atención de buena parte de las investigaciones, principalmente la discusión en torno al fenómeno definido como cooptación o integración, según la perspectiva que se asuma. En segundo lugar, desde el campo de los estudios del sindicalismo, el resurgimiento del movimiento obrero organizado en el escenario político, social y laboral relegó, al menos por un buen tiempo, la pregunta por aquellos procesos de organización colectiva que no se asimilaban fácilmente con la acción gremial más convencional, ni con la figura del trabajador asalariado. En tercer lugar, respecto al trabajo “informal” el foco estuvo puesto en el cooperativismo o las microempresas, guiado por ciertos enfoques de la Economía Social y Solidaria y del emprendedurismo, respectivamente. Recién en los últimos años, con la emergencia de la

economía popular como sujeto organizado, se produjo un giro en este campo de estudios a partir de la incorporación de las problemáticas y reivindicaciones del sector.

Dicho esto, aclaremos que la iniciativa de saldar este vacío responde a una necesidad académica, pero sobre todo política: el vertiginoso crecimiento del movimiento de la economía popular en Argentina en la última década invita a conocer más de cerca cómo se configuró uno de los movimientos que aportó de manera decisiva a su configuración. ¿En qué modo surgió este campo organizativo? ¿Cuál fue el proceso que condujo a la creación de la Confederación y, luego, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? ¿Qué relaciones existen con el tradicional movimiento obrero organizado y otras luchas sociales? ¿Cuáles fueron las necesidades comunitarias que animaron sus principales acciones? ¿Qué papel ha jugado en el escenario social y político nacional e internacional? ¿Cuáles aportes han hecho a las políticas públicas? ¿Qué proyecto de sociedad y de país anida en su interior?

Por si hace falta a estas alturas, repasemos algunas cifras que nos hablan de la magnitud del fenómeno. Al 2022, en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se inscribieron 3 500 000 de trabajadores, lo que representa el 25 % de la población económicamente activa (PEA) definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pero esto contempla solo a quienes se registraron voluntariamente, por lo que se proyecta que el universo está compuesto por entre cinco y diez millones de personas, según distintas estimaciones. Se trata de un amplio abanico de actividades laborales que incluyen la construcción, la venta ambulante y otros oficios callejeros, la recuperación de residuos urbanos, la producción de alimentos, la confección y costura de innumerables productos textiles, distintas tareas sociocomunitarias y de cuidado de personas, entre otras.

Son trabajos, no empleos asalariados, que crean en muchos casos valor económico, pero sobre todo social, al permitir la reproducción de la vida en condiciones de exclusión y pauperización. Pese a esto, aun con los avances organizativos y distintas conquistas, su aporte se encuentra en gran medida invisibilizado y sus credenciales de trabajadores están siendo siempre puestas en discusión bajo el rótulo de “planeros” subsidiados por el Estado. En el imaginario de una parte de

la sociedad, la política y los medios de comunicación, representan un elemento negativo, un estorbo, que impide a la Argentina despegar. Mientras que en buena parte de los sectores progresistas se mantiene una cierta incompreensión del fenómeno, lo que conduce a que sean vistos esencialmente como pobres que merecen la asistencia social del gobierno hasta que el crecimiento económico algún día los incluya mediante el mercado laboral. Por distintas razones, unos y otros no logran captar lo esencial del planteo de la economía popular. A saber, la existencia de una fractura socioeconómica que se mantendrá en tanto continúen las características estructurales del actual modo de producción capitalista. Es decir, el trabajo asalariado no puede integrar a la masa marginal creciente hasta que no cambien de fondo las reglas económicas.

Esta es la novedad radical que introduce la economía popular en su diagnóstico. Los enfoques dominantes en política económica siguen sin dar cuenta de ello. Los desarrollistas promueven la inversión productiva, el mercado interno y la innovación basada en la ciencia y la tecnología, mientras que los liberales propician la firma de acuerdos de libre comercio y garantías a la seguridad jurídica como forma de dinamizar el mercado. En ninguna de estas propuestas aparece con claridad qué hacer con la economía popular en el corto y mediano plazo. A lo sumo, prometen inclusión por generación del empleo o derrame en un largo plazo indefinido. No obstante, estas promesas ya han sido incumplidas en el pasado, no hay indicios de que se materialicen en el presente y tampoco se observan señales de que puedan ser logradas en el futuro cercano. Frente a lo cual, el planteo de las organizaciones de la economía popular adquiere indudablemente validez.

Si tal es la situación respecto al diagnóstico, también puede destacarse la novedad respecto a la construcción de una solución colectiva de parte de los movimientos populares. Sobre la base de una actividad económica realmente existente, se montaron procesos organizativos en miras a luchar por mejoras en las condiciones laborales y, en ciertas áreas en que hay infracción de normativas y hostigamiento estatal, por el derecho a trabajar. Sobre ese eje vertebrador pivotan otro conjunto de actividades con un alto valor social. Tareas que permiten el mantenimiento del tejido comunitario en contextos en que el capitalismo de descarte y el corrimiento del Estado han convertido en tierra de

nadie. Son las periferias de los grandes centros urbanos, los barrios populares, villas y asentamientos de emergencia donde habitan en gran medida los trabajadores de la economía popular. Allí los movimientos populares actúan como la última barrera frente a las manifestaciones extremas de la descomposición social, tales como el narcotráfico y el crimen organizado. Y, lo que es más admirable aún, no solo respondieron a las urgencias del hambre, la miseria o la violencia, sino que fueron capaces de formular intentos de superación del capitalismo de descarte: a nivel micro, mediante respuestas locales basadas en la organización colectiva; en un plano intermedio con la formulación de distintas propuestas legislativas para atender diversos problemas; y a nivel macro con la propuesta de desarrollo humano integral.

¿Qué tiene que ver el MTE con este fenómeno emergente? Todo. No puede pensarse el surgimiento y la evolución del campo de la economía popular sin considerar el papel central que el Movimiento de Trabajadores Excluidos y su principal figura, Juan Grabois, tuvieron en las distintas etapas. Fue uno de los grupos pioneros en plantearse la necesidad de organizar sindicalmente el trabajo en la llamada “economía informal”, mientras a su alrededor se masificaban las organizaciones de desocupados y se multiplicaban las asociaciones cooperativas. Y, más allá de ese aporte inicial fundamental, mantuvo a lo largo de veinte años una iniciativa constante hacia el sector y cada vez más hacia el resto de la sociedad. Por lo que, si usted quiere comprender la dinámica de uno de los actores sociales más dinámicos de la última década, precisa conocer la historia que se narra en este libro. Es también una forma de entender a la Argentina oculta, cuyo funcionamiento es clave para comprender la lógica del conjunto.

Por último, algunas palabras respecto a nuestro posicionamiento. Por todo lo dicho, es evidente que no somos neutrales en lo axiológico, en el posicionamiento ético-político. Pero sí buscamos la objetividad en los datos que sustentan la reconstrucción histórica. En ese sentido, queremos destacar que se siguió una estrategia metodológica acorde a los estándares científicos aceptados. Luego, en el nivel de la exposición se optó por un estilo narrativo favorable a un público amplio, en detrimento del formato técnico propio de la escritura académica. A continuación, se puntualiza en la organización de los capítulos y, más adelante, se detallan las decisiones metodológicas.

Orden de exposición

El libro se compone de seis capítulos en los que se reconstruye la historia del MTE desde sus orígenes hasta la actualidad. Cada uno de ellos fue delimitado de acuerdo a un criterio cronológico-temático. Es decir, no se siguió exclusivamente un ordenamiento temporal, sino que la evolución de un tópico sirvió también como pauta ordenadora en algunos casos. Por lo que el seguimiento de un tema puede escapar al período en años en que se centra un capítulo. No obstante, hay una línea cronológica que subyace y permite leer el libro como una narración en que los hechos se encadenan de principio a fin. Por otro lado, al inicio de la mayoría de los capítulos se ofrece una contextualización básica que permite enmarcar la historia que estamos contando en los sucesos más importantes de la etapa. Por supuesto, no se pretende exhaustividad en esas descripciones de coyuntura, sino destacar aquello que resulta más relevante para esta narración. Dicho esto, a continuación, ofrecemos un breve resumen de contenidos por capítulo.

El capítulo uno, titulado *La organización*, se desarrolla en ocho secciones que se centran en el período 2002-2004. El recorrido va desde la descripción de los efectos del neoliberalismo sobre el entramado social, económico y político nacional (i), la emergencia de nuevas formas de participación producto de la crisis de representación del 2001 (ii), el surgimiento de los cartoneros como sujeto social y su evolución desde el ciruja y otras figuras anteriores (iii), la emergencia de la cuestión cartonera en la arena pública (iv), la conformación de un reducido grupo de jóvenes militantes que dio comienzo al MTE (v), el encuentro de clases sociales, los aprendizajes y desafíos que conllevó la construcción en común entre cartoneros y estudiantes (vi), el entorno de organizaciones en que debió desenvolverse el movimiento en su etapa inicial (vii) y la referencia positiva y negativa de los piqueteros como línea predominante en el campo popular en aquel momento (viii).

El capítulo dos, cuyo nombre es *La lucha*, se desenvuelve en ocho apartados que se desarrollan en el período 2005-2009. El itinerario comienza presentando los rasgos generales desde la asunción del kirchnerismo hasta la crisis del campo (i), el despliegue de la resistencia cartonera frente al atropello policial (ii), la primera pelea ofensiva y conquista parcial en torno a las becas para niños cartoneros (iii), las idas y vueltas alrededor de la sanción de la Ley de Basura Cero y la

lucha por su reglamentación (iv), el logro del sistema de reciclado con inclusión social (v), la ampliación de la agenda del MTE hacia conflictos por tierra y vivienda y actividades sociocomunitarias (vi), la relación con La Alameda y la lucha contra la trata de mujeres y la esclavitud laboral en el ámbito textil (vii) y una recapitulación de los primeros años de historia del movimiento, destacando algunas de sus peculiaridades (viii).

El capítulo tres, titulado *La expansión*, se despliega en siete secciones que abordan el período 2009-2012. El recorrido va desde una descripción de los alcances y las limitaciones de los gobiernos kirchneristas (i), el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el aporte a la conceptualización de la economía popular (ii), las relaciones entre CTEP y la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de confluencia del primero en el segundo (iii), el nacimiento de la Mutual Senderos y, posteriormente, la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (iv), la emergencia de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (v) hasta las primeras tareas emprendidas desde esa organización gremial, destacándose la nacionalización de la lucha cartonera (vi) y el Programa de Promotoras Ambientales (vii).

El capítulo cuatro, *El desborde*, se desglosa en once apartados que se centran en el período 2012-2015. Se destacan en ese itinerario una caracterización de la crisis de la organización luego de la veloz expansión de esos años (i), la incorporación de nuevos militantes a partir del acercamiento con agrupaciones de la izquierda independiente o popular –La Mella, Marea Popular, Patria Grande– (ii), los vínculos establecidos con actores locales de San Martín de los Andes –comunidad mapuche Curruhuinca y Vecinos Sin Techo– (iii), su lucha por la construcción del Barrio Intercultural (iv) y la apertura en ese espacio de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (v), los orígenes de la relación con el arzobispo porteño Jorge M. Bergoglio (vi), su ascensión como papa Francisco y el impacto en el ámbito de la economía popular (vii), la formulación de la agenda de Tierra, Techo y Trabajo (viii), los encuentros mundiales de movimientos populares organizados en coordinación con el Vaticano y la proyección internacional del MTE (ix), la participación de representantes cartoneras en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y la

recomendación que permitió avanzar con la personería para la CTEP (x) y la evolución desde la red latinoamericana a la Alianza Global de Recicladores (xi).

El capítulo cinco, denominado *La diversificación*, se desarrolla en nueve secciones que se centran en la etapa 2016-2019. El recorrido comienza con la descripción de las políticas neoliberales impulsadas bajo el gobierno de Cambiemos (i) y el papel desempeñado por el Tridente de San Cayetano –una alianza compuesta principalmente por la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la CTEP– y sus principales iniciativas, tales como el Registro Nacional de Barrios Populares y distintas propuestas legislativas (ii). El resto del capítulo detalla el proceso de creación de ramas del MTE: la rama textil (iii), Vientos de Libertad como rama de trabajadores en tareas de cuidado terapéutico frente al problema de las adicciones (iv), la rama rural (v), la rama de liberados y liberadas de la cárcel (vi), la rama sociocomunitaria (vii), la rama de construcción (viii) y la rama de trabajadores del espacio público, en particular vendedores ambulantes, artesanos, artistas callejeros y cuidacoches (ix).

El capítulo seis, cuyo nombre es *La proyección*, está integrado por siete apartados que se inscriben en el período 2019-2022. Se comienza describiendo las características del gobierno del Frente de Todos en un escenario muy adverso (i), el destacado papel de las trabajadoras sociocomunitarias en el contexto de aislamiento obligatorio y el impacto que tuvo en la valorización de una tarea mayormente feminizada (ii), la creación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como nuevo instrumento gremial del sector y sus principales luchas y tensiones (iii), el Plan de Desarrollo Humano Integral como propuesta para la reconstrucción nacional pospandemia, impulsado por el MTE y acompañado por el grueso de las organizaciones de la economía popular y sindicatos de la CGT (iv), el ingreso de integrantes del MTE a la gestión pública y a la representación parlamentaria como una novedad de la etapa (v), los logros y las dificultades de traducir el poder popular en la gestión estatal y en el Congreso de la Nación (vi) y la articulación de la política institucional con formas de acción directa, como el Proyecto Artigas y el ingreso a la propiedad de Joe Lewis (vii).

En las palabras finales, se recapitulan los principales aportes por capítulo (i-vii), se sintetizan las contribuciones transversales (viii), así

como los nudos problemáticos (ix) y se realiza un desenlace (x). Entre los aportes se destacan aquellos aspectos en la historia del MTE que, consideramos, representan una novedad en el entorno de los movimientos populares de la Argentina. En cuanto a los desafíos, se identifican algunas tensiones que emergen del actual momento político y de tendencias en curso en el sector de la economía popular. Por último, se incluye un anexo metodológico y una cronología. En el primero se listan las entrevistas realizadas y el marco normativo analizado. En la cronología se presentan ordenados en una secuencia temporal los hitos más relevantes en la historia del MTE, el entorno organizativo y el contexto político y normativo. Por supuesto, estos últimos datos son jerarquizados en función de comprender la evolución de la historia que aquí nos interesa.

Aclaraciones

Este libro fue pensado con un destinatario amplio, no reducido a especialistas. Ese objetivo explica algunas resoluciones de estilo y metodológicas que es preciso exponer. Respecto a las primeras, podemos destacar dos. Por un lado, la decisión de reducir al mínimo el uso de referencias bibliográficas, citas textuales y notas al pie; estos recursos, muy habituales en la literatura científica, obstaculizan la lectura de parte de un público extenso. Por otro lado, y con la misma finalidad, se buscó cierta fluidez en la narración, intercalando segmentos descriptivos, incluso microrrelatos, con otros de tipo teórico o reflexivo; lo cual, en algunos casos, pudo ir en detrimento de las explicaciones argumentales y discusiones propias de la investigación académica. Desde nuestro punto de vista, el intento de llegar a lectores no especializados justifica estas limitaciones. Además, como ya se dijo, aunque en el *orden de la exposición* no se siguieron las pautas típicas de la escritura científica, en el *orden de la investigación* se adoptaron todos los recaudos que guían el trabajo de campo en las ciencias sociales. A continuación, detallamos las cuestiones metodológicas que respaldan los datos ofrecidos en este libro.

En primer lugar, se realizó una exhaustiva *revisión bibliográfica*, con miras a delimitar el estado del arte. En la última década se ha desarrollado un considerable corpus de estudios sobre la economía popular,

sus organizaciones y problemáticas. Estos antecedentes sirvieron, en particular, para reponer fechas y otras informaciones históricas, a las cuales recurrimos en distintas partes del libro sin las referencias correspondientes. Como forma de saldar esto, y a manera de reconocimiento de esos aportes, queremos mencionar en orden alfabético a los autores cuyos trabajos fueron ampliamente utilizados como referencia en el libro: Paula Abal Medina, Laura Escalante Albertali, María Eugenia Ambort, Yudy Alejandra Arango, Pilar Arcidiácono, Ángeles Bermudez, Daniela Paola Bruno, Marcos Andrés Carbonelli, Mariela Cardozo, Sebastián Carenzo, Alioscia Castronovo, Pablo Chena, Ramiro Coelho, José Luis Coraggio, Cecilia Cross, Sabina Dimarco, María Inés Fernández Álvarez, Pablo Forni, Verónica Gago, Verónica Giménez Béliveau, Débora Gorbán, Agustina Gradin, Malena Hopp, Joaquín Lazarte, Francisco Longa, Johanna Maldovan Bonelli, Pablo Míguez, Emilce Moler, Belén Morris, Fernández Mouján, Antonia Muñoz, Ruth Muñoz, Ana Natalucci, Tomás Nougués, Florencia Pacífico, María Mercedes Palumbo, Julián Pavese, María Victoria Perisinotti, Diego Nicolás Rach, Martín Retamozo, Ana C. Rodríguez, Santiago Sorroche, Alexander Roig, Pablo Schamber, Mauricio Schuttenberg, Natalia Scocco, Dolores Señorans, Francisco M. Suárez, Nicolás Villanova, Lidia Inés Villar, Emanuel Ynoub, Manuel Zapico y Carla Zibecchi. Desde ya, cualquier error que se haya deslizado nos pertenece, así como la responsabilidad sobre las afirmaciones contenidas en el libro. Hechas estas aclaraciones, hay que señalar que las investigaciones específicas sobre el MTE son muy escasas.¹

En segundo lugar, se realizó un vasto *trabajo de campo*, desplegado entre 2021 y 2022. Incluyó el análisis de distintas fuentes documentales, observación directa y entrevistas en profundidad. En cuanto al *análisis de fuentes*, estuvieron compuestas por leyes y otros tipos de normas y proyectos legislativos, notas periodísticas y archivos personales. Las fuentes legislativas y de prensa se encuentran todas disponibles en internet. En el caso de los medios de comunicación, se realizó un relevamiento exhaustivo de apariciones del MTE hasta 2015 (luego de ese año ya han sido muy abundantes las noticias sobre el movimiento). Mientras que los archivos fueron provistos por militantes del MTE; en

¹ Quien esté interesado en indagar sobre alguna referencia en particular podrá consultar las tesis de doctorado y maestría de Tóffoli y Fontana, respectivamente, que estarán disponibles a la brevedad en repositorios digitales abiertos.

particular, Tiziano Borghi, Fernanda García Monticelli y Juan Martín de Mingo. En ellos se encontraron documentos internos de la organización, recortes de prensa, proyectos de ley, presentaciones judiciales, etc. Insumos que fueron de extrema utilidad para reconstruir los primeros años de la organización; período en que las apariciones en la prensa son prácticamente nulas. Parte de los archivos fueron digitalizados para su preservación y se encuentran disponibles para su consulta. Las leyes, resoluciones y otras normas consultadas se encuentran listadas en el anexo metodológico al final del libro.

La *observación directa* se realizó mediante la visita o participación en catorce instancias del MTE. A saber, local comunitario en Villa Fiorito (Lomas de Zamora) y en Quilmes, Centro Verde de Barracas (CABA), centro comunitario EnbarriArte en La Cava (San Isidro), planta de reciclado y local del movimiento (Lincoln), predio de Flores (CABA), planta de reciclado en Vedia (L.N. Alem), local comunitario en Aldo Bonzi (La Matanza), unidad productiva de la rama liberados en Villa Elvira (La Plata), Casa Comunitaria y Centro Barrial de Vientos de Libertad (General Rodríguez), unidades productivas de las rama rural y rama textil (La Plata) y sede de la CTEP/UTEP en Constitución (CABA). Se asistió, además, como observadores a un Plenario Nacional del MTE (Ezeiza) y se participó de la Misa Cartonera en Constitución (CABA). Por otra parte, se acompañó en distintas movilizaciones del movimiento en Capital Federal y La Plata.

En cuanto a las *entrevistas*, se realizaron a un total de 45 integrantes de la organización, en diferentes ramas, áreas, localidades y provincias (aunque el total de entrevistas fue bastante mayor, considerando que en varios casos se realizó más de una).² Todo este material testimonial fue sistematizado, en buena medida desgrabado y adecuadamente archivado. Del total de las entrevistas, ocho fueron editadas y publicadas parcialmente en La Nación Trabajadora y la Agencia Paco Urondo. Esperamos a futuro poder difundir algunas más, de modo de poder ofrecer material de investigación para otros estudios y, sobre todo, valorar los relatos de los propios militantes a la hora de contar sus historias personales y colectivas. El listado de entrevistas realizadas se encuentra referido en el anexo metodológico. Por último, cabe aclarar que cada

² Como parte de su investigación doctoral, Tóffoli entrevistó a varias decenas de integrantes de base del MTE en la región de La Plata. Elementos provenientes de esas entrevistas fueron de utilidad también para este trabajo.

vez que se citan palabras de militantes del MTE, salvo indicación en contrario, refieren al contenido de estas entrevistas.

Agradecimientos

Este libro es la síntesis de dos años y medio de trabajo. En diciembre de 2020 tomó forma la idea de escribir la historia del MTE de cara a los veinte años de la organización, y en los meses inmediatamente posteriores se conformó el equipo que lo llevó adelante. Entonces comenzó un trabajo de campo que se extendió durante 2021 y 2022. Como se mencionó, estuvo compuesto por decenas de entrevistas, visitas a locales y unidades productivas, relevamiento de prensa y análisis documental, entre otras tareas. Luego de lo cual, en el transcurso del primer semestre de 2023 fue escrita la totalidad de los capítulos. En todo ese recorrido, innumerables personas colaboraron indirectamente con este libro en alguna de sus etapas. Aunque no quede registro de sus nombres, tenemos una deuda de gratitud con cada uno de ellos y ellas. Dicho esto, haremos mención explícita de quienes *directamente* colaboraron en la realización de este libro. Agradecemos:

A los integrantes del MTE que gentilmente estuvieron dispuestos a brindarnos tiempo para responder nuestras preguntas, revisar sus archivos, completar datos faltantes y acompañarnos en las visitas;

A Juan Tévez, por su inestimable apoyo al acompañar el proyecto desde sus inicios en todas sus dimensiones y facilitar las coordinaciones necesarias en la concreción del trabajo de campo;

A Paula Abal Medina y Juan Grabois, por las palabras que anteceden este libro;

A la Agencia Paco Urondo y La Nación Trabajadora, por publicar algunas de las entrevistas realizadas para este libro y contribuir con financiamiento para su desgrabación;

A los grupos de investigación, cátedras universitarias y equipos de trabajo de los que formamos parte, así como a los espacios de formación, construcción colectiva de conocimiento e intercambio de ideas que, sin dudas, enriquecieron las perspectivas y debates vertidos en este libro;

A la sociedad argentina, en especial al pueblo trabajador, que con sus esfuerzos sostiene el erario que está en la base de nuestros salarios como integrantes del sistema público nacional de ciencia y tecnología;

Por último, pero no menos importante, a nuestras familias y amistades, cuyo amor y apoyo incondicional sostuvieron estas páginas.

*A los excluidos y descartados,
trabajadores y trabajadoras de la economía popular,
en la esperanza de contribuir a visibilizar sus luchas,
conquistas y horizontes de cambio social*

Capítulo 1

LA ORGANIZACIÓN

Un país hundido en la crisis

Narrar los orígenes del Movimiento de Trabajadores Excluidos requiere remontarse en el tiempo a la Argentina de fines de los noventa... y un poco más allá. Por entonces comenzaron a notarse los efectos perversos de las políticas económicas neoliberales; un recetario que comenzó a ser aplicado en el país durante la última dictadura militar. Al cumplirse un año de iniciado aquel golpe de Estado, Rodolfo Walsh lo identificó con absoluta claridad en su *Carta abierta de un escritor a la Junta Militar*:

[E]n la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. [...] Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta [Militar de Gobierno] solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales [...].

Es indiscutible lo certero del temprano diagnóstico de quien, al día siguiente de publicar su denuncia, fue emboscado y asesinado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pues esas políticas de “miseria planificada” transformaron el paisaje nacional en el último cuarto del siglo XX. Argentina era hasta los setenta un país de fábricas humeantes, con poco desempleo y pobreza, baja desigualdad social, sistemas nacionales de salud y educación admirados en

la región y valores reducidos de endeudamiento externo. Veinticinco años después, pasó a ser un país en descomposición, con altos niveles de pobreza y desocupación estructural, un deterioro notable de la educación y la salud públicas, acompañado del crecimiento constante de la oferta privada en ambas áreas, y una deuda asfixiante. Cambios que reflejaban el abandono de una política económica centrada en la producción industrial, el mercado interno y la sustitución de importaciones, y la adopción de un régimen librecambista orientado a la valorización financiera, el complejo agroexportador y el capital internacional. Las consecuencias del nuevo modelo fueron la extranjerización y concentración económica, la primarización y desindustrialización productiva y la fragmentación social y aumento de la desigualdad. Una de las expresiones de esto fue la precarización del trabajo, cuyo vehículo fueron las reformas laborales que limitaron las negociaciones salariales colectivas (paritarias), flexibilizaron el mercado laboral y debilitaron el poder de los sindicatos como representantes de los trabajadores.

Asimismo, lo estatal fue reconfigurado en sus funciones y alcances. Antes de esta gran transformación, existía un Estado con control sobre áreas decisivas de la actividad económica mediante la propiedad y gestión de sectores clave y el ejercicio de organismos reguladores y planificadores. Hasta los años noventa también la provisión de servicios públicos –gas, energía eléctrica, agua, telefonía, etc.– estaba en manos de compañías estatales. Con la aplicación del neoliberalismo, casi la totalidad de las firmas públicas fueron mal vendidas a capitales extranjeros y los organismos de regulación y planificación o bien disueltos o bien reformulados en sus funciones (habitualmente, con la misión de regular a las empresas privatizadas). Como resultado de estas reformas estructurales, lejos de generar un Estado reducido, pero más eficiente y moderno, como prometían los gurúes neoliberales, provocaron un Estado debilitado, impotente, con pocas herramientas para defender la soberanía y orientar la actividad económica en provecho de las mayorías sociales.

Cabe aclarar que, más allá de sus particularidades, estas metamorfosis no fueron un invento argentino, sino que reflejaban localmente modas globales. Existe un consenso en las ciencias sociales y económicas acerca de que el capitalismo global se reconvirtió en torno a las décadas de 1970 y 1980 hacia novedosas formas de acumulación y

ejercicio del poder. Con distintos énfasis en las explicaciones, hay un acuerdo respecto a que se inició una nueva etapa por esos años. Ese reordenamiento mundial supuso para la Argentina uno de los retrocesos más notables a nivel internacional. La mayor parte de la dirigencia política de la democracia —en algunos casos, por ignorancia o impotencia; en otros, por claudicación o convicción— aceptó ser cómplice de esa regresión brutal, cuya antesala fue aquel baño de sangre necesario para quebrar la resistencia popular. Tampoco esto fue invención exclusiva de la Argentina. En toda la región, neoliberalismo y terrorismo de Estado fueron de la mano.

Así pues, con ese trasfondo oscuro cuya sombra se proyectaba como miedo a la participación política, los gobiernos democráticos respondieron a los requerimientos de los organismos internacionales para el país (en particular, el Fondo Monetario Internacional). Es decir, fueron ejecutores de políticas de corte antipopular y antinacional. El Pacto de Olivos de 1994 entre los dos principales partidos de la Argentina (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista) expresó el grado de consenso alcanzado en torno al neoliberalismo en la primera mitad de la década del noventa. La reelección presidencial de Carlos Menem al año siguiente fue la garantía de continuidad de recetas cuyas consecuencias negativas escapaban aún a la comprensión de gran parte de la sociedad.

La mayor resistencia a estas políticas en la primera mitad de los noventa provino de una parte del movimiento obrero y estudiantil. En lo sindical, destacó la creación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1992, con protagonismo de estatales y docentes, y la conformación en 1994 del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) como corriente interna de la CGT, impulsada por distintos gremios del transporte (camioneros, tranviarios, aeronavegantes). Desde esos espacios se protagonizaron los conflictos de trabajadores más importantes del período en oposición a la privatización de empresas públicas, al ajuste en el Estado y a las normativas neoliberales en educación y trabajo. En lo estudiantil, sobresalió el enfrentamiento a las reformas planteadas en la Ley de Educación Superior antes, durante y después de su aprobación. En cuanto a la conflictividad social, desde los territorios, aún no se expresaba con fuerza. Como excepción puede mencionarse la pueblada de 1993 en Santiago del Estero, conocida como “Santiagueño”; preanuncio del grito de los excluidos

que sobrevino poco después. Pero el abrumador triunfo de Menem en 1995 (reelegido con el 50 % de los votos y más de veinte puntos de diferencia con el segundo) indicaba que el neoliberalismo contaba con más apoyo que rechazo.

El panorama cambió súbitamente en la segunda mitad de los noventa. Los efectos palpables del desempleo y la pobreza comenzaban a hacerse sentir a lo largo y ancho del país. Las elecciones legislativas de 1997 reflejaron el cambio de humor social: el oficialismo menemista se desplomó y la oposición, conformada por una alianza entre radicales y progresistas, obtuvo un arrollador triunfo electoral. El inicio de la recesión por esos años terminó por resquebrajar el sueño dorado del consumismo, la plata dulce y el “deme dos” (símbolo de la convertibilidad peso-dólar que permitía un gran poder de compra a los argentinos que viajaban al extranjero). La crisis económica ya era inocultable y el conflicto social fue adquiriendo mayor relevancia en la escena pública, sacando a la luz lo que hasta entonces no se veía o no se creía.

Desde 1996 y, sobre todo, 1997 la sucesión de protestas y su radicalidad obligaron a la sociedad a tomar nota del deterioro que se estaba produciendo. El puntapié fueron los levantamientos populares en las localidades petroleras de Plaza Huincul y Cutral-Có (Neuquén) y Tartagal y Mosconi (Salta), profundamente afectadas por las privatizaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado. El método de protesta que les quedó a quienes habían perdido su puesto de trabajo fue el bloqueo de las rutas (piquetes). Esta metodología al poco tiempo fue replicada por trabajadores desocupados en otras localidades. Solo en 1997 se registraron 104 cortes de ruta distribuidos en 17 provincias. Fueron los primeros pasos de lo que luego se conoció como “movimiento piquetero”, sobre el cual volveremos al final de este capítulo.¹

Cuando en 1999 la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, fórmula radical-progresista encabezada por Fernando de la Rúa, triunfó en las elecciones presidenciales, había expectativas de un cambio de rumbo. En particular, de parte del sector identificado con el FREPASO, alternativa política que reunía parte del peronismo que se había opuesto al neoliberalismo, junto a grupos de izquierda, progresistas,

¹ El conteo de cortes de ruta de 1997 figura en La Nación, 3 de enero de 1998: <https://www.lanacion.com.ar/politica/en-un-ano-104-cortes-de-ruta-nid84535/>

humanistas y cristianos.² Además, confluyeron ahí actores sociales y sindicales que se habían enfrentado activamente al neoliberalismo. Pero lejos de proponer nuevos caminos, la gestión aliancista mantuvo las coordenadas centrales del menemismo, con una combinación letal de ajuste y represión. Apenas un año después de las elecciones, el vicepresidente de la Nación, Carlos “Chacho” Álvarez, renunció a su cargo denunciando corrupción en su propio gobierno y coimas en el Senado. Quedó en evidencia, de este modo, un tercer elemento de la crisis en que se hundía la Argentina: la dimensión política.

En lo social y económico, el panorama se tornaba desolador. Ahora se le agregaba que en lo político parecía no haber alternativas: a la ilusión, le siguió la decepción y la bronca. Buena parte de la dirigencia parecía sumida en la corrupción y la complicidad con el orden vigente. El retorno en marzo de 2001 de la figura estrella del menemismo –Domingo Cavallo– al Ministerio de Economía generó en la ciudadanía la percepción de una continuidad, de un estamento dirigencial podrido por igual. La escisión entre sociedad y clase política provocó una “crisis de representación” que se tradujo en un creciente sentimiento antipartidos. Sobre ese clima de desasosiego general explotó la rebelión popular de diciembre de 2001.

El detonante fue la restricción a la extracción de dinero en efectivo de los bancos. El llamado “corralito”, impuesto el 1 de diciembre de 2001, fue la gota que rebosó el vaso. El anuncio de esta medida impopular –que afectaba particularmente a unas clases medias ya muy golpeadas– fue seguido de cacerolazos, huelgas, saqueos y movilizaciones de todo tipo. El panorama económico recesivo y sin expectativas de mejora, la profunda crisis de representación política y la acumulación de conflictos sociales, sindicales y estudiantiles confluyeron en un mes de protestas incesantes. Cuando el presidente De la Rúa, ya muy debilitado, estableció el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001 como

² Fueron pocas las excepciones dentro de las dirigencias de los partidos políticos más grandes de la Argentina que se opusieron expresamente al neoliberalismo en los años noventa. Destacaron, en particular, el “Grupo de los Ocho”, compuesto por un reducido conjunto de diputados del Partido Justicialista que a inicios de la década decidieron romper la bancada oficialista en la Cámara baja como forma de manifestar su desacuerdo con las orientaciones del gobierno nacional. Luego, en 1994, se conformó el Frente País Solidario (FREPASO) con parte de esos diputados peronistas (entre ellos, “Chacho” Álvarez, por el Frente Grande), el senador justicialista José O. Bordón y distintas fuerzas políticas progresistas (Democracia Cristiana, Partido Intransigente, el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Popular). En 1995 se sumaron sectores provenientes del radicalismo “storanista” (Carlos Raimundi, Dante Caputo).

forma de poner límites al desorden generalizado, la respuesta masiva y espontánea fue la salida a la calle de decenas de miles de personas. La represión desatada sobre los manifestantes fue brutal: durante la noche del 19 y todo el 20 de diciembre el gobierno produjo una masacre con decenas de muertos y cientos de heridos. Fue el mayor saldo trágico desde el retorno de la democracia.

No obstante, haciendo frente a la violencia policial, las multitudes se mantuvieron movilizadas, resistiendo a las balas, y lograron agolparse a las puertas de la Casa Rosada bajo un mismo lema: ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! La imagen de la salida de De la Rúa en helicóptero tras su renuncia quedó grabada a fuego en la retina de los argentinos y argentinas. Representaba el final de una era: el símbolo del fracaso de un gobierno, pero sobre todo de un modelo económico y social. A partir de allí se abrían otros caminos, aunque nadie sabía por entonces cuáles. Pero existía una certeza, al menos para una porción significativa de la sociedad: el neoliberalismo debía acabar.

La política está en otra parte

La insubordinación social frente al estado de sitio decretado por Fernando de la Rúa convirtió a las protestas previas en una rebelión popular sin parangón en la historia argentina. Por supuesto, existían antecedentes de levantamientos de gran envergadura; emblemáticamente, el 17 de octubre de 1945 y el Cordobazo de 1969. Pero lo que sucedió en las jornadas de diciembre de 2001 provocó la caída del presidente de la Nación y una crisis institucional de tal profundidad que implicó una seguidilla de cinco autoridades presidenciales en menos de dos semanas. Además, el grado de impugnación hacia la clase política en su conjunto fue inédito. En esta crisis de representación radicó la diferencia más sustantiva con sucesos anteriores: no había ningún liderazgo, ideología o propuesta concreta que canalizara el descontento.

Este malestar coyuntural tenía, sin embargo, raíces profundas: daba cuenta de un problema estructural de las democracias occidentales. La institucionalización de la política de acuerdo a criterios liberales representativos construyó una ciudadanía pasiva que vio crecientemente restringida su participación en los asuntos públicos. De hecho, su actividad suele reducirse a la emisión del voto cada algunos años. Es

habitual que se produzca, así, una distancia entre política y sociedad. Este hiato tendió a ser resuelto en la era del capitalismo industrial con los partidos políticos, los sindicatos y las ideologías, por un lado, y por los medios de comunicación, por el otro. Estas mediaciones se vieron alteradas con las transformaciones de las sociedades posindustriales en las últimas décadas del siglo XX.

En relación con los primeros, la crisis de representación dejó en evidencia el vaciamiento ideológico de las principales tradiciones políticas de la Argentina. El peronismo, con quien históricamente se identificaron los trabajadores, había sido el brazo ejecutor del neoliberalismo. El radicalismo estaba profundamente deslegitimado por su gobierno, pero, además, había caído también bajo los cantos de sirena del Consenso de Washington. A su vez, los partidos de ambas expresiones –PJ y UCR– tendieron a vaciarse de vida interna. En cuanto al progresismo, principalmente referenciado en el FREPASO, había quedado manchado por su participación en la Alianza que condujo a De la Rúa a la presidencia; mientras que la izquierda continuaba fuertemente desprestigiada por la disolución de la Unión Soviética y el dominio del pensamiento único capitalista. Los sindicatos, por su parte, con una función de mediación en la esfera económica, pasaron por procesos similares de ahuecamiento. Con algunas particularidades que acentuaron la falta de representación de las dirigencias gremiales: la pérdida de base sindical debido a la reducción de trabajadores formales, la complicidad con diferentes gobiernos y empresas en la aplicación de políticas antiobreras y la conversión de parte de algunos sectores hacia un sindicalismo empresarial (negocios en torno a las obras sociales, fondos de pensión, aseguradoras, etc.), lo que expresaba el debilitamiento de una perspectiva de clase. En resumen, el problema de representación no era circunstancial, sino que reflejaba una crisis más profunda de las mediaciones institucionales e ideológicas.

Respecto a los medios de comunicación, estos comenzaron a ser un espacio de visibilización y mediación social cada vez más importante –y, por lo tanto, a adquirir mayor poder– a medida que los engranajes partidarios e ideológicos dejaron de cumplir su función. Cuando en los noventa la lógica del espectáculo, el entretenimiento y la frivolidad comenzó a permear en todos los formatos de prensa, la clase política, deseosa de lograr la “llegada” que los medios aportan, adoptó sus

códigos: primacía de la imagen sobre las ideas, de lo efímero sobre lo duradero, del efectismo sobre lo argumentativo. Esto provocó una “farandulización” de la política que generó un mayor distanciamiento respecto a la sociedad y una mayor pasividad de la ciudadanía que solo era invocada como consumidora de eslóganes.³

Estos fenómenos sumados a la difusión de un modelo de éxito asociado a la riqueza personal favorecieron la extensión de la corrupción en la esfera pública. Todo lo cual no hacía más que ahondar el descreimiento hacia la política como forma de realización personal y social (algo, por otra parte, promovido por las usinas neoliberales como forma de legitimar el desplazamiento de funciones del Estado al mercado y la sociedad civil). Por supuesto, ni los partidos ni los sindicatos son grupos homogéneos: como se mencionó antes, hubo dirigentes políticos y sindicales que se opusieron al neoliberalismo. Pero la tónica general en esos años favorecía aquellas tendencias. En todo el mundo las transformaciones neoliberales estimulaban el vaciamiento general de las democracias (llamadas, por eso mismo, “formales” o “de baja intensidad”). Ya que, en definitiva, el neoliberalismo se proponía el fin de la política mediante el predominio del mercado en todos los órdenes, a partir de lo cual se seguiría el “fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama.

Cuando esas recetas llevaron al colapso del país, la crisis de representación permitió un campo de experimentación en el que emergieron múltiples actores con lógicas que pretendían recrear un tipo de relación distinta entre sociedad y política. Esa fue la novedad más radical de la crisis del 2001: los nuevos horizontes, las innovadoras formas organizativas, los novedosos sujetos. Por supuesto, se venían incubando desde hace tiempo, en algunos casos décadas atrás. En lo sindical, por

³ No debe confundirse este proceso con el que se dio a partir de la difusión de las redes sociales en torno a la segunda década del siglo XXI. Si bien comparten rasgos en los términos dados por la lógica del entretenimiento (donde la imagen, lo efímero, la brevedad, entre otros, se constituyen como rasgos característicos), existen diferencias claras. En los noventa el ámbito central para la relación entre sociedad y política tendió a desplazarse a los medios masivos de comunicación, en especial a la televisión, en la cual los televidentes son necesariamente pasivos. No existía por entonces un uso extendido de internet en el país. Con el surgimiento de las redes sociales (Facebook, 2004; Twitter, 2006; Instagram, 2010) la clase política procuró generar una sensación de proximidad con la ciudadanía, precisamente como antídoto frente al distanciamiento generado en períodos anteriores. Aunque se trata de un efecto más bien superficial, ciertamente para una parte de la población representó una forma de pasar a la acción que contrasta con la pasividad anterior. Las redes sociales posibilitaron llegar con un mensaje a la clase política (o, al menos, la sensación de hacerlo) y, sobre todo, comunicar a la sociedad las posturas personales en diversos temas, reemplazando parcialmente formatos tradicionales de militancia.

ejemplo, el surgimiento de la CTA a inicios de los noventa implicó la apertura a la discusión sobre la necesidad de democratización de las organizaciones de trabajadores y la ampliación hacia las nuevas realidades laborales. En lo social, podrían mencionarse los antecedentes en los ochenta de las tomas de tierras en el conurbano bonaerense, con un rol destacado de las asociaciones barriales y las comunidades eclesiales de base, como preludio de la “territorialización” de la conflictividad. Pero fue en torno al 2001 que se masificó la búsqueda de nuevas formas organizativas para canalizar la lucha por reivindicaciones sociales y anhelos políticos.

Se trató de un período inédito de creatividad y experimentación. Para muchos, la renovación que se precisaba en el país no iba a pasar por un mero recambio en listas o candidaturas. Al sistema representativo formal y los partidos tradicionales, se le contestaba “hay que poner el cuerpo” y “la política está en otra parte”. Era el aire que se respiraba en cientos de asambleas barriales, colectivos culturales, cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, agrupaciones sociales, estudiantiles y sindicales a lo largo y ancho de la Argentina. En el peor momento de la historia nacional en términos de pobreza y desigualdad, floreció la participación social de un modo que no se veía desde los setenta, quedando sepultado de una vez el “no te metas” como expresión del miedo creado por la sombra del terrorismo de Estado. Un verdadero renacimiento de la militancia desde el cimiento instituyente de la democracia: el pueblo.

En la identidad de la “generación 2001”, aquella que se forjó en esas experiencias y la cual integra la mayoría de los actuales dirigentes del MTE, pesaron al menos otros dos elementos. En primer lugar, el ejemplo inculdicable de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que aparecían como un resguardo de ética y coherencia en un país corrupto. Además, la crisis que empezó a vislumbrarse en la segunda mitad de los noventa coincidió con el 20 aniversario del último golpe de Estado, contexto en que emergió la necesidad de revisar aquel oscuro pasado. En ese marco, nació la agrupación HIJOS, compuesta por una nueva generación de familiares de detenidos desaparecidos. Su surgimiento no solo contribuyó a actualizar la denuncia por la impunidad de los genocidas, sino que refrescó los métodos de lucha mediante la introducción del escrache como forma de acción directa tendiente a visibilizar

y denunciar dónde vivían los militares culpables de crímenes de lesa humanidad.⁴ La reivindicación de los derechos humanos que conectaba con esa otra Argentina, la que quedó sepultada por la dictadura militar, se convirtió en un elemento aglutinador en el pos 2001. En particular, desde 2003, con la decidida política al respecto impulsada por los gobiernos kirchneristas.

En segundo lugar, la crisis ideológica a la que referimos previamente, en el contexto de descomposición social de los noventa, generó un vacío de sentido en las juventudes que fue ocupado de manera parcial por la cultura del “aguante”. Originada en las hinchadas de fútbol, fue adoptada por los seguidores del rock y la cumbia, y luego apropiada y resignificada por los conflictos que emergieron en distintos sectores hacia fines de la década. En sus inicios, significaba adhesión y fidelidad a un referente (club de fútbol, banda musical), pero indirectamente servía a la construcción de identidad colectiva frente a la vacante simbólica dejada por un neoliberalismo que socavó viejas formas de sociabilidad y estabilidad. Esa construcción de identidad se sostenía sobre códigos grupales sólidos, se confirmaba mediante su confrontación con un otro (la policía y otras bandas) y, cuando se combinaba con un alto consumo de drogas y alcohol, podía conducir a la subcultura del “reviente”. De este modo, el aguante pivotaba entre ser una forma de socialización de resistencia y ser la expresión de un nihilismo autodestructivo. En ambos casos canalizaba la violencia contenida de una juventud disconforme con el rumbo de las cosas. En cierto sentido, fue una escuela de formación para la generación que protagonizó el 2001 y los sucesos posteriores. Nociones como “poner el cuerpo”, “pararse de manos”, “no correr”, “aguantar/resistir”, “enfrentar a la yuta”, “bancar los trapos”, dieron una impronta específica a la militancia de aquellos años.⁵

⁴ Frente a la impunidad de la que gozaban los genocidas, HIJOS enarboló la consigna: “Si no hay justicia, hay escrache”. Aunque adoptaba distintas metodologías, la forma de “marcar” el domicilio de los militares era el uso de pinturas, aerosoles, carteles, volantes, altavoces, etc. Con ese antecedente, la generación 2001 adoptó el escrache como parte del repertorio de acciones posibles. Aunque, por supuesto, ya no se trataba de señalar donde vivía una persona, sino que comenzó a ser usado en distintos escenarios y situaciones que estuvieran motivados por el descontento frente a la inacción política, institucional y/o judicial. En este nuevo marco, el escrache, al igual que otras formas de acción directa, solía articularse con el impulso a acciones por la vía institucional (denuncias en los organismos correspondientes, impulso a reformas legislativas, etc.).

⁵ Sebastián Morreale, quien años después se convirtió en referente de la rama Vientos de Libertad del MTE, terminaba su proceso de recuperación por consumo de drogas en 2001. En sus relatos aparece explícitamente la mención al reviente y el aguante (Liaudat, Fontana y Tófoli, 2023b). Sobre la “cultura del aguante”, ver Alabarces (2004).

De cirujas a cartoneros

Si aquel fue el escenario donde inició esta historia, los actores principales fueron las cartoneras y los cartoneros. Al menos durante la primera década de historia del MTE, el protagonismo indiscutido fue de ellos. Luego, como veremos, otras vertientes fueron complejizando la vida interna del movimiento en múltiples ramas. Pero falta para llegar a eso. Y, definitivamente, fue durante este largo período en que “MTE” fue casi sinónimo de “cartoneros” en que se construyeron buena parte de los pilares constitutivos e identitarios del movimiento. De hecho, las especificidades de este sujeto social explican algunos de los rasgos diferenciales de la organización respecto a experiencias contemporáneas como las del movimiento piquetero. Por lo que es de suma importancia conocer esas características, para luego dar cuenta de cómo se tradujo ello en este proceso organizativo en particular.

Para dar cuenta de dónde salen los cartoneros es preciso remitirnos a la segunda mitad del siglo XIX. Por esos años, en la ciudad de Buenos Aires por primera vez se asignaron lugares oficiales para la quema de basura. Tiempo después, comenzaba a funcionar un sistema de recolección domiciliaria de residuos. Nacían, de ese modo, los basurales autorizados, legalmente establecidos, al tiempo que se expandía el consumo con el auge del modelo agroexportador y la llegada al país de bienes producidos industrialmente. Ya por entonces había personas que quedaban por fuera de los beneficios, y apelaron a la recuperación de basura como forma de vida, tanto para consumo propio como para la reventa. El conflicto con quienes usufructuaban del negocio de la basura, gracias a la concesión oficial, apareció desde un inicio. Es notable, cuando se repasan las fuentes en distintas épocas, la homogeneidad de los comentarios críticos sobre la actividad de quienes rebuscan entre los desechos como forma de sobrevivir. ¡Parecen descripciones de cualquier periódico de hoy en día! Por ejemplo, la memoria de 1877 de la Municipalidad de Buenos Aires afirmaba que:

[...] gran número de individuos que recorren las calles extrayendo de los cajones que deposita el vecindario en las puertas de las casas, todos los residuos utilizables, de suerte que cuando llegan los carros al vecindario, ha sido ya despojada la basura de la mayor parte de ellos. Para cortar este abuso que priva de una renta que ayuda a satisfacer el gasto de la quema

de esas basuras, solicité al señor Gefe de Policía [sic], que por medio de los agentes subalternos de seguridad se prohibiese a estos rebuscadores de residuos el extraerlos [...]. (Schamber, 2008: 35)

Estos antecesores de los cartoneros, llamados originalmente “rebuscadores”, pasaron a conocerse desde los años cuarenta del siglo XX como “cirujas”. Con el paso del tiempo mantuvieron una presencia constante pero *marginal*. Y este último adjetivo describe perfectamente la situación de estas personas en la doble definición que dan los diccionarios. Por un lado, “que está en el margen”. Por otro lado, “que es secundario, poco importante”. Los cirujas, a lo largo de las décadas, fueron marginales en ambos sentidos. Recorrían los márgenes de un sistema y su función era considerada inferior. Ese estigma pesaba sobre quienes, desde lo más bajo de la pirámide social, encontraron en esta actividad un modo de supervivencia.⁶

No obstante, en los años en que el capitalismo local, con base en la sustitución de importaciones, creaba empleos, eran pocos los que elegían o se veían obligados a ese trabajo. La llegada masiva de migrantes rurales a los conglomerados urbanos industriales dio un perfil específico a los cirujas en este período. Eran paisanos llegados del interior con cultura criolla y conocimiento sobre caballos. No eran pocos los casos en que estos gauchos migrantes preferían la vida errante del carrero, junto a su potrillo, antes que la disciplina rígida e impersonal de la fábrica. Todavía hoy, en algunas regiones, se mantiene esta identidad de origen rural en los cartoneros, visible en las vestimentas y viviendas personales, en los aperos del caballo y en los juegos y costumbres.

El quiebre social, económico y político de mediados de los setenta se vio reflejado también en relación con la actividad del cirujeo. Nos referimos a las transformaciones ocurridas con el inicio de un proceso de desindustrialización, aumento del desempleo, empobrecimiento y cambio de rol del Estado en la sociedad y la economía. Mutaciones que, como dijimos antes, requirieron del disciplinamiento social mediante

⁶ Schamber (2008: 77-78) señala que existen dos hipótesis acerca del origen del término “ciruja”, en ambos casos se afirma que es apócope de “cirujano”. La primera hipótesis se basa en que uno de los objetos primordiales de recolección por entonces eran los huesos (actualmente, estos siguen siendo un objeto valorizado, pero son retirados directamente de las carnicerías por los “hueseros”, que los venden a plantas de procesamiento para su uso en alimentos balanceados, hamburguesas y chacinados). La otra acepción, en cambio, se enfoca en el instrumento usado: la cuchilla (un tango de 1926, titulado “El ciruja”, refiere a este sentido). En ambas hipótesis, la familiaridad de los cirujas con estos elementos –huesos, cuchillos– los asemejaría a los cirujanos.

el terrorismo de Estado. En ese contexto, se modificaron también los marcos de la actividad de recuperación de residuos. En particular, nos detendremos en el caso emblemático del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que incluye la ciudad homónima y los municipios aledaños conocidos como Conurbano Bonaerense o Gran Buenos Aires.

Entre 1977 y 1978, los gobiernos *de facto* de la ciudad y la provincia modificaron radicalmente el modo de tratar los residuos: el método utilizado desde el siglo XIX consistente en la incineración –domiciliaria y mediante usinas– y la disposición en basurales a cielo abierto fue reemplazado oficialmente por los rellenos sanitarios. Se seguían las ideas del ex Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires, Guillermo D. Laura, quien en 1975 había publicado el plan “El cinturón ecológico”. La ambiciosa propuesta suponía la creación de enormes espacios verdes y recreativos sobre los rellenos sanitarios que rodearían la ciudad capital, evitando al mismo tiempo la contaminación producida por la quema de residuos y los problemas derivados de la disposición a cielo abierto. Las políticas urbanas del interventor militar Osvaldo Cacciatore, destinadas a hacer de la capital una ciudad exclusivamente residencial, adoptaron el plan de Laura. Así pues, la erradicación de villas de emergencia, la relocalización del sector industrial, la construcción de autopistas urbanas y el traspaso de la basura porteña a los rellenos ubicados en el conurbano se articularon como parte de una misma política.

En ese marco, en mayo de 1977 se firmó el convenio entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que dio nacimiento jurídico a Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), mientras que la ordenanza 33 961 de agosto de ese mismo año ratificó el convenio anterior y creó la empresa estatal interjurisdiccional CEAMSE. Bajo el paraguas de esta nueva política se decretaron normativas que prohibieron el cirujeo, apelando a razones “humanitarias”, económicas y de entorpecimiento y deterioro de la vía pública. Explícitamente, lo estableció Cacciatore en junio de 1977 mediante la ordenanza 33 581. Un año más tarde, mediante el Decreto Ley 9111 el general Ibérico Saint Jean, interventor del gobierno bonaerense, extendió la prohibición de la actividad de los cirujas al territorio a su cargo.

De este modo, la actividad de pobres y marginales que sobrevivían mediante la recuperación de basura era transformada en delito; lo

cual era doblemente grave en una etapa negra de nuestra historia en que el aparato represivo gozaba de total impunidad. El nuevo marco normativo significaba a su vez otra cosa: el Estado se garantizaba el monopolio legal sobre los residuos. Pero no con la idea de hacerse cargo de su procesamiento y recuperación, sino que, con fundamento en ese derecho de propiedad, podía concesionar a empresas del sector privado la responsabilidad del traslado y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios. Así pues, se sentaron las bases de un negocio formidable. Mediante la ordenanza 35 135 de agosto de 1979, el CEAMSE se hizo cargo de la prestación, por sí mismo o por otros actores, de parte del sistema de recolección y limpieza, permitiendo de este modo la tercerización del servicio al sector privado. Para comprender la dimensión de esto, debe tenerse en cuenta que los municipios del AMBA estaban obligados a entregar sus residuos al CEAMSE a un precio fijado unilateralmente por esta empresa, al tiempo que cada jurisdicción quedaba habilitada a negociar las onerosas concesiones. De hecho, la mayor erogación presupuestaria de las intendencias se destina a ese fin, por lo que se convirtió en uno de los temas centrales en las agendas municipales. Paulatinamente, los más importantes grupos económicos locales ingresaron al negocio de la basura.

Desde entonces, las decisiones en torno a las licitaciones han sido motivo de múltiples cuestionamientos y, en algunos casos, verdaderos escándalos. No solo en el contexto de negociaciones espurias por las concesiones, sino debido a las sobrefacturaciones de las empresas prestatarias del servicio. Una de las formas para cobrar de más consistió en el pesaje de la basura húmeda. El contenido de agua en los residuos puede alcanzar hasta un 40 % de su peso total. Por lo que pesar los desechos húmedos o secos arroja valores de facturación muy distintos. Desde las licitaciones de los ochenta se preveía que las empresas debían secar los residuos antes de su pesaje. Hasta iniciado el siglo XXI, en que se desarrolló un nuevo marco normativo, nunca se construyó la usina que debía realizar tal proceso, por lo que el Estado pagó durante décadas un sobre costo a las empresas privadas.

Un aspecto de las normas establecidas por la dictadura militar, que resulta increíble visto desde la actualidad, fue la prohibición sobre el reciclado de residuos. Se rechazaba, supuestamente, por considerar que para ello se requerían costosas instalaciones y avanzada tecnología.

Aunque de modo implícito es posible inferir otra causa. Resulta que los recursos de CEAMSE provendrían básicamente de tarifas cobradas a los municipios por tonelada de basura recibida en las estaciones de transferencia. Por lo tanto, a más basura, más dinero. Esta lógica perversa nos alejaba de los criterios que, ya por entonces, propugnaban por la reducción de los desechos, su reutilización y el cuidado ambiental en general. Recién en la concesión licitada en 1997, veinte años después de creado el CEAMSE, se permitió a los adjudicatarios privados reciclar hasta un 10 % del total en peso; reciclado que, de todas maneras, no efectuaron.

Cabe aclarar que, pese a su prohibición, los basurales a cielo abierto no dejaron de existir. En paralelo a los rellenos sanitarios oficiales, surgieron basurales alternativos tanto en el conurbano como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De este modo, los municipios buscaron evitar el pago por enterrarlos que establecía el CEAMSE. Hacia 1995 relevamientos de esta empresa identificaban más de cien basurales clandestinos en el AMBA. Paradójicamente, la presión empresaria por el cierre de los basurales municipales les jugó en contra, ya que empujó a los recuperadores que trabajaban allí hacia la vía pública; es decir, fueron a buscar la basura a las calles, antes que sea recolectada por el circuito legal. Por lo que, pese a la prohibición del “cirujeo”, fuentes de la época señalaban que entre un 5 % y un 15 % del total de la basura ingresaba al circuito ilegal de recuperación. Vale destacar que esa recuperación clandestina de residuos, más allá del porcentaje exacto, significaba un ahorro para los municipios y una pérdida económica para las empresas privadas y el CEAMSE.

Aquel marco legal, producto de un gobierno ilegal, se mantuvo inalterado durante las décadas posteriores a la recuperación democrática. La privatización del servicio fue revalidada en innumerables ocasiones y se aceptó como parte de una nueva normalidad. El aspecto represivo, probablemente, haya decaído con la apertura de la posdictadura. Pero el país había cambiado también en otros aspectos. La inestabilidad económica y el deterioro social se volvieron moneda corriente. Crisis tras crisis, sectores de trabajadores o, incluso, de clases medias empobrecidas, encontraron en la recuperación de residuos una estrategia de supervivencia. Cuando en la segunda mitad de los noventa comenzaron a sentirse los efectos recesivos de las políticas menemistas, más y más

gente que había sido expulsada del empleo formal se acercó al cirujeo como forma de complementar ingresos o bien como su principal fuente económica.



Imagen 1. Camiones cartoneros saliendo de Villa Fiorito. Fuente: archivo de Fernanda García Monticelli.

La debacle del 2001 implicó un salto en la masividad de este proceso. Se conjugaron dos factores para ello. En primer lugar, los altos niveles de pobreza y desocupación fueron el principal aliciente. Según cifras del INDEC, tras la crisis el desempleo alcanzó al 21,5 % de la población económicamente activa, la subocupación afectaba a un porcentaje similar y casi el 60 % del país estaba en la pobreza. En segundo lugar, con la brusca devaluación del peso en 2002 y el derrumbe de las importaciones, los precios del papel y el cartón se incrementaron notablemente. Esto produjo un aumento de la demanda de materiales reciclables de parte de un circuito de valorización local que se reactivó y fortaleció en el nuevo contexto cambiario de la posconvertibilidad. La combinación de estos factores condujo a un grupo enorme de personas a salir a las calles a revolver la basura buscando, en particular, papel y cartón.

Ese fue el marco en que el término “ciruja” –que tenía un sentido peyorativo asociado a la pobreza y la suciedad– comenzó a ser suplantado por el de “cartonero”. Su adopción generalizada de parte de los medios de comunicación terminó por instalar el nuevo nombre. Este cambio nominal reflejaba algo más profundo: el surgimiento de un nuevo sujeto social, con antecedentes centenarios, pero con una novedosa configuración identitaria y organizativa. Estimaciones en torno al 2001-2002 indicaron que había entre 50 000 y 150 000 recolectores en el AMBA, y un alto número de estos había perdido su trabajo en los años inmediatamente anteriores. Esa masa humana expulsada por el modelo neoliberal constituyó la base sobre la que se construyó el MTE.

Emerge la “cuestión cartonera”

La enorme mayoría de los cartoneros surgidos de la crisis del 2001 vivían en municipios del conurbano y se desplazaban diariamente para trabajar en la Capital Federal, transportando sus carros, cargas e hijos. Registros gubernamentales realizados en la época indicaron que tres cuartas partes de quienes trabajaban en la CABA provenían de distritos aledaños. Estos viajes se realizaban en pésimas condiciones de higiene y seguridad. Sin embargo, el riesgo se justificaba porque la ciudad porteña era vista como el “Potosí de los cartoneros” (en referencia al cerro Rico, ubicado en el altiplano boliviano, del cual se extrajeron ingentes cantidades de plata en el período colonial). El nivel socioeconómico elevado, la gran densidad de población y la concentración de actividades comerciales y administrativas en pocos barrios permitían encontrar un mayor volumen de materiales reciclables, superiores en calidad y con una menor dispersión geográfica.

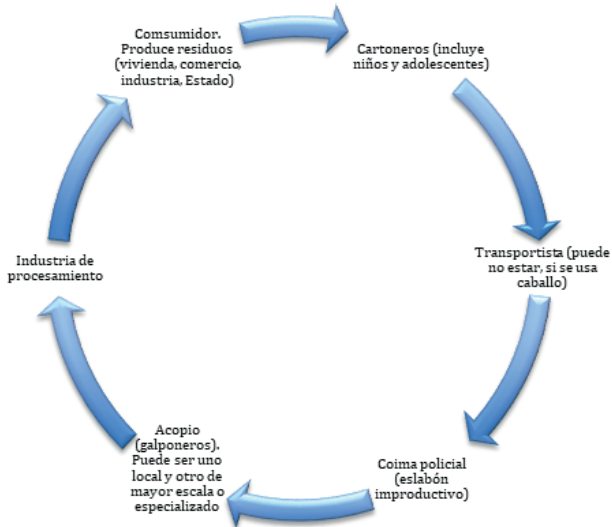
¿Cómo era la actividad diaria de los cartoneros? El horario de trabajo era vespertino; es decir, cuando finalizaba el día y los edificios y comercios retiraban la basura, por lo que salían de sus hogares en el conurbano para tomar el transporte, de acuerdo a la distancia y disponibilidad, alrededor de las cinco de la tarde. El retorno a sus domicilios se producía pasada la medianoche, aunque, dependiendo de la cantidad de material hallado y del acceso al transporte, podían volver a sus casas a altas horas de la madrugada. La unidad productiva solía ser la familia. Según informes oficiales, la mitad de los cartoneros eran

menores de edad. Lo cual tenía dos explicaciones básicas: primero, no se podía dejar solos en casa a niños y adolescentes; segundo, se sumaban manos que ayudaban a acelerar la recolección. Como veremos más adelante, en torno a este tema se desarrolló, en 2005, uno de los primeros conflictos en que el MTE tuvo un rol destacado.

La familia cartonera y su trabajo insalubre eran el eslabón más débil de una cadena de valor de la que distintos actores usufructuaban. Durante los días siguientes a la recolección, luego de clasificar los residuos en sus viviendas (conformando innumerables microbasurales en barrios de por sí precarios), los cartoneros los vendían a los depósitos –llamados “galpones”– ubicados en las cercanías de donde habitaban. Los “galponeros” eran acopiadores locales que obtenían una diferencia económica revendiendo los reciclables directamente a la industria o a un acopiador especializado o más grande. Es decir, eran mediadores entre los recuperadores y las empresas industriales que procesaban los materiales; algunas de ellas eran grandes firmas, beneficiarias finales de esta cadena de valor apoyada en el trabajo precarizado de los cartoneros, incluyendo niños y niñas.

Pero no se agotaba ahí. Hay dos actores más para destacar, que tuvieron, por distintas razones, mucha importancia en los primeros años del MTE. El primero formaba parte de la cadena productiva como transportista. Los llamados “choferes” eran dueños de camionetas o camiones, normalmente gente del mismo barrio que los cartoneros, que cobraba por prestar movilidad a las personas, los carros y las cargas entre la localidad de origen y la ciudad de Buenos Aires.⁷ El segundo actor era la policía bonaerense y, sobre todo, la federal que, sin agregar valor a la cadena de reciclado, intentaba obtener beneficios de ella mediante la coima sistemática. El hecho de que la actividad del cartoneo era ilegal de acuerdo a las normativas vigentes les daba un enorme poder para exigir pagos a cambio de hacer la vista gorda.

⁷ El “transportista” no existía en el caso de quienes usaban carro a caballo para cartonear. Mientras que entre aquellos que utilizaban el ferrocarril adquirió rasgos específicos, al ser brindado el servicio de transporte por grandes empresas. Más adelante nos detendremos en la experiencia del Tren Blanco o Tren Cartonero.

Gráfico 1. Cadena de valor de los residuos.

La masividad del fenómeno, sumado a la gravedad de hechos tales como las coimas policiales y el usufructo de la explotación laboral de niños y del trabajo precario de adultos, de parte de empresas reconocidas, hicieron que la cuestión no tardase en adquirir estado público e ingresar en la agenda mediática, académica y política. Ya hacia mediados de 2001 la “explosión cartonera” era inocultable. El 1 de julio de ese año, el diario *La Nación* publicó datos de un estudio en que se señalaba la existencia de cien mil cartoneros en el área metropolitana, de los cuales la mitad había perdido su fuente laboral en los años anteriores. Esta nota tuvo una gran repercusión, ya que daba cuenta de la dimensión alarmante del fenómeno. No fue, por supuesto, la primera nota en un periódico de tirada nacional, pero tuvo un gran impacto debido a la estimación cuantitativa.⁸

⁸ Schamber (2008: 83-87) resume las diferentes estimaciones cuantitativas sobre el fenómeno cartonero entre 2001 y 2005. Distintas dificultades metodológicas y la amplitud de los valores resultantes de las estimaciones hacen muy difícil saber cuántos recuperadores había efectivamente en el AMBA por entonces. El trabajo citado en *La Nación* era de Francisco Suárez (UNGS) y suele tomarse como referencia al ofrecer una metodología consistente en el estudio en base a dos municipios y su proyección al conjunto del AMBA. En cuanto al tiempo en la actividad, la información periodística se quedó corta: los primeros registros oficiales, realizados entre octubre y diciembre de 2002, arrojaron que un 76% de los cartoneros llevaban menos de dos años en la actividad.

Unos días más tarde, el 12 de julio, Eduardo Valdés, presidente del Bloque Justicialista en la legislatura porteña, envió al mismo diario una carta de lectores titulada “El cirujeo”. En ella manifestó que estas personas podrían incorporarse en una gestión integral de los residuos domiciliarios. Se aproximaba, por entonces, una nueva licitación para el servicio de recolección, barrido y limpieza en la CABA. Frente a este tipo de propuestas, rápidamente surgieron otras voces que condenaban el cartoneo por ilegal, así como por reparos éticos y por los problemas de tránsito y estéticos que generaban a la ciudad. Entre ellos, Mauricio Macri, por entonces empresario y dirigente deportivo recién lanzado a la política, afirmó en una entrevista que los cartoneros “se roban la basura de la calle” (*La Nación*, 27 de agosto de 2002). Más allá de la insensibilidad que manifestaban sus palabras en el contexto de la peor crisis económica de la historia argentina, estrictamente hablando este tipo de discursos se amparaba en la vigencia de las normas establecidas por la dictadura militar.

También organizaciones no gubernamentales y sectores académicos comenzaron a explorar el tema en encuentros y charlas y a proponer distintas alternativas. Eran invitados funcionarios con injerencia en la problemática, representantes de las empresas recolectoras, investigadores y periodistas. Y, de a poco, comenzaron a hacerse oír los propios cartoneros mediante incipientes asociaciones, no solo en los debates, sino también frente a la prensa y los organismos estatales. Estas primeras agrupaciones cartoneras fueron reconocidas rápidamente como interlocutoras legítimas y ayudaron a definir la problemática y al sujeto. De este modo, el tema comenzó a ser abordado desde distintas aristas y actores.

En síntesis, la emergencia como problema público de “la cuestión cartonera” —a partir de su ingreso a la arena mediática, política y académica— condujo a que fuera visualizada como una situación que requería intervención estatal para darle solución. Es decir, la problematización implicó que el cuerpo político entendiera que debía hacer algo al respecto, en especial cuando se trata de una actividad delictiva realizada por decenas de miles de personas a la luz del día en la ciudad capital del país. La disyuntiva, básicamente, era la misma que se repetiría a lo largo de los años: inclusión versus criminalización. La resolución favorable a la primera vía se debió al factor organizativo de los carto-

neros, consustancial, como veremos, a su definición e identidad como actor social.

Los cinco locos

Junio de 2002. Hacía mucho frío. Decenas de camionetas y camiones destartalados, repletos de cartoneros, mujeres, hombres y niños, se alineaban sobre las avenidas Córdoba y Rivadavia en la lujosa ciudad de Buenos Aires. Llegaban de oscuras localidades del sur, lugares que nunca en su vida visitarán la inmensa mayoría de los vecinos porteños. Venían a revolver la basura en busca del pan diario. Desde los edificios, había quienes miraban con sorna la mugre que dejaban esos negros. Otros los compadecían y separaban los residuos para facilitar el trabajo cartonero o acercaban algo de ropa y dinero a esas familias pobres. Entre ellos, algunos se animaron a dejar el confort del hogar, dieron un paso más y se comprometieron tendiendo una mano hacia esos desconocidos. De ese encuentro entre clases sociales nació el MTE.

En la zona del Abasto, intersección entre los barrios de Palermo, Almagro y Balvanera, estacionaban las camionetas llegadas desde Villa Fiorito y Villa Caraza. Estas dos localidades de Lomas de Zamora y Lanús son aledañas y están separadas por la avenida Gral. Hornos. Era uno de los mayores puntos de aglutinación cartonera en el conurbano y el país. Desde allí partían los transportes repletos de miles de cartoneros, ingresaban a Buenos Aires por el Puente Alsina que cruza el río Matanza-Riachuelo, y atravesaban la ciudad desde el sur hacia las zonas centro y norte, donde más residuos se generaban. Los relatos de la época y las imágenes preservadas en video destacan lo impresionante que era ver las filas de camiones y camionetas transitando con las familias cartoneras en los acoplados, subidas a carros y bolsones.

Conmovidos por la situación que se daba frente a las puertas de sus domicilios, una joven pareja y una familia, que vivían cerca, pero no se conocían entre sí, comenzaron a hacer lo mismo: servir algo de comida y bebida calientes a los cartoneros. Los primeros, eran Juan Grabois y Morena Raffo. Por entonces, con apenas 18 años y siendo estudiantes universitarios, comenzaron preparando una olla en su propia casa, sobre las calles Cabrera y Mario Bravo, e invitaron a los excompañeros de la escuela secundaria a que los acompañaran. Se sumaron Tiziano

Borghi y Mariano Gancedo, con quienes habían compartido años en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), institución de educación privada dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Como tal, el ILSE había sido alcanzado por los conflictos que se dieron en torno a la Ley de Educación Superior (LES). Las tomas del colegio, en ese marco, fueron la única experiencia militante con que contaba este grupo. Pero no tuvieron un rol destacado ni participaron del centro de estudiantes. Sin embargo, eran parte de un curso escolar muy cuestionador de los aspectos conservadores que el colegio mantenía, por lo que algunos alumnos fueron expulsados (entre ellos, Grabois). Pese a no contar con gran trayectoria de militancia, la mayoría de ellos habían crecido en contextos politizados; algunos con padres comunistas; otros, peronistas.⁹

En simultáneo, una familia vecina asumió también una posición activa de solidaridad con los cartoneros. En uno de los muchos hechos azarosos, pero imprescindibles en esta historia, vivían a solo una cuadra de aquella pareja joven, en la intersección de la calle Mario Bravo y Avenida Córdoba. La composición de este segundo grupo era muy distinta. Se trataba de Fernanda García Monticelli, junto a su madre, Magdalena Gagey, y la pareja de ella, Daniel Rizzi. Fernanda, con 26 años, había terminado sus estudios como contadora pública en la UBA. No tenía tampoco, al igual que los jóvenes del ILSE, experiencia militante directa. Pero había crecido en un marco muy particular. Su padre, Jorge Antonio, dirigente de la Juventud Universitaria Peronista, fue asesinado por el Ejército en marzo de 1977. Tiempo después, en 1979, su madre partió con ella al exilio en México, Nicaragua y Europa. Cuando retornaron al país, en 1982, se instalaron en la provincia de Chaco, luego de que Magdalena se pusiera en pareja con Osvaldo Lovey, histórico dirigente de las Ligas Agrarias Chaqueñas. Entre 1985 y 1987, Lovey fue uno de los presos políticos del gobierno de Alfonsín. En esos contextos muy politizados se desarrolló la infancia y adolescencia de Fernanda. Por su parte, Gagey y Rizzi se mantuvieron durante los noventa como opositores al menemismo.

⁹ El ILSE está ubicado a metros del Teatro Colón. Es uno de los cuatro colegios de la UBA, pero el único con cobro de arancel. Las luchas en torno a la LES marcaron al movimiento estudiantil durante una década. Se iniciaron en 1994, pero continuaron a su sanción en el Congreso en 1995, ya que cada universidad, en ejercicio de su autonomía, debía adecuar sus estatutos. La UBA fue uno de los epicentros de un conflicto que perduró hasta los primeros años de la década del 2000. Sobre la etapa de Grabois en el ILSE, ver Fontevecchia (2017).

Ambos grupos se encontraron casualmente en la calle. Decidieron juntar esfuerzos y comenzaron por realizar una olla popular para los cartoneros en la esquina de Avenida Córdoba y Gallo, a pocas cuadras de sus domicilios. Aunque pueda parecer extraño a los ojos de una sociedad cada vez más individualista, no era en aquella época algo tan excepcional. Había un cierto ambiente favorable a la solidaridad en general y hacia los cartoneros en particular. Distintas asambleas vecinales, surgidas al calor de la crisis, realizaban ollas populares o merenderos para ellos, e incluso, otras tareas asistenciales. Hasta un diario conservador como *La Nación* publicaba una nota el 5 de octubre de 2002 elogiando a vecinos de Recoleta que cocinaban para los cartoneros.¹⁰ Lo diferente en el núcleo fundador del MTE fue la perspectiva organizativa que asumieron, sin dudas por influencia de las historias familiares de los integrantes del grupo. Siendo un conjunto extremadamente pequeño de personas, la mayoría muy jóvenes, sin experiencia y sin una identidad política definida, resolvieron crear algo de nombre tan presuntuoso como un Movimiento de Trabajadores Excluidos. Podrían haber fundado, como era más habitual, un centro cultural o una agrupación estudiantil, o simplemente asistir a las asambleas barriales que se hacían en las plazas de la zona; experiencias organizativas que se multiplicaban por entonces. Sin embargo, la decisión que se evidencia en la definición del nombre refleja algunas orientaciones estratégicas que desmarcan la trayectoria del MTE respecto de esas opciones que hubieran implicado mantenerse dentro de la propia clase social a la que pertenecían. En este sentido, se acercaba más al perfil de los movimientos de trabajadores desocupados que se encontraban en ebullición en ese tiempo. Más adelante presentaremos en detalle este punto.

A ese grupo promotor, conformado a mediados de 2002, se sumaron al poco tiempo tres aportes fundamentales en la historia de la organización. A fines de ese año se incorporó Juan Martín de Mingo, recientemente graduado de abogado. El contacto llegó a través de la agrupación estudiantil NBI de la Facultad de Derecho de la UBA. Grabois era estudiante allí y, si bien nunca participó de la militancia universitaria, tenía cercanía con ellos. En esa agrupación independiente estuvieron varios de quienes, años después, fueron dirigentes reconocidos del kirchnerismo. Entre ellos, Eduardo “Wado” de Pedro.

¹⁰ <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/vecinos-que-cocinan-para-los-cartoneros-nid437757/>

Fue este último el que le sugirió a de Mingo, que estaba insatisfecho con la militancia en la universidad, que se sumara al trabajo con los cartoneros. Hasta 2004, de Mingo se mantuvo con una doble militancia en el MTE y NBI. Esa relación sirvió para que, en aquel período, se hicieran algunas actividades conjuntas entre ambas organizaciones. Fue el único vínculo entre el MTE y el movimiento estudiantil hasta fines de la década. Por otra parte, en mayo de 2004 se incorporó tras un encuentro casual Rafael Nejamkis, por entonces estudiante de la UBA, con quien habían compartido aula en la escuela los del grupo que provenía del ILSE. Y en julio de ese mismo año se sumó Juan Martín Carpenco a partir de un encuentro fortuito con la olla popular de Avenida Córdoba y Gallo. Su única experiencia cercana a la militancia había sido la participación en un grupo de teatro conformado por chicos con discapacidad y coordinado por la actriz y dramaturga Ana María Giunta. Carpenco, proveniente de Entre Ríos, y de Mingo, oriundo de Lincoln (provincia de Buenos Aires), eran los únicos del grupo inicial que no eran porteños.

Así pues, el minúsculo grupo promotor del MTE estaba compuesto esencialmente por jóvenes estudiantes o graduados universitarios en torno a los veinte años (tomando en cuenta que Gagey y Rizzi, luego de la asunción de Kirchner en mayo de 2003, abandonaron la incipiente construcción y se sumaron a lo que luego sería el Movimiento Evita). Los cartoneros los bautizaron cariñosamente: “los cinco locos”. Y es que, durante la primera década de historia del MTE, tras el alejamiento de Gancedo en 2004, ese fue el reducido número de militantes “blanquitos”, de clase media, que sostuvo la organización. Recién en 2012 esa cifra se amplió con la incorporación de distintos contingentes de militantes, pero eso se verá más adelante. Por ahora destaquemos uno de los tantos rasgos peculiares de esta organización: a contrapelo de la tendencia a la división y fragmentación de los movimientos populares, los cinco locos se mantuvieron unidos hasta la actualidad. Y, salvo un caso, continúan más de veinte años después en roles muy activos.¹¹

¹¹ García Monticelli y Carpenco asumieron en 2019 en la gestión pública. Respectivamente ejercen como Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Nación y Coordinador de Proyectos de Economía Social y Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nejamkis ocupa un lugar central en la Mesa de Relaciones, ámbito de dirección del movimiento. De Mingo retornó a su pueblo natal en 2013, desde donde organizó al MTE en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires. Borghi no participa en el día a día, pero colabora en cuestiones específicas de formación. Y Grabois se

Café con leche

Desde el inicio de la olla popular en Avenida Córdoba y Gallo, en aquel frío junio de 2002, el objetivo de los novatos militantes trascendió la asistencia inmediata y asumió un horizonte organizativo. Acercarse con un plato o una bebida caliente a los transportes destartados en que se desplazaban las familias cartoneras era un motivo para charlar y conocerse. La recepción solía ser distante. Superar esa desconfianza fue una tarea lenta, en algunos casos de años. La mayoría de los cartoneros descreía de la política y más de uno perdía la paciencia con estos pibes que venían a hablarles. El tiempo apremiaba: cuanto más material reuniera el cartonero, más dinero podría conseguir para “parar la olla” al menos por esos días. ¿Por qué detenerse a hablar con esos jóvenes bienintencionados, pero con quiénes no compartían nada?

Las primeras reuniones a las que asistían “cartoneros y estudiantes” (como rezan los primeros panfletos y documentos) comenzaron en 2003 en un bar-parrilla, ubicado en las calles San Luis y Gallo. Pero fueron reuniones esporádicas hasta inicios de 2005; recién entonces se alcanzó un grado organizativo suficiente para sostener encuentros periódicos. Estos primeros años con asistencia irregular de los cartoneros a las reuniones fueron, sin embargo, cruciales en la construcción de confianza, la formación de la identidad y la definición del perfil del MTE. El cimiento sobre el que se construyeron fueron las luchas que veremos en el capítulo siguiente. Pero también fue esencial el tiempo compartido y una actitud de apertura de ambas partes:

Solo una prolongada interacción entre personas de distinto origen cultural o, en este caso, la inmersión militante sostenida en las condiciones culturales de los excluidos, permite un diálogo sincero, de iguales, basado en la sincronización de registros lingüísticos y el acercamiento entre las pautas morales, aspiraciones y motivaciones originalmente distintas que sostiene cada cual. La grieta entre integrados y excluidos solo se salda con amor y cercanía, en lo pequeño y en lo grande. Hay que cruzar la muralla y estar ahí, que se te impregne el olor de los compañeros. Si no, no podés entender (Grabois, 2018: 48).

convirtió en uno de los referentes sociales y políticos más destacados de la Argentina, postulándose como precandidato a presidente de la nación en 2023 (datos actualizados a julio de 2023).

Los primeros que comenzaron a prestar oídos a lo que decían “los estudiantes” son conocidos en el MTE como “los cinco locos cartoneros”. En esta frase no importa, como en el caso anterior, si el número es exacto, sino destacar que eran solo un puñado. Todos venían del eje de la zona sur constituido alrededor de Villa Fiorito y Villa Caraza. Algunos se conocían del barrio, otros no, pero compartían la misma historia de exclusión. No habían sido cirujas, sino que eran parte de la explosión cartonera de fines de los noventa. Entre ellos estaban Sergio Sánchez, Edith “Flaca” Zárate, Miguel “Mono” Almeyra, Raúl “Tati” Villordo, Yolanda Soto, Marcelo Villarreal, José “Chino” Frías, Elvira “Morocha” Matos, Ricardo Montaña y Mirta Franco.¹²



Imagen 2. Olla popular sobre Av. Córdoba y Gallo en la ciudad de Buenos Aires (c. 2002-2003). Fuente: archivo de Fernanda García Monticelli.

Con una historia laboral por detrás, el paso al cartoneo se fue dando al ritmo del derrumbe de la economía argentina. Primero, en las épocas de desocupación temporaria, como un medio transitorio de vida.

¹² Este grupo de cartoneros fundadores también se mantuvo organizado con el paso de los años. Zárate coordina la planta de reciclado de Flores (CABA). Almeyra, su marido, y Frías estuvieron activos en el MTE hasta sus fallecimientos en 2010 y 2018 respectivamente. Sánchez preside, desde su fundación en 2011, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Matos es parte del Consejo de Administración de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Villordo, Soto, Villarreal, Montaña y Franco siguen trabajando en el marco de la cooperativa (datos actualizados a junio de 2023).

Luego, a medida que la recesión económica golpeó más fuerte, muchos lo convirtieron en algo permanente. En ese pasaje normalmente se superponían sentimientos encontrados: la vergüenza propia de quien había estado mejor y nunca se había pensado a sí mismo “cirujeando”, junto a la dignidad de quien pechea la adversidad aferrado a la cultura del trabajo. Este elemento fue clave en la definición del enfoque del MTE, que se desarrolló en torno a esa condición de trabajadores y la defensa gremial. De hecho, este es, como veremos, el elemento más importante en la demarcación con el movimiento piquetero que se articuló alrededor de la idea de “desocupados” y generó una organización de tipo territorial. Lo notable es que ese factor distintivo no surgió de la clarividencia de un líder o de una teoría, sino de las características de la base cartonera.

En todo caso es destacable la flexibilidad de la militancia para captar la dinámica de esa realidad y no tratar de imponer los propios manuales o prejuicios de clase. Aunque esa plasticidad también se explica por ciertas rigideces de un sujeto cartonero que se definía a sí mismo en contraposición con tres grupos que adoptaron otras estrategias de supervivencia: los “chorros”, los piqueteros y los “planeros”. El cartonero reafirmaba con orgullo su pertenencia al mundo del trabajo, con frases recurrentes tales como “peor es salir a robar” (como los ladrones), “no jodemos a los demás” (como los piqueteros) o “no somos vagos” (como los planeros). También era común el énfasis en que “somos argentinos”, como forma de diferenciarse de los inmigrantes de países limítrofes que ocuparon un lugar central en la base social de los movimientos de trabajadores desocupados. Sin dudas, estas diferenciaciones eran reforzadas por los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad que mostraban más simpatías por los cartoneros. Con el tiempo esas afirmaciones tajantes se fueron diluyendo, sobre todo en los cartoneros que asumieron tareas de mayor responsabilidad. Mientras tanto, esa imagen social más favorable fue clave para el MTE a la hora de legitimar las luchas reivindicativas del sector.

Una situación determinante, que puso a prueba al grupo fundador y sirvió a la configuración de un método de trabajo organizativo, fue la discusión en torno a qué hacer con los transportistas. Desde el punto de vista de los jóvenes militantes, los choferes abusaban de su posición dominante por poseer un pequeño capital (generalmente, un camión

o camioneta en mal estado). Es decir, eran vistos como parte del problema de los cartoneros, como un eslabón más en la explotación de esas familias. Los primeros panfletos del MTE evidencian esa lectura. Sin embargo, cuando iban a realizar asambleas en las paradas de los transportes, los cartoneros pedían “que vengan los choferes”. Y cuando había que elegir delegados, muchas veces los elegían a ellos. Luego de superadas las resistencias anteriores, los militantes terminaron por aceptar que había liderazgos naturales, voces de mando que eran respetadas por los propios cartoneros. No debían oponerse externamente a eso, sino orientarlo hacia un esquema superador.

Este es un punto de inflexión en la incipiente matriz organizativa del MTE. Es el momento inicial en la construcción de un método de trabajo que diferenció la evolución de este movimiento respecto a otros. En lugar de forzar las cosas para que entren en los esquemas mentales de la militancia, esta debía montarse sobre esa realidad, organizarla y conducirla desde sus estructuras y liderazgos espontáneos. Rafael Nejamkis lo reconstruye de este modo:

Lo de los choferes es clave. Nos costó entender que ahí había un grupo de “kapangas” que tenían una organización popular propia y que el MTE debía adaptarse a eso. Hubo un proceso de discusión muy grande sobre cómo nos vinculábamos con los choferes porque los veíamos como unos “garcas”. [...] Años después, ese lugar de poder se modificó. Cuando entramos al sistema de reciclado en la ciudad y el chofer pasó a ser uno más que cobraba sueldo, con la única tarea de transportar, y el rol de organización lo empezó a tener la dirección de la cooperativa, con los delegados de las rutas elegidos por los cartoneros, empezó una lógica de “ahora vas a ver, chofer”. Los compañeros los bardeaban fuerte. Hubo un reacomodo virulento cuando cambiaron las condiciones materiales y organizativas. Pero lo clave es entender la metodología, que luego adoptamos en otras ramas productivas. El acierto del MTE es encontrar esa metodología, con una dirección hacia una situación mejor y de conquista de derechos, pero laburar con lo posible, con lo que hay, con la realidad. Hay mucha bosta en el pueblo, pero para armar la casa se necesita bosta.

Esta mixtura originaria de café con leche, cartoneros y “caras pálidas” —como les dicen internamente a los militantes de clase media—, se enfrentó al poco tiempo con duras pruebas que terminaron por amalgamar al incipiente MTE y dotarlo de una identidad específica. Pero

antes de describir en el próximo capítulo las luchas que foguearon al movimiento en sus primeros diez años de vida, es preciso reconstruir el entorno de organizaciones, de influencias y contrainfluencias, en que se desarrolló. Por un lado, las cooperativas que surgieron en el mismo sector cartonero. Por otro lado, los movimientos piqueteros, emergentes también de la exclusión provocada por el neoliberalismo, y que en aquellos años estaban en su apogeo. La diferenciación con estas experiencias es esencial para entender la configuración que terminó por asumir el MTE y, sobre todo, para clarificar su aporte específico al campo popular.

El ecosistema organizativo

Las raíces del movimiento cooperativista, y el mutualismo en general, llegan a fines del siglo XIX. Pero el clima social de 2001 fue el contexto para que adquiriesen un renovado impulso y asumiesen nuevas características. De manera espontánea, frente a la profundidad de la crisis que atravesaba la Argentina, surgieron o cobraron fuerza clubes de trueque, empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, redes de consumo, entre otras formas de autogestión solidaria. Desde esos espacios se enfrentaba la pobreza, se recuperaba el valor del trabajo y el esfuerzo, más allá de la pérdida del empleo. Es decir, frente a la falta de referencias positivas en un país en descomposición, fueron ámbitos constructores de identidades individuales y colectivas, además de servir a la resolución de problemas materiales. Estas iniciativas contaron con magnitudes y complejidades muy variadas, y según el caso y el momento fueron apoyadas o resistidas por el Estado.

Con ese trasfondo común, el impulso específico al cooperativismo cartonero tuvo un doble origen. Surgió de los beneficios evidentes que se seguían de reunirse para defenderse frente al hostigamiento policial o vender de conjunto los materiales recolectados. Pero también provino externamente desde figuras políticas, estructuras militantes, sectores de la Iglesia Católica, académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. Más adelante, el mismo Estado promovió la formalización de cooperativas cartoneras como requisito para ingresar a determinados programas. Los objetivos originales de estas asociaciones eran eliminar intermediarios, obtener enfardadoras

(máquina automática o semiautomática que sirve para empaquetar y enfajar los materiales, agregando valor a los reciclables), denunciar el accionar policial y, según el caso, realizar tareas comunitarias como ollas populares o jardines de infantes.

En los peores años de la crisis surgieron decenas de cooperativas de reciclado; hacia 2003, eran más de treinta las que funcionaban solo en territorio bonaerense. Por entonces, se llegaron a crear, mediante el incentivo estatal y de ONG, las primeras y efímeras articulaciones, tales como “Cooperativas de Recuperadores Urbanos” en CABA y “Reciclando valores” en la provincia. Entre otros grupos, participaban El Ceibo, Recicladores del Oeste, El Álamo, Nuevo Rumbo, Cooperativa Ecológica de Recuperadores del Bajo Flores (CERBAF), Reciclando Sueños, Cooperativa de Cartoneros Villa Itatí y Tren Blanco. Entre los principales referentes de estas experiencias destacaron Lidia Quinteros, Alicia Montoya, Cristina Lescano, José “Pepe” Córdoba y Francisco Monzón. Fueron quienes desempeñaron el rol de portavoces del sector en las discusiones de 2002 para derogar las ordenanzas que prohibían la actividad (ver cap. 2).

Así pues, de la mano con la emergencia de un nuevo sujeto social se desarrolló un incipiente marco organizativo que contribuyó a delinearlo. Era el paso del “ciruja individual” al “cartonero cooperativizado”. Fue un proceso paralelo al de las fábricas recuperadas, los mercados del trueque, las asambleas barriales, los movimientos de trabajadores desocupados, pero que, en comparación, fue menos visible. Sin embargo, hay que destacar que mientras aquellos en buena medida se disolvieron, perdieron fuerza, abandonaron o modificaron sus objetivos originales, una parte de aquellas asociaciones cartoneras se han mantenido en funcionamiento hasta la actualidad.¹³

Esas cooperativas fueron el entorno organizativo inmediato en que debió desenvolverse el MTE y, de alguna manera, el espejo en que evaluaban el éxito de sus acciones. ¿Era la vía cooperativa la mejor para resolver la “cuestión cartonera”? La respuesta negativa del grupo fundador del MTE a esta pregunta propició la búsqueda de un camino distinto. La crítica se basó en que aquel formato solo resolvía el problema para una extrema minoría de cartoneros, dejando a la gran

¹³ Este sector de las cooperativas cartoneras ha sido profusamente estudiado. Ver, entre otros, Careno y Fernández Álvarez (2011), Careno y Míguez (2010), Schamber (2008) y Schamber y Bordagaray (2017).

mayoría a la intemperie. Y, en efecto, cuando en 2005 se publicaron los primeros datos oficiales del Registro Único de Recuperadores (RUR), estos indicaron que el 98 % de ellos no pertenecía a ninguna asociación o cooperativa.

Por lo que, si bien el MTE surgió entre un conjunto de organizaciones cartoneras dominadas por una concepción cooperativista, adoptó desde el inicio un perfil diferente. La diferencia básica era que las cooperativas cartoneras adoptaron como horizonte la organización del proceso productivo del grupo reducido de asociados, mientras que el MTE se planteó un repertorio de acciones más ligado al conflicto reivindicativo de tipo sindical. Esto le permitió ganar en masividad y, en pocos años, tener un rol de liderazgo en el sector, lo que se vio cristalizado desde 2011 con la creación y dirección de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) como principal espacio de articulación y representación gremial. Otras coordinaciones e intentos de sindicalización que se crearon por fuera de la influencia del MTE quedaron sistemáticamente disueltas (ver cap. 3).

Trabajadores:

Junto con el primer número de "Nuevos Aires", la publicación quincenal del MTE, les entregamos este formulario. Les proponemos que demuestren su adhesión a nuestro movimiento completándolo. Con los datos que Uds. pongan vamos a hacer las **Credenciales**, las vamos a plastificar y se las vamos a entregar. Así entrarán en la base de datos de la guardia legal, y serán considerados "adherentes" al **Movimiento de los Trabajadores Excluidos**. En su carácter de "adherentes" serán invitados a las asambleas, recibirán la revista "Nuevos Aires", etc. Vale recordar que el MTE no es un partido político ni un sindicato, por lo cual su adhesión al Movimiento no implica afiliación ni ningún costo económico para los trabajadores.

Por otro lado, a los integrantes del M.T.E. no servirá para darnos cuenta si estamos haciendo bien las cosas, si los trabajadores independientes esta de acuerdo con nuestro accionar, nuestras posiciones, etc.

Por último, queremos que nos hagan llegar su opinión sobre la revista y que propongan otro nombre si no les gusta *Nuevos Aires*:

1) ¿Que piensa de la Revista? (marcar con cruz) Mala Buena Muy Buena

2) Que nombre propone:

3) COMPLETAR EL FORMULARIO DE LA CREDENCIAL (DALE el formulario al que te dio la revista)

CREDENCIAL DE AUTOIDENTIFICACIÓN	
Reciclator Independiente	
Apellido y Nombre:	<u>P.</u>
Dto. de Identidad:	_____
Dirección:	_____
Firma Responsable:	_____
Movimiento de los Trabajadores Excluidos	

Imagen 3. Credencial de adhesión al MTE, en revista Nuevos Aires (mayo de 2003). Fuente: archivo de Martín De Mingo.

Más allá de este entorno inmediato del MTE, el ecosistema más amplio de organizaciones era el de los movimientos piqueteros. Aun-

que no remitían específicamente a los cartoneros, su base social eran también los sectores excluidos. Nacieron interpelando a los trabajadores desocupados, pero aglutinaron toda la heterogeneidad social de las clases populares. Además de desocupados, había subocupados y “changarines”, jubilados y pensionados, migrantes de países limítrofes y de las provincias del interior, incluyendo indígenas del Gran Chaco y la Patagonia, niños, adolescentes, y mujeres de todas las edades. Fueron la expresión directa de los últimos, de los olvidados.

Sobre ese cimiento, se construyeron decenas de movimientos que apelaron a la acción directa ante el fracaso de la política, como forma de ejercer presión y obtener recursos para las familias y los barrios pobres. Existieron, por supuesto, núcleos militantes que ayudaron a catalizar la angustia en organización. Pero el protagonismo indiscutido era de quienes estaban en situación de desesperación. A la necesidad económica, se le sumaba una memoria popular de derechos y métodos de lucha. Esas reminiscencias fueron el pasto seco en el que, unas pocas chispas, prendieron enormes fogatas. De allí la rápida expansión territorial y masificación de estos movimientos entre 1997 y 2002.

La intransigencia de los piqueteros y la radicalidad de sus métodos obligaron al resto de la sociedad a tomar cuenta de ellos rápidamente. Su accionar fue clave para visibilizar los estragos sobre el tejido social que había producido el menemismo y tuvieron un rol destacado en el desgaste del consenso en torno al modelo económico. Incluso puede considerarse un factor de presión que ayudó a moldear la Argentina posneoliberal a partir de 2003. Aunque no siempre sea reconocido, el temor al desborde popular encarnado en los piqueteros sirvió a Néstor Kirchner para lograr consenso entre las clases dominantes respecto a la necesidad de un cambio de rumbo que permitiera sosegar la conflictividad social. Fueron los años en que *Clarín* era aliado del gobierno. Cuando el miedo a los pobres se diluyó, ocurrió la arremetida de los grupos concentrados expresada en el conflicto del campo en 2008.

Pero no se trata aquí de hacer un balance exhaustivo sobre el rol del movimiento piquetero, sino de clarificar cuál era el entorno organizativo que rodeaba al MTE en sus primeros años. Y, sin dudas, la mayor referencia para la militancia del momento fueron los movimientos piqueteros. De hecho, la banda de rock *Las manos de Filippi*

lanzó un disco en 2002 que fue muy difundido entre la juventud rebelde que se asomaba a la participación política. En la canción que daba nombre al disco, el estribillo afirmaba: “Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros”. Tal era el aire que se respiraba tras la caída del gobierno de De la Rúa. El ejemplo de combatividad, resistencia, dignidad, eran los piqueteros. Así pues, entre 2001 y 2003 se ubicó su período más activo y de mayor masividad. Lemas como “Piquete y cacerola, la lucha es una sola” dieron cuenta del momento de mayor legitimidad, en donde se identificaban las demandas de la clase media y los sectores populares. Y en los barrios pobres, los más golpeados por la crisis, existía un reconocimiento hacia estos movimientos por su entrega militante, así como por su capacidad para conseguir recursos: mercadería y planes sociales.¹⁴

Esto último fue precisamente lo que les permitió masificarse, al tiempo que los condicionó en su desarrollo. El tema de la gestión de una parte de la asistencia social de parte de las organizaciones piqueteras –cabe aclarar, siempre un porcentaje reducido– ha sido muy controversial. En su origen, fue el gobierno de la Alianza el que, en miras a quitar poder territorial a los intendentes peronistas del conurbano, comenzó a delegar en la “sociedad civil” una fracción de los planes del Programa Trabajar.¹⁵ La abrupta caída de la economía posterior a la crisis de diciembre de 2001 provocó una situación desesperante en los barrios pobres de la Argentina. El gobierno de Eduardo Duhalde respondió con la masificación de la asistencia a través de la creación de un subsidio de emergencia a los desocupados. Así, en marzo de 2002 nació el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

¹⁴ Por supuesto, es una descripción general que debe ser matizada de acuerdo a la referencia piquetera en cada distrito. Por caso, en el ámbito de Villa Caraza y Villa Fiorito, tenía desarrollo el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells. La percepción sobre esta organización era mayormente negativa entre los cartoneros del MTE.

¹⁵ Hasta entonces no había una participación en la gestión de la asistencia social de parte de las incipientes organizaciones piqueteras. El primer plan de asistencia a los desocupados fue el Programa Trabajar creado en 1995. Estaba gestionado por los municipios, era de pequeña escala y respondía al recetario neoliberal de políticas focalizadas en materia de derechos (versus su universalización como rasgo característico de los modelos anteriores). En lo alimentario, hay algunos antecedentes previos a la dictadura de 1976. Pero los planes de asistencia nutricional se volvieron parte del repertorio permanente de acciones sociales de los gobiernos desde los ochenta hasta la actualidad. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, destacó el Plan Vida, ejecutado por las “manzaneras”, con tareas sanitarias y alimentarias a nivel barrial. Iniciado en 1994, implicaba la participación masiva de mujeres de los barrios pobres; muchas de ellas luego se incorporaron a los movimientos piqueteros cuando la desocupación se convirtió en objeto de demanda y organización colectivas.

La combinación de mayores recursos para la asistencia social, gestión de parte de las organizaciones sociales, empobrecimiento de la población y legitimidad de los movimientos piqueteros cimentó una dinámica de conflictividad social en ascenso en el primer semestre de 2002. Fue el apogeo del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina. Duhalde intentó responder a ello mediante una estrategia de división entre “los que se podía hablar” y “a los que había que reprimir”. El primer grupo lo conformaba el llamado “bloque matancero”, conformado por la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El segundo grupo incluía a la izquierda trotskista, articulada alrededor del Polo Obrero, y a los independientes de la Coordinadora Aníbal Verón, que comprendía a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), vinculada a Quebracho, y a los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD). La escalada represiva contra el ala más confrontativa de los piqueteros fue en ascenso hasta que el 26 de junio de 2002 se produjo la Masacre de Avellaneda, en la que fueron abatidos por la policía bonaerense dos integrantes de “la Verón” (Darío Santillán y Maximiliano Kostecki). Fue el final para la carrera política del exgobernador bonaerense, que debió adelantar las elecciones presidenciales y buscar un sucesor que pudiera expresar su espacio político en los próximos comicios. La figura elegida fue el gobernador santacruceño Néstor Kirchner, una persona desconocida para la inmensa mayoría de los argentinos.

Influencias y contrainfluencias

A partir de estos datos pueden identificarse cuatro factores que condujeron a la crisis del movimiento piquetero. Primero, el adelantamiento de las elecciones, el crecimiento económico y el creciente cansancio del resto de la sociedad frente a los cortes de rutas y avenidas, comenzaron a socavar la legitimidad de las organizaciones de trabajadores desocupados y, sobre todo, de sus métodos. A partir de junio de 2002, momento en que alcanzaron su pico de apoyo social ante la represión sufrida en el Puente Pueyrredón, comenzó un declive en el apoyo a estas agrupaciones que se acentuó a partir de la asunción de Kirchner a la presidencia en mayo de 2003. Con el cambio de gobierno, casi todos los grupos piqueteros identificados con el nacionalismo popular se fueron incorporando al

oficialismo y la gestión estatal. Para algunos, fue una cooptación; para otros, integración a un proyecto popular. El punto es que una parte del movimiento piquetero perdía presencia en su lugar predilecto, la protesta callejera, en pos de su inserción en el Estado.¹⁶

Segundo, con quienes se mantuvieron en la oposición, la política del gobierno kirchnerista fue de endurecimiento en las negociaciones. Aunque sin apelar a la represión policial (como rasgo diferenciador con el duhaldismo), se desarrollaron estrategias de desgaste para lograr la desmovilización de los más intransigentes. La Argentina quería volver a ser “un país normal” —como rezaba uno de los eslóganes de gobierno—, y las constantes protestas piqueteras eran un escollo para eso. Así pues, la posición oficialista se apoyaba en y, al mismo tiempo, alimentaba la creciente deslegitimación de los piqueteros. La política fue efectiva y, desde 2005, cuando fue derrotado un plan nacional de lucha llevado adelante en conjunto por los movimientos opositores al gobierno, bajó mucho la periodicidad de cortes de ruta, puentes o avenidas de parte de los piqueteros (al menos, hasta 2009).¹⁷

Un tercer factor decisivo fue el cambio en la lógica asistencial del Estado. Desde 2004, con el lanzamiento del Programa Manos a la Obra, la política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó a virar hacia la promoción del trabajo autogestionado más que subsidios al desempleo. A las organizaciones se les ofrecía que desarrollaran proyectos productivos (panaderías, carpinterías, herrerías, etc.), o bien que participaran de obras públicas de baja complejidad (cordón cuneta, iluminación, veredas, etc.) como alternativa para continuar percibiendo recursos públicos. La gestión de unidades productivas representaba,

¹⁶ La relación de los grupos piqueteros nacional-populares con los gobiernos kirchneristas distó de ser lineal. Al observar los casos más emblemáticos vemos que: i) la CTD, ligada a Quebracho, se quedó por fuera del gobierno, aferrada a los métodos de acción directa; ii) el Movimiento Evita se incorporó al Estado, pero mantuvo un margen considerable de autonomía “desde dentro”; iii) Barrios de Pie, vinculada a la Corriente Patria Libre —luego, Libres del Sur— se alejó del oficialismo a mediados del ciclo kirchnerista y se pasó a la oposición; iv) la FTV, liderada por Luis D’Elía, se sumó activamente al oficialismo, aunque en años recientes terminó distanciada del kirchnerismo. Este breve panorama desmiente la idea simplista de una “cooptación”, sin más, de los piqueteros del nacionalismo popular. Aunque, ciertamente, la tónica de buena parte de quienes se incorporaron al oficialismo fue la desmovilización, excepto para acompañar actos, políticas del gobierno o acciones de protesta en su apoyo. Lo cual pudo observarse incluso en grupos piqueteros de izquierda tras incorporarse al oficialismo, en algunos casos diluyendo su inserción territorial y capacidad de movilización.

¹⁷ Los movimientos piqueteros que se mantuvieron en la oposición fueron básicamente los grupos trotskistas (PO, MST, FTC, MTR, etc.) e independientes (MTD y otros) que configuraban el ala más confrontativa en 2002, a los que se sumó la CCC (ya que tras la incorporación de la FTV al kirchnerismo se había disuelto el bloque matancero).

además, un gran desafío para las organizaciones que, de ese modo, tenían menos tiempo para actividades de protesta. Es el inicio de una mutación que reconfiguró a una parte de los grupos piqueteros en organizaciones de trabajadores de la economía popular (ver cap. 3).

Por último, el cuarto elemento refiere a las implicancias de gestionar una parte de la asistencia social de parte de las organizaciones. El manejo de los “planes” permitió, sobre todo entre 2001 y 2002, un crecimiento increíble de las organizaciones. La rapidez con que se organizaban y movilizaban miles de personas resultaba muy tentador para una militancia acostumbrada, desde la dictadura, al trabajo en grupos más bien pequeños. De repente, un movimiento, impulsado por unos pocos militantes, podía tener presencia en decenas o cientos de barrios a lo largo y ancho del país. La masificación retroalimentaba la necesidad de salir a cortar avenidas y rutas nuevamente, como forma de dar respuesta a los miles de vecinos que se acercaban por planes sociales o mercadería.

Esta dinámica, en parte inevitable, provocó efectos adversos en tres sentidos. Por un lado, atendía a la necesidad social de un sector mediante un método que provocaba un creciente disgusto en el resto de la sociedad. Por otro lado, el “engorde” con base en recursos reprodujo muchas veces prácticas clientelares que los movimientos rechazaban en lo discursivo, pero practicaban realmente. Acciones como conducir obligadamente a personas a un acto, movilización o protesta a cambio del acceso a los recursos que gestionaba el movimiento alimentaron el proceso de deslegitimación. Es cierto que, parcialmente, esto se explica por una cultura instalada en los barrios pobres que reproduce una forma de relación con la política y el Estado aprendida en décadas de asistencialismo. Pero no es menos cierto que las organizaciones populares no pudieron, o no hicieron lo suficiente, para enfrentar esa lógica y muchas veces se montaron sobre ellas para sostener su presencia callejera y territorial. Desde entonces, el uso del término “planero” como insulto, alimentado por los medios hegemónicos de comunicación y figuras políticas, sirvió para teñir de sospecha cualquier movilización popular. En tercer lugar, también fue habitual el uso de recursos conquistados mediante la lucha de los pobres para el financiamiento de actividades partidarias (sea a través de aportes, más o menos obligatorios según el caso, o sea mediante el desvío directo de un porcentaje de lo obtenido

hacia otros fines). De este modo, se generó una dependencia de esa fuente de ingresos para sostener la proyección política definida por los militantes o el partido, la mayoría de las veces sin una participación real de la base en las decisiones.

En síntesis, por la acción conjunta de esos cuatro factores, era evidente, hacia 2005, el agotamiento de los métodos piqueteros. Desde entonces, y hasta la irrupción de la economía popular como nuevo eje organizador en torno al 2009-2011, los movimientos que no se sumaron al oficialismo intentaron sobrevivir como organizaciones territoriales, ampliando sus ejes de intervención hacia temas como educación, salud, vivienda, juventud, género, niñez o cultura, además de sostener la asistencia alimentaria en comedores y merenderos y tratar de ingresar en planes de empleo autogestivo o de obra pública. En todos los casos fueron perdiendo inserción y capacidad de movilización respecto al auge de 2002.

Así pues, para cuando el MTE comenzaba a consolidarse como organización entre 2003 y 2005, estaba claro que los métodos piqueteros ya no eran “los únicos, los mejores”. Lo cual abrió el campo de experimentación hacia nuevas lógicas, como las que desplegó el incipiente movimiento de “cartoneros y estudiantes”. El rechazo de la base del MTE, así como de la militancia, hacia aspectos que identificaban en las organizaciones piqueteras favorecieron la adopción de dos criterios organizativos distintivos. Por un lado, el repudio al uso discrecional de los recursos obtenidos por la lucha reivindicativa de los excluidos. Estos debían destinarse al fin para el cual habían sido conquistados. Por otro lado, la crítica a la instrumentalización de los pobres para objetivos ajenos a su decisión. Estas convicciones, que han mantenido hasta la actualidad, conllevan un esfuerzo para hacer frente a ciertas lógicas instaladas tanto en la militancia como en la cultura popular. Pero le han permitido al MTE lograr un importante grado de adhesión, confianza y cohesión entre sus integrantes y, muchas veces, distinguirse frente a la base respecto de otras organizaciones en un mismo territorio.¹⁸

¹⁸ La cuestión del manejo de los recursos de parte de las organizaciones sociales, sobre todo cuando se trata de fondos públicos, es un tema muy sensible y se presta al ataque malintencionado de las usinas mediáticas de la derecha. El uso de una parte mínima de los recursos obtenidos en la lucha reivindicativa para el mantenimiento de las propias organizaciones puede ser una práctica razonable, ya que el Estado se desentiende del gasto que implica gestionar una porción significativa de la asistencia social descansando en el trabajo impago de cientos de militantes. Los cuales, en muchos casos, deben ser rentados por las propias organizaciones. Mientras esto esté dentro de determinados

Otro elemento que ayudó a la diferenciación respondió a las características particulares de los cartoneros. Los movimientos piqueteros se habían expandido sobre una enorme desocupación y el reclamo de planes sociales que ayudasen a paliar la miseria. En cambio, los cartoneros tenían mucho trabajo y poco tiempo. De ahí que el nombre del MTE refiere a la exclusión, no a la desocupación. Esa letra “E” que los diferenció de los MTD tuvo consecuencias en el método, el sujeto y la estrategia de organización que se irán describiendo a lo largo del libro.

Por último, es preciso caracterizar con cierto detalle la vertiente del movimiento piquetero con la que tuvo más afinidad el MTE y una parte de la cual incorporó desde 2014. La historia de estos grupos se remonta al origen mismo del fenómeno piquetero. Los primeros cortes de rutas en la provincia de Buenos Aires, tras las puebladas en las provincias de Salta y Neuquén, fueron protagonizados por el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Teresa Rodríguez de Florencio Varela y Mar del Plata. Bajo la influencia del MTD de Varela se formaron otros en distintas localidades del conurbano sur a partir de militantes de cada distrito formados en diferentes tradiciones políticas (peronismo de base, anarquismo, teología de la liberación, guevarismo, trotskismo, etc.).¹⁹

Hacia 2001, los MTD esparcidos por el conurbano articulaban con la CTD bajo el nombre de Coordinadora Aníbal Verón. Fue el período de mayor visibilidad de este sector piquetero caracterizado por su combatividad e intransigencia. Desde fines de 2002 hasta 2004, contemporáneo al nacimiento del MTE, comenzó un desgranamiento y reacomodo de los grupos que conformaban este espacio. De un lado, quedó la CTD Aníbal Verón vinculada al nacionalismo revolucionario de Quebracho. Del otro, el MTD Aníbal Verón, que reunía 17 organizaciones de base con una gran diversidad ideológica. La dificultad para caracterizarlo ha dado lugar a errores de interpretación desde los cuales no se comprende la evolución posterior de los grupos que conformaron esa experiencia.

parámetros, no parece ser problemático. De hecho, en la enorme mayoría de los casos, los montos de las “rentas” están muy por debajo de lo que se cobraría en un empleo formal. Otra discusión merece el uso de esos recursos para favorecer el desarrollo de estructuras políticas, ajenas a la lucha reivindicativa de los pobres. Finalmente, desde ningún punto de vista es justificable el caso en que ocurra un enriquecimiento personal de los dirigentes.

¹⁹ El núcleo militante que dio nacimiento al MTD de Varela estaba impulsado por Roberto “Negro” Martino, exmilitante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Al poco tiempo, Martino se deslindó del MTD y creó el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), organización que adoptó una posición de izquierda radical hasta la actualidad.

Esencialmente, la atribución de una mirada autonomista; es decir, de antipoder o contrapoder.

Para despejar esta cuestión es preciso identificar los tres sectores en que se dividió el MTD Aníbal Verón entre 2003 y 2004. Por un lado, quedó el grupo liderado por el MTD de Varela, que comenzó un proceso de acercamiento con el kirchnerismo. Si bien tenían una postura antielectoral en sus inicios, no era por autonomistas sino por una concepción de izquierda revolucionaria. De hecho, su funcionamiento interno seguía el tradicional esquema del centralismo democrático.²⁰ Por otro lado, quedaron siete MTD que se aglutinaron como “bloque de afinidad”. Este sector conformó en 2004 el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), junto al Movimiento de Unidad Popular –al poco tiempo, el grueso del MUP se pasó al oficialismo–, grupos barriales locales y agrupaciones estudiantiles independientes. Si bien primaba una postura antielectoral, incluso antiinstitucional, la razón era que se entendía que no estaban las condiciones para la pelea en esos terrenos. Desde una posición crítica hacia el kirchnerismo, se planteaba una estrategia de construcción de poder popular como parte de la acumulación de fuerzas para la disputa política. Se incorporaba la idea de autonomía, pero entendida como independencia frente al Estado, las iglesias o las vanguardias autoproclamadas. Así, lejos del autonomismo, la matriz formativa del FPDS se nutrió de diversas tradiciones ideológicas, destacando elementos del pensamiento nacional latinoamericano, del marxismo, del anarquismo y del cristianismo popular. La irrupción de Hugo Chávez, sobre todo a partir de la adopción de la perspectiva socialista en 2005-2006, convirtió a la revolución bolivariana en la principal referencia para el FPDS.

Cabe destacar que hubo un cruce temprano, aunque infructuoso, entre el MTE y el FPDS. A mediados de 2004 se realizó en Avellaneda un encuentro preparatorio para la conformación del FPDS en noviembre de ese año. Los jóvenes militantes del MTE asistieron, pero se fueron desilusionados a mitad de la reunión. Consideraron que había mucha clase media y militancia en edad avanzada, con escasa base social y

²⁰ Con ese nombre se conoce al modelo de partido revolucionario ideado por Lenin en el contexto de la lucha contra el zarismo ruso, pensado para hacer frente a la represión y posible infiltración policial. En ese marco, concibió una estructura piramidal con fuerte centralización en la toma de decisiones en manos de una conducción política compuesta por los mejores cuadros militantes de la organización. Este modelo fue muy influyente en la izquierda revolucionaria a lo largo del siglo XX.

pocos jóvenes tomando la palabra. La impronta irreverente que el MTE confirmó en su desarrollo se entrevé en esas críticas: la exigencia de un recambio generacional y nuevos métodos de organización en los que el protagonismo fuera de los pobres. Es notable que exactamente diez años después, una parte del FPDS –en desintegración luego de unas rupturas procesadas entre 2011 y 2013– se terminó incorporando al MTE. Y quince años más tarde, cuando se conformó el Frente Patria Grande, otra fracción del viejo FPDS quedó articulado bajo el liderazgo de Juan Grabois.

Finalmente, el tercer sector en que se dividió el MTD Aníbal Verón estaba conformado por el grupo de San Francisco Solano (Quilmes). Esta vertiente, por cierto, la más pequeña, fue la única que decididamente se ubicó en un proyecto autonomista a partir de su acercamiento al Colectivo Situaciones. Pero ¿qué significaba el autonomismo? Elementalmente, se trata de la idea de “cambiar el mundo sin tomar el poder”. En el contexto de descreimiento generalizado hacia la política y las instituciones del Estado, autores que difundían este tipo de ideas tuvieron una importante circulación (Antonio Negri, John Holloway, Raúl Zibechi, etc.). La referencia más importante en términos prácticos eran las comunidades controladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur de México, cuyo vocero era el subcomandante Marcos. Desde un romanticismo acrítico y haciendo un recorte de la experiencia zapatista a la medida de sus teorías, la propuesta autonomista pretendió trasladar esa autogestión de territorios a otros contextos. Como si se pudiera hacer caso omiso de las relaciones capitalistas, del Estado o del imperialismo, promovían el desarrollo de agrupaciones y redes basadas en la horizontalidad y la democracia directa. Esta estrategia de antipoder descreía de la construcción de organizaciones de gran escala, al implicar necesariamente algún grado de centralización y, por lo tanto, de burocratización y reproducción de distintas formas de dominación.

Lo cierto es que el autonomismo fue prácticamente nulo entre los movimientos piqueteros, incluyendo al MTD Aníbal Verón. Entonces, ¿por qué incluirlo aquí? Porque tuvo mucha resonancia en ambientes universitarios, permeando a los estudiantes politizados que transitaban por la educación superior en esos años. Entre ellos, los jóvenes militantes del MTE. Aunque es preciso contextualizar la mirada. La oleada

antipolítica permeó incluso a sectores del peronismo, que históricamente presentaron una tendencia más bien hacia el estatismo. Por caso, los grupos que luego confluyeron en la creación del Movimiento Evita boicotearon las elecciones presidenciales de 2003. Es cierto que cuando el gobierno de Néstor Kirchner les abrió las puertas de la gestión estatal fue más rápido para estos sectores aceptar ese escenario como una posible continuidad de las luchas callejeras que venían desarrollando. En cambio, el autonomismo –como clima de época y no como organización en particular– implicó para una parte de la generación 2001 mantener una relación de exterioridad con el Estado, al que se presionaba para obtener recursos o para direccionar políticas, pero del cual no se era parte “desde dentro”. En algunos casos, incluido el MTE, transcurrió más de una década para que militantes forjados en esa época aceptaran la lucha electoral y la gestión pública como ámbitos de militancia.²¹

²¹ Los movimientos piqueteros han sido profusamente estudiados. Entre otros, pueden consultarse: sobre el Movimiento Evita (Longa, 2019), sobre la FTV (Cross, 2007), sobre Barrios de Pie (Gradin, 2018), sobre los MTD y un panorama general de las distintas vertientes (Pacheco, 2010; Mazzeo, 2014; Svampa y Pereyra, 2003).

Capítulo 2

LA LUCHA

¿Un país normal?

La crisis de 2001 fue el parteaguas que marcó un cambio de época. No solo porque dio por cerrado el ciclo neoliberal, sino porque generó nuevas coordenadas para la política argentina. El retorno a la normalidad que intentó el presidente Eduardo Duhalde en 2002 fracasó, en buena medida, porque no entendió la nueva geografía de actores y valores. Su derrota no se dio en el plano económico, sino en el político y cultural. De hecho, la orientación económica y el ministro a cargo de la cartera, Roberto Lavagna, se mantuvieron en los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner. Fue este último, precisamente, quien mejor entendió el clima de época y logró, lentamente, encauzar la conflictividad social y la política nuevamente a través de las instituciones. Y eso fue posible porque parte de las ideas de ese pueblo movilizado se vio reflejado en la nueva gestión de gobierno.

A diferencia de lo que había ocurrido en Venezuela con Hugo Chávez y sucedería poco después en Bolivia con Evo Morales, la asunción de Néstor Kirchner no expresaba la llegada al gobierno de un líder que encabezó rebeliones o protestas contra el neoliberalismo. Como gobernador justicialista había acompañado, si bien a regañadientes, las políticas menemistas. Incluso había tenido un rol destacado en medidas como la privatización de YPF en 1992 y la provincialización –o desnacionalización– de los recursos naturales en la Reforma Constitucional de 1994. No obstante, en la segunda mitad de los noventa comenzó a referenciarse y a expresar a un sector del peronismo que proponía el retorno a una mirada industrialista, apoyada en el fomento al mer-

cado interno y el fortalecimiento del Estado. Como expresión de esta tendencia, se constituyó en 1998 el Grupo Calafate para oponerse al proyecto de re-reelección de Carlos Menem. Participaron, entre otros, la diputada Cristina Fernández, el gobernador Eduardo Duhalde y el dirigente porteño Alberto Fernández. La presencia en este espacio de quienes serían los cuatro presidentes peronistas pos 2001 da cuenta de la enorme gravitación de ese agrupamiento político.

Aquel pasado asociado a los años menemistas y su aparición como sucesor del duhaldismo tras el adelantamiento de elecciones posterior a la Masacre de Avellaneda condujo a rechazar la figura del santacruceño a gran parte de los sectores movilizados. Sin embargo, desde su discurso de asunción el 25 de mayo de 2003, Kirchner comenzó a expresar lineamientos propios, un lenguaje y un estilo de liderazgo que no remitían a esos personajes repudiados. Entre los hitos sobresalientes destacaron la renovación de la Corte Suprema de Justicia y el fin de la mayoría automática menemista, la política de derechos humanos y la reivindicación de la militancia de los setenta, la perspectiva de integración regional y el rechazo al proyecto norteamericano de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la renegociación soberana de la deuda externa y el fin del tutelaje neocolonial del FMI, la reapertura de paritarias y el retorno de un Estado activo en la dirección de la economía. La puesta en marcha de estas y otras políticas expresaba objetivos claramente distintos a los de los años menemistas.

El vuelo propio asumido por quien debía ser su delfín condujo a Duhalde a una confrontación que se dirimió en las elecciones legislativas de 2005. El triunfo contundente del oficialismo por una amplia diferencia expresaba tres cosas. Por un lado, la transición dentro del peronismo quedaba cerrada, logrando el kirchnerismo el predominio dentro de la vertiente política mayoritaria de la Argentina (con momentos de mayor y de menor hegemonía, puede decirse que su preeminencia se mantuvo durante dos décadas). Por otro lado, se amplió la base de apoyo al gobierno. Del magro 22 % del electorado con el que Kirchner asumió, saltó a un respetable 40 % de los votos. En este formidable crecimiento debe incluirse, además de la renovación política, institucional y cultural en distintas áreas, una veloz recuperación económica. Por último, en la consolidación del kirchnerismo como fuerza política, con identidad propia y separada del duhaldismo, parte importante de

la militancia popular encontró su representación, dando por finalizado el cuestionamiento a la clase política que se expresó en el 2001.

El discurso de la transversalidad, por el cual el presidente Kirchner convocó a sectores no peronistas a incorporarse a su espacio, fue clave en ese sentido. De ese modo, se relegitimó la política, y la protesta callejera debió ceder su lugar al conflicto institucionalizado por la vía electoral, legislativa, administrativa o judicial. Las elecciones presidenciales de 2007 reflejaron el creciente apoyo social al rumbo del gobierno. Ascendiendo a un 45 % de los votos, el kirchnerismo se consolidaba cómodamente como primera fuerza nacional. En frente, la oposición aparecía dividida, sin liderazgos claros ni un discurso atractivo. El país normal que, como lema de campaña, prometía el Frente para la Victoria parecía haberse logrado. Nadie podía prever que en solo unos meses ese panorama daría un giro rotundo.

Todo comenzó el 12 de marzo de 2008, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 125 por la cual se establecía el aumento de los impuestos por derechos de exportación de granos y oleaginosas de acuerdo al movimiento de sus precios internacionales. Esencialmente, implicaba que la alícuota quedaba atada al valor internacional de los productos: si subían los precios, mayor era el porcentaje; si bajaban, se reducía. Detrás de este tecnicismo estaba en discusión un avance sobre la renta extraordinaria del agro en años en que los precios de estas *commodities* tenían valores exorbitantes.

Frente al anuncio gubernamental, las cuatro mayores entidades del campo, organizadas en la Mesa de Enlace, iniciaron un *lock out* patronal acompañado de jornadas de lucha que incluían cientos de cortes de ruta en todo el país. La intransigencia de la protesta y los errores en la posición del gobierno —el más importante fue quizá no haber diferenciado entre grandes y pequeños productores en la aplicación del gravamen— escalaron un conflicto sectorial hacia una postura de impugnación activa al kirchnerismo. Enormes multitudes se movilizaron en plazas de todo el país confluyendo con los innumerables cortes de ruta en pueblos del interior. Como contrapunto, los sectores afines al oficialismo realizaron sus propias concentraciones también masivas. La aspiración de ser un país normal quedaba sepultada.

Para entender la fuerza que amplificó la crisis hay que incorporar un elemento estructural: fue la reacción de los sectores liberales y

conservadores, históricamente antiperonistas, frente al retorno de un proyecto que revivía las viejas banderas del justicialismo. En ese sentido, el 2008 puede pensarse como un 2001 invertido. La política volvía a las calles, pero si aquel acontecimiento tuvo por protagonista a los sectores medios empobrecidos, los trabajadores y los desocupados, ahora fue el turno de los “piquetes de la abundancia” (como los definió Cristina Fernández), que reunió a un heterogéneo universo de chacareros y latifundistas, transportistas y peones, representantes del agronegocio y grandes medios de comunicación, comunidades del interior agrario, clases medias “gorilas” y familias acaudaladas de las grandes urbes.

La derecha argentina, desde entonces y hasta el caso Nisman en 2015, hizo uso extensivo de medios de protesta callejera que tradicionalmente estaban en manos de los desheredados. Lo cual, articulado a su enorme poder de fuego mediático, económico y judicial conformó un bloque social y político con una gran capacidad de presión y desestabilización. De hecho, la iniciativa del gobierno para avanzar sobre la renta extraordinaria del agro fue derrotada en el Senado de la Nación, poniendo fin al llamado “conflicto del campo”. A solo seis meses de iniciado su mandato, la presidenta Cristina Fernández se enfrentaba con una situación sumamente delicada. El deterioro del oficialismo fue tan grande que en las elecciones legislativas de 2009 el propio Néstor Kirchner fue derrotado por un desconocido como Francisco De Narváez. Un panorama político y electoral impensado a la luz de los resultados obtenidos en 2005 y 2007 y de la alta legitimidad que había logrado la figura del expresidente.

El efecto más duradero del conflicto del campo fue la constitución de la antinomia kirchnerismo vs. antikirchnerismo. Durante una década, al menos, esta dicotomía estructuró todas las discusiones políticas. Toda postura quedó inscripta en uno u otro polo de esta separación, siendo extremadamente raros los casos en que una iniciativa fuera apoyada en simultáneo por los dirigentes de ambos bandos. Amplificada y exacerbada por los medios de comunicación y las redes sociales, “la grieta” fragmentó a la Argentina al punto tal que estudios comparativos señalaban que era –y es– el país con mayor polarización del mundo.¹ Pero, mientras de un lado había una representación política clara, del

¹ Ver, por ej., *The 2023 Edelman Trust Barometer*: <https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer>

otro hacía falta construirla. Afectado por la debacle del gobierno de De la Rúa, el radicalismo no lograba ser el cauce de expresión del antiperonismo. Se generó, así, el espacio para que emergiera una nueva expresión política de la derecha.

Con miras a ocupar esa vacancia se conformó en 2008 el partido Propuesta Republicana (PRO). En verdad, fue el relanzamiento de un espacio conformado unos años antes en la ciudad de Buenos Aires con figuras procedentes del menemismo, tales como Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Este grupo supo recoger la crítica a la clase política, emergente del 2001, pero la canalizó a través de una mirada gerencial y tecnocrática de la gestión pública, presuntamente apolítica. Si el kirchnerismo fue una salida nacional-popular a aquel cuestionamiento, el PRO fue una respuesta neoliberal de nuevo tipo. Al principio, su desarrollo fue exclusivamente porteño, en donde tuvieron un crecimiento ininterrumpido desde 2003 hasta obtener la jefatura de gobierno en 2007. Desde esa plataforma, y frente al inesperado escenario abierto en 2008, se comenzaron a proyectar como alternativa política nacional. Ya en 2009 fueron parte esencial del frente electoral bonaerense Unión-Pro que derrotó a Kirchner en las legislativas. Luego de lo cual, gradualmente lograron subordinar al viejo aparato de la UCR, más el Partido Socialista y sectores conservadores del peronismo, con los que conformaron el frente Cambiemos que puso fin a doce años de gobiernos kirchneristas en 2015.

Pero antes de la proyección que les facilitó el conflicto del campo, fueron una fuerza porteña que creció en oposición al gobierno de Aníbal Ibarra. Dado que el MTE se desplegó por entonces fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, es preciso desglosar un poco el contexto local. Como parte del FREPASO, Ibarra había asumido al frente de la CABA en el 2000 en el marco de la Alianza. No obstante, sobrevivió a la crisis del 2001 y en 2003, aunque perdió en primera vuelta frente a Macri, fue reelecto en la jefatura de gobierno. Tuvo una gestión con luces y sombras que, como veremos más adelante, dejaron una marca indeleble en el MTE respecto a los límites del progresismo en la administración pública. Aunque su caída no provino directamente de estas limitaciones, sino de un hecho que conmovió al país.

A fines de 2004 se produjo un catastrófico incendio durante un recital en un boliche porteño que no cumplía con condiciones de se-

guridad para tal evento, provocando la muerte de 194 personas y más de mil heridos. Durante todo 2005, la llamada “Tragedia de Cromañón” fue usada por la oposición para desgastar a Aníbal Ibarra, acusándolo de ser el responsable político del desastre. En noviembre, tras triunfar en las elecciones legislativas, el bloque de legisladores encabezado por el partido de Macri logró suspender al jefe de gobierno e iniciarle juicio político. Finalmente, Ibarra fue destituido en marzo de 2006, asumiendo al frente del ejecutivo su compañero de fórmula, Jorge Telerman. Más allá de las valoraciones del caso, es indudable que el fin traumático de la gestión progresista allanó el camino a la consolidación de la derecha neoliberal como principal expresión política de los porteños. Desde entonces, transcurrieron ya dos décadas en que se ha mantenido como primera fuerza electoral del distrito, ganando por amplia diferencia en todos los comicios.

Si tocan a uno, tocan a todos

Si ese fue el contexto nacional en que se desarrolló el MTE en sus primeros años de vida, ahora precisamos situarnos en una escala más reducida y volver al inicio de esta historia. En 2002 todavía estaban vigentes las normas que penaban la actividad de los cartoneros. Como se explicó anteriormente, la emergencia de esta cuestión en la arena pública obligó a tomar cuenta de ello al poder político. En septiembre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires convocó a una mesa de diálogo con las asociaciones cartoneras. En octubre el ejecutivo porteño lanzó la campaña “bolsa verde”, tendiente favorecer la separación en origen de los residuos reciclables y facilitar a los cartoneros la recuperación, evitando al mismo tiempo la suciedad en la vía pública. Iniciativas favorables pero insuficientes. Por lo que, luego de una Audiencia Pública realizada a inicios de noviembre, el legislador porteño Eduardo Valdés solicitó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad declarar la inconstitucionalidad de aquellas ordenanzas de la dictadura que colisionaban con el derecho a trabajar de los cartoneros, garantizado por la Constitución Nacional. Frente a lo cual, el gobierno de Aníbal Ibarra argumentó que su derogación generaba un vacío legal, por lo que propuso no llevar al poder judicial el problema, sino discutir una nueva norma en la Legislatura. De esta decisión, sumada a la presión

de las asociaciones cartoneras, surgió el tratamiento de la Ley 992, sancionada en diciembre de 2002 y reglamentada en mayo de 2003.

Esta normativa fue un hito para el sector al habilitar y reconocer legalmente el trabajo de los cartoneros en tanto “recuperadores urbanos” de residuos. Dentro de un cambio de concepción, por el cual la higiene urbana pasó a ser considerada como servicio público, se valorizó el rol desempeñado por esos trabajadores informales y se contempló su inclusión como parte de la gestión de los residuos, para lo cual se formalizó la mesa de diálogo entre gobierno y asociaciones cartoneras. Entre los aspectos más destacados estuvo la derogación en la jurisdicción porteña de las ordenanzas que penalizaban la actividad y, a nivel institucional, la creación de una dependencia gubernamental destinada a su ordenamiento y regulación: el Programa de Recuperadores Urbanos (desde 2007, Dirección General de Reciclado). Las atribuciones de este organismo comprendían la provisión de insumos básicos para la higiene y seguridad laboral, la realización de capacitaciones y campañas de vacunación, la elaboración de diagnósticos y la apertura del Registro Único, Obligatorio y Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables.²

No obstante, en los hechos, poco cambió para los cartoneros. En términos concretos, habían quedado incluidos en lo simbólico, pero continuaban excluidos en la realidad. Con un escaso presupuesto, el programa no pasó de las buenas intenciones y, dado que los beneficios de incorporarse al registro oficial no eran muy significativos, la tasa de inscripción fue muy baja (recién hubo una afluencia mayor cuando, como veremos, se puso como condición para el cobro de becas para niños). En relación con el negocio de la basura, si bien la Ley 992 abrió la posibilidad a las empresas de incorporar cooperativas cartoneras en la recuperación de residuos, no estableció un porcentaje ni metas puntuales al respecto, lo que condujo a un escenario de conflictos ante cada nuevo contrato por la recolección de basura en la ciudad. Antes que una discusión legislativa, los pliegos licitatorios terminaron

² Cabe aclarar que nos concentramos en los cambios normativos en la ciudad de Buenos Aires ya que, si bien la gran mayoría de los cartoneros nucleados en el MTE vivían en Lanús y Lomas de Zamora, su trabajo se realizaba en la Capital Federal. Además, fue el distrito pionero en introducir legislaciones que cerraron el ciclo de prohibición del cirujeo y el reciclado establecido por la dictadura militar y giraron hacia una nueva lógica basada en la reducción, valorización y reutilización de residuos. Como veremos, ese cambio de mirada se debió mucho a la lucha cartonera.

reflejando la resultante de las pujas entre empresas y cartoneros por imponer sus intereses.

Así pues, el Estado llegaba a cuentagotas o, lo que es peor, continuaba mostrando su peor faceta. Ya que, si bien el trabajo de los ahora “recuperadores” dejaba de ser delito, la precariedad y vulnerabilidad en que se encontraban era caldo de cultivo para el abuso policial. El primer conflicto de importancia que atravesó al MTE, y que lo fogueó en la lucha, fue el enfrentamiento a las conductas mafiosas de la policía bonaerense y, sobre todo, federal (recuérdese que esta fuerza tenía a su cargo la seguridad de la ciudad). Entre 2002 y 2005 fue la tarea principal de la organización, un bautismo de fuego para los jóvenes militantes y los primeros referentes surgidos entre los cartoneros.

El *modus operandi* de los agentes policiales era el siguiente: ubicados en sitios estratégicos, como las cabeceras de los puentes que conectan la CABA con los municipios del conurbano sur o zonas de alta concentración de reciclables, establecían verdaderos “peajes” para permitir el paso de los transportes o el trabajo de los cartoneros. En caso de no pagar la coima, los oficiales secuestraban los carros o los vehículos, imposibilitando el trabajo y generando un problema legal a los afectados. La extorsión se había vuelto algo cotidiano, sistemático, que generaba el rechazo y la bronca de los miles de pobres que revolvían la basura para sobrevivir, por lo que fue el primero y más urgente de los problemas que emergió en las charlas de los militantes con los cartoneros.

Pero ¿qué podían hacer un puñado de estudiantes sin experiencia y gente desesperada por “parar la olla”? Lo que se les ocurrió fue establecer una guardia legal. Por las noches, en el horario laboral de los cartoneros, los militantes debían permanecer junto a un teléfono móvil. Este era el contacto con los delegados cartoneros, que se comunicaban a ese número ante cualquier situación irregular con la policía. Cuando algo ocurría, se activaba una cadena telefónica para que acudieran los militantes y otros cartoneros y transportes al lugar del conflicto. En razón de minutos, el oficial de policía o comisaría en cuestión se veían rodeados de gente reclamando por lo que sucedía. Esa presión fue la única herramienta defensiva que servía. Debe tenerse en cuenta que por esos años no había redes sociales y el uso de teléfonos celulares e internet era muy restringido, por lo que no era fácil visibilizar este tipo de injusticias.

Al dejar expuestos a personal uniformado en un accionar delictivo se provocaba una tensión que escalaba velozmente. Llegaban otros policías y patrulleros y todo quedaba a punto de desmadrarse. De un lado, los excluidos, los violentados y un grupo muy reducido de jóvenes militantes, algunos de los cuales tenían formación básica en derecho; del otro, la policía federal en la mayoría de los casos, que se veía desafiada frontalmente. Estos choques cara a cara se repetían varias noches a la semana. Todos los que participaron de esa etapa lo consideran como un elemento clave en la construcción de la confianza entre los integrantes del incipiente MTE. Edith Zárate, una de las primeras cartoneras en incorporarse, lo recuerda repitiendo una frase que sintetiza lo aprendido: “Los cinco locos nos enseñaron a defendernos”.

Esta dinámica le imprimió a la organización un perfil particular. Más que un movimiento con una gran estructura, reuniones, jerarquías y áreas, se trataba de una red que se articulaba pragmáticamente detrás del conflicto. La primacía estaba en la acción, el lugar por excelencia era la vía pública, el militante debía poner el cuerpo y el sujeto fundamental eran los cartoneros. Así lo pone de manifiesto Rafael Nejankis:

Primero, fue ganar la confianza de la base. Tengo el registro en la cabeza de que nosotros no perdíamos un conflicto. Era hasta religioso. O sea, tocaban una camioneta y movíamos todo, los militantes y los no militantes, dejábamos todo. Íbamos ahí, cortábamos la calle delante de la camioneta y nos tenían que matar para llevársela. Recuperábamos todos los días camionetas, no lograban llevarse una. Fue una práctica de militancia muy disciplinada y muy sufrida. Todos los días era un intento de robo de camioneta o de mercadería por parte del gobierno de la ciudad, o de la policía que quería coima. ¡Todos los días había un conflicto! Entonces, ahí se veía la diferencia que significaba estar dentro de la organización: era tener nuestro teléfono, punto, no había más.

Así pues, el enfrentamiento con el atropello policial generó un tipo de organización flexible y supeditada al abordaje del conflicto real. Puede parecer una obviedad, pero no lo es. Por el contrario, es común cierto “fetichismo de la estructura”, por el cual contar con muchos locales, lindas banderas, una buena imprenta, un organigrama nutrido y muchas reuniones es lo primero... y luego se ve cómo se inserta el partido en una base social definida. El MTE siguió el camino inverso. Especialmente durante los primeros diez años de vida, tuvieron una

orgánica muy reducida, sin cuidado alguno por la estética de las movilizaciones o de la prensa, sin contar siquiera con un local propio y con poco espacio para la discusión teórica. Esto les dio un quehacer muy ágil y con capacidad de adaptación a los cambios. Por supuesto, esta fortaleza, que requiere de una alta confianza entre un grupo reducido de personas, se transformó en debilidad cuando, con la expansión posterior a 2011, se enfrentaron a un cuello de botella por crecimiento y fue preciso adquirir mayores grados de estructuración (ver cap. 4). No obstante, un rasgo antiburocrático sobrevive desde entonces como parte de la cultura militante del movimiento.

Mientras tanto, entre 2003 y 2005 comenzaron a regularizarse las reuniones entre los militantes y un núcleo de cartoneros que asumía un mayor compromiso. La demanda sobre la guardia legal era muy alta y gradualmente ese grupo comenzó a asumir tareas en ella. Luego, cuando se generaron nuevas líneas de acción más y más complejas, fueron parte en cada una de ellas con roles de protagonismo. Esto también puede parecer una obviedad, pero no lo es. Suele haber una desconfianza –consciente o inconsciente– de los militantes de clase media que integran organizaciones populares sobre la capacidad de que los pobres se hagan cargo de determinadas labores. Habitualmente se reproduce hacia dentro de los movimientos la misma división del trabajo que se da en el resto de la sociedad: las tareas intelectuales, de prestigio, de conducción, de manejo de recursos quedan de un lado; las faenas manuales, de fuerza, de menor exposición pública quedan del otro. Un rasgo distintivo del MTE, conformado en aquellos primeros tiempos, fue promover compañeros de base para que manejaran personerías legales, hagan viajes internacionales, asuman cargos en el Estado o sean voceros públicos. A dos décadas, la trayectoria del movimiento y una buena cantidad de cuadros militantes surgidos desde la exclusión social da cuenta de esta vocación.

Finalmente, señalemos que un punto de inflexión en la resistencia al abuso policial ocurrió el 30 de diciembre de 2004. Personal de la excomisaría novena, en el barrio de Almagro, había secuestrado unos transportes cartoneros que ingresaban desde la zona sur. Como otras veces, se activó la guardia legal y se comenzó a concentrar el movimiento frente a la comisaría. Pero esa noche se desató en simultáneo la Tragedia de Cromañón. Este lamentable suceso reorientó las prio-

ridades policiales y facilitó que la presión en la calle ejercida por el MTE permitiera obtener la liberación de los transportes en una de las dependencias de “la Federal” que más frecuentemente violentaba a los cartoneros. Ese triunfo puede considerarse el fin de una fase caracterizada por la centralidad de la lucha defensiva. Desde 2005 comenzó un período de avances para los trabajadores cartoneros, en los que el MTE tuvo el papel protagónico. Primero, alrededor del conflicto por las becas para los niños y adolescentes de familias cartoneras. Segundo y más importante, la Ley de Basura Cero y la conquista de un sistema de reciclado con inclusión social. El sólido cimiento sobre el que se edificó esta nueva etapa fue el espíritu solidario forjado en la resistencia a la violencia policial, expresado en el lema de aquellos años: “Si tocan a uno, tocan a todos”.

Los niños primero

La problemática acerca del trabajo infantil fue advertida desde el inicio de la explosión cartonera. Ya a mediados de 2002, en la localidad de José León Suárez (partido de San Martín) comenzó a funcionar la primera guardería nocturna para hijos de cartoneros. Fue iniciativa de la municipalidad junto a una incipiente organización de los cartoneros de la zona. Poco después, a partir de la Ley 992, se sentaron las bases para la creación de centros recreativos y de educación no formal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires; aunque no se avanzó más que eso. Estas respuestas institucionales no tuvieron capacidad real de contener a las decenas de miles de niños, niñas y adolescentes que trabajaban cartoneando junto a sus padres y madres. Así como tampoco daban una solución al problema material que implicaba para estas familias que les quitaran “brazos” para la tarea de recolección. Frente a esta realidad, en 2003 el Programa de Recuperadores Urbanos permitió el ingreso al registro oficial de recicladores a menores de edad desde los catorce años. Es cierto que esta decisión provino de las negociaciones en la mesa de diálogo abierta desde 2002 entre cartoneros y funcionarios. Pero no es menos cierto que, mientras que las asociaciones cartoneras veían en ello una posibilidad de acceder a alguna mejora, los representantes del Estado

debían haber velado por el cumplimiento de los derechos infantiles mediante un abordaje integral del problema.³

A partir de esto, sucedió una seguidilla de acontecimientos que condujeron a la primera conquista material del MTE para las familias cartoneras. En marzo de 2004, esta formalización del trabajo de adolescentes fue denunciada ante la justicia por Patricia Bullrich, ex ministra de Trabajo del gobierno de De la Rúa y por entonces opositora a la gestión de Ibarra. En junio de ese mismo año, el juez Augusto Kersman declaró inconstitucional la Ley 992, al permitir que menores de edad fueran registrados y obligó al ejecutivo porteño a becar a los hijos de cartoneros para que no continuaran trabajando. La medida quedaba circunscripta a aquellos menores que estuviesen inscriptos en el registro. Como respuesta, el gobierno lanzó el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil. Pero, más allá del título rimbombante, continuó sin dar una respuesta a la problemática. De hecho, la UNICEF y la oficina regional de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) realizaron un estudio a fines de 2004 en el cual se encontró que la mitad de los cartoneros eran menores de edad. Los datos, publicados en marzo de 2005, causaron un gran revuelo mediático. Frente a lo cual, el Ministerio Público Tutelar de la ciudad señaló que el ejecutivo estaba incumpliendo el fallo judicial.

Este marco fue entendido por las asociaciones cartoneras como una ocasión propicia para visibilizar un conjunto de demandas insatisfechas. En cierto sentido, era una posibilidad de pasar a la ofensiva. Ya no se trataba de defenderse de la violencia policial, sino de lograr instalar en la agenda otros problemas del sector. Así fue como el 6 de junio de 2005 el MTE realizó su primera movilización cartonera a Plaza de Mayo. Las consignas del volante que distribuyeron ese día dan la pauta de los ejes por los que luchaba el movimiento en este momento de su historia.

³ De acuerdo con los relatos de referentes del MTE, el funcionamiento de la mesa de diálogo dejaba mucho que desear. Ante las problemáticas planteadas por los cartoneros, las respuestas de los funcionarios solían ser mayormente negativas.

Para reafirmar nuestro derecho a trabajar dignamente:

**BASTA DE PERSECUCIONES Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS
CARTONEROS
MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO**

**Lunes 6 de junio. Marchamos a Plaza de Mayo
a presentar nuestros reclamos**

13:30 hs Concentramos en Hornos y la Rivera

14hs Puente Alsina

15:30 hs Plaza de Mayo

- Basta de persecución policial en el Puente Alsina, en la Ciudad y en Pcia de Bs. As.
- Ayuda para poner en regla los camiones (seguro, veri. técnica, etc)
- Colectivos para el traslado seguro de los cartoneros
- Guardería nocturna para nuestros hijos
- DNI para todos los cartoneros
- Distribución igualitaria del papel que generan los grandes edificios
- Habilitación de un espacio para hacer un "depósito social cooperativo"

**Reunión preparativa: *Sábado 4 a las 18hs* en el Gauchito
(Hornos y Chivilcoy)**

Movimiento de Trabajadores Excluidos - MTE

Imagen 4. Volante de la primera movilización del MTE a Plaza de Mayo (6 de junio de 2005). Fuente: archivo de Martín De Mingo.

Tanto las exigencias como el tipo de acción dieron cuenta del inicio de otra etapa. Más allá del primer punto, propio de la fase defensiva entre 2002 y 2004, contiene reivindicaciones concretas para mejorar materialmente la vida de los cartoneros. Lo notable es que en menos de cinco años todos esos puntos fueron logrados.

Mientras tanto, en agosto el Ministerio Público Tutelar volvió a reclamar al gobierno porteño que seguía sin dar respuesta al fallo de Kersman. Frente a la inacción del ejecutivo, la Unión de Trabajadores Cartoneros (UTRACA), una agrupación cercana por entonces al MTE, solicitó al juez Roberto Gallardo una medida cautelar. Contaron para ello con el patrocinio legal de Facundo Taboada del Centro para la Justicia Básica (CEJUBA), ligado a la agrupación estudiantil NBI de la

Facultad de Derecho (UBA).⁴ El recurso fue aceptado por el magistrado, quien ordenó que se otorgara a todos los recuperadores inscriptos un subsidio mensual por cada hijo menor de edad. El pago de estas becas debía realizarse desde el 1 de septiembre de 2005. El ida y vuelta judicial y político no había llegado a su fin y el conflicto parecía escalar cada vez más alto. El ejecutivo apeló y recusó a Gallardo, por lo que, cuando inició septiembre, continuó incumpliendo los fallos. Pero la jueza Patricia López Vergara, en quien recayó la causa, entendió que hasta tanto la apelación no se resolviera se debían abonar las becas. Por lo que, frente a la intransigencia del gobierno, congeló los fondos del gobierno en el Banco Ciudad hasta tanto no pagase. ¡La administración porteña quedaba paralizada con esta decisión!

En ese marco, y mostrando reflejos rápidos, el MTE definió realizar una acción directa para fortalecer la posición de los cartoneros. Así fue como el 14 de septiembre ingresaron pacíficamente a las instalaciones del banco, y manifestaron que se quedarían adentro hasta garantizar el cumplimiento en el pago de las becas. Y, pese a las amenazas de desalojos, lograron parcialmente el objetivo. A quince meses del primer fallo judicial y tras un desgastante conflicto en el tramo final, el 15 de septiembre al fin la ciudad pagó las becas a... ¡solo ocho hijos de cartoneros! Era un paso, ya que el gobierno reconocía en parte el reclamo. Pero, por supuesto, era insuficiente. Mientras tanto, para ganar tiempo, el ejecutivo recusó también a López Vergara, a la espera del fallo de la Cámara de Apelaciones.

Apoyados en esa estrategia dilatoria, inició octubre y nuevamente el gobierno no depositó los pagos de las becas, por lo que el MTE emprendió nuevas acciones: el día 5 ocupó las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo, el 6 ingresó otra vez al Banco Ciudad y el 20 realizó una movilización y huelga de hambre en Plaza de Mayo, en donde algunos cartoneros permanecieron encadenados por unas horas. Entre tanto, la jueza Elena Liberatori dictaminó que el gobierno porteño diera cumplimiento en parte a lo resuelto en las otras instancias judiciales. Limitó el alcance de la medida, de modo que alcanzaba a una porción

⁴ Taboada siguió con los años colaborando con el MTE frente a distintos conflictos. Uno de sus últimos aportes en ese sentido fue como abogado del Proyecto Artigas en el 2020 (ver cap. 6).

muy reducida de los niños cartoneros (aquellas que vivieran en la ciudad) y el gobierno terminó por acatar su cumplimiento.⁵

Los saldos de este conflicto fueron al menos dos. Por un lado, fue la primera conquista material de un beneficio que llegaba al bolsillo de los cartoneros. Como sabe cualquier dirigente social o sindical, no hay mejor pedagogía acerca de las ventajas de organizarse colectivamente y de la lucha gremial que obtener resultados palpables. Además, fue la primera vez que el MTE protagonizó un conflicto que adquirió estado público. Y, lo que es destacable para un grupo militante sin mucha experiencia, mostraron inteligencia a la hora de poner en juego un repertorio que incluía el plano legal, las acciones directas, las apariciones en la prensa y las negociaciones con el gobierno. La complejidad era mucho mayor que en el conflicto directo con la policía que había sido lo característico hasta el momento.

Por otro lado, se amplió el arco de relaciones del movimiento. En primer lugar, se inició una coordinación con otras agrupaciones de cartoneros. En particular, la UTRACA, el CERBAF y la Cooperativa El Álamo. En 2006 entre los cuatro grupos lanzaron la Federación Ecológica de Cartoneros y Recicladores (FECYR). Si bien tuvo corta vida, fue el primer intento de establecer una articulación cartonera con fines reivindicativos por fuera de la tutela del Estado o las ONG.⁶ En segundo lugar, a través de Alicia Montoya, referente de El Álamo, establecieron contacto con La Alameda. Como veremos en breve, esta organización se constituyó en la principal alianza del MTE por aquellos años. En tercer lugar, fue en el contexto de este conflicto que el arzobispo Jorge Bergoglio realizó una misa por los niños cartoneros y la erradicación del trabajo infantil. Si bien no se estableció un vínculo entonces, ese gesto fue significativo para el acercamiento posterior con quien sería el papa Francisco (ver cap. 4).

⁵ Además de las entrevistas, las fuentes periodísticas y judiciales para reconstruir el devenir de este conflicto fueron muy abundantes. Por un tema de extensión no podemos consignar las referencias completas. Pero, básicamente, pueden consultarse los artículos al respecto en las ediciones de *La Nación* (13/03/04; 11/08/05; 14/09/05; 15/09/05; 6/10/05; 21/10/05; 19/12/05), *Clarín* (10/06/04) y *Página/12* (06/09/2005; 13/12/2005). Entre las fuentes judiciales, las más importantes fueron el expte. N° 11.797/0 "Patricia Bullrich y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)" y el expte. n° 17.378/0 "Montenegro Patricia Alejandra y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)".

⁶ La FECYR se disolvió al poco tiempo por disidencias entre MTE/El Álamo vs UTRACA/CERBAF. No obstante, tuvo el mérito de ser el antecedente directo de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) (ver cap. 3).

Idas y vueltas

A partir del conflicto en torno al trabajo infantil quedaron en evidencia las falencias de la Ley 992 y la necesidad de una nueva legislación. La discusión se abrió en la Legislatura en un contexto a todas luces distinto al que rodeó aquella normativa en 2002. A nivel social, el crecimiento económico y el proceso de normalización institucional provocaban un clima de mayor indiferencia frente a la realidad de los cartoneros. Incluso, para muchos porteños su presencia evocaba un pasado traumático que se quería dejar atrás. Se pasó del apoyo y la solidaridad extendida a un creciente descontento por el entorpecimiento del tráfico automotor y, sobre todo, por la suciedad en la vía pública. Este reclamo estético adquirió centralidad y se mantuvo como un tema recurrente a lo largo de los años. Por supuesto, en el cambio de humor social debe mencionarse el rol de los grandes medios de comunicación, que amplificaban un discurso reaccionario. Un caso resonante fue cuando en 2007 el periodista de espectáculos, Luis Avilés, dijo en su programa televisivo que a los cartoneros “los educaría o pondría una granada en la bolsa de basura”. A partir de esas declaraciones, el MTE y el CEJUBA hicieron una denuncia contra él que concluyó en una instancia de mediación judicial por daños y perjuicios. A pesar de que Avilés nunca se retractó de sus dichos, luego de varias audiencias tuvo que comprar libros para un colegio de Villa Fiorito al que asistían los hijos de cartoneros.

Era evidente que una parte de los porteños, al menos, reclamaba acciones represivas. Pero el accionar policial se había visto crecientemente limitado, tanto por efecto de la legalización de la actividad, como por la resistencia organizada a su accionar mafioso. A lo cual debe agregarse la política de derechos humanos y de no represión de la movilización social adoptada por el gobierno nacional, de quien dependía directamente la Policía Federal. Debido a estas restricciones, el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, tomó una de las decisiones más repudiables de su gestión. En julio de 2005 puso a funcionar un nuevo organismo llamado RECEP (Recuperación del Espacio Público). En los hechos, era un grupo que actuaba como fuerza de choque, compuesto por personal del gobierno de la ciudad y barrabravas, que tenía por función limpiar la vía pública de sujetos indeseables para la “gente decente”. Indigentes, cartoneros, vendedores ambulantes y otros

entraban en esa categoría. Tras la asunción de Telerman fue rebautizada como UORCEP, hasta que en 2008 Mauricio Macri la denominó UCEP (Unidad de Control del Espacio Público). Fue a partir de entonces que la opinión pública tomó nota de la existencia de este organismo debido a las denuncias que realizaron organismos de derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que la UCEP tenía antecedentes directos en la RECEP y UORCEP. De hecho, desde el MTE afirman que quienes integraban este grupo parapolicial fueron siempre los mismos individuos.

En cuanto a la situación cartonera, había también diferencias notables respecto al 2002. En particular, el grado de organización, conciencia y experiencia acumulada en la lucha reivindicativa. Como reflejo de ello, se habían logrado tres avances reflejados en los pliegos licitatorios. En primer lugar, en 2003 se estableció la necesidad de crear lugares en la ciudad de Buenos Aires que permitieran la selección, enfardado y acopio de parte de los recuperadores urbanos. Desde una concepción inclusiva e innovadora, los llamados Centros Verdes se pensaron como una cogestión entre el Estado y la cooperativa que tuviera influencia en esa área, integrando a los barrios aledaños en la gestión integral de los residuos y evitando el traslado de los desperdicios en infinidad de pequeños transportes. No obstante, quedó en buenas intenciones durante algunos años, ya que, como veremos, recién comenzaron a implementarse tras la sanción de la nueva ley. En segundo lugar, en febrero de 2005 entró en vigencia la modificación de la forma de pago a las empresas recolectoras. Se pasó del cálculo basado en kilogramos de residuos recogidos a uno basado en mantener un área limpia, lo que evitaba la disputa con los cartoneros por la propiedad de la basura. Por último, se instauró una recolección diferenciada para los grandes generadores de residuos (hoteles de alta gama, shoppings, bancos, supermercados, laboratorios, etc.). Aunque el material reciclable generado en esos lugares –mucho y de buena calidad– quedó en manos de las empresas. Más allá de las limitaciones señaladas, esta trayectoria de avances en torno al tema cartonero y de reciclado generaba un marco distinto al de 2002 para la discusión legislativa.

Con ese trasfondo social, político y sectorial, y poco después de la suspensión de Ibarra como jefe de Gobierno, en noviembre de 2005 la Legislatura porteña promulgó la Ley 1854 de Gestión de los Residuos Urbanos (Basura Cero). Fue antecedida por instancias de debate en

donde los jóvenes militantes y cartoneros del MTE, junto a las cooperativas y organizaciones ambientales, participaron de las negociaciones para el diseño de la norma. Se lograron progresos significativos en dos planos. En lo económico, se incorporó con prioridad a los recuperadores urbanos en la gestión de residuos y habilitó que las cooperativas fueran contratadas por el gobierno para brindar el servicio de recolección de residuos secos domiciliarios y de grandes generadores. En lo ambiental, se estipuló una reducción gradual de la disposición final de basura, favoreciendo el reciclaje y la reutilización. De este modo, la nueva ley concretó definitivamente el cambio de paradigma respecto a las normativas de la dictadura que prohibían la recuperación de residuos y los cartoneros comenzaron a ser protagonistas no solo de una lucha gremial, sino como actores ambientales. Esta ampliación de los alcances de su actividad tuvo implicancias en la construcción de su identidad como sujeto social, así como en las estrategias de lucha y organización que se desarrollaron en adelante.

Por lo tanto, con la Ley de Basura Cero se impuso formalmente la opción de incluir y no criminalizar. Aunque para que los avances se materializaran, debió ejercitarse una vez más el músculo de las organizaciones populares. De hecho, si hasta 2004 el principal contrincante fue la mafia policial, desde 2005 la polaridad se desplazó hacia el ejecutivo porteño. Ya el conflicto en torno a las becas para niños fue un clivaje en ese sentido. Luego siguió la lucha por la reglamentación de la nueva ley y por la inclusión efectiva en el sistema de reciclado, mientras se resistían los embates de la RECEP/UORCEP o de agencias de control que exigían el cumplimiento de requisitos inalcanzables para los pobres. Es decir, en los papeles estaban todas las condiciones para que los cartoneros mejoraran significativamente sus condiciones; pero, en los hechos, hubo que disputar con el gobierno de la ciudad cada mejora.

Durante todo el 2006 el gobierno se resistió a reglamentar la ley que, por lo tanto, no regía. Esta demora fue motivo de distintas acciones impulsadas por las organizaciones cartoneras, algunas de ellas dirigidas ya no solo al ejecutivo porteño, sino también al nacional. Por caso, la movilización del 7 de febrero se dirigió al Palacio Municipal y a la Casa Rosada. Sin embargo, los resultados fueron magros. Más bien, en la práctica, se manifestaba un giro punitivo. El jefe de Gobierno, Jorge

Telerman, envió en noviembre a la legislatura un proyecto de reforma al Código de Faltas para sancionar a los cartoneros que no estuvieran inscriptos en el registro oficial, que realizaran clasificación de basura en la vía pública o que no cumplieran con las normas de higiene y seguridad establecidas. Aunque la modificación no fue aprobada, expresaba una mirada represiva que fue acompañada por el incremento de operativos de secuestro de transportes cartoneros.



Más de 300 cartoneros, entre ellos muchos jóvenes, protestaron ayer ante el gobierno de la ciudad, en reclamo de mejores condiciones laborales

Los cartoneros protestaron por el programa Basura Cero

Temen que el gobierno los excluya del negocio del reciclaje de cartón y de plásticos

• También denunciaron que fueron golpeados por personal de un organismo de la ciudad que recupera los lugares públicos usurpados para el acopio del material • Las autoridades lo desmienten

Por Pablo Tomino
De la Redacción de LA NACION

zonas de trabajo, y que se suspendan los operativos que realiza el Recep-organismo del gobierno que tiene

quitando el pan de nuestros hijos y desalentando una actividad beneficiosa para la ciudad. También nos niegan cualquier tipo de asistencia o mejoras para el transporte (con relación a los camiones y al tren blanco). Los predios y maquinarias prometidos para desarrollar nuestra actividad todavía no aparecen. Y nosotros seguimos

espacios verdes que serán inaugurados en la ciudad para que los cartoneros ejecuten la actividad.

Desde el gobierno porteño indicaron que el programa Basura Cero incluye a los cartoneros, y que tiene como fin "la aplicación de programas integrados en un sistema global que incluye la maximización del tratamiento y reciclaje

Imagen 5. Cartoneros protestan por la reglamentación de la Ley de Basura Cero y denuncian golpizas de la RECEP/UORCEP. La pancarta en la mano, en apoyo a la lucha por las becas para niños cartoneros, está firmada por Diego Armando Maradona. Fuente: La Nación, 8 febrero de 2006, p. 19 (Hemeroteca UNLP).

En rechazo a estas restricciones, el 18 de diciembre el MTE decidió interrumpir completamente el tránsito sobre el Puente Alsina. Se trató de una acción significativa por dos razones. Por un lado, fue el primer corte de tal magnitud realizado por el movimiento, lo que significaba un salto en audacia y combatividad. Por otro lado, en un momento en que las organizaciones piqueteras estaban en retroceso, con dificultades para concretar protestas de este tipo, llamó la atención la masividad y contundencia demostrada en la acción. Además, el MTE no disponía de planes sociales de ningún tipo. Fue el momento en que el movimiento, hasta entonces mayormente desconocido fuera del mundo cartonero, entró en el radar de otras organizaciones populares.

Recién en mayo de 2007, tras un año y medio de conflictos, se logró el decreto reglamentario de la Ley de Basura Cero. Era un paso clave para conseguir su aplicación efectiva. Sin embargo, como cada derecho conquistado por los excluidos, costó aún mucho esfuerzo lograr la incorporación al sistema de reciclado. Como veremos en breve, recién al año entrante, tras un cambio de gobierno y un episodio represivo, se dieron las condiciones para avanzar. Entretanto transcurrían los últimos meses del ibarrismo al frente del gobierno porteño. La experiencia de lidiar cinco años con este espacio político en la Jefatura de Gobierno generó en el MTE un rechazo hacia lo que definen como “progresismo liberal”. Es decir, una resistencia frente a referentes políticos o académicos que desde posiciones biempensantes dicen preocuparse por la situación de los excluidos, hacen gestos grandilocuentes, pero en los hechos realizan muy poco y se quedan en cambios cosméticos o meramente formales. En distintos momentos de la historia del MTE esta distancia con el progresismo se convirtió en enfrentamiento, como cuando fueron cuestionados por su concepción de la economía popular, su política de integración de los barrios populares o sus relaciones con la Iglesia. Lo cual acentuó, a su vez, un sentido de irreverencia hacia las vacas sagradas y las fronteras invisibles que supuestamente no deben cruzarse para mantener la pureza intelectual o política. Ese descaro y la desconfianza hacia los discursos políticamente correctos pueden ser considerados parte de la identidad del movimiento.

Mientras tanto, ante la inminente sanción de la Ley de Basura Cero, en noviembre de 2005 el MTE había inscripto formalmente a la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”. Se trataba de una figura

jurídica necesaria para distintas gestiones. Por lo descrito antes, no fue de mucha utilidad durante 2006. Pero, en 2007, cuando se preveía la reglamentación de la nueva norma, el movimiento dio un paso más y registró a “El Amanecer de los Cartoneros” como cooperativa en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Esta dependencia estatal, encargada del registro, seguimiento y apoyo al sector, adquirió un creciente protagonismo en aquellos años, a medida que los subsidios de desempleo mutaron hacia planes de trabajo bajo la figura de cooperativas.

En la concepción del MTE, la obtención de esa personería legal era un elemento táctico dentro de una concepción sindical que no se abandonó en ningún momento. Lo que se evidencia en que, lejos de contentarse con un pequeño grupo de afiliados, “El Amanecer” tendió a la masividad. Actualmente es la cooperativa más grande de América Latina, con alrededor de cinco mil miembros activos. Cabe destacar, en sintonía con lo señalado antes, que las autoridades de la asociación civil y la cooperativa fueran siempre cartoneras. En ese sentido, para combatir la reproducción de las desigualdades de clase dentro de la propia organización, el movimiento hizo un esfuerzo deliberado para que personas con baja instrucción educativa pudieran gestionar ese tipo de instrumentos legales. Se trata de un mecanismo concreto de cesión de poder, de empoderamiento de los excluidos. Así pues, desde abril de 2009 en que se hizo la primera, las asambleas para elección de autoridades de “El Amanecer” han sido instancias de participación directa y masiva de los cartoneros asociados.

Un sueño cumplido

Desde la reglamentación de la Ley de Basura Cero se desarrollaron algunas acciones, sin mayores resultados, para ser incorporados en el sistema de reciclado de la ciudad. El contexto electoral no colaboraba para entrar en la agenda de un gobierno que se estaba despidiendo. Y las perspectivas no eran buenas. El ascenso irrefrenable del PRO en la ciudad no auguraba buenas noticias. Estaba encabezado por el empresario Mauricio Macri, quien en 2002 había dicho aquella frase resonante contra el robo de basura de parte de los cartoneros. Los pronósticos parecieron cumplirse cuando, en diciembre de 2007, al poco tiempo

de su asunción como jefe de Gobierno, se anunció que el primer día del año entrante dejaría de funcionar el Tren Blanco de la Línea Mitre. No obstante esta decisión provenía del gobierno nacional (a través de Ricardo Jaime, secretario de Transporte), se preveía la respuesta que recibirían del macrismo en la ciudad.⁷ Se trataba de la cancelación de un servicio esencial para el trabajo de los cartoneros de zona norte. A partir de entonces se siguió una sucesión de hechos que es preciso reconstruir para comprender la dialéctica de actores e intereses que condujo, en un contexto adverso, a la incorporación cartonera en el sistema de reciclado de la ciudad. Fue un proceso decisivo en la historia del MTE, con importantes consecuencias cualitativas y cuantitativas.

Antes de describir los acontecimientos, es preciso aportar algunos detalles respecto al Tren Blanco. En el 2000 la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) estableció un servicio exclusivo para que viajaran los cartoneros con sus carros y cargas. Fue producto de la organización de los cartoneros de José León Suárez, encabezados por Lidia Quinteros, que realizaron cortes de vías y petitorios para lograrlo. Aunque también existían quejas frecuentes por los malos olores y distintas situaciones conflictivas que se generaban por la presencia de cartoneros en los servicios habituales. La respuesta más fácil para las empresas, con aval de los gobiernos, fue segregar a esa población vista como indeseable. Nació así el Tren Cartonero o Tren Blanco, un verdadero ícono de la crisis argentina. Operó inicialmente en la Línea Mitre, pero luego se extendió a las restantes líneas y ramales metropolitanos. Comúnmente, se utilizaban formaciones fuera de servicio y en un estado deplorable, con vidrios rotos, sin sillas ni luces, lo cual era motivo de medidas de lucha de parte de los cartoneros.

Desde 2006, en el marco de la recuperación económica, habían comenzado a desactivarse estos servicios especiales. No obstante, aquel primero que viajaba entre Retiro (CABA) y José León Suárez seguía operando. Esta localidad era el equivalente en el conurbano norte al eje Villa Caraza-Villa Fiorito en el sur: eran sitios con una alta concentración de cartoneros y que contaban con una experiencia organizativa de varios años. Así pues, cuando el 1 de enero de 2008 dejó de funcionar

⁷ Sobre la decisión de cancelar el Tren Blanco, referentes del MTE señalan que fue una forma del gobierno nacional de trasladar el “problema cartonero” al nuevo ejecutivo porteño, al tiempo que se respondía a una demanda de la empresa TBA. Políticas como esas favorecieron la postura crítica del MTE respecto al kirchnerismo durante sus gobiernos.

el Tren Blanco en ese ramal, grupos de cartoneros se asentaron como protesta en parques de la Capital Federal cercanos a las estaciones ferroviarias. Como la línea Mitre atraviesa la zona norte de la ciudad, los acampes quedaron en medio de los barrios lujosos, siendo el más importante uno en Plaza Barrancas de Belgrano. El MTE no tenía por entonces inserción entre esos cartoneros, pero acompañó el conflicto en un primer momento. Luego tomó cierta distancia al no compartir la orientación llevada adelante por partidos trotskistas, ya que entendía que conducían la situación a un camino sin salida.⁸

El desenlace, luego de dos meses, fue violento. El 22 de febrero el flamante jefe de Gobierno mandó a desalojar por la fuerza el acampe. El hecho tuvo una gran repercusión pública, al transmitir, a poco de haber asumido, el perfil de un gobierno represivo. En la Argentina de los años posteriores al 2001-2002 ningún político quería quedar asociado a esa imagen, ligada a la caída en desgracia de los expresidentes De la Rúa y Duhalde. Además, el kirchnerismo enarbolaba una política de contención frente a la protesta social que procuraba evitar la represión policial. En ese contexto el contraste entre un oficialismo nacional, que hacía de los derechos humanos su bandera, y el nuevo gobierno porteño era desfavorable para este último.

Como resultado de las críticas desatadas, se produjo una interna política dentro de la incipiente administración del PRO alrededor de cómo abordar el tema cartonero. Como resultado, el 15 de abril de 2008 renunció Gustavo Grasso a la Secretaría de Higiene Urbana de la CABA. Este funcionario, que reflejaba la línea “dura”, fue reemplazado por Pablo Fornieles, de estilo más dialoguista. Por supuesto, son variantes en el marco de una fuerza política que adhiere explícitamente a una mirada neoliberal. Sin embargo, en la gestión encabezada por este último pudo avanzarse en la inclusión de los cartoneros al sistema de reciclado. De este modo, la crisis desatada por el desalojo de febrero, al

⁸ El MTE y cooperativas con larga trayectoria en el sector, como El Álamo y El Ceibo, plantearon un doble juego: por un lado, movilizaron a la Sec. de Transporte de la Nación en reclamo por el retorno del Tren Blanco; por otro lado, plantearon una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad para lograr formalizar un medio de transporte adecuado de los pasajeros y las cargas (colectivos y camiones). Mientras que los referentes ligados al Partido Obrero se afirmaron en el acampe y la consigna de retorno del Tren Blanco. Tras la represión y la derrota de esta posición, los partidos de izquierda perdieron la incipiente inserción que tenían entre los cartoneros. Sobre la historia de organización y el conflicto en torno al Tren Blanco, ver Villanova (2014).

mostrar los costos de la opción represiva frente a la protesta cartonera, fortaleció a un ala que propugnaba por una estrategia de contención.

La identificación de estos matices le permitió al MTE extraer conclusiones que serían de enorme utilidad en el futuro. Desde el inicio de la gestión del PRO en la ciudad reconocieron la existencia de líneas internas y aprendieron a sacar provecho de ellas. Esto es habitual para cualquier dirigente social o sindical que emprende una negociación frente al Estado y busca obtener beneficios para el sector que representa. La particularidad vino dada porque el interlocutor del MTE era el gobierno porteño, mientras que para la mayoría de las organizaciones eran los ministerios de desarrollo social de la nación o las provincias. Cuando los funcionarios del PRO de la ciudad quedaron al frente de distintas carteras del gobierno nacional en 2015, el movimiento contaba con casi diez años de lidiar con ellos y conocían el tipo de iniciativas que podrían funcionar.

Finalmente, con el cuadro a nivel local condicionado por los hechos de febrero y con el país concentrado en el conflicto del campo, se abrió un escenario favorable a los cartoneros: el proceso licitatorio iniciado en 2008 los incluyó por primera vez en la recolección de residuos secos. De este modo, en octubre de ese año, comenzó a funcionar el sistema de reciclado con inclusión social, el primero en el país y probablemente uno de los pioneros en el mundo. El comienzo fue precario, aunque vivido como un gran avance. Únicamente se proveyó a El Amanecer de los Cartoneros de tres camiones que el gobierno porteño otorgó en comodato. Funcionaban pocos centros de acopio en la CABA y estaban fuera del área de influencia del MTE, por lo que los residuos continuaban siendo conducidos a Villa Fiorito y Villa Caraza para su clasificación. Los recuperadores urbanos recibieron uniforme, insumos de seguridad laboral y una credencial, así como un subsidio en concepto de capacitación y el pago del monotributo a cargo del gobierno. Para quienes estaban habituados a la precariedad del trabajo cartonero a la intemperie y a la violencia del hostigamiento policial, muchos de los cuales nunca habían conocido lo que era un empleo formal, representaba un sueño cumplido. Y fue alcanzado gracias a la organización popular.

A partir de allí, el crecimiento fue exponencial. El movimiento sabía que no debía contentarse con unas decenas de cartoneros incorporados,

sino buscar la inclusión del mayor número de ellos. Mediante un juego de pinzas que incluía negociaciones, movilizaciones y demostración de capacidad de hacer bien el trabajo, se fueron ampliando las rutas de recolección a su cargo. Por caso, hacia 2010 salían, solo desde Villa Fiorito, 26 rutas con cuarenta personas cada una. En solo dos años el MTE había pasado de ser una organización de trescientos o cuatrocientos cartoneros a aglutinar a más de dos mil en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, absorbiendo experiencias previas como aquellas que se desarrollaron en torno al Tren Blanco. Fue un enorme reto para la organización, ya que implicaba expandirse hacia el oeste y el norte del conurbano, distantes del eje original de desarrollo en la zona sur.

Cabe destacar que para la ciudad de Buenos Aires la contratación de las cooperativas cartoneras representaba un ahorro respecto a la misma labor realizada por empresas. Lejos del apotegma que señala la eficiencia del sector privado, en este caso se demostró que los cartoneros –quienes, por cierto, ya realizaban el trabajo desde antes– podían ser una mejor opción en el marco de una cogestión con el Estado que les garantizara derechos laborales. Además, tener enfrente a la administración porteña aportaba un escenario favorable a exigir más: se trata del distrito más rico de la Argentina (como referencia podemos decir que la CABA tiene treinta veces más presupuesto por habitante que La Matanza). Otra particularidad es la visibilidad que otorga luchar en la Capital Federal, donde los conflictos locales muchas veces se vuelven temas de agenda nacional o mediática. Esta visibilidad aumentada –una especie de lupa sobre la ciudad– no existe para ningún otro distrito municipal o provincial del país.

Sobre esas bases, sumadas a la legitimidad de los planteos ambientales y de la que todavía gozaban en parte los cartoneros, el MTE sabía que había condiciones para presionar y dar tres nuevas batallas, además de la ampliación de las rutas a su cargo. En primer lugar, para ingresar en la recolección diferenciada de los grandes generadores de residuos. Había que superar la resistencia de las empresas a perder otra porción de la recolección y de los funcionarios que no creían que los cartoneros tuvieran la capacidad de afrontar tamaña tarea. Así que, tras insistir en ello, incluso mediante una denuncia penal a las empresas por incumplimiento de los contratos, lograron que se les permitiera una prueba piloto de varios meses. Habiendo logrado un resultado satisfactorio, El

Amanecer de los Cartoneros comenzó entre 2010 y 2011 a participar de la recolección de los grandes generadores.

En segundo lugar, la lucha por la apertura de centros verdes en la ciudad de Buenos Aires, tal como estipulaban desde hacía años los pliegos licitatorios y las leyes relativas a la actividad. Hasta el momento funcionaban solo tres, inaugurados entre 2006 y 2007. Eran más bien reducidos y estaban gestionados por otras cooperativas cartoneras. Con la asunción del gobierno macrista no hubo más avances, pues se trataba de un tema sensible al electorado que no quería la implementación de estas unidades para el acopio y clasificación de residuos en sus barrios. Tras la incorporación al sistema de reciclado entre 2009 y 2010, el MTE y otras asociaciones volvieron a instalar el tema como una necesidad. Era injusto e insalubre seguir inundando los barrios de los cartoneros con los deshechos de los porteños. Así pues, el reclamo se incorporó en las negociaciones y, con la fuerza de los miles de cartoneros organizados, se lograron avances significativos. Por caso, en octubre de 2012 se obtuvo la apertura del Centro Verde de Barracas, el más grande de la Argentina. Conocida como “la NASA de los cartoneros”, es una planta de selección y procesamiento primario de enorme escala. En ella trabajan 360 personas en turnos de seis horas y es gestionada exclusivamente por El Amanecer de los Cartoneros. Se procesan 1300 toneladas mensuales de basura, logrando recuperar para reciclado un 70 % del total. Actualmente, operan en la ciudad 16 centros verdes administrados por distintas cooperativas (datos de junio de 2023).

En tercer lugar, se buscó satisfacer una vieja demanda: sacar a los niños y niñas del trabajo cartonero. Al igual que otras cosas, formalmente ya estaba logrado. La Ley de Basura Cero incluía la implementación de políticas para la erradicación del trabajo infantil y la instalación de una guardería por centro verde. Pero, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho. La distancia entre el espíritu de las leyes y la realidad fáctica de los pobres suele salvarse solo si existe un poder popular capaz de presionar lo suficiente. Tal fue este caso: en septiembre de 2009 comenzó a funcionar con financiamiento del gobierno porteño la guardería “El amanecer de los pibes”. Inicialmente operaba en un local en Villa Fiorito de la Fundación Che Pibe, perteneciente al Movimiento Chicos del Pueblo y la CTA; más adelante, en 2013, “los cartoneros” tuvieron su propia sede. Fue la primera de varias guar-

derías y jardines de infantes que, en pocos años, eliminaron en gran medida el trabajo de niñas y niños en el sector. La solución definitiva a este flagelo social, denunciado durante una década en las portadas de prensa y los informes técnicos, no provino ni de los funcionarios de los distintos gobiernos, ni de los expertos de la academia, ni de los organismos internacionales, sino de la organización popular.⁹

Para finalizar, es preciso aclarar que no todo fue color de rosas. Por una parte, el sistema de reciclado con inclusión social debió ser defendido constantemente de embates por distintos flancos. De un lado, del macrismo, las empresas concesionarias y medios de comunicación que actúan como sus portavoces. Una parte del caudal de dinero público por la recolección de residuos que iba a un puñado de firmas privadas comenzó a dirigirse a una multitud de cartoneros. Naturalmente, esta distribución de la riqueza fue resistida por quienes gozaban de la concentración de esa fortuna. Por supuesto, a esta razón material hay que sumar el rechazo de estos sectores hacia lo popular y la desconfianza en su capacidad de gestión. Del otro lado, ataques de otros grupos del campo popular y de universitarios progresistas. Estos cuestionaban al MTE las negociaciones con un partido de derecha o señalaban que el sistema de reciclado era una forma de legalizar el trabajo precario de los cartoneros. Respecto a lo primero, el movimiento defendió explícitamente el pragmatismo en la lucha por los intereses del sector que organiza y representa. En ese sentido, está permitido todo lo que sirva para fortalecer las posibilidades de un triunfo reivindicativo en beneficio de los pobres. En relación con lo segundo, puede decirse que el acento en el MTE estuvo puesto en la consecución de mejoras reales y no en las soluciones “de café”. En su cultura militante, la idea disociada de la realidad es un eslogan vacío.

⁹ Otra original respuesta de la organización popular para enfrentar la misma problemática fue el proyecto “Tras Cartón”, que todavía continúa funcionando en plenitud. De la mano de Manuel Mateu, comenzó allá por 2011 como un taller productivo destinado a los hijos de cartoneros de la Cooperativa El Ceibo. Al sumarse a las filas del MTE, Mateu profundizó la idea e impulsó, junto a otros militantes, el Taller “Cartón Lleno” en el Centro Metropolitano de Diseño (dependiente del gobierno porteño). Consistía en una capacitación en el oficio del trabajo creativo con materiales reciclados. Fue allí cuando nació Tras Cartón, como un emprendimiento orientado a la elaboración artesanal de productos de diseño a partir de distintos materiales recuperados (cartón, papel, vidrio, plástico y otros). En 2013, Tras Cartón ganó el premio revelación en la importante feria “Puro Diseño” y desde entonces no paró de crecer. Inicialmente destinado a los más jóvenes, el programa se fue ampliando y robusteciendo hasta convertirse en una alternativa capaz de multiplicar y valorizar el trabajo de los recuperadores urbanos.

Por otra parte, la transición del viejo esquema cartonero –aquel que se conformó espontáneamente durante los peores años de la crisis– a un sistema organizado de trabajo no fue sencillo. Hubo que redefinir roles, con sus consecuencias en términos de jerarquías al interior del mundo cartonero, establecer una disciplina laboral y configurar normas de conducta y sanciones que fueran aceptadas por todos. No debe olvidarse que la base social de la que estamos hablando se nutre del subsuelo de la patria, los invisibles, los excluidos, el producto de décadas de descomposición social. Por lo que eran habituales altos niveles de violencia, mucho consumo de alcohol y drogas y un fuerte machismo en las relaciones. La mayoría no había tenido nunca un trabajo estable. Ciertamente, había un crecimiento y una madurez en el grupo cartonero que venía asumiendo responsabilidades desde hacía unos años. Pero ahora se trataba de incorporar a miles sin experiencia organizativa a un sistema laboral formal, gestionado en gran medida por ellos mismos. Los innumerables conflictos que se sucedieron en las rutas fueron parte de una necesaria transformación subjetiva e intersubjetiva, una revolución personal y moral. En las entrevistas realizadas abundan los relatos que destacan el cambio de vida a partir de la incorporación al movimiento o a “El Amanecer”.¹⁰

Luchamos por un cambio social

La organización gremial del trabajo cartonero fue el eje predominante de los primeros diez años del MTE. Como vimos, en un principio tuvo fines defensivos (resistir el atropello policial) y luego pasó a la ofensiva (incorporación al sistema formal de reciclado). Sin embargo, pese a la centralidad que la construcción en torno al trabajo tuvo para el MTE, hay que mencionar que desde el inicio impulsó otro tipo de actividades o participó en ellas. En esta sección, se detallan algunas que son habituales en movimientos territoriales, tales como asistencia alimentaria o acompañamiento a tomas de tierras. En la siguiente, se hace foco en un tipo de acción que fue, en cambio, extraña a otras experiencias populares: los escraches a prostíbulos y talleres textiles clandestinos. Ambas dejaron secuelas en la historia del movimiento,

¹⁰ Ver, por ej., las entrevistas a María Castillo (Fontana, Liaudat y Tóffoli, 2023) y a Jackie Flores (Liaudat, Fontana y Tóffoli, 2023a).

tanto en temas que luego se retoman con mayor fuerza (por ej., tierra y techo), como en sectores que más adelante fueron organizados como ramas productivas –textil– y en aprendizajes respecto a caminos inconducentes.

Entre las primeras actividades del MTE hubo un trabajo barrial similar al de otras organizaciones. Se realizaron actividades para niños y adolescentes, tales como talleres de boxeo en Villa Fiorito, apoyo escolar y excursiones a la piscina de la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo, se editaron algunas publicaciones periódicas como “Nuevos Aires” (2003) y “Noticias MTE” (2005). Esta incipiente prensa, precaria y discontinuada, difundía las actividades internas del movimiento y, sobre todo, era un instrumento para la organización gremial. Así, por ejemplo, junto al número uno de “Nuevos Aires” venía un carnet de adhesión para que los cartoneros manifestaran su interés en sumarse al movimiento. Mediante ese carnet, quienes se inscribían ingresaban en la base de datos de la guardia legal, lo cual implicaba, básicamente, el acceso a los teléfonos de los abogados/estudiantes y la red de protección que se activaba si eran detenidos o violentados por la policía.

Domingo 26 de Noviembre de 2006 - 12 hs.
en el - **BARRIO MIRO** - (Cno. Negro y Quesada
Villa Fiorito -Lomas de Zamora

**FESTIVAL POR
TIERRA Y TRABAJO**

a beneficio de la Salita de Primeros Auxilios Barrio Miró
Y Comedor "La Estrella" M.T.E.

**Si al Barrio - Si a los Cartoneros - Si a la Expropiación
NO al Basural - NO al CEAMSE - NO a la Exclusión - NO a la Miseria**

**Bandas Invitadas; Exposición de videos y fotografías historia
del M.T.E. y Barrio Miró; Choris, Tortas fritas y Bebidas**

ORGANIZAN

M.T.E. **BARRIO MIRO**
Movimiento de Trabajadores Excluidos Comisión de Vecinos

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
BONO CONTRIBUCIÓN
\$ 3.00

Se Suspende
por lluvia

Imagen 6. Volante del Festival por Tierra y Trabajo en barrio Miró (noviembre de 2006). Fuente: archivo de Martín De Mingó.

También se prestaba apoyo alimentario mediante comedores y merenderos. Recuérdese que la historia del MTE inició precisamente con una olla popular en el Abasto porteño. Pues bien, esa comida nocturna se mantuvo desde 2002 hasta 2009 en distintas sedes alrededor del sitio original. Ese último año fue interrumpida luego de que el Poder Judicial ordenara desalojar el local de la Asamblea de Almagro –sobre calles Medrano y Sarmiento– donde funcionaba, desde hacía unos años, la olla popular. En la resistencia al accionar policial fueron detenidos Juan Grabois, Tiziano Borghi y Rafael Nejamkis. Los cartoneros concurren masivamente a la comisaría para reclamar por su liberación. Esta manifestación espontánea señaló el grado de legitimidad, identificación y afecto que se había logrado para entonces entre militancia y bases del MTE.

Por otro lado, se abrieron circunstancialmente merenderos o comedores en las viviendas de cartoneros de Villa Caraza y Villa Fiorito. Es común, aunque pueda resultar impensable para quienes pertenecen a las clases media o alta de la sociedad, que en los barrios pobres las mismas casas de los vecinos se conviertan, en determinados horarios del día, en espacios comunitarios. Esta práctica extendida da cuenta de una precariedad y de una grandeza: la precariedad de un Estado ausente, que no cuenta con espacios adecuados para la asistencia social o la vida barrial, y la grandeza moral de quienes ponen el bienestar colectivo por encima del individual. Sin embargo, esta situación, a su vez, se ha prestado para abusos de distintas partes: vecinos que actúan como “dueños de los comedores” definiendo quién puede ingresar y quién no o capitalizando políticamente el acceso al recurso estatal; organizaciones que utilizan las viviendas precarias de los vecinos como locales propios; y el Estado que usufructúa esas mismas casas particulares como centros de asistencia social, sin necesidad de invertir en infraestructura. Por tales razones, sumado a la inestabilidad que implica el uso de espacios privados, el MTE definió, luego de algunas experiencias iniciales, no usar como locales del movimiento las casas particulares de los compañeros y compañeras.¹¹

Otra actividad común a distintos movimientos con inserción barrial es la intervención en conflictos territoriales. La falta de acceso

¹¹ Como veremos en los capítulos 5 y 6, con el aumento de la pobreza desde 2016, la creación de la Rama Sociocomunitaria del MTE en 2018 y, especialmente, durante la pandemia de 2020 y 2021, esta definición quedó relativizada en su alcance, aunque se mantuvo como principio.

popular a la tierra y vivienda es uno de los problemas más acuciantes en Argentina y el mundo. En la actual etapa capitalista, dominada por el *laissez faire*, se avanzó hacia un mercado inmobiliario cada vez más concentrado y excluyente. El modo en que esto afectó a las distintas clases sociales es diferente. Por caso, mientras que las clases medias de las grandes ciudades enfrentan el dilema de moverse hacia los suburbios –con el costo de tiempo y dinero de un largo viaje diario– o transformarse en inquilinos permanentes, los sectores populares deben decidir entre el hacinamiento o la ocupación ilegal de tierras. En promedio, una de cada dos nuevas viviendas en los países pobres se crea en asentamientos informales. Nuestro país no escapa a esta regla, por lo que prácticamente todas las agrupaciones con trabajo barrial en un momento u otro afrontan la tarea de tener que acompañar luchas en torno al acceso a la tierra.

Rara vez las organizaciones populares impulsan una toma de tierras y, cuando sucede, lo más habitual es que se busquen terrenos ociosos del Estado. Por lo general, suelen encontrarse con el hecho consumado de una ocupación, a la que se acompaña proveyendo de los recursos que pueden brindar los movimientos (asesoramiento legal, acceso a medios de comunicación, experiencia en negociaciones, contactos políticos, etc.). La sociedad “incluida” acostumbra escandalizarse por estas acciones, pero al mismo tiempo no ofrece solución para los millones de personas que viven en hacinamiento o en malas condiciones edilicias. Ni siquiera existe una política estatal planificada que prevea el crecimiento vegetativo de la población y dé respuesta anticipada al problema de la vivienda en los distintos sectores sociales. El Estado nacional, desde 2012, ha provisto mediante el PRO.CRE.AR soluciones habitacionales para la clase media (al solicitar propiedad legal de un terreno, un nivel de ingresos estable, garantías, etc.). Una iniciativa loable pero insuficiente. Sobre todo, al dejar afuera a los sectores más empobrecidos, que no tienen trabajos formales ni posibilidad de acceder legalmente a la tierra. Mientras no haya una política al respecto, las tomas de tierras serán una realidad con la que convivir.

El primer contacto directo del MTE con esta problemática se dio a raíz de una ocupación en 2006 en el barrio Gabriel Miró de Villa Fiorito. Los ocupantes se acercaron pidiendo el apoyo a la joven militancia, que solidariamente se sumó a colaborar. El conflicto se prolongó en el

tiempo, por lo que la organización comenzó a desarrollar actividades dentro de la toma. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 2006 realizó un Festival por Tierra y Trabajo con la idea de juntar recursos para construir una sala de primeros auxilios. Puede notarse en el título del evento que se buscó unir el problema de la tierra al del trabajo, principal eje organizador del MTE. Entre quienes participaron de esa toma se encontraba una vecina, “Fany” Espinola, quien más adelante se convirtió en una de las principales impulsoras y referencias de la rama textil. De hecho, el principal polo productivo de este sector funciona desde 2015 en el Barrio Miró. En este, como en otros casos, se observa cómo las distintas luchas se conectan por hilos subterráneos.

La segunda intervención en un conflicto territorial se dio en 2007 en el barrio A.C.U.B.A. de Villa Caraza. Al igual que en la situación anterior, se trataba de la zona de influencia del MTE alrededor del eje cartonero de zona sur. Esta ocupación fue más importante que la anterior en volumen y conflictividad. Seiscientas familias ingresaron en marzo de ese año a un terreno que la última dictadura militar había cedido a la Asociación de Curtiembrenos de Buenos Aires con la finalidad de construir una planta de tratamiento de efluentes. Ni los empresarios ni los gobiernos de la democracia hicieron nada en 25 años para que se cumpliera ese convenio. La toma de tierras fue resistida por la cámara empresaria y, con más virulencia, por los vecinos del lindante barrio de clase media llamado “Los Tanos” (Villa Girardino). La tensión con estos últimos llegó a tal punto que, en 2009, se cobró la vida de Héctor Daniel Contreras, un cartonero de 16 años de edad, herido con arma de fuego en el marco de una discusión. Con el transcurso del tiempo, la ocupación pasó por cinco intentos de desalojo. Todavía una década después la precariedad de la toma provocó un incendio en unas casillas de madera que se cobró la vida de cuatro niñas. Recién en 2018, con la sanción de la Ley de Integración Socio Urbana en la que el MTE tuvo un rol protagónico, pudo ser formalizada la tenencia de la tierra de parte de los ocupantes.

A partir de este conflicto el MTE generó dos vínculos importantes. Por un lado, con la ONG internacional TECHO. Creada por el jesuita Josse Van der Rest, esta organización se propone a crear viviendas de emergencia, muy baratas y fáciles de construir, y mantiene una postura de defensa de la ocupación de terrenos. Cuando desembarcó en

Argentina en 2003, fue motivo de crítica de parte de distintos sectores militantes. Se los veía como “chetos”, jóvenes de clase media alta o alta, que les construían casillas miserables a los pobres, reproduciendo la precariedad y sin dar una respuesta integral al problema de la tierra y la vivienda. A partir del encuentro en el territorio, el MTE logró superar esos prejuicios y valoró su trabajo como una respuesta inmediata, para luego dar discusiones de fondo. Gracias a ello, pudo establecer una relación de respeto mutuo que, con el tiempo, se demostró fructífera. Por otro lado, con el movimiento estudiantil independiente de la UBA, con el cual no tenían relación desde sus vínculos con NBI entre 2002 y 2003. El vínculo en particular con la Corriente Julio Antonio Mella, referenciada en Itai Hagman, fue importante, ya que de allí se incorporaron en 2012 los primeros refuerzos militantes que se agregaron al núcleo fundador del MTE. A partir de esta relación se inició un proceso de acercamiento con “La Mella” y los otros grupos políticos que constituyeron Patria Grande en 2014 (ver cap. 4).

Para finalizar, hay que destacar que, en la segunda década de historia del movimiento, la reivindicación de tierra y vivienda se volvió central. De alguna manera, como vimos, esa ampliación de la agenda ya estaba incluida desde los orígenes en la organización. Por ello, incluso en el período dominado por una acción de tipo gremial, el MTE no estaba guiado exclusivamente por una lógica del interés propio en busca de mejoras para los cartoneros. Sino que, en el proceso, se buscaba crear nuevos lazos de solidaridad que excedieran los límites de lo reivindicativo del propio sector. De ahí que la consigna en los volantes de la época era la lucha por un cambio social y no solo por las mejoras laborales de los cartoneros. En ese sentido, hay que destacar que la organización popular, en este y otros casos, colabora con la construcción de un “nosotros” comunitario que engloba a quienes padecen exclusiones o sometimientos en general. Es en ese marco de inclusión de otras problemáticas que adquiere sentido una importante línea de acción que veremos a continuación y que resultó inédita entre las experiencias del campo popular de la Argentina.

Por una patria sin esclavos ni excluidos

El 30 de marzo de 2006 una noticia horrenda inundó los portales de prensa. El incendio de un taller textil clandestino en el barrio de Caballito (CABA) dejaba un saldo trágico de seis muertos, incluyendo dos niños. La tragedia, de por sí espantosa, se agravaba con el descubrimiento de las condiciones laborales y de vida que tenían las 66 personas que habitaban y trabajaban hacinados en el taller. De los cuales, además, 56 eran inmigrantes indocumentados. Detrás de este caso, quedó expuesto que buena parte de la indumentaria que se utiliza en el país era producida en situaciones inhumanas. Es decir, que existía una red de talleres textiles clandestinos que abastecía a las marcas comerciales más conocidas.¹²

La Alameda fue la organización pionera en denunciar esta situación. Se trata de una agrupación nacida de la Asamblea Popular “20 de diciembre” del barrio Parque Avellaneda (CABA), una de las decenas de reuniones vecinales que se multiplicaron luego del estallido social del 2001. Al igual que en otros casos, la primera actividad del grupo fue la asistencia alimentaria. Al poco tiempo, ocuparon una casona que se encontraba en estado de abandono frente al parque. Allí funcionaba un bar llamado “La Alameda”, de donde sacaron el nombre para el colectivo militante que surgió de la asamblea. Ya con un local físico, comenzaron a diversificarse hacia distintas actividades comunitarias: biblioteca, clases de apoyo escolar, asesoramiento jurídico gratuito, etc.

En ese marco fue que tomaron conocimiento de la penosa condición en que trabajaban costureros bolivianos en los talleres textiles de la zona. Así fue como, a poco de haberse constituido, la agrupación adoptó como tema central la problemática de la explotación y las condiciones de vida en los talleres textiles. El concepto con el cual abordaron la situación fue el de “esclavitud laboral”. Esa definición del problema, anclada en la idea de trata de personas, es fundamental para entender el puente que luego realizaron con la problemática de la prostitución. En efecto, esta mirada orientó el tipo de acciones que realizaban y los apoyos institucionales que buscaban movilizar.

¹² Para dar cuenta de la magnitud del fenómeno, podemos retomar a José Luis González, encargado del Centro de Demostración de Indumentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien señala que “el 90 % de la producción [textil] tiene algún componente ilegal o clandestino” (Pascucci, 2010: 12). Además de ese artículo, sobre los primeros pasos en la agremiación de ese sector textil, ver Barattini (2010).

En ese marco, se impulsaron tres líneas de trabajo. La primera, que con los años adquirió preponderancia, apoyaba la creación de cooperativas y redes de comercio justo como forma de dar respuesta al problema laboral de las costureras “liberadas de la esclavitud”. Una segunda se vinculaba con la actividad gremial en fábricas y talleres de la industria textil. Para ello, La Alameda creó en 2005 la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), instrumento sindical pensado para defender los derechos de los trabajadores del sector. Estas dos líneas de militancia –una de tipo cooperativo, la otra gremial– eran similares a las de otras agrupaciones. En cambio, la tercera fue innovadora: el uso del escrache como medio de denuncia contra marcas comerciales de ropa y, luego, contra prostíbulos.

Como en otras situaciones, todo comenzó a través de un trabajo de denuncia por vía institucional. En un relevamiento de talleres textiles clandestinos, se lograron identificar unos setenta. Luego de lo cual se exigió a distintas dependencias de gobierno el cumplimiento de las normativas laborales y de protección social. La inacción estatal, sumado al contexto de visibilidad de la problemática tras el incendio de inicios de 2006, condujeron a La Alameda y la UTC a iniciar una campaña de escraches contra los talleres clandestinos y reconocidas empresas de ropa que eran abastecidas por ellos. Se buscaba dañar la imagen de las marcas como forma de presionar hacia un cambio de lógica. Entre 2006 y 2007 estas acciones tuvieron un cierto impacto mediático y lograron instalar esta problemática en la agenda pública, constituyendo a La Alameda y a su dirigente Gustavo Vera como las principales referencias públicas.

En ese contexto, en 2008 la agrupación recibió información de un cabaret en el barrio de Flores (CABA) en donde una mujer denunció que estaba retenida. Decidieron utilizar el mismo método de acción directa que venían usando en relación con los talleres textiles. Pero existía un cierto riesgo en “escruchar” un prostíbulo. Habitualmente quienes regenteaban estos lugares tenían alguna relación con la venta de drogas ilegales y con las autoridades policiales de la zona (que hacían la vista gorda a cambio de algún soborno). Por esa razón, Alicia Montoya, referente de la cooperativa de cartoneros El Álamo y con buena relación con el MTE, les pidió acompañamiento para esa acción. Montoya había sido parte de La Alameda y continuaba acompañando

las acciones que realizaban. El MTE decidió sumarse y, finalmente, el 9 de abril de 2008 realizaron de conjunto un escrache a un prostíbulo ubicado en las avenidas Directorio y San Pedrito. El balance de esa primera actividad fue positivo, ya que la mujer retenida pudo ser liberada.

A partir de ahí, La Alameda decidió dar una vuelta más al tema de la esclavitud laboral y comenzó a incluir la problemática de la trata con fines de prostitución. Fue el puntapié para una sucesión de escraches a burdeles que funcionaban en distintos puntos de la ciudad. Téngase en cuenta que en esos años adquirió estado público el caso Marita Verón gracias a la acción denodada de su familia, en especial de su madre, Susana Trimarco.¹³ Hasta entonces era común que hubiera prostíbulos abiertos a plena luz del día y a la vista de los transeúntes de las ciudades. Las “whiskerías”, “puticlubs” o “clubes nocturnos” estaban naturalizados como parte del paisaje urbano y de la iniciación sexual de los hombres de todas las clases sociales. Denunciar esos sitios y prácticas, e incluso la problemática de la trata, no eran temas incorporados a la agenda de los movimientos sociales ni de los partidos políticos.

La participación del MTE en estas acciones organizadas por La Alameda, así como la de organización gremial en sectores de la economía informal (unos, los cartoneros; otros, el sector textil), condujo a una creciente afinidad entre ambas agrupaciones, al punto que llegó a considerarse la posibilidad de una confluencia. El 1 de mayo de 2009 fue la fecha elegida para lanzar este espacio conjunto que nunca llegó a adoptar un nombre unificado (en los panfletos se firmaba “MTE-La Alameda”). La idea compartida era que había una porción de la población que estaba privada del acceso al trabajo, en la cual había trabajadores excluidos y otros esclavizados. De ahí el lema “Por una patria sin esclavos ni excluidos”, utilizado por ambas organizaciones y que identificó al MTE por muchos años. La noción de esclavitud refería fundamentalmente a la línea de acción de La Alameda contra la trata de personas, mientras que la exclusión era la perspectiva que trabajaba el MTE.

¹³ Marita Verón fue secuestrada por una red de trata en abril de 2002. Su familia la buscó desesperadamente, pero nunca volvió a aparecer. En octubre de 2007, Susana Trimarco, junto a su esposo, Daniel Verón (fallecido en 2010), impulsaron la Fundación María de los Ángeles para brindar asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas. Gracias a sus esfuerzos, en abril de 2008 se sancionó la Ley 26 364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y en agosto el gobierno nacional creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas.

Sin embargo, al poco tiempo se expresaron diferencias en torno a la metodología y el enfoque que priorizaban ambas organizaciones. Discrepancias que estuvieron desde el origen, pero que se acentuaron a medida que el MTE adoptó un perfil gremial cada vez más claro y La Alameda acentuó su trabajo de denuncia en torno a la trata de personas (con fines sexuales o laborales) y el cooperativismo como respuesta. Además, el MTE comenzó a relativizar el uso de la noción de esclavitud en el sector textil por tres motivos. Primero, observaron que lo más común eran situaciones de abuso total o reñidas con la ley, pero que no podían ser consideradas esclavitud en sentido estricto. Segundo, los escraches no lograban desarticular el proceso de tercerización productiva que se encontraba por detrás de la proliferación de los talleres clandestinos. Por el contrario, tenían entre sus principales damnificados a los costureros y costureras, a quienes la clausura de los talleres no les significaba una solución a las extremas condiciones de precariedad laboral, sino que, la mayoría de las veces, los inducía a recaer en el mismo circuito del cual habían sido, en principio, “liberados”.

En tercer lugar, identificaron, al igual que entre los cartoneros, a un actor intermedio que lucraba con el trabajo de otros, pero que es parte del mismo grupo social y muchas veces compartía situaciones de explotación y condiciones de vida. Entre los cartoneros, eran los transportistas; en el sector textil, era el que había juntado un pequeño capital y podía montar un taller textil contratando a otros costureros. Es decir, solían ser trabajadores con roles de liderazgo, gestión y organización. Por lo que escrachar a ese grupo intermedio para el MTE no tenía ningún sentido e implicaba perder potenciales compañeros con capacidades de dirección. De este modo, el movimiento se alejó de la práctica de la denuncia por considerar que partía de un error de diagnóstico y provocaba un abordaje policíaco que revictimizaba a las víctimas. Mientras tanto las grandes marcas, más allá de algún lavado circunstancial de imagen, no modificaban sus circuitos de abastecimiento. Estos aprendizajes fueron clave cuando el MTE decidió impulsar en 2015 su propia construcción en el sector textil, siendo la primera de las ramas laborales en que se diversificó la organización (ver cap. 5).

Pese a las diferencias con La Alameda, fue el vínculo principal del MTE entre 2008 y 2011. Desde entonces, las relaciones entre ambos grupos pasaron a un segundo plano. Luego de la creación de la CTEP,

la relación gremial más relevante pasó a ser con el Movimiento Evita. Y el vínculo político más importante fue el que se comenzó a tejer con las agrupaciones que luego constituyeron Patria Grande. Aunque cabe señalar que Gustavo Vera fue uno de los cuatro dirigentes que conformaron la mesa promotora de la CTEP y en un inicio La Alameda quedó como encargada de constituir la rama textil de la confederación.

Antes de cerrar la reconstrucción de las relaciones entre el MTE y La Alameda, es preciso mencionar una última denuncia conjunta a prostíbulos que alcanzó una enorme resonancia pública. En julio de 2011, La Alameda decidió denunciar a Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de la Nación, por el funcionamiento de prostíbulos en cinco departamentos de su propiedad. El abogado que patrocinó la denuncia fue Juan Grabois, por entonces un joven de 28 años, graduado unos meses antes. Fue la primera vez que su nombre sonó a los oídos de gente fuera del ámbito de las organizaciones populares. Zaffaroni era la cara más destacada de la renovación impulsada por el presidente Néstor Kirchner en el órgano máximo del poder judicial. No solo era una figura muy prestigiosa en lo académico y jurídico, sino que tenía un ascendiente muy grande sobre los sectores progresistas de la política y la sociedad. Por lo que los medios opositores al gobierno amplificaron la denuncia para dañar la imagen del magistrado y, por extensión, del oficialismo. Mientras que la prensa afín al gobierno kirchnerista e identificada ideológicamente con el juez atacó duramente la denuncia y, por extensión, a La Alameda y al MTE.¹⁴

Rara avis

Hacia el 2011, tras una década de existencia, el MTE había logrado organizar a unos dos mil cartoneros de la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Todavía mantenía un reducido núcleo de militantes de clase media, parte de los que iniciaron la organización, más unos pocos que se sumaron en los primeros años. Solo siete personas. Pero en el recorrido se había consolidado un grupo de dirigentes cartoneros, con Sergio Sánchez a la cabeza, y una estructura organizativa sostenida en

¹⁴ En el proceso judicial se comprobó que, en efecto, los prostíbulos existían, pero Zaffaroni negó tener conocimiento de ello. En 2013, su apoderado para la gestión de los inmuebles, Ricardo Montivero, pagó una multa por violar la Ley de Profilaxis, asumiendo su responsabilidad por administrar los departamentos.

gran medida por ellos mismos. En ese lapso temporal, las otras asociaciones del sector conservaban más o menos los márgenes de desarrollo desde su origen. Mientras que los movimientos piqueteros, protagonistas del auge de movilizaciones en torno al 2001, estaban en retroceso (en particular, aquellos que se mantenían fuera del kirchnerismo). Es decir, en tanto otros decrecían o se mantenían, el MTE se expandía. Su emergencia como un actor de peso dentro de las organizaciones populares argentinas –plasmado en la fundación de la CTEP– llamó la atención a más de uno. ¿Cómo explicar este crecimiento a contrapelo del entorno organizativo que trabajaba sobre los mismos sectores excluidos de la sociedad? ¿Qué características diferenciales tuvo que le permitieron irrumpir en la escena pública y que sentaron las bases de su expansión posterior?

Un primer elemento, indudablemente, fue la organización en torno al trabajo y no a la desocupación. Ese factor fue decisivo en la diferenciación con los movimientos piqueteros, articulados inicialmente alrededor de los planes de subsidio al desempleo. En ello y en otros aspectos fueron determinantes las características de la base de la organización: los cartoneros. Se trataba de un sujeto social con una actividad económica clara. Desde esa evidencia, surgió el concepto de exclusión como forma de dar cuenta de la existencia de trabajos no reconocidos y, por tanto, fuera del alcance de los derechos laborales y la representación sindical tradicional. Esa noción por la negativa aportó el fundamento material, positivo, para la ampliación de la población a organizar, ya que sobre esa base surgió el concepto de economía popular que reorganizó a gran parte del movimiento popular argentino en la segunda década del siglo y que dio lugar a una etapa nueva, de mayor expansión, para el MTE.

Un segundo componente fue la definición del movimiento como instrumento para la lucha reivindicativa. Las cuestiones de política partidaria quedaron en buena medida fuera de sus discusiones durante los primeros diez años de su formación: en parte, por ciertas marcas generacionales de la militancia de 2001 contra los partidos tradicionales; en parte, por el rechazo a la política de la mayoría de los cartoneros. Como sea, esto le permitió concentrar su energía y mantener el eje de su acción en la defensa y mejoramiento de las condiciones de vida de su base social. Cuando llegó la hora de establecer vínculos con la es-

estructura partidaria de Patria Grande, desde 2014 en adelante, el MTE defendió el principio de mantener una separación entre lo reivindicativo y lo político. Y la misma lógica trató de instalar, con mayor o menor éxito según el caso, en la construcción de las herramientas gremiales más amplias, como la FACCyR, la CTEP o la UTEP.

Estos dos primeros elementos tuvieron consecuencias en el método de trabajo. No se trataba de crear unidades productivas de cero, sino de montarse sobre las estructuras económicas existentes en la marginalidad. En ellas existe un orden espontáneo de la clase trabajadora excluida, la cual tiene sus tiempos, formas de circulación y reconocimiento. Se trataba de entender ese ritmo interior y darle un cauce superador, más que imponer dinámicas organizativas generadas en teorías o políticas externas al sujeto, sus valores o sus intereses. Como se señaló para el caso de los choferes y los talleres textiles, más que fruto de una genialidad, lo fue de un aprendizaje producto del ensayo y error. En todo caso, hubo una lucidez en la apertura mental y la escucha. Prestar oído y esforzarse por entender a quién piensa y vive de un modo distinto no es sencillo. La impaciencia de una militancia –muchas veces juvenil y de clase media– por obtener resultados rápidos y visibles, según los propios parámetros de clase, suele forzar los procesos y llevarlos al fracaso. Este giro en el MTE implicó una búsqueda consciente por poner en el centro a los pobres, otorgándoles protagonismo.

Entonces, ¿cuál era el rol del militante? Martín de Mingo, uno de los cinco locos, lo resume en “acompañar, no reemplazar”. Y señala dos desvíos igual de problemáticos. Por un lado, el *basismo* consistente en desmerecer el rol organizativo y de conducción de la militancia y suponer que la base social espontáneamente se expresa y organiza. Normalmente, estas nociones van de la mano con la pretensión de formas horizontales de organización y una idealización del sujeto que se pretende organizar. Pero rara vez la proclamada horizontalidad se cumple y en los hechos actúan conducciones encubiertas en manos de los militantes de clase media, que al no estar transparentadas transcurren por vías informales. Por otro lado, la desviación opuesta, el *vanguardismo*, consistente en que un grupo militante se autoproclame representante de un sujeto explotado u oprimido. Deciden, actúan y hablan en nombre de una base social que muchas veces ni se entera de ello. Este desvío suele emparentarse con concepciones organizativas

muy verticales en las que representación, conducción y vanguardia se identifican. El MTE pretendió recorrer un camino intermedio: se reconoció un rol clave en militancia, en cuanto a la orientación y organización, pero desde el inicio realizó esfuerzos para lograr que la dirigencia surgida de la propia base social fuera quien condujera los procesos.

Esto presupone una exigencia ética para la militancia. No pocas veces en los desvíos anteriores pesan las aspiraciones personales –conscientes o inconscientes– de figurar en las primeras líneas de la organización o en la escena pública. Ceder el protagonismo, por caso, en los puestos de gestión pública, en las candidaturas o en los viajes, supone una renuncia para quienes provienen de la clase media profesional. Este afán democratizante, de empoderamiento popular, no era extraño a otras experiencias organizativas emanadas de la crisis de representación del 2001, pero muchas veces quedaba en lo discursivo. Al igual que otra prerrogativa común a sectores progresistas y peronistas: el rechazo al enriquecimiento personal y a la cultura del consumo. Sin embargo, unos y otros tendieron a desoír este mandato en una época dominada por los valores neoliberales. Para el MTE este principio explicitado como ética de la austeridad implica que su militancia debe, de mínima, dejar de lado los signos de ostentación de clase y, de máxima, aprender a vivir con humildad, sin pretensiones materiales.

Ahora bien, si ninguna de estas prerrogativas son exclusivas del MTE, ¿por qué su reducido núcleo militante fue más consecuente con ellas que otras agrupaciones contemporáneas? Más allá del plano individual, de las razones psicológicas que puedan ayudar a explicarlo, esta lógica organizativa se configuró en una dialéctica entre militancia y cartoneros al interior del movimiento y su interacción con el contexto, las organizaciones y los rasgos de su época. Del juego de esas interrelaciones surgió la diferencia, la novedad. El campo popular, especialmente en años de crisis, es un espacio de experimentación donde emergen y se prueban permanentemente distintas fórmulas como resultado de diferentes intersecciones entre ideas, intereses, condiciones materiales y contexto. Muchos de esos experimentos quedan en el papel, otros fracasan en sus primeros pasos, algunos terminan mimetizándose con modelos anteriores y unos pocos sobreviven abriendo nuevos caminos. El MTE fue sencillamente uno de esos.

Si esos fueron los rasgos diferenciales de su dinámica organizativa, ¿cuál fue su matriz formativa, su mirada ideológica? ¿Existía una concepción estratégica? En los documentos de los primeros años se resume en la idea de construcción de poder popular. Esta noción, compartida con otras experiencias contemporáneas, refiere a la acumulación de fuerzas en organizaciones autónomas del pueblo trabajador. Quizá como rasgo diferenciador puede destacarse un fuerte clasismo en su concepción, frente a otras organizaciones que incluían construcciones en sectores de clase media (estudiantiles, culturales, etc.) que, habitualmente, terminaban imprimiendo el ritmo de la organización. En cambio, el MTE se afirmaba en el sujeto popular como prioridad absoluta. En parte, esa concepción derivaba de lecturas de los clásicos del marxismo que realizaban entre los mismos militantes. Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao Zedong, el Che Guevara, Franz Fanon, entre otros, fueron estudiados en rondas de lectura que realizaron en los primeros años del movimiento. No obstante, estos autores aportaron a la interpretación del capitalismo y la sociedad de clases, del Estado y de la ética militante, antes que a una identificación con el marxismo.

Al no pertenecer a una ortodoxia doctrinaria y conceder primacía a la praxis sobre la discusión teórica, fue más fácil integrar en esa matriz otros conceptos y autores que sirvieran a las exigencias prácticas que tenían en su abordaje de la exclusión social. Así pues, otras vertientes fueron incorporadas en sus reflexiones, tales como el pensamiento nacional popular y el ambientalismo, el anarquismo y el cristianismo. Esta diversidad de fuentes fue común a otras organizaciones creadas por la generación del 2001 y abrevia en la crisis ideológica de los noventa. Tal vez la novedad fue la audacia de plantear nuevas respuestas a viejos problemas; es decir, la elaboración original de ideas. Dentro del MTE, la figura que destacó en ese sentido fue la de Juan Grabois, quien desde muy joven comenzó a teorizar acerca de la economía popular, el capitalismo de exclusión y la necesidad de actualizar la estrategia de organización acorde a ello.

¿Cuáles fueron las referencias que más gravitaron en esta etapa del movimiento? Indudablemente, los procesos latinoamericanos; en particular, la revolución bolivariana. Por supuesto, esto se explica en un marco de avance del proyecto de unidad regional. De hecho, el MTE fue parte de los contingentes que viajaron a Mar del Plata en 2005 cuando

se puso fin a la iniciativa norteamericana del ALCA. Para la organización, al igual que otras de la generación del 2001, la impronta rebelde y la guía a seguir estaba en otros países y liderazgos, especialmente en Hugo Chávez, antes que en la Argentina del kirchnerismo.¹⁵ En esta lectura, para el caso del MTE, debe incorporarse también la exterioridad respecto al Estado en que se encontraba el movimiento. Situación que tenía raíces en la misma base cartonera, expuesta a la peor cara de lo estatal: la coima policial, la asistencia clientelar, la salud o educación en pésimas condiciones. Desde esas coordenadas no era extraño que lo estatal apareciera como algo más bien antagónico. Dicho esto, vale aclarar que igualmente para el MTE fue un escenario de disputa desde un inicio, primero en el marco de la sanción de leyes, luego en el ámbito de la cogestión del sistema de reciclado. Solo con el tiempo, y en ello pesó también la referencia latinoamericana, comenzó a cambiar la percepción antiestatal e incorporar la idea de que, además, se debía pelear desde dentro del Estado.

¹⁵ Entre la militancia argentina existía originalmente una cierta desconfianza hacia Chávez por su origen castrense. Además, los primeros años de gobierno (1998-2001) no tuvieron la radicalidad de los que siguieron al intento de golpe de Estado de abril de 2002. El documental "La revolución no será transmitida", dirigido por Kim Bartley, fue clave para cambiar la percepción sobre el proceso venezolano. Estrenado en septiembre de 2003, tuvo una creciente circulación en los años posteriores en contextos de formación militante (téngase en cuenta que el uso de internet estaba lejos de lo que es hoy, por lo que el documental circulaba en buena medida de mano en mano). Finalmente, el No al ALCA de noviembre de 2005 fue el momento en que la figura de Chávez se consagró como el líder latinoamericano indiscutible de esta etapa (ocupando el lugar de un Fidel Castro ya envejecido).

Capítulo 3

LA EXPANSIÓN

Los dos lados de la muralla invisible

A lo largo de la primera etapa de la pos convertibilidad (2003-2008), los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández buscaron impulsar un modelo de crecimiento económico inclusivo (en la jerga oficial, “desarrollo con inclusión social”) basado en el esquema del “todos ganan”: empresariado nacional fuerte, trabajadores con derechos y mediación de un Estado presente. La restitución de derechos laborales constituyó uno de los principales ejes de la agenda gubernamental, que buscó revertir la tendencia previa hacia la precarización y desempleo de la mano de obra. En los hechos, la reconversión de la política laboral produjo un aumento sostenido del empleo formal, revitalizó el rol de los sindicatos y puso en funcionamiento una batería de medidas que redujo el empleo no registrado. Pero, a pesar de los esfuerzos, a partir de 2010 la caída del empleo no registrado permaneció prácticamente estancada hasta la finalización del ciclo en 2015 (pasando de casi el 50 % en 2003 a un 34 %). Es decir, un tercio de los trabajadores asalariados estaba excluido de la seguridad social y de otros derechos laborales. Y esos niveles aumentaban si se consideraba al sector de la economía popular (Abal Medina, 2016).¹

¹ Por lo demás, el pico del empleo registrado (público y privado) no superó y se estancó en el 39 % de la Población Económicamente Activa (PEA) (Grabois, 2022: 77). Y la generación de empleo en ese período se estima en seis millones de puestos (el desempleo cayó del 23,3 % en 2002 al 7,3 % en 2010). Por tanto, podemos concluir que en el cenit del período kirchnerista, la porción residual o sobrante y la cantidad de trabajadores sometidos a las distintas formas del precariado, alcanzaba a casi dos tercios de la PEA (incluyendo monotributistas de las categorías más bajas, economía popular, empleadas domésticas, etc.).

El sueño peronista del pleno empleo había reencarnado en un mundo donde la relación entre capital y trabajo se había reconfigurado. La doble crisis, interna y externa, ocurrida entre 2008 y 2009 significó un punto de inflexión que puso en evidencia los límites estructurales del modelo. El conflicto agrario derivado de la frustrada Resolución 125 quebró el “consenso neodesarrollista” con el sector productivo-exportador. Los grandes grupos económicos locales impugnaron la política de apropiación estatal vía derechos de exportación de una parte de la renta extraordinaria procedente del auge de los *commodities* agrícolas. Y la conflictividad alcanzó su punto de no retorno con el impacto de la crisis financiera internacional, que se tradujo en una creciente presión empresarial devaluacionista y en la consecuente caída del poder adquisitivo de los sectores populares mediante inflación de precios.

Desde ese momento quedó claro que no estaban solo en juego márgenes de rentabilidad, sino proyectos de sociedad. Por lo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) intentó gestionar los impactos de la crisis mundial y la intensificación de la puja distributiva a través de un conjunto de medidas progresivas heterodoxas; entre las cuales cabe destacar, en 2008, la finalización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y el comienzo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la expropiación de Aerolíneas Argentinas y, en 2012, de la mayoría accionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), volviendo a quedar la línea aérea y petrolera de bandera bajo control estatal. Estas y otras iniciativas de avanzada dieron lugar a un nuevo marco de alianzas y relaciones de fuerza.

En términos generales, puede hablarse de dos grandes etapas de la política social y laboral del período. En la primera (2003-2008), la restitución de derechos no logró llegar a un importante sector que permaneció excluido de los beneficios obtenidos por los trabajadores formales y sus organizaciones representativas. Las tradicionales herramientas estatales para terciar en la relación capital-trabajo se mostraron parcialmente estériles frente a las nuevas estrategias y capacidades de un poder económico concentrado y globalizado que no dejó de imponer condiciones y fijar límites a los avances redistributivos. La segunda comenzó en 2009, con una cobertura focalizada en los millones de trabajadores que, al decir del MTE y otros movimientos sociales, “se

autoinventaron el trabajo”. La persistencia de la precarización y exclusión laboral en un escenario marcado por la doble coyuntura crítica permitió constatar la insuficiencia de las políticas de empleo. En ese punto, se tornó evidente su carácter no universal. Algo que dio lugar a un cambio en la caracterización del mundo del trabajo “realmente existente”.

La respuesta gubernamental para la inclusión social de los excluidos se encarnó fundamentalmente en dos grandes anuncios que reflejaron un giro en la política social. En agosto de 2009, casi dos meses antes del anuncio de la Asignación Universal por Hijo como política de subsidio directo destinada a los hijos de trabajadores desocupados o en la informalidad, se lanzó el Plan Ingreso Social con Trabajo, más conocido como “Argentina Trabaja” (PRIST-AT). En su primera etapa el programa creó cien mil puestos de trabajo (cifra que llegó a duplicarse) para trabajadores desocupados que debían conformar e integrarse en cooperativas de hasta setenta personas para la realización de obras de mejoramiento en sus barrios.² El PRIST-AT se insertó en el marco de una política estatal de promoción del cooperativismo de trabajo, una senda abierta a mediados de 2003 con el Plan Manos a la Obra. A pesar de que estos últimos dos programas emergieron bajo diferentes contextos, en ambos casos la pobreza y la informalidad laboral ocupaban el centro de la agenda pública.

Si bien el PRIST-AT quedó bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y, al igual que programas anteriores, funcionó al amparo del paraguas normativo de la economía social, conviene hacer dos importantes salvedades. Por un lado, formalmente era un programa del MDS, pero se ubicó por fuera de las secretarías de esa cartera ministerial. En los hechos, se implementó a través de una unidad ejecutora directamente a cargo de la ministra Alicia Kirchner. Lo cual, sumado al manejo discrecional de los funcionarios municipales, se tradujo en la exclusión de la mayor parte de los movimientos sociales (recién ingresaron al programa en una tercera etapa). Por otro lado, el PRIST-AT representó a todas luces el máximo esfuerzo de la política

² Entre 2003 y 2010 se crearon normas y estructuras burocráticas específicas que generaron el marco institucional en que funcionan estas cooperativas. En el plano normativo, desde el Monotributo Social y el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social hasta la Ley Nacional de Promoción de Microcréditos y la Ley de Marca Colectiva. En cuanto a los organismos, desde la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social hasta la creación de la Secretaría de Economía Social, pasando por la jerarquización del INAES.

kirchnerista por pasar de lo asistencial a la promoción del trabajo más allá del empleo asalariado. Sin embargo, como veremos a continuación, el MTE observó severas deficiencias en la concepción de un programa pensado desde el marco teórico de la economía social. Por lo pronto, saltaba a la vista el contrasentido de una política social y laboral que alentaba lógicas de producción alternativas apelando al vocabulario de los organismos multilaterales de crédito (emprendedurismo, capital humano, etc.).

El MTE siguió de cerca el programa e hizo un balance negativo tanto del diseño como de la ejecución. Desde su blog personal, Juan Grabois enumeró los principales problemas anticipando nociones que más adelante lo llevaron a formular la idea de “Estado impotente”: irregularidades en la confección del padrón de beneficiarios, ausencia de un plan maestro de obras, cobros sin contraprestación, obra social ineficiente, falta de provisión de herramientas de trabajo y de capacitaciones. Más que inclusión, advertía el entonces referente de los cartoneros, la proliferación de cooperativas de laboratorio con poco asociativismo real traería consigo “lumpenización masiva y mucha corrupción” (Grabois, 2010). Pero lejos de culpar exclusivamente al funcionariado, Grabois invitó a los movimientos populares a la auto-crítica y remarcó la necesidad de renovar la forma de representación del “pueblo excluido”. El fracaso del programa tenía múltiples causas, entre las que había que incluir la pervivencia de la lógica “punteril” en el seno de las propias organizaciones territoriales. De alguna manera, estas reflexiones presagiaban la emergencia de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En cualquier caso, con el PRIST-AT fue inobjetable la vocación de ampliar y reformular la política social de modo tal de llegar a los sectores más postergados. En un contexto adverso, el giro expresó la preocupación gubernamental por fomentar la “cultura del trabajo” ante la evidente dificultad de lograr la inclusión social de *todos los trabajadores* por vía del crecimiento económico. Lo cierto es que, desde allí en adelante, también a ojos del gobierno parecía claro que el problema de los “núcleos duros de pobreza” no podía resolverse tan solo con políticas laborales que propicien la actividad económica. Al punto de que, tanto en 2009 como en ocasión del lanzamiento del Programa Ellas Hacen (nuevo componente del PRIST-AT), la presidenta Cristina Fernández

hizo alusión explícita a los límites del crecimiento económico como vía de inclusión social (Fernández, 2009, 2013).

Sin embargo, en el gobierno y en los movimientos sociales existían diferentes diagnósticos respecto a las causas del trabajo informal. Desde el punto de vista de las organizaciones, el excluido del trabajo asalariado no era alguien desempleado por razones coyunturales. Más bien, se trataba de un fenómeno estructural del capitalismo en la actual etapa, que encarnaba en una multiplicidad de trabajadores con diversas realidades laborales no contempladas por los sindicatos tradicionales. En cambio, desde el gobierno se creía que más temprano que tarde podrían ser incluidos mediante el empleo formal, por lo que se intentaba contener el fenómeno a través de políticas sociales y de promoción en el marco de la economía social.

A los ojos de los movimientos populares, y del MTE en particular, la crisis internacional vino a mostrar los límites del “proyecto productivista con derrame inducido” y la “imposibilidad de alcanzar el pleno empleo en las sociedades pos-industriales” (Grabois y Pérsico, 2015). El planteo básicamente era que la clase trabajadora había quedado fragmentada entre *integrados* (trabajadores en relación de dependencia, con representación sindical y derecho a la seguridad social) y *excluidos* (trabajadores sin patrón y sin derechos). Nuestro país estaba lejos de ser la excepción y más bien venía a confirmar la regla. En los hechos, la enorme disparidad a nivel de ingresos, condiciones de trabajo y derechos colocaba a los trabajadores informales del *otro lado de la muralla invisible*: aquella que separa a los incluidos de los descartados, a los que tienen voz de los silenciados, a los ciudadanos de primera de los descartados sociales.

Tras una década de alto crecimiento económico, la enseñanza que extraían los movimientos sociales era que la mejoría de los indicadores macroeconómicos “no se traduce en trabajo formal y dignidad” para todos. A esta limitación del proyecto, Grabois y Pérsico (2015) la llamaron la “paradoja del crecimiento”: el aumento sostenido de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el país (Producto Bruto Interno) puede ser un indicador del progreso tecnológico, del aumento de la productividad promedio del trabajo bajo parámetros capitalistas, del incremento de las inversiones, de una mayor rentabilidad empresarial e incluso de la mejoría relativa del salario real, pero

no es garantía de *trabajo digno* para las grandes mayorías populares. La cruda experiencia del descarte les permitió llegar a una sencilla e inobjetable conclusión: “desarrollo y crecimiento no es igual a trabajo y dignidad”. Profundizando el diagnóstico presidencial, el dirigente del MTE advirtió entonces que la expansión de la actividad económica no solo era incapaz de absorber los núcleos duros de la pobreza, sino que más bien tendía a reproducirlos y agudizarlos (Grabois, 2010).

Al encontrarse fuera de los marcos tradicionales de acción y negociación colectiva, las organizaciones de trabajadores excluidos fueron madurando la necesidad de construir una herramienta gremial capaz de representar sus intereses, un sindicato de los trabajadores de la economía popular. De ese impulso nació la CTEP, para “sanar las heridas que dejó el neoliberalismo y que no cicatrizaron en esta etapa de crecimiento económico”; para contribuir a la recomposición del proyecto de vida de los más humildes, fortaleciendo la cultura del trabajo y al reconocimiento público del *derecho al trabajo con derechos*. Esta había sido la premisa número uno del MTE desde sus orígenes y fue también la base desde la que se edificó la CTEP.

Una nueva estrella en el cielo de los pobres

La CTEP se gestó al calor de las políticas sociales y laborales de la segunda etapa del kirchnerismo, pero con una impronta disruptiva que la llevó a no luchar por planes o subsidios sino en pos de los derechos laborales de los trabajadores excluidos. Si el proyecto de crecimiento con inclusión no abarcaba a los excluidos, si las políticas laborales y sociales buscaban atender el problema “con asistencialismo encubierto y recetas de flexibilización progresista”, la CTEP llegó para rechazar la tentación de resignarse a “subsistir como ‘ciudadanos de segunda’ magramente asistidos por el Estado en las periferias del mercado” (Grabois y Pérsico, 2015). Se propuso sembrar organización para fortalecer desde abajo las distintas modalidades de la economía popular *realmente existente*: un conjunto de actividades económicas y prácticas socioculturales que fueron desarrollando los sectores populares cuando *ya no quedaba otra* y en función de atender sus necesidades básicas.

Hija bastarda del capitalismo dependiente, fruto no reconocido de su fáustico pacto con el Dios dinero, la economía popular vino al mun-

do con todos los vicios y desviaciones de su progenitor, pero también con las ventajas y oportunidades de los huérfanos. Creció en la jungla empobrecida del nuevo siglo, en las periferias de la periferia. Sobre ese desértico suelo se fue haciendo a los tumbos, erigiéndose torcida y multiforme. Las asperezas del desamparo engendraron en ella otras prioridades, lejos del lucro y más cerca de la reproducción de la vida. En ausencia del legado patronal de la ganancia y con el imperativo de la subsistencia a cuestas, pudo inventar y cultivar habilidades organizativas, además de las productivas. Como maleza, creció en todos los rincones urbanos y rurales donde el capital confina a los millones que hacen frente al abandono con las armas de su propio trabajo y los escasos y rudimentarios medios de producción que tienen a mano: en los basurales a cielo abierto, en los talleres textiles clandestinos, en las fábricas recuperadas por sus trabajadores, en las ferias populares, en los semáforos y calles céntricas, en las cuadrillas informales de la construcción, en los merenderos y comedores, en la agricultura familiar y campesina...

Sobre ese terreno contradictorio nació la CTEP, que se propuso rebatir el destino marginal que le deparaba a los excluidos la tiranía del mercado. En ausencia del esfuerzo militante, la economía popular se manifestaba casi siempre como una actividad expuesta a distintas formas mafiosas de explotación y resultaba indirectamente subsidiaria de cadenas de valor dominadas por empresas privadas. En palabras de Grabois (2012), “la economía popular liberalizada, privatizada, desregulada, sin Estado, sin derechos sociales, regida por punteros y ‘empresarios populares’ (sin importar el ropaje que se pongan), no es más que una impostura para legitimar una sociedad dual, visceralmente injusta”.

La experiencia primordial del MTE había pasado por impulsar “desde abajo” formas solidarias y fraternas de organización del trabajo cartonero y, al mismo tiempo, propiciar la institucionalización del sector “desde arriba”, sobre todo a través de la creación de sistemas de reciclado que priorizaran el trabajo con derechos por sobre la productividad y la rentabilidad económica. La CTEP era, ni más ni menos, la proyección del mismo desafío a todas las actividades de la economía popular. Si bien la intención de armar un sindicato que agrupara a los trabajadores excluidos había estado siempre presente en el MTE, fue

recién allá por 2010 –en los momentos previos a la conformación de la CTEP– cuando la idea empezó a materializarse. Sucedió de la mano de una nueva conceptualización de la *economía popular* como sector socioproductivo que reúne a trabajadores de distintas ramas, en las que prevalecen rasgos comunes a pesar de las diferencias. Tanto es así que la creación de la CTEP puede verse como la institucionalización de este nuevo concepto.³

En ese tiempo, La Alameda seguía siendo el principal aliado del MTE. Pero la organización cartonera había iniciado un acercamiento con el Movimiento Evita, que se fue consolidando en el marco del conflicto de los movimientos sociales por ingresar al PRIST-AT.⁴ En esos intercambios cada vez más frecuentes, particularmente entre Juan Graboys y Emilio Pérsico, maduró la propuesta de hacer un sindicato de los trabajadores de la economía popular que fuera capaz de cobijar y articular todas las ramas. El MTE armaría la rama cartonera; La Alameda, la textil; el Evita se ocuparía de los cooperativistas del “Argentina Trabaja”; y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNER) expresaría a ese sector emergente de la crisis del 2001. Con esa agenda, el 1 mayo de 2011 se celebró un acto en el histórico Teatro Verdi de La Boca (CABA). Sobre la base de un diagnóstico compartido se resolvió “dar mandato al Consejo Promotor” integrado por Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Gustavo Vera (La Alameda), Luis Caro (MNER) y Juan Graboys (MTE) “de avanzar en la construcción de la CTEP y convocar al acto fundacional para el mes de diciembre” (Declaración del Teatro Verdi).

Sin embargo, finalmente ocurrió algunos meses más temprano de lo previsto. Y el 17 de agosto, en el salón de actos del Hospital Israelita, se aprobó formalmente la fundación de la CTEP. En aquella ocasión, los miembros del Consejo Promotor dirigieron desde el escenario el evento masivo, donde un público compuesto por las distintas organizaciones votó por unanimidad la declaración fundacional. En el escenario donde se acomodó el Consejo Promotor, sobresalía una bandera de la flamante Confederación cuya simbología incluía los colores patrios, las fórmulas

³ La expresión “economía popular” no era una novedad en el mundo académico, donde el fenómeno venía siendo abordado desde mucho tiempo atrás. En particular, por José Luis Coraggio, quien a fines de la década del ochenta comenzó a usar la expresión para referirse a la economía centrada en el trabajo, tal como era practicada por los sectores populares urbanos de América Latina.

⁴ Este conflicto tuvo entre sus emergentes la creación del Frente de Lucha por Cooperativas sin punteros impulsado por sectores opositores al gobierno, entre los cuales se encontraba el FPDS.

“Trabajo con derechos” y “Sin esclavos ni excluidos”, y los logos de la CGT y la CTEP, uno al lado del otro. Esto último reflejaba la vocación de avanzar en la unidad entre los trabajadores incluidos y excluidos; algo que no quedaría en una simple manifestación de buenas intenciones, al definirse esa misma tarde la primera movilización hasta la sede de la central sindical –pautada para el 20 de diciembre– en miras a solicitar la admisión dentro de su estructura orgánica.



Imagen 7. Acto fundacional de la CTEP en el Hospital Israelita (17 de agosto de 2011). Fuente: área de prensa del MTE.

En paralelo a la creación de la CTEP se conformó una iniciativa similar: la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, Autogestivos y Precarizados (AGTCAP), impulsada principalmente por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el FPDS. Militantes del MTE sugieren que la idea original de esta asociación fue una propuesta de Grabois a un referente del FOL, con quien mantenía buen vínculo. Pero a raíz de la cercanía del MTE con el Movimiento Evita, por entonces parte del oficialismo, la AGTCAP fue lanzada sin ellos. Es probable que la versión

sea cierta y las cosas hayan ocurrido así, máxime teniendo en cuenta la añosa vocación del MTE de avanzar en la sindicalización cartonera (como se verá más adelante). Como sea, hubo varios acercamientos entre ambas entidades, incluyendo reuniones para promover la fusión o incorporación de la AGTCAP dentro de la CTEP. En alusión a ello, con tono cansado referentes del MTE dirán que fue “un chichoneo muy largo, muy desgastante”. Pero si bien estas iniciativas de unidad no prosperaron, la CTEP encontró en la AGTCAP un aliado ocasional tanto en la calle como en el planteo general –hasta diciembre de 2014, cuando realizaron una última acción de lucha conjunta frente a distintos casinos–. Finalmente, gran parte de las organizaciones que habían conformado la asociación se terminaron incorporando a la CTEP (un sector del Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento 8 de abril).

Con el correr del tiempo, otros actores se sumaron a la confederación. Hacia el 2015, previo al momento más álgido de la lucha por la personería gremial, la CTEP había experimentado un gran crecimiento y destacaba por la capacidad de aglutinar en su seno diversas matrices ideológicas y sociales. A esas alturas, además de las organizaciones previamente mencionadas, se habían integrado el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Comedor Los Pibes, Patria Grande, Movimiento Pueblo Unido, Seamos Libres, el Encuentro de Organizaciones (Córdoba), Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), La Poderosa, Movimiento Misioneros de Francisco (MMF) y Movimiento Carlos Mujica. Y solo habían sufrido el distanciamiento de La Alameda, que se desvinculó de la confederación.

Como puede observarse, la CTEP congregó una diversidad de organizaciones con alcance y desarrollo territorial en todas las provincias del país. Bajo la premisa de la independencia político partidaria, entre 2011 y 2015 pudieron articular movimientos que iban desde la adhesión crítica a la oposición al oficialismo. Organizativamente, se estructuró en distintas ramas de actividad, en las que se agruparon trabajadores de diversa procedencia. Desde su concepción, fue pensada exclusivamente como una herramienta para agremiar, representar y defender los derechos e intereses del heterogéneo grupo de los trabajadores de la economía popular. Un sector territorialmente

disperso, sin patronal y disgregado en múltiples actividades con diversos grados de organización propia. Al asumir entonces un marcado carácter reivindicativo, la herramienta quedó plenamente atada a la agenda común del sector y las dimensiones políticas terminaron subordinadas a ella. Incluso las tensiones que fueron surgiendo a nivel ideológico quedaron mayormente relegadas. Más allá de las lógicas rispideces, el principio de unidad reivindicativa gremial terminó prevaleciendo. Así, este conglomerado de corrientes —que oscilaron desde el amplio espectro del peronismo hasta distintas variantes de la izquierda— se las fue ingeniando para renovar la forma sindical, a mitad de camino entre la tradicional experiencia gremial obrera y el legado de lucha de los movimientos piqueteros.

Quizá la mayor novedad de la CTEP fue el intento de síntesis de esas dos grandes tradiciones. Los métodos de acción directa y el trabajo territorial junto a una concepción sindical de organización y negociación en función de conquistar derechos que mejoren las condiciones de vida de *todos* los trabajadores sin patrón (agremiados y no agremiados). No era fácil la asimilación pretendida, por eso distintos dirigentes no se cansaban de repetir que había que “cuidar la herramienta”. La letanía se escuchaba con particular énfasis en las filas del MTE, donde la idea de la CTEP había estado germinando desde hacía años. La unificación del “pueblo pobre” requería de articulaciones con todos los actores del sector basados en acuerdos programáticos de tipo gremial bajo el horizonte de la restitución de derechos para trabajadores sin reconocimiento, sin capital y sin patrón. Por ello, en palabras de Grabois (2015), la “CTEP es la CGT de los excluidos”.

En los primeros años la CTEP se consagró a varias tareas en simultáneo: i. La organización sectorial, ii. La agenda de incidencia legislativa, iii. El otorgamiento de la personería gremial de parte del gobierno y iv. El lograr la incorporación en la CGT. En lo que hace al primero de estos frentes (i.), buscó adaptar el modelo sindical a la realidad del sector. Como se detalla más adelante, adhirió a los principios organizativos del sindicalismo argentino, aunque ajustando su estructura organizativa a la especificidad de la economía popular. Por un lado, los trabajadores no tienen salario fijo y se inventan su propio trabajo en unidades productivas pequeñas y con escaso capital. En la medida en que los trabajadores mayormente están sometidos a formas de explotación

indirecta, la patronal tiende a desdibujarse y sus interlocutores pasan a ser el Estado, y tras cierto nivel organizativo, las empresas y las cámaras empresariales vinculadas a cada rama de actividad.⁵

Para articular las demandas emergentes de esta realidad, la estructura básica de la CTEP se compuso entonces de dos grandes niveles. El primero integrado por el Secretariado Nacional (Sec. General, Sec. de Organización y Coord. de Seccionales, Sec. de Coord. de Unidades Productivas y Sec. de Salud, Vivienda, Deportes, Prensa y difusión, Educación y capacitación y Relaciones institucionales e internacionales) y los responsables de las ramas de actividad, cuya función era negociar con el Estado, las asociaciones empresariales y grandes firmas, sindicatos y otros actores relevantes. El segundo, de alcance seccional, pretendía replicar, con desigual resultado y desarrollo, la estructura organizativa nacional en las distintas regiones. Por último, el esquema se completaba con los delegados de base electos en las unidades productivas entre los trabajadores que las componían.

A su vez, en lo relativo a las iniciativas legislativas (ii.) se intentó construir una agenda en función de la formulación de las demandas concretas del sector, que buscó asimilar derechos históricamente conquistados por el movimiento obrero, tales como salario mínimo, vital y móvil, asignaciones familiares, obra social, jubilaciones dignas, aguinaldo, vacaciones, etc., así como medidas de urgencia; por caso, un salario complementario indirecto para alcanzar un ingreso básico y políticas públicas que contribuyeran al proceso de producción y comercialización de bienes y servicios de la economía popular.

Pero estas demandas sectoriales quedaron condicionadas al reconocimiento legal y efectivo del derecho a la sindicalización, cuyo estandarte fue la obtención de la personería gremial (iii.). Se entendía que la conquista de los derechos laborales que permitían proyectar una vida digna se encontraba ligada a la consecución de este objetivo estratégico. Pero la institucionalización de una central sindical de los excluidos se topó con obstáculos difíciles de remover. Por una parte, el núcleo de funcionarios más allegados a CFK persistía en el diagnóstico del carácter transitorio del sector informal, por lo que continuaba

⁵ El excedente económico que producen los trabajadores de la economía popular es reapropiado por el mercado capitalista mediante diversos mecanismos de explotación indirecta o bien a través del consumo de bienes, servicios a precios corporativos o el endeudamiento con intereses usurarios (Grabois y Pérsico, 2015).

apostando en favor de su reabsorción dentro del mercado formal a través del crecimiento económico sostenido. Si la economía popular era un fenómeno pasajero, el Poder Ejecutivo no creía razonable avanzar en su reglamentación como sindicato. Por otra parte, la mayoría de la CGT tampoco veía con buenos ojos la emergencia del nuevo gremio por razones que se analizarán más adelante. Pese a esta resistencia, la CTEP se autoproclamó desde el inicio como entidad gremial en representación de los trabajadores excluidos y se enroló discursivamente dentro de la CGT.

Finalmente, el gobierno de CFK le otorgó la personería social (con menos atribuciones que la gremial) un día antes de concluir su mandato. No era el objetivo anhelado de la CTEP, pero tampoco algo deleznable. Se trataba de un aceptable paso intermedio. Fue el resultado combinado de negociaciones y protestas a lo largo de tres años. Desde 2013, la CTEP había logrado conformar una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se evaluaron distintas alternativas. Inicialmente, las cosas no habían resultado nada sencillas con la cartera a cargo de Carlos Tomada, quien buscó deslindar responsabilidades en el Ministerio de Desarrollo Social. Luego de continuas presiones, Tomada se vio obligado a aceptar el rol de interlocutor principal. Las negociaciones se encauzaron, pero más allá de las múltiples promesas no hubo avances concretos. Hasta que, en los días previos a la finalización del mandato de Cristina Fernández, la CTEP dispuso una movilización con acampe frente al Ministerio de Trabajo para exigir el reconocimiento prometido antes de la asunción del próximo gobierno. La manifestación concluyó violentamente con una represión policial, donde resultó herido el referente cartonero Sergio Sánchez. Tras un duro comunicado emitido por la CTEP, en el que fustigó airadamente la conducta del ministro, el 9 de diciembre de 2015 llegó la esperada resolución que otorgaba la personería social a la central de los trabajadores de la economía popular (1727/15-MTEYSS).

Pero la historia tenía reservado un nuevo e imprevisto giro. Como la resolución firmada por Tomada no fue publicada en el Boletín Oficial, las autoridades entrantes del ministerio impugnaron el acto administrativo bajo el argumento de la falta de "ejecutoriedad". Luego de cierta tensión, a inicios de 2016 se logró consensuar la sanción de una nueva resolución (32/2016-MTEYSS), que llevó la firma del ministro Jorge

Triaca y no introdujo modificaciones sustantivas. De esta manera, la CTEP obtuvo en forma definitiva la personería social al inscribirse como “Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular” en el flamante Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.

En síntesis, a lo largo de los primeros años (2011-2015), la CTEP mantuvo una intensa actividad y procuró aferrarse a la premisa de la unidad de acción como clave del éxito de la agenda reivindicativa. Mediante un heterogéneo conjunto de acciones, definió su identidad colectiva y ganó cada vez mayor visibilidad en el debate político, dibujando así en el espacio público la denuncia expresada en su sello identitario. Desde el inicio quedó en claro que la consecuencia natural del “somos lo que falta” —lema de la CTEP— no podía ser otra que “vamos por lo que nos pertenece”.

Para cerrar esta sección y antes de abordar una de las iniciativas más novedosas (Senderos/OSTEP), presentamos en la Tabla 1 un resumen de actividades de esta etapa de la CTEP, que en buena medida fueron también las principales manifestaciones del MTE. Con independencia de su carácter más o menos coyuntural, las acciones no se limitaron a recrear las metodologías que ya existían en el ámbito de la lucha social. Mientras algunas de ellas implicaron una ampliación en los repertorios de la acción colectiva y la protesta social, otras produjeron importantes innovaciones en la dinámica organizacional del movimiento sindical argentino, particularmente a nivel de las políticas e instituciones de formación y seguridad social (como veremos en el próximo capítulo).

Sin lugar a dudas, la CTEP buscó trascender creativamente el lugar común de la relación entre movimientos populares y Estado, tantas veces atrapados a mitad de camino entre lógicas generalmente antagónicas: “La necesidad de afirmar prácticas colectivas a nivel territorial y comunitario (a menudo, oponiéndose al Estado) y la “dependencia” con el poder estatal para llevarlas adelante” (Bruno *et al.*, 2017: 98). Pero lo hizo en el contexto de la evolución de las organizaciones populares durante el ciclo kirchnerista, que encontraron en el Estado un espacio propicio para potenciar los procesos de transformación social y evadir así la clásica tensión entre autonomía y dependencia estatal. En un marco donde la región funcionaba como laboratorio a cielo abierto de construcción de poder popular, una de las mayores novedades que

trajo consigo la confederación en el escenario local –llevando la impronta del MTE– consistió en explorar nuevas formas de estatalidad (ver caps. 5 y 6).

Tabla 1. Resumen de acciones de la CTEP entre 2011 y 2015

Fecha y lugar	Acción	Protagonista (y actor interpe- lado, entre paréntesis)
20/12/2011, CABA	Movilización por pedido de admisión en la CGT	CTEP (CGT)
7/3/2012, CABA	Movilización en repudio de los recortes al Programa de Trabajo Autogestionado	CTEP (Ministerio de Trabajo de la Nación)
1/5/2012, Berazategui	Festival popular por Día del Trabajador	CTEP y frigorífico recuperado SUBPGA
10/5/2012, CABA	Lanzamiento de formación de conducción gremial	CTEP (referentes de la economía popular)
20/12/2012, CABA	Festival popular para difundir la agenda reivindicativa	CTEP (público en general)
12/2012, CABA	Lanzamiento de la Mutual Senderos	CTEP
1/5/2013, CABA	Movilización por pedido de admisión en la CGT	CTEP (CGT y gobierno nacional)
7/3/2014, CABA	Movilización en reclamo por inscripción de federaciones de ramas	CTEP y FACCyR (INAES y gobierno nacional)
4/2014, nacional	Lanzamiento cuadernos de formación	Grabois y Pésico (CTEP y público en general)
1/5/2014, CABA	Movilización en reclamo de la personería gremial	CTEP (Ministerio de Trabajo de la Nación)
30/6 al 2/7/2014, Bolivia	Encuentro internacional de movimientos populares y sindicales	Federación Sindical Mundial y Central Obrera Boliviana (sindicatos y gobiernos)
15/7/2014, Uruguay	Encuentro regional de movimientos populares (hábitat popular)	Esc. Lat. de Autogestión Háb., Sec. Lat. Vivienda y Háb. Pop., Fed. Urug. Coop. Vivienda por Ayuda Mutua - FUCVAM

23/7/2014, La Plata	Movilización por reclamos de distintas regionales	CTEP (GPBA y gobierno nacional)
2/8/2014, CABA	Inauguración sede de Capital, feria de economía popular	CTEP
12/8/2014, CABA	Lanzamiento de la rama náutica	CTEP, Fund. Interactiva para Prom. Cultura del Agua FIPCA, Sind. Único Trab. Admin. Port.
13/8/2014, San Martín de los Andes	Convenio para la construcción de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular	MTE/CTEP, Com. Mapuche Curruhuinca, Vecinos Sin Techo
9/2014, CABA	Primer número del boletín: "Poder popular"	CTEP
1/9/2014, CABA	Movilización para presentar peticionario en el Consejo del Salario	CTEP (Ministerio de Trabajo de la Nación, CGT, CTA, cámaras empresarias)
2/9/2014, CABA	Inauguración de una ermita de la Virgen de Luján en sede central	CTEP, Obra Soc. Asoc. Mutual Obreros Católicos, Fed. Círculos Católicos de Obreros
3/12/2014, CABA	Convenio con el Programa Enamorar	CTEP, SEDRONAR, Ministerio de Planificación
10 y 14/12/2014, CABA y GBA	Movilización y piquete en reclamo de un Bono Navideño	CTEP, FACCyR, AGTCAP (gobierno nacional, empresarios del negocio del juego)
26/5/2015, CABA	Movilización y acampe por Proyecto de Ley de Protección Integral de trabajadores y talleres de la industria textil	CTEP (Congreso Nacional, cámaras empresarias industria textil)
17/10/2015, CABA	Encuentro de empresas recuperadas	MNER y CTEP
3/12/2015, CABA	Movilización y acampe en reclamo de personería gremial	CTEP (Ministerio de Trabajo de la Nación)

Fuente: elaboración propia.

Al que no le gusta...

Como vimos, en la década del noventa las fracturas de la clase obrera reflejaron las violentas mutaciones del mundo del trabajo. Con el repliegue obligado por la ofensiva neoliberal, los sindicatos experimentaron una crisis de representación y oscilaron entre la subordinación, la supervivencia y la resistencia. A partir de 2002, en tiempos de pos convertibilidad, el proceso comenzó a revertirse gracias a una recomposición de la situación de los trabajadores en relación de dependencia. La reformulación de la política laboral y la sanción de leyes beneficiosas para los trabajadores fortalecieron a los sindicatos y la CGT recuperó su lugar central en acitada alianza con el oficialismo (al menos hasta 2010). Fue un verdadero auge de la sindicalización, con tasas de afiliación en aumento y recuperación del poder de negociación de los trabajadores en el marco de la puja distributiva. Pero la bonanza dejó afuera el grueso de los sectores excluidos del trabajo registrado, no amparados por la normativa laboral vigente. La revitalización sindical encontraba sus límites en la forma tradicional de pensar y organizar el trabajo. Y el debate entre los trabajadores que estaban cerca del techo o del piso salarial no tomaba en cuenta a los del subsuelo. A esos a los que vino a expresar la CTEP.

La relación entre la herramienta gremial de la economía popular y la CGT se fue construyendo lentamente en los últimos años del ciclo kirchnerista. Los entusiastas intentos de acercamiento de la central de los excluidos, con miras a su integración en la CGT, no fueron correspondidos; a lo sumo, obtuvieron respuestas a medias. Sin embargo, no cayeron en saco roto. Gracias a los esfuerzos de esos primeros años, la relación se consolidó luego del triunfo electoral de Cambiemos. Las dificultades iniciales en parte pueden explicarse por una razón exógena. El nacimiento de la CTEP coincidió con un momento de alta conflictividad en el vínculo del gobierno con la conducción de la CGT, en manos de Hugo Moyano; tensiones que terminaron perjudicando tanto al oficialismo como a los trabajadores. Por un lado, provocó la fragmentación y debilitamiento del sector más combativo de la central obrera y, por el otro, redujo la base de sustentación del kirchnerismo. Pese al contundente triunfo electoral de 2011, el Frente para la Victoria comenzaba a perder aliados. Aún en ese marco, la CTEP nunca vaciló en su línea: se mantuvo firme en la reivindicación del modelo sindi-

cal argentino y guardó fidelidad al objetivo programático de integrar orgánicamente la CGT.

Esta definición era sostenida por el Movimiento Evita, desde una matriz de pensamiento que abogaba por la unidad del peronismo y lo impulsaba a intentar acercamientos con sectores discolos del kirchnerismo, entre ellos el propio Moyano. Pero también era decisión del MTE, que siempre había tenido una visión crítica de la CTA y sus limitaciones (aun cuando constituía un claro antecedente de la CTEP, en su esfuerzo por ampliar el rango de representación a formatos no tradicionales del trabajo). Más allá de diferencias de línea, había cuestiones relativas a la matriz organizativa. En particular, la subordinación de lo gremial a lo partidario expresada en que las posturas políticas de la dirigencia terminaban imponiéndose sobre las necesidades de los representados. De hecho, en 2010, la CTA había sufrido una ruptura que puso al descubierto una crisis con esas raíces. El choque violento remitió a posiciones contrarias respecto al gobierno nacional. De un lado, el sector liderado por Hugo Yasky, referente sindical docente (CTERA), se planteaba como fiel adherente al oficialismo. Mientras que el sector encabezado por el dirigente estatal (ATE), Pablo Micheli, proponía mantener una mayor distancia. Como resultado, esta última facción conformó la CTA Autónoma y la primera la CTA de los Trabajadores. Finalmente, la expresión de la CTA alineada con el gobierno fue amparada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el poder judicial, al otorgarle el triunfo en las elecciones internas a Yasky.

Por supuesto, el MTE no ignoraba que en la CGT sucedían cosas similares. De hecho, dos años más tarde, algo parecido ocurrió dentro de la ya dividida CGT. A mediados de 2012 terminó de quebrarse la alianza entre Moyano y el gobierno, con lo que la CGT quedó fragmentada en un inestable triunvirato asentado en el delicado equilibrio de fuerzas entre oficialistas (“los gordos”), opositores (moyanismo) y disidentes (liderados por Luis Barrionuevo). Sin embargo, el MTE reconocía en la CGT la capacidad de doblarse sin romperse y perdurar en el tiempo a pesar de los escenarios de atomización. En todo caso, es mejor mantenerse todos juntos, en una misma central, y dar la pelea por dentro. Por tales razones, la vocación de ser parte orgánica de la CGT quedó clara desde el inicio y así continuó desde entonces. Estuvo explícitamente contenida en el tercer punto de la Declaración del

Teatro Verdi y podía verse reflejada en el acto fundacional del Hospital Israelita, en la simbología que portaba la bandera detrás del escenario. Y tras unos primeros acercamientos infructuosos, con el tiempo también fue expresándose en recurrentes y masivas movilizaciones a la sede de la central obrera para clamar por la incorporación.

No obstante, existían matices al interior de la CTEP respecto al tipo de vínculo que debía establecerse con la CGT. Mientras algunas organizaciones hablaban de unidad de concepción o doctrinaria, otras situaban el acercamiento en el plano de la conveniencia táctica y priorizaban la unidad de acción. En cualquier caso, la revalorización del rol histórico de la CGT se articulaba con la visión de las enormes potencialidades que abría una eventual unificación de la clase trabajadora. A ello apostaba el MTE. En la autoinscripción de la CTEP como parte de la CGT, las convicciones y las conveniencias se dieron la mano. Con ello, la CTEP rompió la histórica incomunicación entre la central obrera y los movimientos sociales, asumiendo el desafío de contrarrestar la dispersión del campo popular. Y tiempo más tarde se verían algunos frutos de esta decisión.

Sin embargo, tanto la demanda de ser incorporados a la CGT como el reconocimiento formal de parte del Estado se mantuvieron frustradas por acción de quienes *a priori* podían ser vistos como aliados en la lucha contra la pobreza y la exclusión laboral. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué diferencias de fondo se presentaron? Sobre ellas hemos hecho alusión antes, pero es preciso puntualizar en esto, ya que es un debate aún abierto en el campo popular argentino.

La persistencia del desempleo, la precarización y la informalidad –toda esa heterogénea realidad expresada por el universo de la economía popular– asumía a los ojos del gobierno y la CGT un carácter meramente transitorio y se creía podía resolverse gradualmente por *absorción* en el mercado formal a través de la expansión de la economía y la regularización del trabajo no registrado. Esta comprensión seguía aferrada al ideal del pleno empleo y el *fifty-fifty* (la distribución del ingreso nacional en partes iguales entre el capital y el trabajo). Se confiaba para ello en el arbitraje estatal de los conflictos entre empresarios y trabajadores. Esta lectura, propia del período del populismo clásico de mediados del siglo XX, hacía caso omiso a la reestructuración neoliberal de la sociedad, los procesos productivos y el rol del Estado. Por lo

que, en los hechos, frente a la incompreensión de la lógica del descarte poblacional inherente a esta etapa (y la consecuente elevada pobreza estructural), se continuó apelando a políticas asistencialistas focalizadas bajo la hipótesis de la integración futura en el mercado laboral, sin plazos concretos y con énfasis en la promoción de la empleabilidad de los excluidos (en esencia, mediante capacitación educativa y laboral).

Desde la mirada de las organizaciones que componían la CTEP, y con destacable claridad en el MTE, la dinámica del capitalismo contemporáneo tornaba ilusorias las metas de pleno empleo. Pese a la bienintencionada retórica oficial y sindical, no había lugar para *todos* en el mercado formal de trabajo. Los trabajadores no empleados por el capital habían pasado a engrosar los circuitos de la invisible y residual economía popular. Para compensar la destrucción del tejido social que dejaba a su paso el capitalismo de exclusión, se imponía la necesidad de reconocer y subsidiar estatalmente la producción popular realmente existente. Desde esa matriz de pensamiento, se invitaba a reparar en prácticas, capacidades e identidades colectivas construidas en el seno de la economía popular y, a partir de ahí, fomentar las iniciativas productivas involucrando activamente a sus protagonistas en el diseño e implementación de las políticas públicas del sector, con miras a construir mejores condiciones para un cambio social que permitiera superar las dinámicas del descarte. De hecho, no solamente su situación laboral no estaba contemplada en la legislación vigente, sino que además las actividades del sector sufrían el hostigamiento policial y judicial amparado en normas que tendían a criminalizarlas.

En síntesis, las dificultades para avanzar en la integración en la CGT y la obtención de la personería gremial se vinculaban a esta discusión no saldada. Para la CTEP, el Estado debía asumir la responsabilidad de fortalecer y formalizar al sector, asegurando derechos y subsidiando el trabajo popular mediante una política tributaria progresiva con marcado sesgo redistributivo en favor de los más humildes (gravando, por caso, rentas extraordinarias de los sectores del agro, mineros, inmobiliarios y financieros). Esta demanda comenzó a encarnarse en la propuesta de un salario indirecto a cargo del Estado, que completara los ingresos generados en forma directa a través del trabajo en la economía popular. La lucha por el Salario Social Complementario constituyó así una

meta adecuada a las urgencias y realidades del sector, cuya conquista se logró recién a fines de 2016 (ver cap. 5).

Un segundo escollo por superar era el propio modelo sindical argentino, el cual descansa sobre una serie de convenios y normas jurídicas que, en conjunto, determinan un concepto de trabajador restringido a la esfera del trabajo asalariado en relación de dependencia. El marco general de la actividad sindical viene dado por la Constitución Nacional y los convenios internacionales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).⁶ Aunque de modo más específico rige la Ley 23 551 de Asociaciones Sindicales o Profesionales, sancionada en 1988 junto a su respectivo decreto reglamentario (467/88). Esta legislación nacional establece y regula exclusivamente los derechos sindicales de los trabajadores asalariados, tal como fueron conquistados y delineados a partir de mediados del siglo pasado por la lucha del movimiento obrero organizado. Al exigir como condición necesaria para la afiliación que el trabajador se encuentre en relación de dependencia (sea en el sector privado o en el público) y, además, registrado en el sistema de seguridad social, solamente quedan alcanzados por la normativa los trabajadores asalariados formales.

En parte, la crisis de representación que sufrió el modelo sindical a partir de las mutaciones laborales del neoliberalismo respondió a la creciente inadecuación entre el mundo del trabajo, las prácticas sindicales y la normativa vigente. Una clara expresión de ello fue la negación del derecho de afiliación a los trabajadores no registrados. Pese a la reivindicación simbólica y organizativa que la CTEP hacía del modelo sindical argentino, no podía menos que entrar en conflicto con su base normativa. No obstante, lo cierto es que la CTEP buscó estructurarse organizativamente en espejo a la CGT: la sindicalización de los trabajadores de la economía popular dentro de las uniones sindicales de cada industria o rama, una de las principales reivindicaciones de la CTEP, debe verse como un “guiño claro a la posibilidad de agremiación dentro de la CGT” (Lazarte, 2017: 30). Asimismo, no dejó de reconocer el carácter progresivo de algunos principios históricos del modelo sindical. En particular, el otorgamiento de la personería gremial a la

⁶ En particular, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949). En el capítulo siguiente veremos que el MTE contribuyó a la ampliación del alcance de esta normativa, en el marco del debate propiciado por la OIT en torno a la “transición de la economía informal a la formal”.

organización sindical por rama de actividad con mayor número de afiliados, lo cual es entendido como una forma de garantizar la unidad de los representados.

No obstante estos acuerdos, los obstáculos normativos a la hora de pensar la integración de la CTEP en la CGT, vinculados en última instancia a diferencias en la concepción del trabajo, no eran insignificantes: los excluidos del trabajo formal no pasaban los requisitos restrictivos que imponía la legislación sindical. Como resultado, a los trabajadores de la economía popular –jurídicamente autónomos pero, en muchos casos, sometidos a diversas formas de explotación indirecta– se les negaba el derecho a sindicalizarse por no encuadrar dentro de la clásica relación entre capital y trabajo. Era una fila más de ladrillos en la muralla que separa a *los de adentro* de *los de afuera*, a los incluidos de los excluidos. En línea con la lectura restrictiva de la normativa vigente (imperante en el Ministerio de Trabajo de la Nación), durante los primeros años que siguieron a la fundación de la CTEP, la CGT se mostró reticente a hacerla parte del mismo *nosotros*.

Por último, pero no menos importante, cabe hacer mención a un tercer escollo que obstaculizaba el ingreso de la CTEP en la CGT. Parte de los reparos de la central obrera provenían, indudablemente, de la magnitud que podía tener el sindicato de los excluidos. Los recaudos respondían, entonces, a los descalabros que podían generarse en los equilibrios de poder dentro de la CGT por el ingreso de una masa de potenciales afiliados proveniente de la CTEP. Además, existía el temor de que hicieran colapsar a las obras sociales sindicales en lo cuantitativo y cualitativo (por el perfil sociosanitario de los usuarios). Asimismo, el dinamismo y la combatividad propios de un sector lleno de carencias contrastaban con la paz social que habitualmente suele garantizar el grueso de la CGT como parte de sus negociaciones con los gobiernos de turno. En el mismo sentido, destacaba en la CTEP un perfil organizativo más movimientista, lejano del formato jerárquico de los sindicatos tradicionales. La representación por rama de actividad (sujeta a dinámicas locales y a la interlocución con el Estado en distintos niveles) no llegaba a ser plenamente estructurada y corporativa. Y en ello también incidían dificultades relativas al carácter heterogéneo de las demandas del sector y las organizaciones particulares que lo conforman.

Este punto mostraba ciertos límites en la estrategia de sindicalización en espejo planteada inicialmente por la CTEP.⁷

Más allá del discurso, en los hechos la confederación simplemente *no podía* organizarse y funcionar según la lógica del modelo sindical tradicional. Compartía con el sindicalismo su función principal: mejorar las condiciones laborales y de vida de sus representados. Pero en ausencia de una contraparte definida y unívoca en instancias de negociación, el ejercicio concreto de la representación a cargo de la entidad sindical de la economía popular adquiriría mayores complejidades y abarcaba áreas por completo lejanas a la tradicional actividad gremial. Así, antes que la identidad sindical por ramas comunes a las de la CGT, se consolidó una referencia gremial propia de la economía popular. De ahí que, como señala Fernanda García Monticelli, el MTE celebró la consecución de la personería social de la CTEP en 2015-2016 como un “paraguas jurídico” que permitió “agrupar en un mismo gremio [a los trabajadores] de todo el sector, ni por rama, ni por regionales”.

En gran medida, los obstáculos mencionados fueron removidos con la obtención de la personería social, en tanto implicó el reconocimiento oficial de los trabajadores del sector (con sus particulares características) y de la CTEP como asociación. Como señala Grabois (2016), la resolución 32/2016 “crea un nuevo régimen de agremiación complementario, ampliatorio y compatible con el modelo sindical argentino que, hasta entonces, únicamente contemplaba la situación de los trabajadores en relación de dependencia”. En línea con las recomendaciones que la OIT promulgó en simultáneo (en las que, como veremos en el siguiente capítulo, el MTE tuvo injerencia), la resolución reconoció la libertad sindical y el derecho a la agremiación del sujeto de la economía popular en tanto trabajador *independiente* (a nivel de la relación jurídico-laboral) y *popular* (a nivel de la realidad socioeconómica en que se inserta la unidad productiva donde desempeña su labor). En suma, la personería social supuso el reconocimiento estatal de la existencia de un sector diferenciado de trabajadores, luego de tres décadas de haber emergido junto al cambio de etapa capitalista a escala global. Esta figura le confería entidad jurídica a la CTEP como asociación civil reconocida por la Inspección General de Justicia, paso

⁷ En cierto sentido, y como experiencia previa de agremiación, la CTEP parecía mostrar mayores afinidades con la etapa fundacional de los sindicatos en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX (socialistas, anarquistas, Círculos Católicos de Obreros, etc.).

previo al reconocimiento de la personería gremial para cualquier sindicato. Para la CTEP, la lucha era para quedar bajo la órbita de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Por lo pronto, la personería fue un paso decisivo para terminar de correr el velo y permitir que la realidad sociolaboral del sector más humilde de la clase trabajadora se hiciera más transparente frente a la mirada de la CGT y la opinión pública en general. Vino a remarcar que no eran ni microempresarios, ni subocupados, ni asistidos, sino trabajadores independientes de la economía popular con plenos derechos sindicales y a la negociación colectiva en defensa de sus intereses. Quedaba claro, desde allí, que el trabajador de los oficios populares es técnica y jurídicamente independiente, aunque no lo es desde el punto de vista económico. Es poseedor de una fuerza de trabajo que el mercado formal no demanda. Está *obligado* a trabajar, aun en condiciones extremadamente precarias y sin derechos laborales para sobrevivir. Es cierto que no se halla en situación de dependencia patronal, bajo una relación de explotación laboral *directa*. Pero al encontrarse desposeído en grado sumo, apenas provisto de una fuerza de trabajo que el mercado no requiere y acuciado por necesidades básicas insatisfechas (derivadas de la exclusión social), se ve forzado a “recuperar del descarte los más inverosímiles medios de producción para inventarse con ellos su propio trabajo, aplicando una creatividad infinita e instituyendo nuevas costumbres y relaciones sociales” (Grabois, 2016).

Sin salud popular no hay justicia social

A poco de andar, el MTE comprendió que la salud era quizás la problemática más acuciante dentro del sector. Si bien este derecho esencial de la persona humana era constitucionalmente reconocido, entre los más humildes se encontraba flagrantemente conculcado. La centralidad del tema se hizo patente, con la mayor crudeza posible, al calor de la lucha por el sistema de reciclado con inclusión social. La salud de los trabajadores excluidos era una demanda urgente que flotaba en el vacío de la indiferencia empresaria, gubernamental y hasta sindical. Por lo que cada vez fue resultando más evidente la necesidad de contar con un sistema acorde a las necesidades sanitarias del sector.

Frente a las urgencias cotidianas, se improvisaron las primeras respuestas. Fueron soluciones transitorias a un problema de tipo estructural; no estaban pensadas para durar. La principal consistió en obtener cobertura del sector privado. A través del gobierno de CABA, se logró un acuerdo con Unión Argentina Integral de Salud (UAI Salud). El gobierno pagaba por cupo a la prepaga para garantizar la cobertura de los cartoneros. La obra social cubría así prestaciones mínimas, pero estaba lejos de funcionar con una visión integral a la altura de las especificidades del usuario directo y su grupo familiar. Además, tampoco atendía la problemática de adicciones, algo relevante en el espectro de las necesidades emergentes dentro del universo de los recicladores. Pese a todo, los cartoneros vivían una experiencia inédita: el acceso a cuidados de salud en lujosos sanatorios privados.

Como sea, en las filas del MTE empezaron a considerar que el presupuesto destinado a la prepaga podía ser mejor utilizado. En vísperas del armado de la CTEP, cayó la gota que rebalsó el vaso. En el movimiento se dieron cuenta de que las restricciones sanitarias no eran privativas del mundo cartonero. Los cooperativistas del “Argentina Trabaja”, teóricamente a resguardo de las obras sociales gremiales, tampoco gozaban de una cobertura médica efectiva. En concreto, esos dos grandes sectores sirvieron de catalizador para acelerar el nacimiento de una mutual propia. Así, en diciembre de 2012 se materializó uno de los grandes avances de la CTEP: la Asociación Mutual Senderos. Comenzaba a hacerse realidad el objetivo fundamental de brindar servicios de salud integral y digna para los trabajadores de la economía popular y sus familias.

Hasta ese momento, los excluidos del mercado formal no gozaban de este derecho fundamental, aun cuando fuera universalmente reconocido por la normativa nacional e internacional vigente. Como es sabido, la reforma constitucional de 1994 presenta claroscuros y tensiones normativas que, en gran medida, responden al contexto político de esa década, signado por la reestructuración neoliberal –achicamiento– de las capacidades del Estado y la consecuente restricción de derechos. Así, mientras se iba avanzando en el proceso de descentralización, desregulación y vaciamiento del sistema nacional de salud pública, la carta magna no dejaba de reconocer el derecho humano a la salud. En este sentido, la reforma trajo consigo dos importantes innovaciones

que conviene consignar aquí. Por un lado, estableció la protección de la salud de los ciudadanos de forma un tanto velada y en abstracto, al resguardar derechos del consumidor vinculados a la sociedad de mercado (art. 42). Por otro lado, incorporó al plexo normativo una serie de Tratados Internacionales (entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos) que tenían prioridad sobre las leyes nacionales y en conjunto reconocían la salud como un derecho esencial. Sin embargo, la carta magna tenía distinto alcance según se tratase de trabajadores formales o informales.

A inicios de la segunda década del siglo XXI, los trabajadores y cooperativistas adheridos al Régimen del Monotributo Social⁸ en los papeles podían acceder junto a su grupo familiar a una obra social, a libre elección entre las opciones que figuraban dentro de la nómina de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Para el cumplimiento efectivo de este derecho, el Estado disponía de algunos instrumentos. En particular, el Programa Médico Obligatorio (PMO), mediante el cual buscaba garantizar que todas las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga cumplieran una canasta básica de prestaciones sanitarias obligatorias y de calidad. Pero en los hechos, las cosas no eran tan simples.

Por más que se encontraban obligadas por ley, las obras sociales gremiales ponían en juego trabas –voluntarias e involuntarias– que tornaban inaccesible el servicio. Podemos decir que, en igual medida, las entidades privadas no podían o no querían cumplir con esta obligación. No solamente estaban pensadas para otros destinatarios (los monotributistas sociales no eran su “población objetivo”) y se mostraban indiferentes a sus requerimientos particulares (prácticas específicas, distancias geográficas, etc.), sino que además tendían a retacear los servicios que les correspondían y eran fijados por el PMO. Las entidades juzgaban que estos monotributistas atentaban contra la sostenibilidad del sistema, siendo que el monto per cápita destinado a sus arcas resultaba inferior al costo estimado del PMO. Al mismo tiempo, los monotributistas sociales no parecían tener mejor suerte en

⁸ El monotributo se compone de tres tipos de aportes: impositivo, previsional (jubilación) y obra social. A diferencia del común, el monotributo social está subsidiado: el 100 % para los componentes impositivo y previsional y el 50 % para la obra social. Para beneficiarios de programas sociales, tales como el Argentina Trabaja, el Monotributo Social Agropecuario, Ellas Hacen y Potenciar Trabajo, el total del importe corría o corre, según el caso, por cuenta del Estado.

el sistema público de salud. Al asumir que contaban con obra social activa, los hospitales frecuentemente denegaban el servicio. Sin reparar en el carácter inconstitucional de semejante práctica discriminatoria, y menos aún en el hecho de que (a cifras del propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) los afiliados que realmente lograban activar su obra social constituían una extrema minoría.⁹

En suma, la burocracia de las obras sociales y la selectividad de una salud pública colapsada terminaban levantando un doble muro difícil de sortear. Eran dos aspectos del mismo fenómeno. En conjunto funcionaban como palancas complementarias de un mecanismo de pinzas que, al accionarse, cortaba de manera anónima los delgados hilos de la precaria red de seguridad social de los trabajadores de la economía popular. De ese modo, el derecho a la salud de, por lo menos, el 25 % de la población nacional quedaba severamente lesionado. Paradójicamente, el mayor daño recaía sobre los más golpeados, sobre aquellos que más necesitaban del cumplimiento efectivo de ese derecho humano esencial.

Ante la completa falta de garantías en el acceso efectivo a prácticas sanitarias dignas, la creación de una obra social para la economía popular se convirtió en un objetivo prioritario. El diagnóstico que alertaba sobre la cobertura social deficitaria de los trabajadores excluidos adquirió el tono de las verdades más elementales. Además, había que dar respuesta a las necesidades sanitarias específicas del sector. Saltaba a la vista que agricultores familiares, cartoneros, feriantes, trabajadoras sociocomunitarias y del cuidado, costureros, cuidacoches y cooperativistas, entre otros oficios, por norma sufrían condiciones de vida precarias, con largas y extenuantes jornadas de trabajo que tallaban cuerpos dañados por las inclemencias del clima y la falta de derechos. A la hora de definir el tipo de prestaciones y prácticas más requeridas y adecuadas, era inevitable reparar en las características sociolaborales de los usuarios, en su mayoría mujeres solteras de mediana edad, dato que ponía sobre aviso la necesidad de no perder de vista el sesgo de género (Scocco, 2017).

⁹ En momentos donde CTEP/Senderos ya estaba en marcha “[...] según los propios datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, menos del 15 % de los afiliados logra activar su obra social y de este 15 % menos del 50 % logra acceder a algún tipo de prestación médica. Es decir, tan solo un 7,5 % de los beneficiarios de obra social a través del régimen del Monotributo Social tienen acceso efectivo a una cobertura de salud” (Grabois, 2016: 29).

Ya en la Declaración del Teatro Verdi aparecía como una de las metas primordiales “la construcción de un sistema sanitario específico para los trabajadores de la economía popular con eje en la atención primaria de la salud y el mejoramiento de la red de salud pública”. Desde entonces, la demanda fue ganando protagonismo en el proceso de organización sindical de los excluidos, hasta que finalmente la creación de Senderos se convirtió en el primer gran logro de la CTEP, a poco más de un año de su fundación. Pero la mutual tuvo que sobrellevar algunos cimbronazos iniciales que pueden explicarse por la falta de reconocimiento oficial. Al no contar con aval de la Superintendencia de Seguros de Salud, para poder funcionar debieron desenvolverse operativamente en marcos legales no muy propicios. En concreto, inscribieron a la mutual como prestadora de medicina prepaga y, en aras de financiarse, se vieron obligados a realizar convenios con dos entidades cercanas: la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL) y la Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos (OSAMOC). De este modo, los fondos aportados en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social y los propios trabajadores a través del monotributo social pasaban, primero, por las obras sociales “amigas” y, luego, eran remitidos a Senderos.

Hacia 2016, tras cuatro años de funcionamiento, Senderos había experimentado un notable crecimiento en términos de afiliados y estructura. Pasó de tener una población inicial de dos mil afiliados a contar con más de cuarenta mil usuarios, en su gran mayoría procedentes de la zona metropolitana bonaerense (Escalante *et al.*, 2018). En pos de cubrir la demanda creciente, la mutual se armó de una docena de delegaciones y una veintena de Centros de Atención Primaria (CAP), que funcionan de manera totalmente equipada y en articulación con la densa red de espacios sociocomunitarios de las organizaciones miembro de la CTEP. Entre ellas, destacan las Casas Comunitarias de Vientos de Libertad con orientación en problemáticas vinculadas a las adicciones (ver cap. 5).

Sobre este suelo fértil, y una vez logradas la personería social y la Ley Emergencia Social en 2016, la CTEP inició inmediatamente los trámites para la creación formal del anhelado objetivo: la Obra Social de Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP). Pero, pese a funcionar en la práctica bajo este nuevo formato, contar ahora con el estatus

jurídico necesario y haber logrado un acuerdo con el director de la Superintendencia de Salud, al 2022 el reconocimiento oficial continuaba pendiente. Como sea, la obra social constituye un hito para los trabajadores de la economía popular. Al decir de la referente cartonera María Castillo, “cuando accedí a la obra social pude ver cómo te cambia la vida: solo tener un lugar donde te atiendan rápido, cuando tenés un hijo con fiebre, significa acceder a una vida mejor”.

Por supuesto, el logro no surgió de la nada ni salió de un repollo. En primer lugar, se edificó sobre los pilares que, durante cuatro años, estableció la mutual. A tal punto que, puertas adentro, ambas constituyen sinónimos. En el corazón de los usuarios, Senderos es la obra social. En segundo lugar, la OSTEP yace en las entrañas de la personería social lograda por la CTEP, como fruto de una ardua lucha que culminó a inicios del gobierno macrista. El decreto ministerial otorgaba la facultad de “promover los servicios asistenciales de sus representados en el marco de la legislación vigente en la materia” (Res. 32/16 MTEYSS). Es decir, autorizaba a las entidades gremiales de la economía popular a fundar sus propias obras sociales conforme a lo dispuesto por el Sistema de Obras Sociales Nacionales y el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Algo que la Ley de Emergencia Social elevó a rango de ley.

Más allá de los aspectos simbólicos, la obra social fue principalmente una necesidad operativa. Ante todo, permitió dejar atrás el rodeo a través de otras obras sociales amigas, para acceder a los fondos derivados del monotributo. En una palabra, garantizó todas las prerrogativas de las que gozan las obras sociales y que hacen posible su funcionamiento, aunque las diferencias fueran muchas y de fondo. Por lo pronto, no se buscó imitar el modelo preexistente, hegemónico, encarnado en las obras sociales tradicionales. Senderos/OSTEP siempre quiso ser otra cosa, desde el momento de su concepción, que, según señalan en el MTE, se remonta al día uno del movimiento. En concreto, el salto a la OSTEP implicó un crecimiento exponencial. La obra social de los excluidos terminó absorbiendo cerca de medio millón de monotributistas procedentes de otras obras sociales.¹⁰ Se cumplía así un deseo inconfesado de las obras sociales gremiales. La OSTEP les sacaba un

¹⁰ Mayormente afiliados de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). Con más de dos millones de usuarios en sus filas, cuatrocientos mil afiliados de OSECAC eran monotributistas. Por detrás, venían monotributistas afiliados a Construir Salud (Obra Social del Personal de la Construcción de la República Argentina).

peso de encima: los monotributistas que hacían parte del universo de la economía popular.

Como ente autárquico, la obra social aspira a cubrir las necesidades sanitarias de un sector organizado que, hacia fines de 2022, alcanza casi a 3 500 000 de personas según el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Pero a su vez, pretende atender al sector no organizado de la economía popular, significativamente superior en número. Como puede notarse, abarcar a tal volumen de población implicó ajustes en los modelos de gestión y financiamiento, donde previsiblemente se computan aciertos, traspies y varias lecciones. Pero, frente a tal complejidad operativa y financiera, algo tendió a permanecer incólume: el modelo de atención.

Senderos/OSTEP siempre se mantuvo en lo que había querido ser desde un principio: una obra social de puertas abiertas. Para los *nadies* del sistema surgía una respuesta sanitaria desde abajo, que buscaba tanto sacudirse los vicios mercantiles como evitar hasta el más mínimo germen de discriminación. La consigna era simple: Salud para los más humildes, sean trabajadores organizados o no organizados, sean afiliados o no afiliados, sean familiares o allegados. Este modelo de salud popular, eje cardinal de Senderos/OSTEP, es lo que hace la diferencia con las obras sociales convencionales. Su carácter disruptivo e innovador reside pues en un plan de atención primaria concebido desde una perspectiva comunitaria.

La propuesta se asienta sobre dos pilares indisolubles: Atención Primaria de la Salud (APS) y salud popular.¹¹ En este modelo, médicos generalistas y equipos multidisciplinarios tienen el rol prioritario que les confiere la centralidad del primer nivel. Y solo realizan derivaciones a especialistas en caso de tratamientos de mayor complejidad, para lo que existe una red de convenios y contratos con clínicas, laboratorios y hospitales públicos que brindan atención del segundo y tercer nivel. Este sistema de atención primaria y personalizada constituye su signo más distintivo. Así, la mutual fue capacitando en la perspectiva de la salud popular a su plantel de profesionales (quienes trabajan en los consultorios de forma interdisciplinaria y coordinada). Gracias

¹¹ Estas ideas-fuerza se encuadran en la Declaración de Alma Ata (1978) –en donde se sintetizan los principales acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud–, en la medicina social latinoamericana y en la tradición del sanitarismo nacional referenciado en figuras como Ramón Carrillo y Floreal Ferrara.

al imperativo de la formación, remarcan puertas adentro, entre otras cosas pudieron superar las primeras actitudes paternalistas y visibilizar cegueras de género, clase y raza frecuentes en el sistema de salud convencional.

Sin embargo, el verdadero protagonismo recae sobre la organización colectiva. Los profesionales constituyen una minoría, que cobra relevancia en las articulaciones con otros actores que asumen tareas administrativas, pedagógicas y de prevención. De hecho, estos últimos representan el componente mayoritario del personal de Senderos/OSTEP: referentes territoriales y militantes de base de las distintas organizaciones de la CTEP/UTEP que habitan los mismos espacios que los usuarios. Es precisamente esta convergencia de actores, voluntades y capacidades la que permite internalizar la mirada de los usuarios en definiciones y acciones de política sanitaria, que luego intentan traducirse en prestaciones acordes a sus necesidades reales.

La participación comunitaria inhibe dinámicas de gestión disociadas de las problemáticas que se busca atender. Esta es la clave del rasgo diferencial de Senderos/OSTEP: la vocación de poner un sistema de Atención Primaria de la Salud al alcance de toda la comunidad, priorizando a los más vulnerables. En concreto, se apunta a la prevención de las enfermedades a través de reconocidas estrategias de educación y promoción, que encarnan en el equipo de promotoras que realiza campañas *in situ* (unidades productivas) o en los centros de atención, que van desde la vacunación a charlas informativas-participativas sobre problemáticas puntuales (por ejemplo, adicciones).¹²

¹² Un ejemplo de articulación entre universidad y salud comunitaria en manos de movimientos populares lo constituye la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria. Impulsada por referentes vinculados al Frente Patria Grande y al MTE y producto de la coordinación entre la Universidad Nacional de La Plata y distintas organizaciones de la UTEP, comenzó a funcionar en 2021 en La Plata y alrededores, en 2022 en la provincia de Buenos Aires y en 2023 a nivel nacional (alcanzando a 16 provincias). Cabe destacar que se trabaja bajo el concepto de “aulas abiertas”, entendidas como espacios mixtos a cargo docentes de la organización social, el efector de salud (hospital o centro de salud) y la unidad académica. Para ver la magnitud de esta iniciativa, señalemos que solo en 2021 y 2022 se graduaron 760 promotoras de salud y que, a fines de 2023, culminan sus estudios otras 750 promotoras.



Imagen 8. Promotoras de salud recorriendo un barrio popular. Fuente: área de prensa del MTE.

En suma, Senderos/OSTEP vino a incluir allí donde el sistema excluía. Desde su misma concepción, fue creando anticuerpos para combatir los vicios que alejaban a los pobres del sistema de salud. Con aciertos y errores, intentó superar los obstáculos burocráticos y mercantiles que el sistema de salud aplica sobre la franja más vulnerable de la población.

La FACCyR viene al mundo, ¡y es algo bueno!

El cálido y sereno anochecer del 12 de diciembre de 2011 no logró atemperar el ánimo atolondrado de quienes, rondando las veinte horas, se fueron amontonando dentro del austero local ubicado sobre la calle Santiago del Estero, en las proximidades de la zona porteña de Tribunales. Mientras afuera el crepúsculo vespertino crecía vacilante, en el interior reinaba en cambio un aire de certidumbre. Los asistentes se mostraban diligentes, prestos a cumplir con la mayor celeridad posible

la tarea que los había convocado. Y así fue. A tan solo dos horas de haberse dado cita allí, dejaron constituida la Federación de Cooperativas y Entidades Afines al Reciclado. Aunque, como veremos a continuación, nominalmente la federación sufrió no pocas mutaciones.

El grupo fundador fue compuesto por representantes de siete cooperativas cartoneras, en su gran mayoría procedentes de CABA (a excepción de una de Mendoza), y de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”. En la sala sobresalía la figura de Sergio Sánchez, en representación de este último espacio. Era la cara visible de las trascendentales conquistas que, al cabo de casi una década ininterrumpida de lucha, podía exhibir el MTE y “El Amanecer”. Después de todo, era la cooperativa emblema del flamante sistema de reciclado con inclusión social que venía funcionando en la Capital Federal, la que se había ganado el orgulloso mote de ser la cooperativa más grande de América Latina. Para completar el contingente, que no llegaba a la veintena de personas, el evento contó con la supervisión técnica de Fernanda García Monticelli, una de las fundadoras del MTE, que se ocupó de encauzar los aspectos formales en su condición de contadora pública.

Una vez conformada la federación, a primera hora del día siguiente llegó el momento de distribuir los cargos directivos. En la asamblea constituyente de la noche previa se había debatido y aprobado el estatuto –ley fundamental por la cual la entidad habría de regirse– y luego, como último punto del orden del día, fueron designados por votación unánime los tres miembros titulares del consejo de administración junto a los responsables de la sindicatura (encargados, respectivamente, de las tareas de gobierno y fiscalización de la federación). Como era de prever, la dirección quedó en manos de referentes cartoneros vinculados a “El Amanecer”: Sergio Sánchez como presidente y José “chino” Frías como secretario. Aquí destaca uno de los principales sellos distintivos del MTE: son los trabajadores del sector quienes asumen las tareas de conducción de las organizaciones que ellos mismos construyen.

Como dato de color, no deja de resultar curioso los sucesivos cambios que sufrió el nombre de la federación como reflejo de los debates a su interior. En febrero de 2012, volvieron a sesionar en el marco de una asamblea ampliatoria del acta constitutiva y se resolvió modificar “en forma definitiva” la denominación social original: pasó a nominarse Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada. Pero,

en la práctica, el nuevo apelativo tampoco fue muy utilizado, salvo en procedimientos formales. Por alguna razón, las cosas conspiraron para que la organización fuera conocida con una denominación diferente a la oficial. Apenas un par de meses más tarde de aquellas dos reuniones fundacionales, la federación resonó en las calles y fue bandera bajo un acrónimo que hace mayor justicia a sus representados: Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR). Sin embargo, la intrincada historia nominal no terminó allí. En un nuevo giro, hacia 2014 un sector de recuperadores que usaban carro tirado a caballo expresó no sentirse incluido en la palabra “cartoneros”. Y por expreso pedido de la Cooperativa de Carreros y Recicladores “La Esperanza” de Córdoba, se incorporó la palabra al nombre (hasta ahora) definitivo: Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Como sea, más importante que estos detalles, la federación debió atravesar una fase previa más incierta aún.

La idea de crear una federación no era algo novedoso. Hacía bastante tiempo que el MTE venía intentando agrupar a las entidades cartoneras bajo el paraguas de una figura legal capaz de promoverlas, consolidarlas y expandirlas. La experiencia efímera de la Federación Ecológica de Cartoneros y Recicladores entre 2006 y 2007 había dejado algunas enseñanzas. Entre ellas, los riesgos de los vínculos con ONG que pueden llegar a reemplazar al sujeto social que pretenden ayudar. Por caso, grupos ambientalistas ocupando el lugar de cartoneros o estableciendo su agenda y metodologías de lucha. En ese marco, en noviembre de 2006 el MTE elaboró internamente un “programa provisorio” donde ya se evidencian estos cuestionamientos. El objetivo último que asumía el movimiento era el de una transformación social: “forzar la reactivación productiva, integrando a los excluidos en el proceso de producción, pero no en las antiguas condiciones de explotación, sino en condiciones nuevas”. La organización sabía entonces cuál era su razón última de ser, hacia la cual debían orientarse las acciones reivindicativas más urgentes, los objetivos inmediatos, que tomaban la forma de la lucha sindical. En el camino, debían “elevantar la conciencia de los excluidos, los explotados y el resto de la comunidad”.

La idea de agremiación de la actividad cartonera estaba en el aire. Antecedentes como el Sindicato Único de Cartoneros y Afines (SUCARA), impulsado por sectores afines a la CTA en 2004, dan cuenta

de ello. Pero fue el MTE quien más la sostuvo. Incluso, con ayuda del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, presentó los papeles para gestionar el reconocimiento de un gremio de trabajadores cartoneros bajo la denominación de Sindicato de Trabajadores Recorteros, Ambulantes y de Depósito para el Acopio de Papel, Cartón, Plásticos, Químicos y Afines para Reciclar. Pero al igual que la mayor parte de las iniciativas de sindicalización previas, no prosperó. El trámite, iniciado entre 2009 y 2010, fue “cajoneado” por el Ministerio de Trabajo de la Nación. No obstante, este objetivo siguió estando presente en el MTE. De hecho, en 2013, cuando la federación cartonera y la CTEP se encontraban ya en funciones, volvieron a realizar algunas presentaciones judiciales en pos de la figura sindical. Es interesante destacar que, si el MTE hubiera quedado confinado tempranamente en los límites de un sindicato cartonero, tal vez la historia hubiera sido otra. Las puertas que, como veremos en los siguientes capítulos, se terminaron abriendo con la diversificación y expansión nacional y su correlativa proyección internacional, probablemente no se hubieran presentado siquiera (al menos no del mismo modo).

Aunque todo esto pertenece a un terreno puramente conjetural, es notable cómo los caminos de las organizaciones populares se abren y cierran en función de posibilidades que acaban por realizarse, desperdiciarse o abandonarse. En este caso, sucedió una mezcla virtuosa de las últimas dos cosas. El hecho de que el sindicato cartonero haya caído finalmente en saco roto no debe achacarse exclusivamente a la decisión ministerial de Carlos Tomada, sino también a la resolución del MTE de no continuar avanzando en esa dirección. Lo cierto es que simplemente dejaron de pelear por ello. El movimiento entendió que no tenía sentido multiplicar las expresiones sindicales de los trabajadores excluidos y que la lógica de pelear reivindicaciones corporativas por rama los iba a terminar dividiendo. Finalmente, llegaron a la conclusión de que, en lugar de pelear por el gremio cartonero, debían fortalecer un gran sindicato transversal de la economía popular donde confluyeran todas las ramas con sus respectivas federaciones (para las cuales la FACCyR sería el modelo a seguir).

En rigor, el proceso de construcción de la FACCyR se inició entre 2009 y 2010, momento en que empezó la expansión del MTE con el ingreso al sistema de reciclado en CABA. Con base en ello, comenzó a

generar articulaciones y proyectar una organización más allá del Gran Buenos Aires. El movimiento se orientó hacia un horizonte claro: organizar a los trabajadores cartoneros y carreros a nivel nacional, construir una herramienta capaz de representarlos a todos, sea que fueran del MTE o no, estuvieran organizados o dispersos, formasen parte de cooperativas inscritas y matriculadas o sin papeles. En este punto, el panorama del sector era muy heterogéneo, pero aun así todos formaban parte activa de lo que ellos llaman la “federación real”. Varios militantes del MTE coinciden en que esta vocación inclusiva constituye uno de los grandes activos de la federación.

La FACCyR se impuso, pues, por necesidad del sector y también por sentido estratégico del MTE. Para entenderlo mejor, es indispensable hacer una breve reseña del entorno organizativo del sector. En esos años, entre las asociaciones cartoneras había adquirido renombre la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE), articulación de organizaciones que gozaba de reconocimiento a escala regional y era financiada por ONG internacionales.¹³ El problema era que, al decir de varios referentes del MTE, esa representación internacional se quedaba en lo puramente declarativo o formal; no se veía reflejada en acciones concretas que expresaran una genuina representación de los intereses del sector. En ese marco, la FACCyR se planteó desde el inicio como una herramienta de representación gremial a nivel nacional, bajo el horizonte de disputar también la representación en el plano internacional (ver cap. 4).

A nivel nacional sucedía algo similar. Se fomentaban desde el Estado, en particular desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, asociaciones ligadas al marco teórico de la economía social, tales como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), creada en 2009 y encabezada por la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA). Al hablar de cooperativismo, federaciones y confederaciones, ese era el modelo que, prioritaria y

¹³ Entre ellas, la Fundación AVINA, creada por el magnate del amianto, Stephan Schmidheiny (exdirectivo de Nestlé, entre otras corporaciones). AVINA centraba su actividad principalmente en Latinoamérica. En el mismo momento en que se creaba la FACCyR, AVINA fue denunciada por “Ecologistas en Acción” (con adhesión de más de doscientas organizaciones sociales y ambientales) por convertir los desastres socioambientales en nichos de mercado. Tras la fachada de la cooperación internacional y la Responsabilidad Social Corporativa, se las ingeniaba para penetrar en los movimientos sociales y legitimar el agronegocio, la privatización de bienes comunes y el discurso de los “emprendedores sociales” entre los pobres (Ecologistas en Acción, 2012).

hasta exclusivamente, el gobierno tenía en la cabeza (al menos hasta entonces). A fin de cuentas, no es casual que el proceso de formación de ambas experiencias –FACCyR y CTEP– comenzara precisamente en aquel momento. La práctica sindical y organizativa que el MTE encarnaba en el sector cartonero y, a partir de allí, de manera integral en la economía popular, chocaba de frente con la tendencia a romantizar las estrategias de subsistencia de los pobres que se ocultaba tras las bienintencionadas figuras de la autogestión y el microemprendimiento. En disonancia con este modelo, la FACCyR se planteó, en los hechos, como el sindicato cartonero de la CTEP. De este modo, tomó distancia de los peligros que se le adjudicaban al “cooperativismo de laboratorio”.

En este punto, cabe destacar que la FACCyR fue la responsable de lograr el objetivo que se había trazado con suma claridad el MTE desde tiempo atrás: la nacionalización del movimiento cartonero. En palabras de su principal referente, Sergio Sánchez:

La federación la formamos para eso, para que los compañeros de las provincias que están totalmente excluidos y trabajan en basurales a cielo abierto, también cuenten con los beneficios conquistados en la ciudad [de Buenos Aires]; fue una herramienta legal para llegar a donde todavía no habíamos podido llegar, y poder pelear en todas partes por los mismos derechos.

Ahora bien, al igual que la CTEP, la federación cartonera debió superar diversas resistencias para su reconocimiento formal. Como muestra de ello, la inscripción de parte del INAES y la concesión de la matrícula correspondiente que le otorgó de manera oficial la autorización para funcionar llegó recién en septiembre de 2015, cerca del final del gobierno de CFK. Pese a todo, durante esos primeros cuatro años la federación en ningún momento dejó de empujar la organización de los recicladores en todas las provincias.

Un movimiento peregrino

A fines de febrero de 2012, poco después de haberse constituido, la entonces Federación de Cooperativas de Reciclado se presentó en sociedad en una movilización en que, por única vez, se utilizó públicamente ese nombre. La marcha se realizó en protesta por los precios miserables que las empresas pagaban a cambio de los materiales reci-

clables. Como era habitual en la estrategia reivindicativa del MTE, el reclamo tenía un doble destinatario: el sector privado y el público. Las industrias que dependían de la fabricación de papel, cartón, plásticos y afines se enriquecían a costa de la superexplotación de los cartoneros (que proveían el 70 % de la materia prima) y el Estado lo amparaba al no reconocerlos como trabajadores con acceso a derechos. Habida cuenta de que “ni el Mercado ni el Estado” asumían “sus obligaciones patronales y constitucionales”, los cartoneros nucleados en las quince cooperativas que, en ese momento, constituían la FACCyR se concentraron frente a la Cámara de Fabricantes de Papel y luego marcharon hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este marco, emergió el reclamo por la urgente “nacionalización de los programas de inclusión social para los más de cien mil cartoneros argentinos”. Comenzaba, entonces, el proceso de nacionalización del movimiento cartonero.

Las diferencias entre lo que sucedía con los cartoneros en CABA y el resto del país eran exorbitantes. Hacia el 2015, la FACCyR estimaba que a nivel nacional existían 150 000 trabajadores vinculados a la gestión de residuos sólidos urbanos, de los cuales cerca de 18 000 se encontraban organizados en 145 cooperativas y unidades productivas dentro de la federación. El resto se las rebuscaba en el desamparo y la marginalidad. En otras palabras, el variopinto grupo de los recuperadores no organizados o dispersos constituía la gran mayoría, olvidada por funcionarios y políticas públicas. Se producía, así, una división entre recicladores de primera y de segunda. Por tanto, con el objetivo de nacionalizar las conquistas y los derechos, la FACCyR comenzó a recorrer toda la Argentina. En un contexto en que, por efecto de la crisis financiera internacional y limitaciones internas, el proceso de crecimiento económico mostraba signos de agotamiento y la problemática de la economía popular ganaba visibilidad.

Un paso decisivo en ese sentido fue el Primer Encuentro Nacional de Recuperadores Urbanos, realizado el 3 de agosto de 2012 en el Hotel Bauen, empresa gestionada por sus trabajadores.¹⁴ La jornada, apoyada económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social, contó

¹⁴ El Hotel Bauen fue construido en 1978 por un empresario con turbios nexos con la dictadura militar. En 1997 fue adquirido por un grupo económico chileno y en 2001 fue a la quiebra. A inicios de 2003, con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), un grupo de trabajadores despedidos concretaron la recuperación parcial del hotel, que había sido literalmente saqueado, y comenzaron a administrarlo por sí mismos. En 2016 se logró la ley de expropiación del inmueble en favor de la cooperativa, pero el presidente Mauricio Macri vetó la norma. Finalmente, en 2020, a

con una nutrida asistencia. A lo largo de todo el día, 350 recuperadores pertenecientes a setenta cooperativas provenientes de distintos puntos del país reflexionaron sobre la realidad del sector y fundamentalmente acordaron en la necesidad de desarrollar y fortalecer la economía popular por parte del Estado. En lo que hace puntualmente al sector insistieron en la importancia de formalizar y dignificar la tarea de los recicladores, con base en un activo reconocimiento y protección legal de sus derechos laborales y sociales. La promoción de una ley y sistemas nacionales de reciclado fueron los ejes principales de las intervenciones de referentes cartoneros nacionales e internacionales en paneles y talleres, que también contaron con la participación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

La actividad fue exitosa, por cuanto sirvió para aglutinar y unificar a cooperativas y grupos hasta allí dispersos. Se trató de un trabajo artesanal, a paso de hormiga. Hasta allí en el MTE eran unos pocos miles, y prácticamente no contaban con integrantes fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Comenzó entonces la peregrinación sin fin, tal como recuerdan con un dejo de alegre cansancio dos de sus protagonistas principales: Sergio Sánchez y Jackie Flores, quien se había incorporado recientemente al MTE y no tardó en asumir tareas de responsabilidad. El término “peregrinación” es frecuente en boca de estos referentes. Y no es casual, calza bien en los protagonistas de esta historia. En su sentido etimológico, la palabra se usa para nombrar a los que van de un lugar a otro. En la versión cristiana (tan cercana a ambos), la figura adquiere un sentido más riguroso. El peregrino no es ya un viajero sin rumbo, sino quien, por devoción, se dirige a lugares sagrados. A tono con esta idea, los peregrinos de la FACCyR se dirigen a las periferias de las periferias, en busca del Otro, al encuentro de sus pares, movidos por el fuego sagrado de la rebeldía y la solidaridad.

Alentados por este espíritu de hermandad, recorrieron cada rincón del territorio nacional para construir la FACCyR. La tarea tuvo la impronta épica de las hazañas populares, anónimas y colectivas. En ese largo caminar, que acabó por trascender las fronteras nacionales, la federación y el MTE se irguieron como referencias ineludibles de las cooperativas y trabajadores del reciclado. Como resultado, prác-

punto de ser desalojados y ante la falta de huéspedes por la pandemia, los trabajadores se retiraron del hotel que durante 17 años había sido punto de encuentro para los movimientos populares.

ticamente la totalidad de agrupaciones cartoneras del país quedaron aglutinadas dentro de la FACCyR, que hacia 2022 comprendía a unos 20 000 afiliados distribuidos en 23 provincias. Su presidente continúa siendo Sánchez de “El Amanecer de los Cartoneros” y Jackie Flores fue su secretaria hasta 2021, cuando asumió en un cargo de gestión pública (ver cap. 6).

Educar es la tarea... de los más humildes

A mediados de 2012, días después de la inauguración del Centro Verde en Barracas (coloquialmente conocido como la “NASA cartonera”), el epicentro porteño fue teatro de una renovada puesta en escena del “si nos tocan a uno, nos tocan a todos” de los primeros años, pero ahora en versión federal. En una nutrida movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se oyó más precisa la misma consigna de la marcha de febrero (antes reseñada). Entre artesanales banderas con la inscripción del MTE, la guardería “El Amanecer de los Pibes” o el logo de la, por entonces, Federación de Cartoneros y Recicladores (FACyR), se exigía la creación de un Programa Nacional de Reciclado con Inclusión Social, capaz de generar 150 000 puestos de trabajo cooperativo y decente en la industria y de ese modo aportar a una solución integral y sustentable del problema ambiental. Podía advertirse allí la plena incorporación de un nuevo elemento en la lucha cartonera: la cuestión ecológica quedaba indisolublemente ligada a la cuestión social. En adelante, a ojos del sector, ambas problemáticas resultaron indisociables y terminaron plasmándose en el eslogan: “No hay justicia ambiental sin justicia social”.

Por entonces, en la sociedad esa comprensión se hallaba en su fase germinal. Producto de años de lucha cartonera, gran parte de la población y del funcionariado público comenzaba a asumir que el trabajo y los saberes de los recicladores eran socialmente indispensables. Tal vez, con un mínimo de esfuerzo, cualquier hijo de vecino hubiera podido improvisar mentalmente una lista más o menos fidedigna y descriptiva del significativo aporte socioambiental de los recuperadores urbanos. En ese imaginario cómputo, no podían dejar de registrarse múltiples beneficios de diversa índole: unos tangibles y susceptibles de cuantificarse, y otros más inasibles, que difícilmente pueden mensurarse. Y,

si luego del cálculo, le hubiéramos solicitado a este hipotético personaje que repasara en voz alta las principales contribuciones que había enumerado, muy probablemente lo hubiéramos escuchado hablar de la reducción de los residuos con destino de incineración, del consecuente cuidado del medioambiente, quizás también de la sustancial mejora de las cuentas fiscales, y, con bastante suerte, de la integración socioeconómica de los propios recicladores, los mismos que la sociedad neoliberal desparramó violentamente en los márgenes.

Pero la realidad estaba lejos de esta inocente quimera. La visibilización del rol integral –ecológico, económico, sociocultural– que desempeñaban los cartoneros en el país no iba a surgir por generación espontánea. Era una tarea que, por fuerza, debía surgir de ellos mismos, de los lúcidos aprendizajes elaborados en su actividad. A fin de cuentas, no era extraño que bajo el imperio de la “cultura del descarte”, como dijera más tarde el papa Francisco, y la producción compulsiva de basura (basurización del mundo), la conciencia ambiental de la sociedad encarnara en los más humildes, en quienes habían sido tratados, precisamente, como residuos sociales. En el acto de afirmar su dignidad humana, de exigir los derechos inherentes a su condición de recicladores, los excluidos mostraban el horizonte societario a seguir.

Todo esto era algo familiar para los cartoneros. Algo que sabían desde siempre. Antes de creerlo, de tenerlo en mente incluso. Sabían la importancia de su tarea, la utilidad social que ella tenía. Y sabían también que tenían derechos no reconocidos. Es cierto, tal vez no de manera plenamente consciente. Pero lo intuían, al menos. Se les había hecho carne en sus maltratados cuerpos, de tanto hurgar a mano pelada en la basura, cargar bolsones, tirar del carro. Lo sabían entonces, pero no de manera abstracta. Se los había enseñado la mugre impregnada, los cientos de kilogramos al hombro, cada vez, todos los días, como Sísifo con la roca. Desde abajo, desde lo más hondo. Lo sabían, ¿quién podía animarse a decir lo contrario? Lo habían aprendido a fuerza de trajinar el oficio, en las paupérrimas condiciones de trabajo, y en sus vidas precarias también. No había lugar a dudas, lo sabían, desde mucho tiempo atrás.

Después, claro, fue necesaria la intensa lucha por los derechos, que estaban ahí para ser conquistados; fue necesario que el sector se organizara colectivamente, construyera poder popular, para que, en el

curso de esas mil batallas, el saber que los acompañaba desde siempre pudiera venir con claridad a la mente, hacerse consciente. Recién entonces, tras casi diez años de incansable lucha a cuestras, las conquistas en flor y el saber adquirido cayéndose de maduro, entendieron que la concientización no tenía el lugar que merecía dentro del proceso productivo. Vieron que la educación ambiental debía convertirse en el primer eslabón de la cadena de producción del reciclado. Así, gracias a la organización de los cartoneros, ese aprendizaje empezó a difundirse por toda la sociedad.

Pero en el incipiente momento que reseñamos, cuando la FACCyR estaba dando sus primeros pasos, la premisa de la promoción ambiental todavía no era una prioridad para el movimiento cartonero en plena expansión, sino algo que comenzaba a instalarse. Aunque claro, las cosas no iban a resultar tan sencillas. La agenda ecológica no llovería del cielo. Hubo que luchar por ella, construirla como una necesidad, incluso al interior del sector. Para advertir el peso de las dificultades, es interesante señalar que, en el petitorio presentado por el MTE en el MDS al finalizar aquella masiva movilización de mediados de 2012, la promoción ambiental no figuraba explícitamente en la lista de las demandas del sector.

Es cierto, en esa protesta callejera el movimiento cartonero exigía avanzar en todo el país por el camino de las conquistas logradas en CABA, que, pese a no haber resuelto el problema de la precariedad, habían logrado mejorar su situación laboral. También es cierto que, en ese marco, se impulsaba el reconocimiento del papel central que jugaban (y podían tener) los excluidos en la solución al problema del deterioro ambiental. Pero nada de ello constituía una novedad. Tácitamente, al menos, estas reivindicaciones integraban el núcleo mismo de la formulación del Programa Argentina Recicla, presentado por el MTE un par de años atrás: disminuir el impacto ambiental que genera la basura, pero incluyendo a los recuperadores urbanos como actores fundamentales del proceso de reciclaje.¹⁵ El punto es que el eje de la pedagogía ambiental seguía ausente, no estaba abiertamente plantea-

¹⁵ El 14 de agosto de 2009, el MTE le presentó la propuesta del programa a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. El programa ya tenía una mirada nacional, pero en esa ocasión y hasta la asunción de la cartonera María Castillo en el rol de funcionaria, no prosperó. La FACCyR luchó desde 2012 a 2019 (año en que asumió Castillo) para que el Programa Argentina Recicla se pusiera en marcha.

da entre las demandas. Y en esa batalla cultural, las mujeres del MTE jugaron un rol preponderante.

El origen de la pelea por incorporar en la agenda cartonera la promoción ambiental se remonta a 2011. Con los aprendizajes acumulados en el marco de la lucha por la Ley de Basura Cero, Jackie Flores, junto a otras compañeras, empezaron a focalizarse en la importancia del tema desde su lugar de trabajadoras del sector. Mientras sus compañeros varones se preocupaban más por la cuestión de la productividad desde una visión parcializada, advirtieron que ellas venían desarrollando una mirada más integral del proceso productivo. La idea central a la que arribaron tenía la virtud de lo simple: una correcta separación en origen podría aumentar la cantidad de materiales reciclables y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de basura que se entierra. Por lo que no vacilaron, y en lugar de bolsas se pusieron el proyecto al hombro. A partir de allí, sus esfuerzos se concentraron en mostrar que la clave pasaba por profundizar en la dimensión ambiental del oficio. De ese modo, las reivindicaciones laborales del sector ganarían mayor legitimidad social.

En mayo de 2013 presentaron un proyecto muy sencillo en la legislatura porteña (a través de Adrián Camps, legislador del Partido Socialista Auténtico). En la propuesta, la prioridad de la promoción ambiental recaería sobre las mujeres cartoneras en toda actividad que la ciudad hiciera en relación con el tema. A los ojos de las autoras del proyecto, se trataba de una necesaria discriminación positiva, a realizar con base en la información suministrada por el Registro Único, Obligatorio y Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables. Las asperezas del oficio impactaban en la salud física de manera desigual entre varones y mujeres. Con lo que el proyecto venía a equilibrar un poco las cargas, mientras promovía un cambio de paradigma. El contexto, además, venía siendo cada vez más propicio. Eran tiempos en que la sensibilidad sobre el tema ambiental iba creciendo.

Sin ir más allá, a mediados del año previo, en CABA se había sancionado una ley que establecía la “Semana del Reciclado” y el “Día del Recuperador”. Y fue precisamente en ese marco que se presentó el proyecto, haciendo honor a la flamante efeméride. Lo importante era que, a partir de entonces, todos los años esa semana daría nuevos bríos al sector. Por un lado, generaba el incentivo para avanzar en campañas de difusión en el espacio público “a fin de divulgar los beneficios y la

necesidad de la separación en origen y el reciclado de residuos” (Ley CABA 4200/12). Y, por otro, disponía la realización de charlas informativas en escuelas primarias y colegios secundarios de la ciudad en el marco de la Ley porteña 1687/05 de Educación Ambiental. Como sea, el día de la votación del Programa de Promotoras Ambientales el recinto de la legislatura explotaba de cartoneras, pese a lo cual fue rechazado por muy pocos votos.

Sin embargo, la batalla continuó, ahora frente al ejecutivo porteño, que en 2014 puso en funcionamiento el programa entusiasmado con la posibilidad de capitalizar políticamente la cuestión ambiental. Finalmente, hacia 2015, se logró la cogestión del Programa Promotoras Ambientales entre el gobierno y las cartoneras, siguiendo los pasos del sistema de reciclado con inclusión social. A tales efectos, un grupo de mujeres crearon la Cooperativa Anuillan de promotoras ambientales. No era poca cosa en un universo donde casi dos tercios son mujeres y jefas de hogar y, sin embargo, las tareas jerárquicas, como en otros sectores sociales, recaen mayoritariamente sobre los varones. La mirada feminista popular con la que está concebido el programa tendía a garantizar la creación de puestos de trabajo que solo podían ser cubiertos por mujeres cartoneras, propiciando la independencia económica de las trabajadoras del sector y previniendo así desigualdades patriarcales estructurales.



Imagen 9. Promotoras ambientales en Baradero, prov. de Bs. As. (abril de 2023). Fuente: área de prensa del MTE.

Desde 2017, el programa comenzó a expandirse por otras ciudades y otras provincias con presencia de la FACCyR. Hacia 2022, a nivel nacional ya eran más de quinientas las cartoneras que trabajaban como promotoras ambientales. Se trató de una labor ardua, que requirió de capacitaciones, reuniones y viajes. Un hito en la consolidación de esa proyección fue el primer encuentro nacional de promotoras ambientales, realizado en 2019 en la sede central de la CTEP. Hacia el interior del movimiento cartonero esto produjo cambios en los roles, en tanto las mujeres comenzaron a ganar confianza, a “pararse frente a los demás”. Y a construirse como referentes dentro de un mundo muy masculino. Desde el punto de vista de quienes propiciaron el programa, eso es hacer feminismo popular.

Por último, cabe destacar que, en la primera sede del Programa de Promotoras Ambientales en el barrio porteño de Chacarita, comenzó a funcionar en 2016 el Bachillerato Popular “Anuillan”, donde se brinda educación de nivel secundario a los cartoneros y cartoneras. La iniciativa tuvo dos motivaciones. Por un lado, el nuevo desafío de la promoción ambiental iba de la mano con la educación de las cartoneras, para poder tomar la palabra y ocupar el lugar que les correspondía en la comunicación de la política ambiental de la ciudad. Por otro lado, surgió frente a la falta de una oferta en el sistema educativo acorde a la realidad cartonera, no solo en términos de acceso, sino también del enfoque pedagógico. Así lo señala Jackie Flores:

Como trabajamos de noche, el sistema escolar no nos incluye. Tampoco los contenidos de las materias dan respuestas a nuestros problemas. De ahí surgió el anhelo de tener una escuela acorde a la realidad del sector, una experiencia de educación desde la economía popular. Eso sí, el docente que viene tiene que saber que acá nos educamos entre todos, que el cartonero tiene mucho por enseñar. Tiene que estar dispuesto a escuchar, no solo a hablar (Liaudat, Fontana y Tóffoli, 2023a).¹⁶

¹⁶ Un segundo bachillerato popular se creó en 2019 en el Polo Productivo Atuel del MTE. Ubicado en Parque Patricios (CABA), absorbe población de distintas ramas del movimiento. Como señalan los docentes Lof y Bortnik (2020): “Los Bachilleratos Populares surgen como experiencias político-pedagógicas en la Argentina en las fábricas recuperadas (...) tras la crisis del 2001. Buscan dar respuestas ante la lógica excluyente del sistema educativo y a la retracción del Estado como garante de este derecho. A su vez, son espacios que nacen al calor de la Educación Popular, preguntándose qué, cómo y para qué estudiamos. Irrumpen como forma de posicionarse críticamente ante la educación tradicional buscando construir poder popular”. En cuanto al nombre “Anuillan” significa “mujer decidida” en idioma mapuche (ver nota en Página12 del 19 de agosto de 2022, titulada “El plan es trabajar”).

Capítulo 4

EL DESBORDE

Seguir sembrando, aun en la adversidad

Al cabo de más de una década de intenso trabajo militante, el balance arrojaba un saldo positivo. Tanto la experiencia de organización cartonera en Capital Federal como los primeros pasos de la CTEP, indicaban que los referentes fundadores del MTE habían estado a la altura. Pero la marcha ascendente seguía su curso y la inercia militante mostró sus límites. Fue un momento donde los costos personales jugaron un papel importante. Principalmente en los integrantes del núcleo duro del movimiento, que mostraron algunas vacilaciones y signos de abatimiento.

Con la emergencia de la CTEP, la cuestión cartonera quedó reconfigurada como una de las tantas caras de la economía popular. Llegado ese punto, las tareas del MTE se fueron multiplicando bajo un horizonte más amplio. En simultáneo al frenético ritmo de la flamante central de los excluidos, el movimiento originariamente cartonero pareció extraviarse en un proceso de expansión que lo llevó a atravesar una difícil situación interna. En las páginas de este capítulo focalizamos en estos años de transición en la historia del MTE, en que deja de ser un movimiento exclusivamente cartonero y metropolitano y se constituye en una organización nacional y multisectorial. El telón de fondo fueron las tensiones políticas y sindicales reseñadas en el capítulo anterior, a las que deben añadirse dos acontecimientos puntuales que, en las postrimerías del segundo mandato de Cristina Fernández, sacudieron el tablero político: el Caso Nisman y el fallo Griesa.

La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien desde la asunción de Néstor Kirchner había sido apoyado por el ejecutivo en su infructuosa investigación del atentado impune contra la AMIA, generó un escándalo de proporciones en el escenario político. El 18 de enero de 2015, un día antes de verse obligado a rendir cuentas en el Senado de la Nación por su inconsistente denuncia contra altos funcionarios de gobierno (incluyendo a CFK) a raíz del Memorándum de entendimiento con Irán, el fiscal fue encontrado sin vida en su departamento. En ausencia de rastros de violencia o evidencias de peso que condujeran a la hipótesis del asesinato, todo indicaba que se había suicidado. Pese a ello, el caso fue utilizado políticamente por la oposición de derecha (y sus aliados mediáticos) para desestabilizar y socavar la legitimidad del gobierno en su tramo final. Algo que, de manera más gradual, venía siendo propiciado por el fallo que el juez estadounidense Thomas P. Griesa emitió en 2012 contra la Argentina, a través del cual ordenó el pago completo de lo reclamado por los llamados “fondos buitres” (una minúscula porción de los acreedores que, con fines especulativos, decidió no participar de la reestructuración y canje de bonos de la deuda pública). A mediados de 2014, y como preludio de un final de mandato agitado, la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme la sentencia de Griesa y Argentina entró en default selectivo. Pero el gobierno no se amedrentó y escaló el conflicto llevándolo a distintas instancias internacionales, las cuales brindaron el apoyo a nuestro país.

Sobre este escenario general, durante su primer quinquenio la CTEP concentró gran parte de sus esfuerzos en dos tareas con íntimas conexiones entre sí y resultados dispares. Por un lado, el intrincado acercamiento a la CGT giró en falso alrededor del pedido de incorporación a su estructura orgánica. Por otro lado, la sinuosa disputa con el gobierno a propósito de la personería gremial se resolvió parcialmente al finalizar ese período, sin impedir avances en la organización sectorial y en la construcción de alianzas estratégicas (más allá del zigzagueante vínculo con la central obrera). Al mismo tiempo, la CTEP desplegó una extensa y vertiginosa agenda de acciones que, sumado a lo anterior, acapararon las capacidades del MTE como uno de los dos grandes pilares del consejo promotor (junto al Movimiento Evita). Pero eso no era todo. El escenario resultaba aún más complejo y exigente para el MTE si consideramos su propio rango de actividad, las tareas que en

ese momento de la historia se fueron incorporando a la dinámica de organización interna del movimiento.

Entre 2012 y 2013, el MTE atravesó un proceso de expansión e incipiente diversificación que terminó de plasmarse en los años subsiguientes. Casi siempre en paralelo y algunas veces en el marco del vigoroso programa de la CTEP, continuaron desarrollándose otras actividades concernientes a la nacionalización, regionalización y, por último, internacionalización del movimiento. Si bien por entonces el MTE experimentaba cierto crecimiento militante gracias a la incorporación de una nueva camada de cuadros, las exigencias fueron aumentando de manera desacompasada. Y con el desgaste acumulado de la intensa primera década de organización, el esfuerzo resultó desmesurado. Lo que dejó a sus principales dirigentes en las puertas de una crisis por agotamiento. Finalmente, hizo eclosión la fatiga asociada a los altos niveles de responsabilidad y exposición, a la rutina de inmersión militante sostenida en el tiempo.

Como se explicó en los capítulos 1 y 2, la lógica organizativa del MTE implicó altos niveles de exigencia personal, sobre todo durante los años fundacionales. Desde el arranque, el estilo de construcción militante de “los cinco locos” estableció coordenadas de acción no aptas para “tibios” (como suelen reconocer por lo bajo), que con el paso del tiempo resultaron lesivas hasta para sus propios impulsores. A medida que fueron descubriendo las urgencias de la realidad cartonera, cada vez hubo menos espacio para andar con medias tintas. Luchar codo a codo y hasta las últimas consecuencias junto a los descartados sociales exigía plena disponibilidad, dedicación a tiempo completo. Y así lo hicieron.

A su modo, también eran peregrinos que atravesaban la muralla invisible todos los días. Más temprano que tarde, hicieron suya la convicción del histórico dirigente sindical Agustín Tosco, según la cual “no solo lucha el que padece la injusticia, sino también quien la comprende”. Y se lanzaron sin boleto de regreso más allá de las fronteras que segregan a los *condenados de la tierra*. Empeñaron los años de juventud en la ardua tarea de escuchar e interpretar la “bruma del pueblo pobre” (en sus propias palabras), afrontando un espinoso desafío: ayudar a traducir la situación de exclusión en una agenda de reclamos y reivindicaciones concretas. Viendo allí la mejor forma de

honrar la voz de quienes sufrían persecución policial e institucional y eran prácticamente inaudibles en el espacio público.

Con la intención de desalentar ribetes heroicos, los protagonistas de esta historia remarcan que no fue una decisión premeditada, sino una respuesta espontánea del tipo “doble o nada” frente a la dramaticidad del tiempo histórico que les tocó vivir. En esa entrega, simplemente les fue resultando imposible disociar su vida personal de la defensa de los más humildes. Algo que, con algunos matices, se mantuvo vigente a lo largo del tiempo como uno de los rasgos distintivos del MTE. Por ello, cuando la expansión y diversificación del movimiento dio lugar al desarrollo de una estructura orgánica, la vara del compromiso militante jamás descendió del elevado piso originario. Mientras el espontaneísmo practicista de los primeros tiempos (centrado en las urgencias del día a día) fue cediendo terreno a mayores grados de organización (locales propios, división y jerarquización de tareas, incorporación de militancia ajena al núcleo fundador, etc.), las cosas siguieron funcionando bajo los mismos niveles de autoexigencia.

Justo entonces, con el subsuelo de la patria nuevamente sublevado, la falibilidad y las dudas comenzaron a aflorar en el MTE. La convicción y la templanza parecieron agrietarse en sus máximos referentes. Sobre todo en Juan Grabois, a quien le costaba disimular los efectos de las mil violencias cotidianas que amasa el territorio. El temor a errarle, a perder de vista su lugar en la lucha (y con ello también la compostura), aconsejaba tomar algo de distancia. Llegó entonces la hora del exilio interno para Grabois, quien a través del vínculo con el papa Francisco comenzaba a convertirse en una figura pública. Así pues, en 2014 se trasladó junto a su familia a la ciudad turística de San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén.

Fue un punto de quiebre dentro del ecosistema del MTE. Un momento crítico donde la moneda estaba girando en el aire y podía caer de cualquier lado. Finalmente, cayó del lado más reconocible y esperable. El movimiento salió robustecido. Aunque los acontecimientos no dependieron tanto del azar: el peso de su historia terminó inclinando la balanza a favor de la coherencia con los preceptos fundacionales. Para entenderlo, es preciso resaltar algunos hitos que se encuentran íntimamente relacionados, y en conjunto representan el hilo de Ariadna que permitió al MTE salir airoso de su propio laberinto.

Una marea popular para la *fábrica de sueños*

Mientras se encontraba desarrollando la FACCyR, el MTE avanzó en fructíferas articulaciones con otras organizaciones. Inicialmente con la Juventud Rebelde (que incluía a la corriente universitaria Julio Antonio Mella) y más tarde con Patria Grande. En esta coyuntura, el MTE se las fue ingeniando para contar con el apoyo de algunas universidades nacionales con el propósito de encauzar proyectos. Aquí nos detendremos particularmente en un inesperado puente con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que se concretó a comienzos de 2012 en el marco del acercamiento con el movimiento estudiantil y luego actuó como soporte de un proyecto esencial en este tramo de la historia.

En aquella época, el movimiento cartonero venía de compartir algunas acciones menores con agrupaciones de la UBA, con la que buscaba estrechar relaciones. Pero un episodio ocurrido a principios de 2012 fue lo que consolidó el vínculo con un sector en particular. En enero un agente federal había matado al joven Jon Camafreitas en el barrio de Boedo. A inicios de marzo, con posterioridad a un festival en pedido de justicia, la policía detuvo a familiares y amigos del joven. Dado que algunos de ellos eran allegados a un militante del MTE, la organización se involucró con la denuncia de la situación. En paralelo, otros grupos participaron de la protesta por la liberación de los detenidos. Entre estos, la Juventud Rebelde/Mella –que venía denunciado situaciones de gatillo fácil– movilizó a cientos de sus militantes que coparon la cuadra donde se encontraba el cuartel policial. La violencia uniformada los amontonó frente a las puertas de la comisaría, donde los estudiantes mostraron una gran contundencia. Ese único gesto le bastó al MTE para desterrar prejuicios y cambiar la mirada. De golpe entendieron que no se trataba de un grupo de “pibes que solo están en la facultad”. Y con el andar fueron descubriendo que tenían no pocos elementos en común.

Además de la impronta latinoamericanista, cuya llama venía siendo reavivada centralmente por la revolución bolivariana de Venezuela, compartían fundamentalmente aspectos de la lógica organizativa. El MTE se reconocía en el rechazo a la “sobreideologización” y en parte se había edificado en la negación del afán “rosquero” característico de cierta militancia universitaria. Y La Mella iba por el mismo camino. Con su predisposición a hacer, mostraba que ambos eran de la misma

madera. Todos estos elementos indicaban, a su vez, coincidencias en cuestiones de fondo. Tal fue la cercanía que, al poco tiempo, varios militantes de esta agrupación o de sus trabajos territoriales terminaron migrando y engrosando las filas del MTE (en esa primera etapa, Andrés Gallardo, Nicolás “Paragua” Caropresi, Andrea Rodríguez y Gabriela Bonus).

Luego del episodio narrado, volvieron a reunir fuerzas a propósito de un sitio muy grande ubicado en el Once, que había sido tomado y se encontraba bajo amenaza de desalojo. Se llamaba la “Fábrica de Sueños”. La ocupación estaba protagonizada por personas cercanas al MTE que vivían en situación de calle. Pidieron ayuda, y el movimiento cartonero amplió la convocatoria a La Mella. Las acciones de resistencia fueron las primeras actividades que planificaron y realizaron juntos. La toma fue violentamente desactivada, por lo que se vieron obligados a irse del lugar. Sin embargo, la frustrada iniciativa trajo consigo repercusiones positivas. Por un lado, les aseguró otro sitio que todavía se encuentra en manos del MTE, reconvertido en un centro barrial. Por otro lado, y más importante aún, les garantizó un acuerdo con la UNSAM (propietaria del espacio tomado) que fue el germen de las diplomaturas universitarias de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP), esa auténtica *fábrica de sueños* emplazada en San Martín de los Andes al momento del exilio interno de Juan Grabois (volveremos sobre ello en breve).

En suma, los entrecruzamientos con La Mella, que en 2013 pasó a integrar Marea Popular (una síntesis de distintas agrupaciones que fusionó militancia universitaria y territorial), sirvieron para empujar un proceso de crecimiento y renovación dentro del MTE. La incorporación de militantes procedentes de otra organización trajo consigo mayor capacidad operativa (más “espalda” en la distribución de tareas) y, por ende, permitió sumar nuevas miradas que, en definitiva, terminaron oxigenando al movimiento. Finalmente, un verdadero salto en ese sentido se dio cuando Marea Popular convergió en 2014 con un sector importante del Frente Popular Darío Santillán, creando el Movimiento Popular Patria Grande (PG). El FPDS contaba con inserciones territoriales en distintos puntos del país y militantes en el sector con mucha experiencia. Entre otros, Agustín Burgos, Juan Tévez, Laura Cibelli y Martín García (además de construcciones locales y actuales referentes de

distintas ramas de la organización). A poco de su creación, PG decidió incorporarse al programa de la economía popular y unificar sus trabajos barriales bajo la bandera y la impronta del MTE. Por lo que durante algunos meses se constituyó una “mesa de fusión” en partes iguales, en donde confluían lo que se llamaba el “MTE chico” (el grupo originario) con el “MTE grande” (las construcciones de PG), con la finalidad de establecer criterios organizativos que ordenen la unificación.

Sin embargo, esta ampliación fue condición necesaria pero no suficiente para superar la crisis endógena. Además, se dio la concurrencia de una serie de procesos más o menos interrelacionados y simultáneos, que resultaron decisivos para que el MTE completara el ciclo de su propia reinención. En primer lugar, una nueva fase de la nacionalización con centro en la construcción y puesta en marcha de la ENOCEP. En segundo lugar, el desarrollo del vínculo con el papa Francisco y la Iglesia. Y, por último, el salto a la internacionalización por intermedio de tres experiencias inéditas: el lanzamiento del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, la participación en la OIT y la fundación de la Alianza Global de Recicladores. En la reconstrucción de esos pasos caminaremos el resto de este capítulo.

La “Suiza patagónica” y sus frutos comunitarios

El destino al que se trasladó Grabois en 2014 no fue un capricho individual, ni puede explicarse tan solo porque ofreciera belleza natural, distancia austral o la oportunidad para una limpieza en lo espiritual. Es cierto, el escenario contiene cada una de estas posibilidades: paisaje, retiro y catarsis del alma. Sin lugar a dudas, pueden conjugarse en una experiencia de goce y beneficio propio. Pero Grabois y el MTE tenían otros planes. El exilio interno del dirigente social no se diluyó en un simple movimiento de evasión personal, sino que derivó en una jugada estratégica del movimiento, que supo identificar las potencialidades del entorno para articularlas en función de las necesidades del sujeto de la economía popular. Así, la ocasión fue aprovechada para encauzar una agenda colectiva con varias ramificaciones: la nacionalización de la organización, la expansión de la CTEP y, en ese marco, el proyecto de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular.

Al cabo de haberse fundado, la central de los excluidos se planteó la necesidad de contar con una propuesta pedagógica propia, mucho antes de la creación de la Secretaría de Formación que oficialmente comenzó a funcionar recién hacia 2014 (cuando restaban escasos meses para la inauguración de la ENOCEP).¹ En cualquier caso, puertas adentro de la CTEP reconocen que el MTE se puso al hombro el armado de la “universidad de los trabajadores excluidos”. En verdad, hacía tiempo que el movimiento cartonero venía bocetando la idea. Y a esas alturas consideraba imperioso avanzar sobre el eje pedagógico, con miras a fortalecer la formación de militantes surgidos de la economía popular.

Si bien la ENOCEP fue pensada como una herramienta formativa abierta a todas las organizaciones del campo popular, estaba principalmente dirigida a la formación de delegados y cuadros de conducción de la CTEP. De la mano de un diagnóstico compartido por las restantes organizaciones, ante todo se invocaba la necesidad de construir un instrumento pedagógico acorde a las necesidades de los excluidos. Es cierto que se registran instancias previas a la ENOCEP. Para empezar, la mayoría de las organizaciones contaba con espacios propios de formación, aunque fueran internos. Además, a mediados de 2012, habían comenzado las capacitaciones de conducción gremial destinadas a los trabajadores de cada rama. En combinación, las dos cosas permitían hablar de cierta experiencia acumulada en procesos de formación entre pares.

Sin embargo, la ENOCEP representó una propuesta diferente, a todas luces superadora. En particular, la impronta universitaria vino a introducir una novedad sustantiva: la puesta en valor de los saberes técnico-productivos, políticos y subjetivos de las clases populares al interior del ámbito académico. Habitualmente, estos saberes son deslegitimados y quedan desterrados del sistema educativo, salvo cuando la investigación académica los toma como objeto de estudio y produce conocimiento *sobre* los pobres. La ENOCEP vino entonces a subvertir y ampliar el canon pedagógico, redefiniendo en parte las incumbencias institucionales de la academia. Y, como veremos, lo hizo en articulación con varias universidades nacionales, implementando una propuesta

¹ Una vez conformada, la secretaría de la CTEP quedó integrada por el MTE, el Movimiento Evita y Los Pibes (una organización social y política surgida a mediados de los noventa en el barrio de La Boca). A partir de entonces, junto a colaboradores de Patria Grande, se encargaron de decidir la política de formación gremial a nivel nacional.

educativa que puso en el centro la idiosincrasia y perspectiva de los excluidos, con sus propias identidades, raíces y prácticas socioculturales.

El desafío pasaba por desarrollar una política educativa capaz de promover la construcción y conducción de organizaciones comunitarias, asociaciones sindicales y unidades de producción popular. Además del mejoramiento de capacidades técnico-productivas, se requerían también otro tipo de conocimientos necesarios para la lucha, saberes que hubieran surgido y pudieran aplicarse en el contexto de la pelea por el reconocimiento y la ampliación de derechos (obra social, monotributo social, etc.). Como puede verse, ante todo eran aprendizajes de tipo reivindicativo, indisociables de una praxis transformadora animada por un horizonte de cambio social. Así, el nuevo sujeto histórico emergente en la fase del capitalismo de exclusión podría ampliar y sistematizar la comprensión del marco de situación: alcanzar un conocimiento integral de su propia realidad, de sí mismo, para continuar conquistando y asegurando derechos y a la vez impulsar procesos de cambio estructural desde abajo.

Mientras el gobierno nacional y los sindicatos seguían sin ver las raíces profundas del problema de la exclusión y oscilaban entre el desconcierto y la pasividad, los olvidados del capitalismo periférico contestaban con la osadía de una *pedagogía a contramano* que buscaba restituir la centralidad de lo humano y de la vida. Pero, para que todo eso fuera posible, tuvieron que suceder varias cosas. En principio, debió gestarse una inusual alianza que dio lugar al predio donde se instaló el albergue de la ENOCEP.

Con el desembarco de Grabois en la “Suiza patagónica”, el MTE no demoró en tejer alianzas con actores locales. Nos referimos en particular al acercamiento con el pueblo mapuche, que también propició otros vínculos. Entre los últimos, destacan las relaciones con la organización Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna (VST), que se incorporó a la CTEP, y con la radio comunitaria FM Pochahullo, fundada por el fallecido comunicador Roberto Arias (en cuyo honor la ENOCEP lleva su nombre). Cuando se conocieron con Grabois, Arias tenía peso propio en la zona. Hacía más de dos décadas que venía acompañando las luchas mapuches por el territorio desde la difusión y la denuncia, al tiempo que impulsaba la organización del movimiento vecinal. Por lo que fue una figura clave para aceitar la articulación entre el MTE,

la comunidad mapuche y la VST. A punto tal que la sede local de la CTEP inicialmente funcionó en la radio, así como antes la VST había constituido también allí su domicilio legal.

Y fue precisamente en la sede de la FM Pocahullo, donde –luego de varias reuniones y promediando el mes de agosto de 2014– la CTEP firmó un acuerdo de colaboración intercultural con la Comunidad Mapuche Curruhuinca y los Vecinos Sin Techo. Su carácter novedoso reside en que no es común este tipo de cooperaciones entre organizaciones sindicales y alguno de los casi cuarenta pueblos originarios que habitan en el territorio nacional. El acta-acuerdo llevó las firmas de Ariel Epulef –*longko* (cacique) del Lof Curruhuinca–, Juan Bustamante como presidente de VST y Juan Grabois, en calidad de coordinador de la ENOCEP e integrante del secretariado nacional de la CTEP. Esencialmente, el convenio estipulaba instancias de colaboración en pos de la reafirmación de los derechos del pueblo mapuche y de los trabajadores de la economía popular, la lucha por el acceso a la vivienda y la preservación de la naturaleza, y, más en concreto, la construcción de un albergue para uso de la ENOCEP en el Barrio Intercultural.

¡Criollos y nativos empobrecidos, sean unidos!

Las múltiples violencias ejercidas por los terratenientes –nacionales y extranjeros– contra los mapuches son de larga data y llegan hasta nuestros días. Históricamente, el genocidio, la persecución y la expropiación fueron una constante a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Pero no corresponde evocar y reseñar aquí el catálogo de aquellas atrocidades, sino poner en escena uno de los episodios de resistencia y reparación histórica más relevantes e ignorados de los últimos tiempos. Un episodio reciente que, por capricho de la casualidad o del destino, alcanzó su punto más álgido allá por 2011, cuando la CTEP estaba naciendo. Se trata de la restitución de una parte del *puelmapu*, específicamente el lote 27, a manos del pueblo mapuche.²

² En terminología nativa, el *puelmapu* es aquella zona del territorio ancestral mapuche (*wallmapu*) que se encuentra al este de la cordillera, abarcando así la región pampeana y norpatagónica. Todo ello siguiendo la cartografía occidental, cuyos puntos cardinales son construidos en perspectiva eurocéntrica. Sin embargo, al situarnos desde la cosmovisión mapuche, el punto de referencia no es el Norte, sino el Este, lugar por donde nace el sol y hacia al cual los mapuches dirigen la mirada mientras rezan a sus deidades y antepasados. El lote 27 comprende una porción de 400 hectáreas

Fruto de la incansable lucha política y mediática protagonizada por la comunidad indígena, en alianza estratégica con actores comunitarios e institucionales de la zona, el 27 de diciembre de 2011 se promulgó la Ley Nacional 26 725, cuyo artículo primero establece la “transferencia” sin cargo del lote al Lof Curruhuinca en calidad de propiedad comunitaria. El Estado no aceptó pagar el precio simbólico de la palabra “restitución” –que, de manera inexorable, remite a la experiencia previa del despojo– y prefirió hablar más eufemísticamente de “transferencia”, término con el que al final fue sancionada la ley. Pero el origen de esta gesta popular se remonta aún más atrás, varios años antes de la sanción de esta ley, cuando un grupo de familias criollas empobrecidas de la zona entendió que su lucha por una vivienda digna debía acoplarse a la del pueblo mapuche.

En 2004, mientras en San Martín de los Andes se imponía un modelo de urbanización especulativo y rentístico basado en la creciente privatización del suelo, un grupo de cien familias afectadas por la problemática de la tierra y la vivienda decidió conformar la agrupación VST, aunando fuerzas con los integrantes del Lof Curruhuinca (una de las cuatro comunidades locales mapuches). La confluencia entre la necesidad de alcanzar soluciones habitacionales y el reconocimiento de la vulneración de los derechos del pueblo hermano selló la alianza estratégica entre descendientes de criollos y originarios. Y alumbró el proyecto de un barrio ecológico y productivo con asiento en raíces comunitarias, populares y autogestivas, que rápidamente capturó el interés de instituciones locales y nacionales (Concejo Deliberante, Administración de Parques Nacionales, etc.).

Desde entonces, la coalición formada entre la organización VST y el pueblo mapuche –representado por el Lof Curruhuinca– fue creciendo y dio muestras de capacidad para incidir en la política pública de vivienda y gestión territorial. Desde el mismo año de su nacimiento, la VST motorizó junto a otras organizaciones un censo que puso al descubierto el problema de la vivienda y obligó al municipio a declarar el estado de “emergencia habitacional” en sucesivas oportunidades (2004, 2008, 2013 y 2016). El escenario de alerta permitió llamar la atención de la opinión pública, jerarquizar el debate y avanzar en la conformación

del *puelmapu* ubicadas en las cercanías de San Martín de los Andes, que fueron anexadas en 1937 al Parque Nacional Lanín y, en 1946, cedidas en comodato al Ejército Argentino.

de órganos propositivos y decisorios tales como la Mesa Política del Lote 27 y la Comisión de Vivienda, desde donde impulsaron cambios normativos y políticas más inclusivas. Hasta que, en 2009, presentaron el Proyecto de Ley de Restitución del Lote 27 en el Congreso de la Nación y, dos años más tarde, lograron contra todos los pronósticos la sanción definitiva de la norma.³

Tras la implementación de la ley, en una fracción de 77 hectáreas ubicadas dentro del área efectivamente restituida, empezó a tomar forma el Barrio Intercultural que habían soñado los protagonistas desde el inicio de esta lucha. A partir del 2014, el barrio y sus casas comenzaron a edificarse a través de dos cooperativas de construcción propias: Cull Rañi (VST) y Newen Mapu (Lof Curruhuinca). Con aciertos y errores, marchas y contramarchas, esta experiencia de producción social del hábitat logró trascender la lógica mercantil del negocio inmobiliario enarbolando los valores andinos del Buen Vivir: propiedad comunitaria de la tierra, adaptación a la naturaleza y respeto a las distintas formas de vida (energía vital o *newen*). Así es como acabó constituyéndose en un modelo de convivencia intercultural inspirado en una visión del mundo con raíces indoamericanas, y sus artífices pudieron pensarse como “comunidad de cambio”, gracias a una perspectiva integral donde la demanda habitacional resultó indisociable de otras problemáticas de tipo estructural: privatización de la tierra, pauperización y exclusión social.⁴

Por ello, no resulta casual que, en la misma época y con similar impronta, comenzara a funcionar allí la ENOCEP. El albergue se empezó a construir a mediados del 2014, casi en simultáneo con el Barrio Intercultural. Se trataba de una orgullosa edificación de dos pisos con

³ Desde el punto de vista jurídico y político, el camino hacia la ley nacional quedó despejado a partir de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal de San Martín de los Andes. Gracias al criterio jerárquico que rige el ordenamiento jurídico del Estado y a la presión pública ejercida durante años por la Mesa Política del Lote 27, en 2010 el municipio reconoció los derechos fundamentales del pueblo mapuche en su Carta Orgánica (siguiendo lo establecido por la Constitución Nacional y Provincial). Con ese marco, oficialmente se reconoce a los pueblos originarios como legítimos poseedores comunitarios de “las tierras que tradicionalmente ocupan”, comprometiendo a los gobiernos en la tarea de garantizar el acceso a los recursos naturales y a los medios necesarios para el desarrollo humano de sus poblaciones.

⁴ El enfoque surgió en interacción directa con el teólogo brasileño Leonardo Boff y se nutrió de la “Carta de la Tierra”, cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar a mediados del año 2000 bajo el auspicio de Naciones Unidas. Se trata de una declaración de principios que asume la interdependencia del problema ambiental y el desarrollo igualitario. Para más información: <https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra/>

capacidad para treinta personas, que en los años siguientes supo alojar a centenas de militantes y trabajadores excluidos de todo el país. En palabras de un referente fundador del MTE que evocan a Julio Cortázar en “Rayuela”: el Barrio Intercultural y la ENOCEP *andaban sin buscarse*, pero sabiendo que *andaban para encontrarse*.



Imagen 10. Construcción del albergue estudiantil de la ENOCEP en San Martín de los Andes (septiembre de 2014). Fuente: Facebook del MTE de San Martín de los Andes.

La universidad de los excluidos abre sus puertas

Inicialmente, la inauguración se había programado para el 11 de octubre, en conmemoración del “último día de libertad de los pueblos originarios”, junto al lanzamiento de la Seccional Cordillerana de la CTEP. Pero finalmente sucedió un día más tarde, en fecha no menos alegórica, cuando la ENOCEP abrió de manera oficial sus puertas a una multitudinaria representación de la central de los excluidos proveniente de distintos puntos del país.

La actividad del domingo 12 de octubre de 2014 comenzó temprano. Como antesala de la inauguración de la ENOCEP, estaba previsto un acto oficial de gran trascendencia en la plaza cívica de San Martín

noticias no lograron hacer mella en el ánimo festivo de los asistentes, y la apertura de la universidad de los trabajadores excluidos se convirtió en una verdadera celebración comunitaria. En mayor o menor medida, todos los presentes se sabían testigos directos de un triunfo histórico de los más humildes.

Al cabo de los primeros años de funcionamiento, la masividad y continuidad que supo garantizar la ENOCEP constituyó uno de los grandes activos de la CTEP. La primera promoción estuvo compuesta por una veintena de militantes y trabajadores provenientes de CABA, que ese mismo mes se constituyeron en los primeros egresados de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Organización Comunitaria y Economía Popular. De allí en adelante y de manera ininterrumpida, se abrieron cohortes casi todos los meses. A menos de dos años de haberse creado, la sede patagónica había recibido más de treinta delegaciones que, en conjunto, significaron cerca de quinientos egresados y egresadas.⁷ Y el logro se agiganta aún más al considerar la novedosa impronta de su propuesta formativa: descentralizada, federal y sustentada en una pedagogía de la escucha. Pese a encontrarse abierta a sectores universitarios (sean estudiantes o egresados), la diplomatura fue pensada para trabajadores y militantes de la economía popular sin necesidad de credenciales educativas previas.

En el MTE siempre había resultado prioritario jerarquizar las voces y los saberes del sector. La principal estrategia para lograrlo consistió precisamente en otorgar a la formación un estatus universitario. El vínculo con la academia, como ámbito oficialmente reconocido de producción, circulación y validación de los conocimientos, dio legitimidad al proceso formativo. El aval universitario vino entonces a jerarquizar los espacios áulicos, las enseñanzas recibidas, los propios saberes y, finalmente, el título que acredita el esfuerzo realizado. Pero, además, la diplomatura contaba con un rasgo complementario que la dotó de un gran atractivo: su ubicación geográfica. Este elemento implicaba una mezcla única de viaje turístico y experiencia comunitaria que podía funcionar como rito de iniciación. Viajar y adentrarse en el paradisíaco (y comúnmente inaccesible para los pobres) paisaje patagónico, empaparse de los espacios recuperados por las luchas locales

⁷ El número no incluye a los estudiantes que participaron de las distintas instancias regionales de formación y que, por distintas razones, no pudieron concretar el viaje a la sede nacional para concluir sus estudios.

y mirar el mundo desde una perspectiva teórica y política igualitaria eran ingredientes que, al combinarse, le conferían a la experiencia una especie de halo transformador. Las realidades, memorias y reivindicaciones de los movimientos populares del sur eran un buen espejo en el que mirarse.

Así, mientras la Universidad Nacional de San Martín garantizó la acreditación oficial del título y aportó parte de la infraestructura y los recursos financieros (principalmente, salarios docentes), la CTEP preservó la potestad de seleccionar a los tutores y definir la orientación pedagógica, programa de estudios y materiales bibliográficos básicos. Ambas cosas encarnaron esencialmente en los cuadernillos de formación, elaborados a inicios del 2014 por Graboys y Pérsico al calor del vínculo con el papa Francisco y de cara al Taller Latinoamericano preparatorio de la participación en la OIT (desarrollaremos estos temas en las próximas secciones).

Con el tiempo, la exitosa experiencia piloto fue replicándose en otras provincias, dando lugar a nuevas sedes e instancias de formación. Gracias a la cooperación con distintas universidades, se inauguraron cuatro sedes más en Tigre (prov. de Buenos Aires, 2018), Tilcara (prov. de Jujuy, 2019), Puerto Libertad (prov. de Misiones, 2021) y Los Molinos (prov. de Córdoba, 2022). Como suelen enfatizar desde la coordinación nacional, no es casualidad que todas ellas compartan características similares: belleza del entorno natural, historia de lucha popular, y puesta en valor productivo y simbólico del espacio social recuperado (vía litigios, tomas, reconstrucción, etc.). Asimismo, la expansión trajo consigo la apertura de otros niveles y cursos para satisfacer las demandas específicas que fueron surgiendo. En suma, desde su creación la ENOCEP no ha descuidado prácticamente ningún aspecto formativo y, considerando todas las sedes, a 2022 por sus aulas han pasado más de 3500 estudiantes.

Como puede observarse, la columna vertebral de la formación que se dieron a sí mismos los excluidos (en diálogo con otras experiencias de autodidactismo de los movimientos populares latinoamericanos) surgió mayormente de las entrañas del MTE y se fue articulando a partir de un conjunto de preguntas fundamentales: ¿cuál es nuestra realidad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué objetivos

perseguiamos? ¿Cuál es nuestra lucha?⁸ Los interrogantes permitieron enmarcar lo que urgía pensar, decir, cuestionar, proponer y, ante todo, *escuchar*. Una escucha siempre horizontal, como punto de partida de un diálogo entre iguales, sean trabajadores de la misma u otras ramas productivas, o bien entre ellos y la militancia.

Bajo esta convicción, el MTE hizo del “retaguardismo” una escuela. Saber escuchar a los de abajo, para poder servir a su causa; saber escuchar, para poder sentir y pensar como el pueblo pobre. Con la ENOCEP, aquella actitud primigenia se sistematizó en una pedagogía de la escucha. Y la siembra de esa conciencia colectiva fue tomando cuerpo en la voz de los excluidos, que emergió cada vez más diáfana. Como prueba de ello, basta reparar en las palabras de Natalia Zaracho durante una entrevista para este libro, meses antes de jurar por la “patria cartonera” en medio de la asunción como diputada nacional por el Frente Patria Grande. Con 26 años de edad, una larga historia de lucha y nuevas herramientas simbólicas a cuestas, Natalia concluyó su paso por las aulas de la sede nacional de la ENOCEP en aquel atípico enero de 2016, integrando así la primera promoción de la rama cartoneros (CABA). Unos años más tarde, con los tenues rayos del sol de julio atravesando el ventanal de un antiguo bar de Barracas ubicado a escasos metros de la “NASA cartonera”, la actual legisladora no vacilaba al asegurar que “ya no es necesario que la militancia universitaria hable por nosotros [porque] hoy maduramos bastante como para llevar nuestra propia voz en todos los lugares”.

Nuestro amigo el papa

Mucho se ha hablado y escrito respecto a la relación entre el MTE y la Iglesia católica y, en particular, entre Juan Grabois y el papa Francisco. En general, el vínculo ha sido sobreinterpretado y los análisis suelen carecer de esfuerzos tendientes a clarificar el origen de la relación, así como su evolución. En algunos casos, guiados por cierta intencionalidad orientada a desprestigiar a uno de los polos de la relación o a ambos; en otros, por cierta holgazanería y pereza intelectual que deriva

⁸ Cada uno de estos ejes terminó conformando un tramo específico del proceso formativo y tomó cuerpo en los cuadernillos que pasaron a integrar los materiales de apoyo. En orden sucesivo, los textos se titularon “Nuestra realidad”, “Nuestra organización”, “Nuestros objetivos” y “Nuestra lucha”.

en simplificaciones muy alejadas de la realidad. Pese a que en reiteradas oportunidades Grabois se ha encargado de clarificar los alcances de su relación con Francisco y del MTE con la Iglesia, con frecuencia continúan circulando rumores infundados que luego son amplificadas por grandes medios de comunicación. Se trata mayormente de críticas compartidas por sectores antieclesiales, tanto de izquierda como de derecha.

A los ojos del MTE, semejante reticencia tiene raíces añosas. Se remonta al histórico sesgo liberal en la formación política de dirigentes progresistas, con marcada influencia en el campo popular. Todo lo que huele a religiosidad inspira un rechazo casi automático, sobre todo en gran parte de los sectores medios y altos ilustrados. Por ello, insisten desde el MTE, en la base de las críticas del progresismo a esta relación con la máxima autoridad de la Iglesia todavía palpita el anticlericalismo de la Ilustración europea. Son cuestionamientos que, en el fondo, revelan una profunda incomprensión de la figura de Francisco y desconocen la naturaleza crítica de la prédica que viene sosteniendo desde antes de convertirse en sumo pontífice.

A contramano de ello, la figura del papa Francisco ha venido gravitando fuerte en la órbita de los movimientos populares en general, y en particular en las organizaciones que integran el núcleo fundador de la CTEP. Al mismo tiempo, las formulaciones teológicas y políticas elaboradas por Jorge Bergoglio desde que asumió el arzobispado porteño fueron madurando al calor de las luchas sociales protagonizadas por las organizaciones populares que enfrentaron la avanzada neoliberal y sus catastróficas consecuencias sobre los derechos de los trabajadores. Desde todo punto de vista (espiritual, político y hasta geográfico), Bergoglio vivió muy de cerca los años de conflictividad social que alumbraron a los movimientos sociales.⁹

El azar, la providencia o su franciscana vocación de encarnar una Iglesia que “abre puertas” –una “Iglesia pobre para los pobres”– lo

⁹ En parte, esto se debe a una curiosa sincronía. Los principales hitos de su ascendente carrera en la jerarquía eclesial coinciden en lo temporal con las luchas populares que fueron el caldo de cultivo de las nuevas formas de protesta y acción social. A partir de 1997 y 1998, cuando estaba naciendo el movimiento piquetero, fue designado en el arzobispado porteño como sucesor de Antonio Quarracino. Más tarde, a inicios del 2001, meses antes de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, el papa Juan Pablo II lo proclamó cardenal. Fiel a sus convicciones, Bergoglio no dudó en rechazar la ostentación de los purpurados y practicó la austeridad. Hasta que fue elegido papa y se mudó a Roma, vivió en un sencillo departamento del segundo piso del edificio de la Curia, ubicado al lado de la Catedral Metropolitana, frente a la Plaza de Mayo.

quiso en el teatro de los hechos. En esos convulsionados años en que el MTE daba sus primeros pasos, el arzobispo pareció entregarse al cristiano ejercicio de escuchar el clamor de los pobres, conocer sus miserias, vivir sus angustias y sufrimientos. De tanto perseverar, se fue haciendo menos testigo privilegiado que actor comprometido con la dura realidad de los descartados de nuestro tiempo. Fue cambiando el atento mirar por la activa solidaridad con el “herido al costado del camino”. En palabras de Sergio Sánchez, el obispo porteño “fue el único que encontramos a nuestro lado”.

El sólido vínculo del primer pontífice jesuita y latinoamericano con los movimientos sociales ligados a la economía popular se forjó entonces a través de un largo *caminar juntos*, donde los encuentros y las cercanías fueron más importantes que las diferencias. Al decir de los protagonistas, la unidad viene superando al conflicto. Una relación de ida y vuelta, que puede graficarse con la imagen del puente: una ancha vía de doble mano que los acercó y fortaleció al cabo de muchos años. Como veremos, con el MTE se produjo una sinergia especial cuyo origen se remonta a las llamadas misas cartoneras.

Si corremos la hojarasca, es fácil rastrear el inicio del vínculo entre Grabois y Bergoglio y, en general, entre el MTE y sectores de la Iglesia. El primer acercamiento se remonta al conflicto de 2005 por las becas para los hijos de cartoneros, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires realizó una misa en la Catedral en pos de la solución del problema. A partir de ahí, en el MTE advirtieron que Bergoglio tenía las mismas preocupaciones y se movía en una dirección similar. Pocos años después, en ocasión de los acontecimientos violentos que vivieron en la lucha contra la trata de personas, junto a La Alameda analizaron que necesitaban algún tipo de protección. Desde hacía tiempo sufrían presión policial e intimidaciones por parte de personas vinculadas al “negocio” de los talleres clandestinos y los prostíbulos. Pero el 4 de junio de 2008, las amenazas se convirtieron en acciones. Mientras realizaban una caravana de “escraches” contra prostíbulos, la sede central de La Alameda sufrió un ataque feroz e impune. Ante la evidente pasividad de los efectivos policiales, la organización evaluó que habían “liberado la zona”. Fue bajo ese clima de hostigamiento creciente, cuando resurgió la figura de Bergoglio.

Pocas semanas antes del ataque y frente a las persistentes amenazas, entre La Alameda y el MTE programaron una actividad para el 1° de mayo, a la que invitaron a distintas personalidades públicas con el propósito de conseguir cierto respaldo. El lema era “Por una patria sin esclavos ni excluidos”. En la lista de diputados y periodistas que podían acercarse, agregaron un nombre poco habitual en el repertorio de la izquierda: el del arzobispo. Hubo cierta reticencia inicial por parte de militantes de La Alameda de formación trotskista. Pero desde el MTE insistieron, y finalmente Grabois escribió junto a Vera la carta dirigida a Bergoglio. Pensaron que los iba a ignorar, pero la respuesta no tardó en llegar. El arzobispo declinaba la invitación, pero como contrapropuesta les ofrecía una reunión a la que terminaron asistiendo ambos dirigentes.

A esa charla inicial siguieron otras, en las que ratificaron afinidades y puntos de convergencia. Finalmente, el acercamiento dio sus frutos, y el 1° de julio de 2008 se concretó la primera “misa cartonera” en el barrio de La Boca, cuya consigna era: “Con esperanza, denuncia y compromiso por una sociedad sin esclavos ni excluidos”. La misa se realizó en la iglesia Nuestra Señora de los Emigrantes y estuvo a cargo de Bergoglio, ante la presencia de curas villeros, monjas en lucha contra redes de trata y un público compuesto mayormente por cartoneros, prostitutas y trabajadores migrantes víctimas del trabajo esclavo. Fue el primer encuentro del MTE con los curas villeros, una relación que luego fue consolidándose a través de varias iniciativas. Desde entonces, la misa se sostuvo cada año hasta la actualidad, bajo el mismo lema, pero en el barrio porteño de Constitución. Y gradualmente se fue ampliando hacia todos los excluidos.

A diferencia de lo que comúnmente se piensa, la decisión de establecer una relación con Bergoglio no se vio favorecida por vínculos previos de Grabois, sean familiares o de otra índole. Fue una definición orgánica del MTE. Como tal, se resolvió en un marco asambleario que tuvo sus claroscuros. Previsiblemente, las dudas surgieron por el lado de la militancia, con raíces en críticas anticlericales. Bergoglio era la Iglesia, y la Iglesia como institución era sinónimo de métodos, valores e ideales rancios y monárquicos, que no estaban en línea con el proyecto del movimiento. Sin embargo, desde el inicio flotó en el aire de la discusión un hecho que parecía irrefutable. Bergoglio venía planteando básicamente las mismas cosas que el MTE. Si impulsaba

lo mismo, y además era una autoridad para un sector importante de la población, no había mucho más que pensar. Al menos a los ojos de los militantes más viejos, los del núcleo fundador. El momento apremiaba, se estaban metiendo con “peces gordos” vinculados a la trata, lo que les había valido intimidaciones y amenazas. Y el movimiento no parecía tener suficiente espalda para contenerlas: carecía de aliados de peso y continuaba siendo muy marginal. En este escenario, Bergoglio y el sector de la Iglesia que el arzobispo representaba no eran algo para despreciar. A fin de cuentas, ningún otro actor institucional había apoyado públicamente la lucha de los descartados del sistema, por lo que terminó imponiéndose la decisión más pragmática: “Hagamos la misa”. Con menos pruritos, los cartoneros, que no habían estado presentes en la discusión, aplaudieron con entusiasmo la iniciativa. Siendo casi todos creyentes, y buena parte de ellos católicos, no necesitaban discutir nada; el debate, podía verse, había sido una necesidad de la militancia de clase media.

Por supuesto, en el entorno del MTE la decisión no cayó bien. Una parte de las agrupaciones de izquierda independiente, con las que tenían buenos vínculos, los criticaron fuertemente. Pero la verdad es que a esa altura no importaba demasiado. El MTE se había conformado en la vocación de acompañar a los más humildes y Bergoglio había demostrado que “tiraba para el mismo lado”. Y en las barriadas, la Iglesia que el cardenal expresaba —la de los curas villeros— ponía freno a la desesperanza que catapultaba a los pibes con hambre y sin rumbo al submundo de la delincuencia y el narcotráfico. Luego de aquel primer acercamiento, quedó un puente tendido, aunque el MTE no llegó a avanzar en articulaciones más integrales con la Iglesia, que tuvieron lugar recién con la asunción del papa argentino.

Yo no tengo sueños, tengo planes

Tras la renuncia de Benedicto XVI, el 13 de marzo de 2013 Bergoglio fue elegido papa de la Iglesia católica. Al aceptar el cargo, se convirtió en el primer americano de la historia y en el primer pontífice no europeo en ocupar el trono después de 1272 años. Siempre ajeno a la espectacularidad de los datos y las apariencias, desde un principio el cura peronista que el Vaticano “había ido a buscar al fin del mundo” se

mantuvo fiel a su prédica de simplicidad, humildad y solidaridad con los olvidados. El primer gesto elocuente en esa dirección fue adoptar el nombre de Francisco, en alusión al santo de Asís que ocho siglos antes había abandonado riquezas y comodidades heredadas para consagrarse íntegramente al servicio de los pobres y al cuidado de la naturaleza. El segundo momento por destacar ocurrió en la ceremonia inaugural de su pontificado. En un lugar especial de la primera fila se sentó Sergio Sánchez, un símbolo de la lucha de los trabajadores excluidos. La imagen resultaba inequívoca: el papa ubicaba primero a los últimos y se colocaba al lado de los movimientos sociales. Sin embargo, el periplo de Sánchez hasta la solemne misa inaugural no fue tan inmaculado. Antes de llegar tuvo que lidiar con un episodio discriminatorio; uno más entre los incontables que cotidianamente deben afrontar quienes, al igual que él, llevan consigo las marcas de la exclusión.

Dos días antes, cuando se encontraba a punto de partir hacia Roma, el dirigente cartonero sintió que se perdería el vuelo y la ceremonia. No fue la impuntualidad ni un accidente imprevisto ni mucho menos algún inoportuno capricho lo que puso en riesgo la presencia del invitado de honor del papa en la Plaza de San Pedro. Fue algo más familiar y estructural en la vida de los cartoneros: el racismo y el odio de clase. Sánchez, piel oscura tallada por incontables lluvias y soles en un cuerpo ancho y macizo que hace olvidar su fragilidad, con manos ajadas de tanto manipular la basura y apenas unos cuantos pesos en el bolsillo, no podía formar parte de la comitiva oficial con destino a Roma en representación de nuestro país. A los ojos de una decena de inspectores de seguridad aeroportuaria, un villero sencillamente no tenía nada que hacer ahí. Después de vomitar una furiosa mezcla de menosprecio y desconfianza bajo la forma de interrogatorios circulares y exhaustivos controles de veracidad de los papeles oficiales, lo sometieron a una radiografía de tórax para ver si llevaba droga en su organismo. Fue el único pasajero que recibió ese trato. Y no era casual.

Sánchez suele decir que se sintió en una película de terror. En sus palabras, de pronto le pareció estar viviendo las infernales peripecias del protagonista de *Expreso de medianoche*, el filme de los setenta basado en la novela autobiográfica de un estadounidense detenido por posesión de hachís en el aeropuerto de Estambul y condenado a treinta años de prisión por tráfico de drogas. Pero a diferencia del protagonista

de esa historia, Sánchez no llevaba consigo ningún tipo de droga. Lo condenaban las marcas de cartonero y villero, que tornaban inverosímil su presencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y su humilde estampa al lado de la figura papal. Y, sin embargo, a regañadientes, los grises inspectores aeroportuarios debieron autorizar su partida.

Como sea, a esas alturas Sánchez estaba curtido. Había sido denigrado, mal mirado e insultado durante demasiado tiempo, a lo largo de demasiadas vidas. El desprecio del mundo civilizado había calado hondo en el líder cartonero, hasta que el dolor se convirtió en otra cosa. Tantos años de maltrato y persecución policial, indiferencia institucional y saña de los vecinos del opulento centro porteño (que llegaron a ponerle vidrio en la basura), le habían ensanchado las espaldas, lo habían vuelto diestro en el ninguneado arte popular de reciclar la mugre de las clases privilegiadas. Gracias a esa rebeldía y perseverancia, a su capacidad de transformar lo malo –discriminación, odio, ingratitud– en combustible de una solidaridad militante que parece infinita, se fue ganando el respeto y la admiración de propios y extraños. Una vez que se convirtió en baluarte del sistema de reciclado con inclusión social, cuando sus compañeros reconocieron su cristiana vocación de brindarse sin recibir nada a cambio y la premiaron con roles de conducción, la premisa fue la misma: “El teléfono nunca apagado”. Si el problema le “llega al corazón”, Sánchez responde. Anteponiendo siempre lo común a lo personal, el beneficio de todos al interés privado de allegados, amigos o familiares. Si como suele decirse en el MTE: “Un líder se hace por las ideas, por el corazón o por el estómago”, a todas luces el cartonero oriundo de Villa Fiorito parecía tener las tres cosas.

El caso es que, a través del arzobispado porteño, Francisco había solicitado a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la presencia de un trabajador cartonero en la comitiva oficial. Tal vez previendo que Sánchez iba a ser designado por sus compañeros embajador de los más pobres para asistir al evento. Y así fue. Por lo que aquel 19 de marzo de 2013, después de luchar por enésima vez contra las fuerzas de la sociedad excluyente, Sánchez pudo seguir muy de cerca una ceremonia repleta de símbolos. Al finalizar, Francisco se acercó a saludar al dirigente cartonero antes que a los mandatarios presidenciales. Vestido con el característico uniforme de recuperador urbano, pantalón y campera rompievientos azules con rayas verdes fluorescentes, Sánchez extendió

la mano y el papa respondió con un beso acompañado de unas breves pero cálidas palabras: “Estoy con ustedes, fuerza para el cambio que se viene”. En ese simple gesto, Francisco ratificaba a los ojos del mundo la opción preferencial por los más humildes, su vocación de una Iglesia pobre entre pobres.



Imagen 11. Sergio Sánchez y Francisco se saludan en la ceremonia de asunción papal. Fuente: Portal Buenos Aires Ciudad, 23 de octubre de 2013.

Antes, durante y después del masivo evento, la gestualidad del flamante papa se propuso expresar las orientaciones de su trayectoria previa y, al mismo tiempo, marcar el rumbo de su pontificado. La ceremonia inaugural dejaba entrever que el papa no sería una simple cáscara vacía. Ciertamente, la austeridad franciscana pronto adquirió el rango de norma y provocó un giro en la moda litúrgica, dentro y fuera

del Vaticano. Pero, además, el fuerte contraste en lo gestual con sus predecesores, vino acompañado de un mensaje robusto y flamígero, que dio el tono de sus ambiciosas aspiraciones: transformar la Iglesia.¹⁰

En el camino de las 3-T

A contramano del clima de época, desde mediados de los noventa fue madurando en Bergoglio una nueva visión teológica y política. A través de ella, buscó sintetizar lo mejor de las tradiciones expresadas en la historia, los saberes y las luchas de la Iglesia latinoamericana, bajo un marco histórico diferente. Desde la periferia, en interacción con los movimientos populares (antiimperialistas, anticapitalistas, anticoloniales), fue encontrando esa síntesis en la figura del poliedro. A diferencia de la esfera uniforme, en esta figura las parcialidades confluyen conservando su originalidad. Las diferencias no se borran, se integran y enriquecen al todo. Moldeada en contacto con las luchas de los excluidos del siglo XXI, la metáfora implica una nueva lógica convivencial que brega por una globalización alternativa, contracultural, con centro en la dignidad humana y la singularidad de los pueblos. Y si bien todos los elementos tienen algo que aportar, la cultura popular es depositaria de lo mejor y más propio de cada pueblo, es pensada como el zócalo de un nuevo modo de *estar juntos*.¹¹

Entre 2013 y 2016, la relación entre el MTE y la Iglesia por la que ha venido pugnando Francisco encontró finalmente su cauce institucional. En ese tiempo se fue instalando la nueva agenda del Vaticano. A través

¹⁰ La asunción se daba tras el revuelo provocado por los Vatileaks, en alusión a la filtración de documentos secretos de Benedicto XVI en 2012, que comprometieron a la más alta jerarquía eclesiástica en intrigas de poder y escándalos de corrupción (ligados en particular al lavado de dinero). A poco de asumir, en 2015, el propio Francisco debió enfrentar la segunda edición de los Vatileaks: una nueva filtración que puso al descubierto la malversación de fondos procedentes de donaciones y los negocios inmobiliarios de la cúpula del Vaticano. A diferencia de los primeros, los Vatileaks 2 revelaban la podredumbre interna de un sector de la Iglesia en “guerra” contra el proyecto de reforma que impulsaba Francisco.

¹¹ Bergoglio abreva desde siempre en la Teología del Pueblo (TP), que suele ser identificada como la rama argentina de la Teología de la Liberación (TL), con la que mantiene una discusión a propósito de la comprensión de la categoría de pueblo. La TL surgió en América Latina al calor del Concilio Vaticano II en los sesenta y la radicalización de las luchas sociales en el período. Se propuso un diálogo entre cristianismo revolucionario (inspirado en el proyecto histórico de Jesús) y marxismo (como método de análisis basado en la lucha de clases). En cambio, para la TP la categoría fundamental es la de “pueblo” y su oposición con el anti-pueblo (oligarquía, etc.). Desde esta perspectiva, si bien el pueblo es la comunidad organizada, son los más humildes, o “sencillos”, los depositarios de los valores históricos –éticos, culturales, religiosos– de un pueblo o nación particular.

de intervenciones públicas y documentos oficiales (discursos, homilías, exhortaciones apostólicas, encíclicas), Francisco transparentó y ratificó la fructífera relación forjada con los movimientos en los años previos. El mensaje papal colocó en la centralidad a las periferias, a los desplazados y marginados, al pueblo pobre y los trabajadores sin derechos y a la cuestión ecológica como indisociable de la cuestión social. Son los ejes de un diagnóstico en torno a la crisis civilizatoria provocada por la globalización del “paradigma tecnocrático”, donde la ciencia y la tecnología sirven a la lógica de la ganancia en lugar de promover el desarrollo humano integral.¹² Es el momento en que emerge la consigna “Tierra, Techo, Trabajo” (las 3-T), síntesis de las reivindicaciones centrales de la CTEP y, un poco más tarde, base del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI), que propone reunificar a la clase trabajadora en torno al objetivo común de encauzar la reconstrucción nacional sobre paradigmas inclusivos y comunitarios (ver cap. 6).

Previo a la activa participación del papa en una importante cantidad de acciones impulsadas por la CTEP (mensajes, videos, etc.), existieron esporádicos pero productivos encuentros con sus principales referentes que se tradujeron en experiencias organizativas conjuntas y nuevos roles institucionales. En agosto del 2013, tuvo lugar una audiencia clave en la Residencia de Santa Marta, a la que asistieron Emilio Pérsico y Juan Grabois. Al tiempo que el papa se expresó categóricamente sobre la necesidad de profundizar la unidad latinoamericana y la participación popular en los procesos de cambio, la reunión permitió delinear el tono y las coordenadas de la relación entre (el sector más afín de) la Iglesia y los movimientos sociales agrupados en el sindicato de trabajadores excluidos. En concreto, surgieron allí dos grandes proyectos, que quedaron respectivamente a cargo de Pérsico y Grabois. El primero de ellos fue el Movimiento Misioneros de Francisco (MMF) y el segundo fue el Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Frente a la convocatoria papal de renovar Iglesia, el MMF se colocó a mitad de camino entre las experiencias de organización colectiva de los sectores populares (bachilleratos, asambleas, tomas de tierras) y las prácticas católicas tradicionales. Eso implicó avanzar en un sentido distinto al de la pastoral social convencional. En línea con los documentos

¹² En particular, el planteo puede verse en la exhortación apostólica *Evangelii gaudium* (2013), las encíclicas *Laudato Sí* (2015) y *Fratelli Tutti* (2020). En la primera, el término “pueblo” aparece 163 veces a lo largo del documento.

del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), el MMF se hizo cargo del legado de la pastoral popular, y puso nuevamente en el centro de atención las urgencias, demandas y formas de organización de los pobres, en articulación con la CTEP. El proyecto de retorno de la Iglesia al barrio del MMF buscó religar nuevamente lo espiritual y lo político, la religiosidad popular con la lucha social.

Junto a esa iniciativa encabezada por el Movimiento Evita, aquella breve audiencia oficial abrió la puerta a la inserción institucional de Grabois en los ámbitos con orientación social del Vaticano. Allí fue que empezó a germinar el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, un espacio que se propuso reunir y articular a organizaciones de base procedentes de los cinco continentes, en cuya coordinación general el MTE jugó un papel muy gravitante. Como veremos a continuación, el espacio contribuyó de manera decisiva a instalar el programa de las 3-T y al mismo tiempo abrió el juego para la conformación de nuevas redes y vínculos a escala global que el movimiento no dejó de aprovechar.¹³

Encuentro Mundial de los Movimientos Populares

En un momento bisagra que pareció marcar el nacimiento de un nuevo ciclo expansivo, a fines de 2014 se concretó en el Vaticano la primera actividad internacional organizada por el MTE: el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares (EMMP). Por su naturaleza y magnitud, el evento representó un nuevo giro en la espiral ascendente del movimiento, imposible de vislumbrar en el humilde y lejano arranque de esta historia, cuando el frío y el desamparo alentaron las primeras tazas de té y ollas populares cartoneras. A partir de allí comenzó a funcionar con cierta periodicidad un espacio inédito, cuya siembra de organización desde abajo continúa floreciendo en nuestros días. A la fecha el EMMP registra cuatro ediciones. Mientras las tres primeras se concretaron anual y sucesivamente entre 2014 y 2016 (las

¹³ Con este antecedente a cuestas, Grabois comenzó a oficiar, siempre *ad honorem*, como consultor del Vaticano en temas relativos a los movimientos populares. En junio de 2015, fue oficialmente designado consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Con las reformas de la curia, en abril de 2021 pasó a integrar el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (que había comenzado a funcionar en 2017, integrando en su seno a Justicia y Paz junto a otros tres Consejos Pontificios). Los Dicasterios son el equivalente en el Vaticano de los ministerios en otros Estados.

de los extremos en Roma y la del medio en Bolivia), la más reciente se realizó en 2021 bajo la modalidad virtual.

A instancias del propio Francisco –y por intermedio del cardenal ghanés Peter Kodwo Appiah Turkson, entonces titular del Pontificio Consejo de Justicia y Paz–, la organización del encuentro quedó fundamentalmente a cargo del MTE, como parte de la CTEP, y del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), como integrante del Movimiento Internacional Vía Campesina. Fueron las organizaciones más activas y comprometidas en la coordinación del evento, dentro de un comité organizador que terminó de conformarse con otras dos organizaciones: Hermandad Obrera de Acción Católica de España (del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos) y la Federación Nacional de Asentamientos Informales de la India (miembro de *Slum Dwellers International*).

Unos pocos días antes del evento inaugural en el Vaticano, a través de acciones de difusión que incluyeron gacetilla y conferencia de prensa, el comité organizador aclaró la naturaleza y finalidad del espacio que estaba próximo a fundarse. Entre agradecimientos a la colaboración del Vaticano y especificaciones mínimas sobre la dinámica de trabajo, en la mención de los destinatarios y los propósitos generales podía apreciarse uno de los mayores legados del MTE. Para tener éxito en los objetivos no había que equivocarse con los protagonistas, ambos eran dos caras de la misma moneda. Y el comité organizador lo tuvo claro desde el principio.

Si lo que se buscaba era realmente promover la organización de los pobres y empezar a construir desde abajo una alternativa civilizatoria con centro en la dignidad humana, la definición del destinatario del encuentro no parecía una ecuación difícil de resolver para el MTE. Para no incurrir en los errores de experiencias anteriores, al encuentro debían asistir principal y prioritariamente los que luchan codo a codo, todos los días, con las personas de carne y hueso que sufren y combaten al capitalismo de exclusión.¹⁴ En función de ello, los principales organiza-

¹⁴ En la mente de Grabois pesaban antecedentes con derivas que había que evitar. Ante todo, existía la necesidad de diferenciarse del Foro Social Mundial (FSM), cuya primera edición se celebró en Porto Alegre en 2001. Allí habían confluído diversos movimientos sociales en señal de repudio al Foro Económico Mundial, bajo la orientación de construir una alternativa superadora del neoliberalismo. Según Grabois, con el correr de las ediciones anuales la vocación de cambio real del FSM se había ido apagando. En su explicación, el foro incurrió en uno de los mayores errores de la militancia progresista: en lugar de reconocer real y efectivamente a los pobres “como sujeto social y político” de la historia,

dores –MTE y MST– hicieron un descomunal esfuerzo para garantizar la presencia de una centena de delegados de diferente procedencia. A lo largo de tres días, los dirigentes de las “organizaciones que surgen de los sectores más empobrecidos, más golpeados, más perseguidos”, se juntaron para intercambiar y debatir posiciones acerca de las acciones más concretas y efectivas para la superación del injusto orden social vigente, donde reina el “consumismo, el individualismo y la indiferencia”. De ese modo, el encuentro se previno de no hablar sino de las propias experiencias y procesos de lucha, las que ellos mismos venían encarnando en sus respectivos lugares de origen.

Al igual que en los restantes encuentros, las acciones previas de difusión, las declaraciones finales y, particularmente, los discursos de Francisco, buscaron instalar la agenda de los excluidos, desde su propia perspectiva y en sus propios términos. En el primer discurso, pronunciado el 28 de octubre de 2014 en el aula vieja del Sínodo (con la destacada presencia de Evo Morales en las primeras filas), el papa insistió en el protagonismo de los pobres organizados en torno a la reivindicación de las 3-T. Fue en aquella ocasión inaugural cuando sostuvo: “Hoy quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha”.¹⁵ Y acto seguido propuso pensar al encuentro como un “gran signo” que venía a representar frente a la Iglesia y la sociedad mundial una realidad silenciada: la de los trabajadores excluidos (“los pobres”, dice el papa), organizados en las últimas décadas a lo ancho del vasto globo. En esa línea, durante la segunda edición en Bolivia destacó que “¡los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella!”. Por lo que no podían sino considerarse “verdaderos poetas sociales”. Una figura que, desde el último encuentro, cambió por la imagen del “samaritano colectivo”, que permite enfatizar la dimensión grupal de los movimientos populares como sujeto de cambio. En verdad, hacía tiempo que el papa venía remarcando que la realidad se comprende mejor desde la periferia, donde crecen las “semillas de esperanza sembradas pacientemente” por las organizaciones sociales.

fomentando su protagonismo y acompañándolos “desde su propia realidad”, terminó priorizando e imponiendo “esquemas ideológicos abstractos” (Grabois, 2022: 154).

¹⁵ Cabe señalar que la palabra “sínodo” evoca la idea de “reunión”, o con mayor literalidad, “caminar juntos”. La sinodalidad fue la idea-fuerza propuesta por Francisco para emprender distintas reformas dentro de la Iglesia.

El EMMP vino a decirle a los reaccionarios dentro de la propia Iglesia que las 3-T simplemente eran derechos consagrados por el evangelio, enraizados en el proyecto histórico de Jesús, que bien leído asume un carácter profundamente revolucionario. Además de la parábola del buen samaritano (Lucas 10, 29-37), bastaba con remitirse a unos pocos pasajes bíblicos, cuya lectura Francisco suele recomendar. Una de sus sugerencias más recurrentes es un pasaje del evangelio que propone dar de comer al hambriento, agua al que tiene sed, cobijo al que no tiene dónde ir, vestido al desnudo, atención al enfermo, compañía al que está solo y abandonado (Mateo 25: 31-46).

En este marco, las 3-T no eran nada raro. Al decir de Francisco, la clave pasaba por resistir la tentación de sobreideologizar el tema. Por supuesto, en el fondo, para el MTE y tantos otros movimientos del EMMP, la cuestión remitía al problema histórico de la lucha de clases o grupos sociales con intereses materiales antagónicos. En cambio, al papa le bastaba con acudir a las sagradas escrituras, a la actualización de la Doctrina Social de la Iglesia y a la teología latinoamericana que pone al pueblo en la centralidad. Sin embargo, no se habían convocado allí para debatir acerca de los marcos conceptuales desde los que se analizaba críticamente la realidad social contemporánea. Lo más importante eran las demandas concretas del pueblo pobre, tal y como ese pueblo las podía ir expresando y elaborando. Se trataba de las formas de organización y las alternativas solidarias que acentúan la dignidad humana, las mismas que en el andar de las luchas de resistencia habían ido encontrando los descartados de la hora actual para superar estructuras sociales profundamente desiguales. Ese era el punto de partida que los congregaba en asamblea, y en eso podían estar de acuerdo. La urgente necesidad de “terra, domus, labor” abrevia, pues, en esas fuentes, en el *ethos* de la sacralidad y dignidad de la vida humana. Algo compartido por todos dentro del EMMP y que, en los hechos, expresaba los intereses de los excluidos a nivel mundial.

De ese modo, la plataforma del EMMP sirvió para clarificar las 3-T como eje en torno al cual se organizó la agenda de los movimientos populares. Por ello, desde el discurso inaugural –para luego plasmarse en los documentos finales donde se perfilaron las acciones por articular– el papa convocó a hacerse cargo de las cuestiones más importantes. En primer lugar, denunciaba el problema de la concentración

de la tierra en pocas manos y la subsistencia de los viejos esquemas del latifundio, frente a lo cual recuperaba la necesidad de avanzar en la reforma agraria apelando al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, donde “además de una necesidad política (se la considera) una obligación moral” (§ 300). Luego, señala la necesidad de impulsar un techo digno para cada familia, sin dejar de remarcar que no hay hogar sin dimensión comunitaria. El barrio supone la infraestructura y los servicios necesarios para una vida digna, o sea, la integración urbana. Para que no exista segregación, para superar la deshumanización que crece en el olvido de los asentamientos, se impone garantizar el acceso a la vivienda digna, el derecho al barrio donde se cultivan vínculos afectivos y de cooperación, donde se construye comunidad a contramano del hiperindividualismo que impregnan las grandes metrópolis en las personas. Por último, haciendo suya la voz de los más humildes, el papa insistía en que la peor pobreza material venía de la mano de la imposibilidad de dignificar la vida con trabajo digno, ganando el sustento propio (“pan”). La falta de trabajo, la precarización y exclusión crecientes —continuaba el papa— no es una fatalidad natural, sino una construcción sociohistórica, que bien puede y debe revertirse. Son efectos del sistema vigente, que endiosa la ganancia y la rentabilidad. En aras de la productividad económica, se termina instaurando la cultura del descarte a escala masiva. Por eso, el horizonte de superación lo marcaban precisamente los excluidos, los sobrantes del sistema, que no se quedaron de brazos cruzados e inventaron su propio trabajo. Y “con su economía popular” fabrican además la “cultura del encuentro”.

Como señaló el periodista Ignacio Ramonet, allí presente, el papa invitaba a ilusionarse con un proyecto civilizatorio poscapitalista, a revitalizar las enmohecidas democracias occidentales y a ir más allá del asistencialismo paternalista, reconociendo protagonismo a las mayorías organizadas en los movimientos populares. Una certeza que las juventudes y los trabajadores de los movimientos venían acuñando desde tiempo atrás. Pero, al hacerlo, confirmaba su “enorme liderazgo político y moral” como abanderado “de las luchas de los pobres de América Latina y de los marginados del mundo” (Ramonet, 2014).

Fiorito “planta bandera” en la OIT

El 2014 es tal vez uno de los años más decisivos de la historia del MTE. Es el momento en que el movimiento comenzó a crecer y a expandirse tanto a nivel nacional como internacional. “Se da todo a la vez”, rememoran al unísono varios de sus referentes. A inicios de ese año, justo cuando empezaba a madurar la exigente propuesta de coordinar el EMMP, llegaba también la invitación para participar de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convocatoria que sería luego refrendada de cara a la conferencia del año entrante. Eran dos importantes actividades internacionales. En primer lugar, como es habitual, asistirían representantes gubernamentales y sindicales de la mayor parte del mundo, incluyendo además a otras organizaciones del llamado “sector informal”. En segundo lugar, entre los puntos más sobresalientes del orden del día figuraba el debate sobre los “desafíos de la transición de la economía informal hacia la formal”. Por último y no menos importante, se imponía la necesidad de clarificar el eje en debate, dar la disputa de sentido y marcar la agenda, tanto hacia afuera –gobiernos, sindicatos tradicionales, empresariado– como hacia adentro de las organizaciones del sector (en particular, como veremos más adelante, la Red Latinoamericana de Recicladores).

Si bien el origen de la OIT se remonta al Tratado de Versalles de 1919, el órgano adquirió su forma actual apenas concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1946 se convirtió en una agencia especializada en temas laborales de la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU).¹⁶ Desde el inicio, funcionó siguiendo un mecanismo de deliberación tripartita, en el que intervienen representaciones de los tres actores que hacen parte del juego económico en sociedades capitalistas: gobiernos, empleadores y trabajadores. Los debates tienen

¹⁶ Se fundó con el propósito de expandir derechos laborales y a la vez contrapesar la peligrosa influencia de la Revolución Rusa, acontecida en 1917. Poniendo el foco en el último aspecto, la OIT constituyó una estrategia del mundo capitalista para frenar opciones políticas más radicales, en particular la “amenaza roja”. En cualquier caso, resulta claro que fue una institución funcional a la expansión del modelo de acumulación fordista, asociada más tarde a los estados de Bienestar. En los ochenta tuvo un papel clave, junto a la Iglesia Católica, en el apoyo al sindicato Solidaridad de Polonia, cuya acción precipitó la crisis del comunismo en Europa del Este. Con el avance del neoliberalismo y el deterioro de los derechos laborales en todo el mundo, la OIT viene impulsando convenios y regulaciones basadas en los conceptos de “trabajo decente” y “globalización justa”, como forma de morigerar, sin enfrentar, los efectos de la precarización del trabajo. Más allá de esto, al igual que otros organismos internacionales, bajo determinadas circunstancias y relaciones de fuerza, pueden servir al fortalecimiento de perspectivas emancipatorias.

lugar en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, instancia superior de la OIT, con sede en Ginebra, Suiza. Allí concurren, en junio de cada año, delegaciones procedentes de los 187 estados miembros, en representación de cada una de las partes y para decidir conjuntamente las políticas generales que se van a impulsar. Por su capacidad para establecer, adoptar y promover normas internacionales que impactan en las relaciones laborales concretas, suele ser denominado el “parlamento del trabajo”.

A esta altura, después de haber trajinado estas páginas, el lector fácilmente puede deducir que la invitación a la 103 Conferencia Internacional del Trabajo, a celebrarse en junio del 2014, no había sido cursada por el movimiento obrero argentino con el objeto de componer una delegación sindical lo más inclusiva y representativa posible de la totalidad de los trabajadores. Algo que no hubiera resultado en absoluto descabellado. A fin de cuentas, más allá de que el universo del trabajo no se agota en el sector formal o registrado, no podía desconocerse que el orden del día incluía expresamente al sector informal. Con un poco de buena voluntad, podía haberse negociado una módica representación local de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Sin embargo, ahí parecía estar el meollo del asunto: hasta el momento, esa voluntad no existía y, por entonces, el sindicalismo tradicional no se sentía en la obligación de dar explicaciones al respecto. Pero al menos tenía un dato de la realidad a su favor, una especie de salvoconducto que le permitía no darse por aludido, guardar las formas y disimular la desconfianza que el llamado sector informal no dejaba de inspirarle. El hecho era que la CTEP no contaba con aval oficial que le diera legitimidad como sindicato de los trabajadores más humildes: en 2014 aún no había conquistado la personería jurídica. Por lo demás, como hemos visto, los insistentes acercamientos que se habían intentado con la CGT, desde el manifiesto fundacional del Teatro Verdi en 2011, prácticamente habían caído en saco roto. Apenas unos cuantos gestos de complicidad por parte de dirigentes de segundas líneas o sindicatos menores. Paradójicamente, esta especie de ninguneo sistemático y generalizado tornaba imprescindible la voz de los trabajadores excluidos en espacios como el de la OIT.

La invitación provino del mundo de las ONG, por diversas razones (que en parte abordaremos luego) bastante más sensibles a la cues-

ción de la informalidad creciente y con mayores herramientas para reconocer en los excluidos del mercado laboral su genuina condición de trabajadores. En esa ocasión, se trató de la red global “Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando” (WIEGO por sus siglas en inglés), una ONG que articula con organizaciones del sector para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadoras.¹⁷ De la mano de la convocatoria, WIEGO propuso la realización de una consulta previa al evento de la OIT para clarificar el debate. Por lo que, a fines de marzo de 2014, se concretó en la sede central de la CTEP el “Primer Taller Latinoamericano de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras Informales/Populares. Organización popular: clave para la integración del sector informal”. En ese marco, ocurrieron dos cosas importantes.

Por un lado, el evento sirvió como excusa para poner en condiciones óptimas la sede nacional de la CTEP en el barrio Constitución, un edificio que se encontraba muy derruido luego de décadas de abandono y que, en 2012, fue ocupado –principalmente por el MTE– para ser transformado en lo que es hoy.¹⁸ Cuando se supo que vendrían organizaciones de la región, asumieron la condición de anfitriones y rápidamente se pusieron manos a la obra. En poco tiempo, la sede estuvo lista. Si se quiere dimensionar el logro, alcanza con reparar en las palabras de Carolina Palacio, militante del MTE, quien a modo de balance asegura que “tener la sede del sindicato fue y es todo”. Por otro lado, aunque en íntima relación con lo anterior, el evento en sí mismo constituyó un partaguas en lo que hace a la manera de abordar la cuestión internacional dentro de la CTEP. Fue un salto cualitativo que implicó pasar de lo aspiracional a lo concreto, de la arena a los hechos, del discurso a la acción. El taller latinoamericano plantó la

¹⁷ La ONG tiene su sede central en Manchester (Inglaterra) y comenzó a funcionar en 1997. <https://www.wiego.org/es/quienes-somos>

¹⁸ La historia de este importante local es una novela en sí misma. Originalmente, en ese predio funcionaban las oficinas de la firma estatal de electricidad SEGBA. En los noventa, en el marco de la privatización y desguace de las empresas públicas, el gobierno de Menem le concedió el “uso precario y gratuito” del inmueble a la Fundación Argentina de Lucha Contra el Mal de Chagas. Días antes de finalizar el segundo mandato del riojano, el Senado transfirió gratuitamente a dicha fundación la propiedad del inmueble. Dos meses más tarde, el poder ejecutivo nacional, ya a cargo de Fernando de la Rúa, vetó la transferencia, argumentando una serie de irregularidades cometidas por parte de la beneficiaria. Transcurridos quince años, un proyecto de Gabriela Michetti, por entonces a cargo de la presidencia del Senado en calidad de vicepresidenta del gobierno de Cambiemos, ordenaba restituir la transferencia del inmueble a la Fundación. Pero, finalmente, el proyecto no prosperó y en 2017 terminó archivado. Desde 2012, el espacio ha venido funcionando ininterrumpidamente como sede central de la CTEP y, luego, de la UTEP.

semilla de lo que vino después al permitir definir la línea a seguir en lo internacional. Más concretamente, fue el germen fundacional de la Alianza Global de Recicladores (que, como veremos, se fundó en 2018).

Por lo pronto, el taller consultivo realizado en la flamante sede estableció los parámetros fundamentales de lo que, pocos meses más tarde y también al año entrante, plantearon en la OIT las delegadas que integraron las comisiones patrocinadas por WIEGO en representación de la región. En efecto, fue en el popular barrio de Constitución donde pudieron clarificar y consensuar la posición conjunta que luego se defendió con uñas y dientes en Suiza. Una posición cifrada en un conjunto de reivindicaciones que fueron enunciadas desde su lugar en el mundo: el de trabajadores excluidos con derecho a organizarse, asociarse y sindicalizarse para luchar por trabajo digno y cambio social.¹⁹

A las puertas del “parlamento del trabajo”, los excluidos del mercado laboral formal tenían clara conciencia de quiénes eran y qué iban a hacer allí: exigir que se les dispensara el trato jurídico que merecían. La tarea recayó finalmente sobre el MTE. Y es que los frutos de la pelea por el sistema de reciclado con inclusión social estaban a la vista: su funcionamiento ejemplar en CABA, la conquista de buena parte de esos derechos y el acumulado de experiencia y saberes de lucha en sus militantes. En representación de la CTEP y de todas las organizaciones de la región, la designada para integrar la comitiva internacional apadrinada por WIEGO fue Paola Corina Caviedes, una cartonera de Villa Fiorito que llevaba consigo tantos sufrimientos como años de lucha, y a la que, en sus propias palabras, el MTE le “corre por la sangre”.

Entre quienes la conocen o la han tratado, Paola es famosa por su carácter, algo que ha ido templando a fuerza de golpes. Como tantos de sus compañeros, se fue haciendo experta en asimilar incluso las trompadas más duras y se ejercitó hasta desfallecer en la gimnasia popular de sobrellevar las marcas con dignidad. Con el tiempo, adquirió

¹⁹ El Documento Conclusivo del Taller Latinoamericano de Recicladores contempla las siguientes demandas: el reconocimiento efectivo de los derechos laborales (remuneración justa; cobertura de salud; aportes jubilatorios) y sindicales (libertad de asociación; constituir organizaciones, federaciones y confederaciones; negociación colectiva), la disposición de espacios e infraestructura adecuada, políticas públicas para la gestión ecológica y socialmente sustentable de los residuos, programas orientados al “cuidado de la infancia” (para que ningún niño se vea obligados a trabajar), la regulación de los precios de los materiales reciclables para desalentar la explotación de intermediarios y grandes empresas, y, por último, financiar la restitución de derechos y programas a través de una “tasa de envases” coadministrada por los Estados y las organizaciones de recicladores (en el cap. 6 presentamos la lucha del MTE y FACCYR por la Ley de Envases).

la singular destreza de encapsular el dolor sin perder la capacidad de sentir, hasta transmutarlo en empatía. De tanto andar sobreviviendo la vida, acabó por mezclarse entre los suyos, los sobrevivientes, que la acogieron en su seno. Fue allí, en las filas del MTE, donde pasó “de luchar por lo propio, a luchar por lo ajeno”. A criterio de sus propios compañeros, a Caviedes le sobraba entereza para ir a “defender los trapos” en la OIT y dejar en alto las banderas del sector. A fin de cuentas, venía cumpliendo esa función casi desde el mismo instante en que se sumó al MTE, cuando fue elegida delegada y le tocó organizar la ruta cartonera que se estaba armando en su zona.

Así pues, en junio de 2014 y de 2015, el MTE dejó su huella en Ginebra. En el escenario dispuesto por ambas conferencias (el debate sobre la transición de la economía informal a la formal) y con la indómita presencia de Paola, fácilmente podía preverse que la impronta del movimiento no iba a pasar desapercibida. Y las predicciones no fallaron. Las decididas intervenciones de Caviedes, sobre todo aquellas que tuvieron lugar en el marco de una confrontación con Gerardo Martínez (UOCRA) —quien había asistido en calidad de delegado nacional por los trabajadores—, marcaron a fuego el rumbo de la discusión y plantaron semillas de cambio que continúan floreciendo en el ámbito de la “economía informal”. En concreto, a través de la Recomendación 204, adoptada el 12 de junio de 2015 por la OIT en su 104.ª reunión. Un importante avance que terminó gravitando en la conquista de la personería social de la CTEP a finales de ese mismo año, al propiciar el derecho a la sindicalización de los trabajadores de la economía popular.

La recomendación venía siendo debatida desde la conferencia anterior, a la que Caviedes había asistido sola. Sin avanzar en otras consideraciones relevantes y centrándonos en los puntos más sobresalientes de esta norma internacional, en sus artículos 16 y 31 se exhorta a los Estados miembros a reconocer la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva de “las personas ocupadas en la economía informal”, incluyendo “el derecho de constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas sujeto a lo dispuesto en sus estatutos”. Además, el apartado en que se inscribe el primero de esos artículos (“Derechos y Protección Social”), no solo ofrece mayores precisiones al utilizar la expresión “trabajadores de la economía informal” (reconociendo explícitamente

una condición que era negada por distintos actores en el ámbito local: gobierno, cámaras patronales y sindicatos tradicionales), sino que también enfatiza la necesidad de garantizarles “en la legislación y en la práctica” todos los derechos históricamente conquistados por la clase obrera y consagrados por la normativa nacional que hacen a “la seguridad social, la protección de la maternidad, las condiciones de trabajo decentes y un salario mínimo” (Recomendación 204, art.18: 7-8). En relación con este último punto, el pasaje aludido compele a los gobiernos a tomar “en cuenta las necesidades de los trabajadores” del sector a la hora de estipular y garantizar ese ingreso mínimo, algo que resultó particularmente trascendente en la lucha por la conquista del Salario Social Complementario durante el gobierno de Cambiemos (y aún lo sigue siendo).

Mientras la CTEP venía presionando a nivel nacional para el otorgamiento de la personería gremial, la OIT lanzaba así una recomendación que fortalecía su planteo. A partir de allí, sobre las espaldas de Carlos Tomada, por entonces ministro de Trabajo de la Nación y principal interlocutor en la puja, pesó la necesidad de hacer cumplir lo que indicaba esta norma internacional, fundamentalmente, respetar el derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector. A fin de cuentas, se trataba de una disposición en cuya elaboración el propio Tomada había participado en representación del gobierno de CFK. En lo formal, al gobierno no le quedaba mucho margen para mirar hacia otro lado. Como país miembro, la Argentina se había comprometido a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en normas fundamentales de la OIT, en particular el convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949). Ahora, la recomendación venía a complementar y actualizar estos convenios previos, a proporcionarles directrices más detalladas sobre las condiciones concretas de su aplicación. Sin embargo, para que todo esto sucediera, fue necesario que una cartonera de Fiorito, que como muchos de los suyos nunca en su vida había tenido un trabajo formal, pusiera el grito en el cielo de Ginebra.

A pesar de la enorme relevancia de su aporte, la segunda vez Caviedes se volvió contrariada de Suiza, agobiada por sentimientos encontrados acerca de su participación en la conferencia. Su balance

general era que el espacio de la OIT dejaba bastante que desear. Lo último que le faltaba, llegó a pensar al verse allí, era convertirse en una burócrata. La experiencia le permitió comprobar con sus propios ojos algo que ya sabía: la paradójica condición de algunos dirigentes sindicales que representan poco y nada, al menos a los trabajadores del sector no registrado. Y claro, no pudo menos que pelearse con uno. Sin conocer su nombre siquiera, terminó confrontando con el delegado de la representación nacional por los trabajadores. Gracias a ello, se hizo oír e incidió positivamente en el debate.

La pelea surgió porque su contendiente, recreando el mantra que la cúpula de la CGT solía recitar en el plano local, atacó de manera furibunda y sin matices a las cooperativas de trabajo. La alocución apuntaba contra la corrupción que, según el delegado de los trabajadores, se extendía de manera generalizada y como una epidemia en el mundo cooperativo. No era nuevo el argumento. La CGT venía insistiendo en los peligros de avanzar en la sindicalización y reglamentación de la economía popular por propiciar el fraude laboral bajo distintas formas. Y algo de razón tenía, ya que muchas veces las patronales hacían una utilización abusiva y fraudulenta de la normativa, adoptando la figura de la “cooperativa de trabajo” para flexibilizar condiciones laborales y encubrir relaciones de dependencia. Además, existía el temor de que la formalización del sector abriera la puerta a sindicatos “fantasma” y paralelos que debiliten al movimiento obrero. Frente a lo cual, la postura del MTE y la CTEP era básicamente que el fraude laboral no era un fenómeno nuevo o inaugurado por la economía popular, y que existían instrumentos jurídicos para combatirlo. En los hechos, el problema era la falta de voluntad sindical para actuar en defensa de las víctimas: los trabajadores precarizados (que generalmente desconocían incluso la situación irregular en que se encontraban).

Sin embargo, en ese momento Caviedes no pensó en refregar en la cara a Martínez los argumentos que esgrimía la CTEP. Cuando el corsé de la conferencia apretaba fuerte y la tiranía del reglamento la privaba en extremo del uso de la palabra, la cartonera, ofuscada, llena de una virulenta sabiduría popular, jugó una magistral carta “maradoniana”. Si no podía hablar, si se atrevían a callarla como lo habían hecho siempre, tenía que darse a conocer, plantar bandera. Y así fue. Le hizo llegar al “tipo” que no paraba de monologar en contra de las cooperativas, un

simple papelito con apenas unas cuantas líneas escritas. De pronto ella, el MTE y los más pobres quedaron bajo el defectuoso y selectivo radar del referente nacional de la UOCRA. El breve mensaje decía algo así como: “Soy argentina, soy del MTE, me llamó Paola Corina Caviedes y vivo en Fiorito”. Incluso tenía la dirección de su domicilio... ¡Faltaba el número de teléfono nomás! Por si alguna vez el hombre se dignaba a conocer el barrio y la realidad de los trabajadores que lo pisan. Fue la versión cartonera del “te espero en Seguro y Habana”. Algo que tampoco debería sorprender demasiado, ¿o Diego Armando Maradona no provenía de Villa Fiorito también? Mismo origen, mismo *modus vivendi*.²⁰

Lo cierto es que el papelito había sido escrito a los apurones, con la tenue esperanza de hacerse visible. Quizás le diera la chance de “marcar un poco la cancha”, pensó Caviedes. ¿O el tipo tenía la verdad absoluta sobre el tema? ¿Acaso los más humildes no eran también trabajadores? ¿A cuento de qué venía tanta necesidad? ¿Por qué les costaba tanto entender que los laburantes excluidos también podían aportar conocimiento desde su experiencia? En el fondo, el incidente estaba lejos de ser una amenaza. En semejante escenario, más bien fue una maniobra legítima para ingresar en la conversación. Tal vez la única disponible. Pero el delegado no lo tomó así, se sintió profundamente agraviado y amenazado. Y denunció a viva voz la inaceptable intimidación. En medio de tanto revuelo, y solo allí, los cartoneros se hicieron visibles. Fiel a su historia, el MTE nuevamente lograba hacerse escuchar “poniendo en riesgo la paz social” de los cementerios, que reinaba confortablemente en el fastuoso salón de conferencias de la OIT. El sacudón puso en el mapa de la discusión a Caviedes y con ella a la línea latinoamericanista de la economía popular. Su intervención dejó en claro lo esencial de las reivindicaciones que meses antes se habían consensuado en Buenos Aires. Y la sala terminó aceptando de buen grado que el fondo de la cuestión era irrefutable.

²⁰ La frase “te espero en [las calles] Seguro y Habana” refiere a un cruce verbal entre Maradona y Julio César “el Huevo” Toresani, durante y después del partido que Boca disputó contra Colón en La Bombonera el 7 de octubre de 1995. La expresión es parte de la cultura popular argentina y es utilizada por quien quiere invitar a una pelea.



Imagen 12. Paola Caviedes en la Organización Internacional del Trabajo (junio de 2014). Fuente: página web de la Alianza Global de Recicladores.

Siguieron pues las negociaciones, bocetar el contenido de la Recomendación 204 y las formalidades de rigor. Después de todo, la resolución del altercado parecía reafirmar un viejo aprendizaje del campo popular. Si el diálogo fuera la premisa y las condiciones para tomar equitativamente la palabra estuvieran realmente garantizadas, no sería necesario andar escribiendo papelitos. Como era de prever, el mundo civilizado de la OIT razonó de otro modo y no se privó de reprobar el gesto atrevido y maleducado de la cartonera. Al unísono, los buenos y cultos entonaron la música de las buenas formas, con la letra del sermón ilustrado que llama a dejar de lado la violencia, para concentrarse en “la robustez de los argumentos”. Sin advertir que las razones de los pobres no suenan igual que las otras, que casi siempre son mudas, como “campanas de palo”. Algo que Caviedes había aprendido hace mucho tiempo, y no en el Martín Fierro.²¹

²¹ La historia de esta controversia en la OIT se reconstruye a partir de fuentes periodísticas, las actas del organismo y testimonios de Paola Caviedes en entrevistas realizadas para este libro y en radio FM Raíces Rock (La Plata): <https://fmraicesrock.org/2015/06/21/paola-caviedes-cartonera-del-mte-que/>

Como sea, la cartonera cumplió un papel determinante en la OIT, sobre todo en la segunda conferencia, aunque volvió con la sensación de haber cometido un error. Y quizás no le faltaba algo de razón. Al año siguiente no retornó a Ginebra. Tal vez porque la ONG inglesa, que patrocinó los viajes anteriores, juzgó inadecuado su comportamiento. Lo cierto es que, a la luz de los resultados, su participación fue un rotundo éxito. Hasta el día de hoy, cuesta dimensionar el alcance de lo conseguido por el MTE en Suiza. Por lo demás, el episodio de la confrontación no fue amplificado y manipulado por ninguna de las dos partes. Es cierto, una recuperadora urbana de Fiorito, en representación de su sector, el de los trabajadores excluidos y sin derechos, una vez más había sido ninguneada por un representante de los trabajadores registrados y con derechos. Pero el asunto no iba a terminar engordando un conflicto real, existente al interior de la clase trabajadora. En particular, el MTE no estaba dispuesto a fomentarlo. La premisa tenía que seguir siendo la misma: unidad de los trabajadores, con la CTEP dentro de la CGT.

De la Red LACRE a la Alianza Global

Si la razón principal del EMMP fue instalar la agenda de las 3-T, y con ello ganar mayor visibilidad y fuerza como movimientos populares en el plano internacional, existió también un objetivo paralelo que motivó la organización de este espacio por parte del MTE. Nos referimos a la necesidad de ordenar la línea cartonera en el plano regional. Fundamentalmente, jaquear y trascender, en la medida de lo posible y deseable, la lógica de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE). En términos generales, la idea del MTE era seguir congregando a los mismos líderes y organizaciones de la región, pero alrededor de otra agenda, la que cada vez con mayor claridad encarnaba la CTEP a escala nacional.

En los albores de 2014, cuando el proceso de proyección internacional del MTE comenzaba a materializarse, la Red LACRE era la unión de organizaciones de recuperadores de mayor envergadura en toda la región. Con casi 25 años a cuestas, constituía una referencia ineludible en el mundo del reciclado. Había surgido a comienzos de la década del noventa, como una iniciativa de recicladores colombianos, con el propósito de proteger y mejorar las condiciones en que

desarrollaban su oficio. Su origen se asentó sobre dos grandes hitos. El impulso inicial fue el Primer Encuentro Nacional de Recicladores, realizado en 1990, cuya organización estuvo a cargo de la Asociación de Recicladores de Bogotá. En aquel encuentro se reunieron cerca de cuarenta agrupaciones provenientes de distintas regiones de Colombia. Tres años más tarde, bajo la misma impronta, se convocó al Primer Congreso Internacional de Recicladores, ahora con la participación de organizaciones procedentes de México y Perú.

Estos eventos fueron el punto de partida de la Red LACRE, actualmente integrada por organizaciones de la mayor parte de los países del subcontinente (con delegados de 17 países, sobre un total de veinte), que representan a más de cuatro millones de recicladores urbanos. La red asumió el desafío de constituirse como espacio de diálogo y articulación a escala regional, para el intercambio de experiencias y saberes que permitieran diseñar y ejecutar estratégicamente acciones conjuntas en pos del mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los recicladores latinoamericanos. En su seno se fue consolidando el liderazgo de importantes cuadros dirigentes, principalmente mujeres (como Nhora Padilla, de Colombia), que siguieron una línea similar a la impulsada por el MTE y propiciaron valiosas conquistas.

No obstante, en el curso de su evolución, fue desarrollando otra faceta que terminó ganando cada vez mayor preponderancia. Se trata de su propensión a generar articulaciones con el mundo de las ONG, presuntamente filantrópicas, que funcionan como intermediarias de las grandes corporaciones transnacionales, garantizando financiamiento y contactos a un elevado precio: la *empresarialización* del sector. Con ello, la misión fundacional fue quedando un poco desdibujada. El acercamiento a la visión y las prácticas del empresariado terminaron primando sobre la declamada defensa de los reales intereses de los trabajadores. En los hechos, se tornó más importante tomar parte en el negocio y asociarse a los grandes jugadores corporativos, que animarse a contestar la lógica excluyente del sistema con un proyecto comunitario de desarrollo e integración social. A partir de este diagnóstico, lejos de desconocer la relevancia de la Red LACRE como plataforma pionera y caer en el infantilismo rupturista o en la demonización fácil, el MTE se propuso dar la disputa de sentido al interior de ella. No se trataba de confrontar para ganar un espacio de poder. Guardando fidelidad a sus premisas organizativas fundacionales, la jugada estratégica tenía

más bien por objetivo impulsar y robustecer la construcción de poder popular. Un sendero por el que, además del MTE, venían caminando también otros movimientos populares de la región.

En este marco, el espacio del EMMP también dio lugar al desarrollo de esta estrategia de reposicionamiento, impulsada desde el MTE para la región. En gran medida, los encuentros de movimientos populares sirvieron para interpelar y descolocar la línea hegemónica de la Red LACRE, con sus flaquezas frente a lógica emprendedorista y los esfuerzos de cooptación del mundo empresario. Como vimos, en el curso de los tres primeros encuentros, contingentes de todo el mundo delinearon y adoptaron una agenda programática en torno a las 3-T. Entre ellos, asistieron las mismas organizaciones cartoneras que se venían encontrando regionalmente, con una sustantiva diferencia. Ahora, gracias al nuevo impulso que daba el EMMP, podían precisar y redefinir sus prioridades. Lo que cambiaba era entonces el eje de la discusión y las coordenadas de acción. Mientras esto ocurría, la Red LACRE se mostraba paradójicamente adormecida, no parecía tener algo mejor para contraponer. Tal vez porque, sin más, la línea del encuentro de movimientos populares expresaba mejor los intereses del sector.

Como recuerdan sus referentes, el MTE combatió desde el principio el sesgo empresarial de la red latinoamericana. Impronta que se evidenciaba en su predilección por participar de plataformas integradas por grandes corporaciones transnacionales (Coca Cola, Nestlé, Dow Chemical Company, etc.), organismos internacionales de crédito (BID) y ONG (Fundación Avina, GAIA y otras). Todo bajo el discurso de estar colaborando en la transición del actual modelo económico lineal y extractivo hacia el paradigma de la llamada economía circular, más atenta al criterio de sustentabilidad socioambiental.²² Puertas adentro, el MTE y la FACCyR no se privaron de cuestionar y denunciar la lógica de funcionamiento de la Red LACRE: los negociados entre bambalinas, la perpetuidad de dirigentes en los cargos, la opacidad de las cuentas y la falta de transparencia en general. En cualquier caso, debió correr mucha agua debajo del puente para que las cosas comenzaran a cambiar.

Recién a partir de 2019, con el pase de manos de la secretaría²³ y la modificación del directorio (a instancias de una propuesta de Sergio

²² Como ejemplo de esto puede verse la experiencia de Latitud R: <https://latitudr.org/quienes-somos/#>

²³ Durante muchos años y hasta su fallecimiento, la presidencia de la Red LACRE estuvo en manos de Ezequiel Estay, un dirigente del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile.

Sánchez, como presidente de la FACCyR, de incluir muchos países), la Red LACRE empezó a tomar un nuevo rumbo, más acorde con la línea que viene impulsando el MTE. Y hubo que esperar hasta 2022, cuando en la asamblea realizada en Panamá la Secretaría de Asuntos Internacionales quedó a cargo de Argentina, para empezar a impulsar una actitud más proactiva en lo gremial. En las filas del MTE, se entusiasman con dar un salto cualitativo, dejar de “viajar por viajar”, para avanzar en expandir a escala regional los sistemas locales de cogestión (Estado-cooperativas) que se encuentran en la base del modelo de reciclado con inclusión social.

Pero el giro de timón en la orientación de la red latinoamericana no ocurrió por arte de magia. Desde el MTE lo explican mayormente a partir del surgimiento de la Alianza Global de Recicladores (GlobalRec). Irónicamente, los orígenes de este proyecto se remontan a dos iniciativas que impulsó la Red LACRE: la Primera Conferencia Internacional, realizada en 2008 en Colombia y, sobre todo, el Taller Estratégico Global de los Recicladores, realizado en 2012 en India. Con base en esos antecedentes, la propuesta de lanzar la Alianza Global empezó a tomar forma a inicios del 2014, en ocasión del Taller Latinoamericano preparatorio de la 103 reunión de la OIT.

Con el espaldarazo del EMMP, y el acompañamiento de WIEGO (que buscaba respaldar sindicatos globales y criticaba la inoperancia de la red latinoamericana), el MTE sintió que estaban dadas las condiciones para avanzar en la dirección de la Alianza Global. Así, en octubre de 2018, organizaciones de casi treinta países, fundamentalmente del Sur Global (América Latina, Asia y África), se dieron cita en la sede central de la CTEP para consensuar, redactar y firmar el manifiesto fundacional. En aquella ocasión establecieron los acuerdos y lineamientos básicos, cuyo esquema de reivindicaciones se inscribió en el programa de las 3-T. De ese modo, la Alianza Global de Recicladores sirvió como plataforma para trascender los límites que imponía la Red LACRE, y dio el impulso que faltaba para terminar de inclinar la balanza a favor de la línea del MTE en la asociación regional.²⁴

²⁴ Sobre GlobalRec, ver: <https://globalrec.org/es/>

Capítulo 5

LA DIVERSIFICACIÓN

Un país neoliberal

La llegada en diciembre de 2015 de Cambiemos al gobierno nacional inauguró una nueva etapa en Argentina. Esta coalición de derecha estaba liderada por el PRO, en alianza con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otros partidos de menor tamaño. La orientación neoliberal, expresada desde las primeras medidas adoptadas, fue advertida claramente por parte de las organizaciones populares. Buena parte de los malos augurios sobre el espacio político conducido por Mauricio Macri pronto se hicieron realidad: ola de despidos en distintos niveles del Estado, eliminación de los controles cambiarios, fuerte devaluación y pérdida de poder adquisitivo del salario, quita o reducción de retenciones a la exportación de productos agropecuarios y mineros, suba de tarifas de servicios públicos y desregulación financiera, entre otros. A nivel internacional, destruyó los avances en materia de integración regional y alineó a la Argentina a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. A todo esto, se le sumó la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales, coronado con el préstamo acordado en 2018 con el FMI por más de cincuenta mil millones de dólares. Así, el país quedaba nuevamente bajo la tutela de este organismo neocolonial.

En pocas palabras, la brusca reorientación económica significó un acelerado proceso de transferencia de ingresos de los sectores populares a las clases dominantes y el capital internacional. En conjunto, estas iniciativas implicaron un grave retroceso para los trabajadores en general y para los de la economía popular en particular, más

desprotegidos frente a los vaivenes económicos. El deterioro de la población se vio reflejado en la caída del consumo y el aumento de los niveles de pobreza e indigencia, así como también en la pérdida del empleo asalariado y el crecimiento de las modalidades laborales precarias, expresado en una mayor subocupación y cuentapropismo. Esta situación fue acompañada por un discurso emprendedorista en el que se apelaba a la responsabilidad y capacidad individuales como forma de salir adelante e, indirectamente, como modo de justificar las desigualdades sociales.

A su vez, esta nueva etapa política involucró el despliegue de una política de criminalización y judicialización de militantes sociales y sindicales, así como de exfuncionarios y referentes del kirchnerismo. Entre los primeros destacaron dos casos que se volvieron icónicos del período. Por un lado, la detención en enero de 2016 de la reconocida dirigente jujeña Milagro Sala. Quien fuera la persona más representativa del avance popular en el período anterior quedaba presa y su poderosa organización, la Túpac Amaru, prácticamente disuelta luego de sucesivos embates judiciales. Por otro lado, en agosto de 2017, en el marco de la feroz represión a una protesta mapuche en la provincia de Chubut, desapareció Santiago Maldonado, un joven militante anarquista. El operativo había sido conducido directamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, con participación de fuerzas federales. La desaparición, que remite a los métodos de la dictadura militar, generó pavor en gran parte de la sociedad, que se movilizó masivamente como lo había hecho el 17 de mayo del mismo año para poner freno a la aplicación del beneficio del 2x1 a los genocidas presos. Finalmente, el cuerpo de Maldonado fue encontrado sin vida casi tres meses más tarde; pero las irregularidades del caso nunca fueron esclarecidas.¹

En cuanto a la judicialización de la política, tuvo entre sus principales destinatarios a referentes de los gobiernos kirchneristas. Con la lucha contra la corrupción como argumento, fueron presos exfuncionarios de alto nivel y procesados muchos otros, entre los

¹ Un tercer suceso con menos repercusión nacional, aunque significativo para la economía popular, fue el asesinato en octubre de 2017 de Rafael Nahuel, un joven de solo 22 años de edad perteneciente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu e integrante de la CTEP. Al igual que en el caso de Maldonado, el contexto fue una represión a una protesta mapuche de parte de fuerzas nacionales de seguridad, pero esta vez en la provincia de Río Negro.

cuales destacó la expresidenta de la nación. Antes que la búsqueda de justicia, lo que perseguían era socavar la legitimidad del proceso político anterior y, sobre todo, de Cristina Fernández como principal obstáculo al proyecto neoliberal. Sin importar las violaciones a los procedimientos jurídicos, el poder judicial se prestó como arma en esta caza de brujas amparada por el poder político y los medios de comunicación. Incluso, como se develó años más tarde, un cuarto actor fue constitutivo de lo que se conoció como *lawfare*: los servicios de inteligencia. El espionaje ilegal y las operaciones de agentes secretos fueron parte del repertorio del que se sirvió el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la nación. En síntesis, al igual que en otros períodos oscuros de nuestra historia, la instauración del modelo neoliberal procuró disciplinar a la oposición social, gremial y política en miras a desarticular los posibles nodos de resistencia, sin importar el estado de derecho ni las garantías constitucionales.

En ese marco, como veremos, las organizaciones de la economía popular en general y la CTEP en particular adoptaron una estrategia pragmática que se enfocó en enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los sectores excluidos. Esta posición implicó una combinación de medidas de protesta, gestiones y acuerdos, los cuales fueron favorecidos por no ser movimientos identificados con el kirchnerismo. La única excepción, el Movimiento Evita, se separó públicamente de ese espacio político en junio de 2016.² Así pues, pese a la hostilidad del contexto y haciendo un uso estratégico de distintos elementos, el sector de la economía popular logró encauzar algunas de sus reivindicaciones más importantes. Estas conquistas, vistas como contraparte de una “garantía de gobernabilidad”, provocaron fuertes cuestionamientos de parte de sectores de izquierda y kirchneristas.

Más allá de las discusiones de la época, visto en retrospectiva es claro que las organizaciones de la economía popular fueron parte de la resistencia al macrismo. No solo a través de las peleas reivindicativas, sino mediante su participación en acciones de protesta más amplias como el rechazo al 2x1, los pedidos de justicia por Maldonado o la virulenta jornada del 18 de diciembre de 2017 que frenó la reforma previsional en el Congreso de la nación. Además, protagonizaron iniciativas de

² Si bien el disparador fue la detención días antes del ex Secretario de Obras Públicas —José López— con casi diez millones de dólares en dos bolsos, el alejamiento del Mov. Evita del espacio kirchnerista fue la cristalización de varios años de gradual distanciamiento. Ver Longa (2019).

lucha y marchas federales en coordinación con el movimiento obrero. En resumen, podemos decir que las organizaciones de la economía popular avanzaron cuanto pudieron con la institucionalización gremial (una línea que la CTEP sostenía desde su creación en 2011), sostuvieron una activa presencia callejera en reclamo de políticas para enfrentar la debacle económica, acompañaron esas medidas con iniciativas legislativas y acuerdos a distintos niveles de gobierno que les permitieron obtener algunos logros significativos y participaron de la oposición al macrismo en conjunto con otros sectores movilizadas.

Esa dinámica describe en buena medida el recorrido del MTE en los años macristas, sumado a un proceso que transformó radicalmente la organización: su diversificación. Al menos cuatro condiciones confluyeron en torno a 2016 para que un movimiento, con desarrollo durante más de una década casi exclusivamente en el mundo cartonero, en poco tiempo lograra desplegarse sobre otros sectores. Primero, la trayectoria organizativa previa que le permitió constituirse en un polo de atracción para otras experiencias dispersas. Segundo, los frutos de la articulación establecida con la Corriente Julio Antonio Mella/Marea Popular y, luego, con Patria Grande, que le posibilitaron incorporar militantes experimentados y construcciones en distintos territorios. Tercero, las conquistas obtenidas frente al macrismo que aportaron las bases materiales para la proyección de las inserciones en nuevos sectores. Cuarto, la consolidación organizativa y programática de la economía popular como propuesta. Sobre los primeros dos elementos se hizo alusión en capítulos anteriores, mientras que sobre los últimos dos puntos profundizaremos a continuación, para luego detallar el proceso de diversificación del MTE.

Un salto en la organización de la economía popular

Los avances de las organizaciones de la economía popular entre 2016 y 2019 no pueden comprenderse sin tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la conformación de una fuerza social unificada en lo reivindicativo y la coordinación con el movimiento obrero. En primer lugar, la alianza entre la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, más otras organizaciones menores, tuvo un gran protagonismo en la protesta callejera y sirvió, además, para que distintos movimientos, con orígenes diversos,

comenzaran a identificarse con la plataforma de la economía popular (Muñoz y Villar, 2017). Como veremos en el siguiente capítulo, esta unidad forjada en la lucha se profundizó a tal punto que derivó en 2019 en la creación de una estructura más amplia que la CTEP, dentro de la cual quedaron comprendidas todas las organizaciones. En segundo lugar, la construcción de una agenda reivindicativa propia, pero en diálogo con los reclamos de la clase trabajadora, en general permitió comenzar a tender puentes con el movimiento obrero. En esta línea, la articulación con los sectores sindicales nucleados en las dos CTA y distintas corrientes de la CGT produjo una etapa notable en términos de la unidad de los trabajadores organizados (Natalucci y Morris, 2019). En ese sentido, pueden mencionarse acciones compartidas en jornadas de lucha, marchas federales, paros nacionales, actividades en torno al Día de la Mujer Trabajadora, entre otras.

Un acontecimiento fundamental en estos procesos fue la presentación en abril de 2016 del Proyecto de Ley de Emergencia Social. Este contemplaba el aumento de los montos destinados a las cooperativas, la universalización de las tarifas sociales de servicios públicos y la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los beneficiarios de programas sociales. En torno a la pelea por la sanción de esta norma se abrió un ciclo de movilizaciones que forjó la potente articulación entre las tres principales organizaciones de la economía popular: la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Tras la peregrinación conjunta del 7 de agosto de 2016 en el día del santo patrono del pan y el trabajo, esta unidad se conoció como “Tridente de San Cayetano”. La argamasa de esta alianza fue el acuerdo en torno a una agenda común sintetizada en la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” (las 3-T). Tener un programa en común, inspirado en el lema del Encuentro Mundial de Movimientos Populares impulsado por el papa Francisco, fue una novedad para agrupaciones que provenían de historias, identidades, tradiciones políticas y métodos de trabajo diferentes. Sobre esa base común se logró una unidad de acción que les permitió instalarse con fuerza en el escenario nacional a partir de la lucha por la Ley de Emergencia Social.

Esta legislación finalmente fue aprobada en el Congreso Nacional a mediados de diciembre de 2016, con los votos tanto del oficialismo como de la oposición. Esto último merece destacarse, ya que en

varias de las iniciativas de la economía popular se ha logrado atravesar la grieta que dividió la política argentina desde 2008. La nueva normativa creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, mediante el cual el Estado reconocía las especificidades de esta realidad laboral y daba cuenta del peso relativo del sector a través de indicadores oficiales. Por otro lado, asociado a lo anterior, estableció un Salario Social Complementario, equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, lo que permitía alcanzar un piso de ingresos para dignificar el trabajo de los excluidos y lo hacía de un modo que quedaba vinculado al ingreso de los trabajadores formales. Por último, puso en marcha el Consejo de la Economía Popular como canal formal para las negociaciones entre representantes del Estado y de las organizaciones populares. Por todo esto, se trató de un reconocimiento institucional inédito, plasmado en el nacimiento de la primera política pública hacia la economía popular tal como la entendían los movimientos sociales.

Pese a ello, este complemento monetario se fue licuando en el contexto de las políticas desplegadas por el gobierno macrista en materia económica y social. También se desvirtuaron parcialmente los logros en torno a la institucionalización de la economía popular como sector. En particular, el Salario Social Complementario fue usado como estrategia de contención de la pobreza y no tanto para la generación de mejores condiciones laborales en la economía popular. Sin embargo, las organizaciones insistieron en ser consideradas como parte del mundo sindical, con algunos logros en ese sentido. Por caso, la incorporación en 2019 de la CTEP al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Más allá de esto, y a raíz de los efectos limitados de las conquistas obtenidas con la Ley de Emergencia Social, se plantearon distintas jornadas de lucha y protestas para extender y actualizar los alcances de esa normativa.



Imagen 13. Marcha de la CTEP en el marco de la fiesta de San Cayetano (agosto de 2019). Fuente: área de prensa del MTE.

En paralelo, el Tridente de San Cayetano mantuvo una perspectiva amplia en el marco de las 3-T que desbordaba la cuestión del trabajo. En ese marco destacó una de las iniciativas más integrales en la historia de los movimientos populares de Argentina. Entre mediados de 2016 y principios de 2017 estas organizaciones –articuladas en la Mesa Nacional de Barrios Populares con Cáritas y la ONG Techo– estuvieron a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Se trató del primer relevamiento a gran escala destinado a construir una base de datos oficial respecto a villas y asentamientos informales, en miras a elaborar un diagnóstico preciso sobre el déficit habitacional en Argentina. Esta tarea implicó un trabajo intensivo de cuatro meses, en el que trece mil relevadores, principalmente de la economía popular, lograron realizar más de dos millones de encuestas a familias de ciudades con más de diez mil habitantes. Se contó para ello con la masividad y la extensión federal de las organizaciones sociales.

Hay que destacar que el Estado no tenía información fiable respecto a la cantidad de asentamientos informales que existían. A excepción de

un registro de la provincia de Buenos Aires y de estimaciones basadas en el Censo Nacional de 2010, no había datos oficiales acerca de esta problemática sobre la cual construir un diagnóstico y planificar la política pública en materia de tierra y vivienda para los sectores populares (de hecho, en buena medida, no había tal política). Actualmente, gracias al RENABAP y sus actualizaciones, se conoce la ubicación y las problemáticas habitacionales que tienen los más de cinco mil barrios registrados, en donde viven unas cinco millones de personas. Es decir, que poco más del 10 % de la población habita en zonas que cumplen dos condiciones de precariedad: más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del terreno y no accede a dos o más servicios públicos básicos como agua corriente, electricidad, cloacas o transporte. Otro aspecto notable de esta iniciativa es que el Estado se sirvió no solo de la capilaridad de las organizaciones en los territorios, sino también del conocimiento acumulado en lo metodológico. De hecho, el equipo técnico operativo del RENABAP fue compuesto por militantes (entre los cuales, Fernanda García Monticelli del MTE tuvo un rol central). Así, entre otras cosas, estrategias de abordaje y modelos de encuesta fueron elaborados desde experiencias previas de las organizaciones.³

Por supuesto, conocer cuántos barrios populares había en Argentina no era un fin en sí mismo, sino que estaba en función de construir un diagnóstico que permitiera dimensionar el problema y, luego, construir estrategias para afrontarlo. De ahí surgió, primero, el Plan Nacional de Integración Socio Urbana (conocido como “masterplan”), cristalizado en el proyecto de ley con el mismo nombre. Esta propuesta legislativa declaraba la utilidad pública de las tierras comprendidas en las zonas relevadas y la suspensión de los desalojos por cuatro años, así como también promovía desde el Estado la regularización dominial de viviendas, la urbanización de los barrios y la mejora habitacional con participación de cooperativas de la economía popular en, al menos, el 25 % de las obras a realizar. El concepto de integración socio urbana se contraponía a la idea de relocalizar o erradicar villas y asentamientos como solución que, en la práctica, resultaba inviable o inalcanzable. El MTE fue protagonista de este giro en la política pública, fiel a su

³ Para profundizar en esta experiencia, ver entrevista a García Monticelli en Liaudat, Bilmes y Carbel (2022).

estilo de partir de lo realmente existente con miras a obtener mejoras concretas y no quedarse en discusiones conceptuales inconducentes.

El proyecto de ley de integración sociourbana fue presentado junto a otras cuatro iniciativas legislativas en ocasión de la marcha federal del 1 de junio de 2018. El “paquete de las cinco leyes”, como se lo denominó, incluía propuestas sobre la cuestión alimentaria, la infraestructura social, las adicciones y la agricultura familiar. En mayo de 2019 se incorporó un sexto proyecto de ley impulsado por las organizaciones de la economía popular —en especial la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la CTEP— referido a la violencia de género. El último año y medio del gobierno macrista estuvo signado para el Tridente de San Cayetano por las movilizaciones detrás del tratamiento de estas normas en el Congreso Nacional. De las cuales, logró la sanción en octubre de 2018 de la Ley 27 453 de Integración Socio Urbana y en septiembre de 2019 de la Ley 27 519 de Emergencia Alimentaria.

Sobre esta última, digamos brevemente que estableció un importante aumento presupuestario de las políticas vinculadas a la asistencia alimentaria, fortaleciendo el trabajo en ese sentido que realizan los movimientos populares mediante comedores, merenderos y provisión de mercadería a familias pobres. Fue aprobada por el voto del oficialismo y la oposición de modo casi unánime. En cuanto a la primera, se trató del logro más duradero de los obtenidos en esta etapa. La sanción de la Ley del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana fue, sin dudas, el mayor éxito del Tridente de San Cayetano. Las circunstancias políticas adversas, paradójicamente, facilitaron que esto fuese posible. Mostrando una gran flexibilidad táctica, se negoció que fuera el bloque de Cambiemos el que presentara la propuesta legislativa. De este modo, al contar con los votos del “ala derecha” del Congreso, dado el tema del que se trataba, iba a ser más fácil obtener el apoyo del peronismo y la izquierda.

Así fue como se logró, luego de su paso por la Cámara de Diputados en julio, la sanción definitiva de la Ley de Integración Socio Urbana en el Senado en octubre de 2018, con una votación en unanimidad. Al respecto, Grabois señaló unos meses antes: “Si esto lo hubiese propuesto un gobierno del campo nacional y popular, ¡no salía, señores y señoras, porque iban a salir a decir que esto es chavismo y que acá hay una exproyaciación masiva de 4300 barrios!”. Era el modo en que res-

pondía a quienes lo criticaban por sentarse a negociar con el macrismo. Efectivamente, la estrategia había servido para lograr el fin más alto: la creación de una política de tierra y vivienda para los excluidos. Política que en el corto plazo frenó los desalojos, tan temidos por quienes se encontraban en asentamientos informales; a quienes, además, les aportó un Certificado de Vivienda Familiar que les permitía, por ejemplo, gestionar el acceso a servicios básicos. Y en el mediano plazo mostró sus frutos cuando cambió de manos el gobierno nacional en 2019 y al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana quedó Fernanda Miño, relevadora del RENABAP, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares y militante del MTE.

Resumidamente, estas fueron las principales acciones públicas del MTE entre 2016 y 2019, todas ellas impulsadas desde la CTEP en marcos de unidad más amplios. Mientras tanto, y en retroalimentación con esos procesos, se produjo un gran crecimiento interno. Tras haber sido nacionalizada la organización con la creación de la FACCyR en 2011, la principal novedad fue la diversificación hacia otros sectores. Siempre partiendo de la premisa de organizar el trabajo existente en la economía popular, pasó de ser un movimiento esencialmente cartonero a encauzar procesos de lucha y organización de trabajadores y trabajadoras textiles, rurales, sociocomunitarias, de la construcción, expresos, vendedores ambulantes, cuidacoches y con tareas de cuidado en el abordaje de adicciones. En todos los casos, esta diversificación se nutrió y, al mismo tiempo, fortaleció la proyección de la CTEP en esos sectores. Como veremos, algunas de las nuevas áreas en las que el MTE se desarrolló venían con una historia previa y encontraron en el movimiento la posibilidad de articularse en el marco de un proyecto mayor. Otras, en cambio, comenzaron por iniciativa del movimiento, desde pequeños núcleos que se estructuraron y fortalecieron a partir de políticas nacionales. El resultado de esta diversificación fue un cambio completo de la fisonomía del MTE, por lo que, a continuación, se reconstruye brevemente la conformación de cada una de las “ramas” (como se las denominó internamente).

La casa para habitar, el polo para trabajar

Tras un primer acercamiento a la problemática textil en el marco de su relación con La Alameda entre 2008 y 2011, el MTE pasó varios años sin proyectar una construcción en el sector. En buena medida, porque consideraba que estaba cubierto por una organización cercana. Pasaron los años y las circunstancias cambiaron. En el nuevo marco dado por el crecimiento de la CTEP en el abordaje de las distintas áreas de la economía popular, el MTE encontró el incentivo para impulsar al movimiento en nuevas ramas productivas. La primera que apareció en el horizonte fue la textil y su promotora fue Epifanía Espinola, una de las ocupantes de la toma de tierras de 2006 en Lomas de Zamora en donde el MTE prestó colaboración (ver cap. 2).

Fany, como todos la llaman, tenía la piel curtida tras varios enfrentamientos con los personajes “pesados” de la zona, apoyados por la comisaría y el municipio. Su objetivo era la creación de un jardín comunitario en el Barrio Miró. Comenzó con otras vecinas espontáneamente a servir una merienda para los niños y, luego, con la ayuda del MTE incorporaron actividades recreativas. Así fue como, de a poco, se erigió como una referente barrial y empezó a participar de las movilizaciones a la que la invitaban los militantes. Mientras tanto siempre vivió, al igual que muchas familias alrededor, del trabajo textil. Hacia 2014 se planteó armar un taller de costura organizado de manera colectiva. Al año siguiente ese proyecto logró formalizarse con la inscripción formal de la cooperativa y comenzó a funcionar a partir de la unión de distintos talleres de la zona.

Esa fue la semilla que dio inicio a la conformación de la rama, pero una desgracia ajena generó las condiciones que la impulsaron. En abril de 2015, a nueve años de aquel incendio en el barrio de Caballito que propició las denuncias de La Alameda a los talleres clandestinos, otro episodio similar sacudió la escena pública. Esta vez, las víctimas fueron dos niños que murieron calcinados en un taller que funcionaba en una vieja casa en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. La repetición de la tragedia desencadenó un proceso asambleario con protagonismo de agrupaciones de trabajadores pertenecientes a la comunidad boliviana, entre las cuales se encontraba el colectivo Simbiosis Cultural como uno de los actores más dinámicos. El MTE decidió acompañar, al igual que otras organizaciones sociales y políticas,

esa lucha. Este encuentro con los trabajadores en protesta sirvió para construir un diagnóstico más preciso acerca de la realidad del sector.

En buena medida, producto de la visibilización mediática que había adquirido la trata de personas con motivos de explotación laboral tras las acciones de denuncia posteriores al incendio de 2006, estas formas de trabajo marcadas por la precariedad más extrema habían sido desplazadas por la proliferación de talleres familiares indirectamente subordinados a las marcas comerciales. Así, la tercerización productiva generaba una explotación indirecta del trabajo, al no requerir la presencia de un patrón ni la contratación fija de parte de una empresa. Bastaba con que los costureros supieran que la entrega de la producción a tiempo era la garantía de su subsistencia para internalizar la productividad capitalista establecida por las grandes marcas. Era –y en buena medida todavía lo es– la forma de ocultar las pésimas condiciones laborales sobre las que se apoya esta cadena de valor en uno de sus eslabones.

A partir del proceso asambleario surgieron dos iniciativas. Por un lado, en mayo de 2015 se realizó la Carpa por Trabajo Digno frente al Congreso de la Nación. Se buscaba dar a conocer públicamente la crítica situación de los costureros, al mismo tiempo que se impulsaba un Proyecto de Ley de Protección Integral de los Trabajadores y Trabajadoras de la Indumentaria, que pese a su relevancia no logró ser encauzado por la vía legislativa. Por otro lado, junto al colectivo Simbiosis Cultural, se planificó un relevamiento de talleres y trabajadores textiles con el objetivo de tener un panorama más claro de la situación. Este relevamiento fue difundido por una radio de la comunidad boliviana y tuvo una convocatoria tan exitosa que los costureros se acercaban espontáneamente para anotarse. En ese marco, además, se recorrieron más de cien talleres familiares y realizaron encuestas a sus integrantes, lo que sirvió para entender el rol de estas pequeñas unidades productivas dentro del circuito productivo más amplio. De este modo, el MTE se encontró con una puerta de entrada privilegiada al sector textil, una oportunidad no menor para un rubro fuertemente perseguido por trabajar y discriminado por su composición migrante. Los resultados fueron reveladores. Juan Andrés Echeverri, militante de la rama, señala que:

Trabajaban veinte horas por día, [...] destinaban el cuarto, un espacio de la casa, solo para la costura; o sea, perdían espacio y se mezclaba con la familia constantemente. La vida y el trabajo, estaba todo muy mezclado, [los costureros] eran los que ponían la luz, el hilo, las máquinas, la salud, el cuerpo y el trabajo del corte que le daba una empresa, sin ningún derecho de nada.

Basados en la experiencia cartonera, el MTE buscó organizar al sector textil a partir de lo existente, o sea, tratar de formalizar y mejorar las condiciones de los talleres familiares y frenar el hostigamiento policial cuando se llevaban a cabo inspecciones sorpresivas. Al poco tiempo, emergió desde los trabajadores como primera necesidad separar el espacio de trabajo del hogar y cobró fuerza la idea de nuclearse en polos productivos. Esta orientación se plasmó en la consigna “La casa para habitar, el polo para trabajar” con la que el movimiento, junto a otras agrupaciones, movilizó en mayo de 2015 hacia el Ministerio de Trabajo. El reclamo por la construcción de polos productivos no logró traducirse en una política pública específica para el sector. Pero se pudo llevar adelante gracias al esfuerzo de las organizaciones y con un apoyo estatal proveniente del Programa de Empleo Independiente ofrecido por ese ministerio y destinado al soporte técnico y financiero de emprendimientos productivos impulsados por trabajadores desocupados o independientes.

Para los costureros y costureras, la incorporación al polo textil se configuraba como un horizonte razonable si tenemos en cuenta dos aspectos: por un lado, las precarias condiciones de seguridad con las que contaban los talleres dispuestos en domicilios particulares y, por otro lado, los niveles de hostigamiento que padecían, ya que estas unidades productivas estaban expuestas a allanamientos y coimas policiales, así como a la confiscación de mercadería e insumos de trabajo. Primo Choque, surgido en la lucha de 2015 y luego uno de los principales referentes de la rama del MTE, destaca además de la seguridad en el ambiente de trabajo y protección de los abusos policiales, la importancia del acceso a la obra social de la CTEP y las estrategias de comercialización conjunta.

La etapa inicial en un polo textil no era fácil. Exigía un proceso individual y colectivo de aprendizaje y adaptación para la convivencia, la administración y la superación de dificultades como el sostén de

un alquiler o las demoras en la formalización de las cooperativas. No obstante, los beneficios se volvieron evidentes y los polos se fueron consolidando e incorporando nuevos elementos. Desde el MTE se propusieron poner en cuestión las jerarquías internas que reproducían un modo capitalista de organización bajo la división entre microempresarios y empleados, e instalar un esquema donde todos fueran trabajadores iguales, con voz y voto, partícipes de la toma de decisiones. Así, los polos textiles, entendidos en un sentido amplio como centros de producción popular e integración comunitaria, buscaron encarnar un nuevo paradigma. Según el testimonio de Juan A. Echeverri:

El polo es un lugar productivo, pero se produce en términos populares. Porque no es que están todos en línea como una fábrica fordista; se distribuyen, hay música, hay ruido, tiene una forma de producción que no es la eficientista. Integración comunitaria es esto de plantear que el lugar sea de puertas abiertas, que sea un lugar que puedas abrir la puerta y que el vecino no te denuncie, que el vecino quiera decir “che, ¿en serio ustedes hacen esto?”. Sí, lo hacíamos en las casas, pero ahora lo estamos haciendo acá.

El quiebre con la lógica de la mera eficiencia en un sector que la dinámica capitalista empujó hacia la superexplotación laboral se tradujo en el lema “No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir”. Por lo que las puertas abiertas simbolizan dos cosas: por un lado, sacar la producción textil de lo oculto, de lo informal, de lo clandestino y, por el otro, abrirse a la comunidad y poder ser reconocidos como trabajadores con dignidad. Sumado a esto, el aumento de escala productiva permitió otras ventajas comunes a los procesos asociativos, tales como mejores precios para la adquisición de insumos o la venta de la producción, ya que la fragmentación en que se hallaban en los pequeños talleres favorecía la posición de proveedores o compradores en detrimento de los productores.

Pero, a poco de andar, con la separación del espacio doméstico y del trabajo, se evidenciaron las desigualdades de género en las responsabilidades de cuidado familiar. Surgió un problema en ese sentido para la incorporación de las mujeres a los polos textiles. Y las instituciones educativas no lograban resolver esta dificultad, o bien por falta de vacantes o bien por cierta incompatibilidad con el régimen laboral de las familias costureras. Frente a lo cual, la rama textil del MTE reclamó al gobierno porteño recursos estatales para instalar lugares de cuidado y

desarrollo infantil cercanos a los polos textiles. La apertura del primer Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje (CIRA) se logró en 2017 en el barrio de Mataderos y se constituyó como una experiencia modelo para la conformación posterior de experiencias similares dentro la rama sociocomunitaria del MTE.

Estas imbricaciones entre distintas ramas y trayectorias militantes merecen ser destacadas. En la construcción del sector textil se conjugaron elementos muy dispersos: los incendios de 2006 y 2015, los aprendizajes del MTE junto a La Alameda entre 2008 y 2011, la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda en el Barrio Miró, las tareas comunitarias de las vecinas de la toma, el surgimiento de una referente barrial que luego impulsó la creación de una rama productiva en la CTEP, el ejemplo cartonero de organización como modelo a seguir, el relevamiento en conjunto con grupos culturales de la comunidad boliviana, la trayectoria y debates en torno al cooperativismo, entre otros. Lo que da cuenta de un sustrato de acumulación de experiencias y relaciones en el seno del pueblo trabajador, un escenario cruzado por hilos subterráneos mayormente invisibles para quienes no lo transitan y sin el cual no pueden comprenderse las dinámicas organizativas de la economía popular.

En síntesis, la construcción de polos textiles cooperativos fue una creación desde abajo mediante la cual los costureros nucleados en el MTE lograron mejoras significativas para sus condiciones de vida y trabajo. En poco tiempo, se multiplicaron por decenas los polos textiles en Capital Federal, el conurbano bonaerense y nacionalmente, replicándose en ciudades como La Plata, Córdoba o Jujuy. A inicios de 2023, la rama textil nucleaba a unos setenta polos textiles y unidades productivas con alrededor de 1200 trabajadoras y trabajadores. Sobre esa base, en tan solo un par de años, siguiendo el ejemplo de los cartoneros dieron un paso fundamental: la creación en octubre de 2017 de la Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil. Fundada en el marco de la CTEP y con continuación dentro de la UTEP, es presidida desde su conformación por Fany Espínola del MTE.

Una lucha contra el silencio de la adicción

Desde 2015 el MTE cuenta con una rama destinada al abordaje del consumo problemático de drogas. A diferencia de otras, tiene nombre propio: Vientos de Libertad. La razón de esta denominación requiere contar una historia que comenzó en los mismos años en que iniciaba el movimiento cartonero. Y recorrió durante más de una década un camino paralelo, hasta que, a partir de un encuentro fortuito, la agrupación con ese nombre tan particular comenzó un rápido proceso de incorporación al MTE. Quizá porque ambas organizaciones hundían sus raíces en el clima de rebelión del 2001 tenían principios ideológicos afines entre sí, por lo que la confluencia resultó muy sencilla.

En los noventa, como parte de un mismo cóctel neoliberal, el desempleo y el aumento de la exclusión fueron acompañados por una mayor oferta de drogas y la expansión de su consumo. En ese contexto, en General Rodríguez, el lejano oeste del conurbano bonaerense, dos jóvenes entre otros miles cayeron en la adicción. Tras sentir en carne propia los efectos destructivos del consumo en sus vidas, lograron recuperarse y resignificar políticamente lo que les había pasado. Mientras alrededor sucedían las protestas y el auge de la organización popular, Sebastián Morreale y Sebastián Sánchez tomaron la iniciativa de comenzar un trabajo barrial en Hurlingham. Es el origen de lo que, desde 2006, se llamó Vientos de Libertad, una de las experiencias más innovadoras del país en el abordaje del problema de las drogas.

Morreale fue el primero en iniciar un proceso de recuperación en una casa de internación en Pilar, provincia de Buenos Aires. Cuando salió, con 22 años, se puso a la tarea de recuperar a otros chicos. Entre ellos, ayudó a Sánchez, a quien conocía de niño por ser amigo de su hermano. En el 2001, él también terminó su proceso, con 19 años de edad. En esa casa de recuperación, entre lecturas políticas, discusiones de convivencia y las visitas de una monja formada en teología de la liberación, forjaron una perspectiva radicalmente transformadora. La referencia de la Revolución Cubana fue muy importante, en particular la de Ernesto Guevara. Como recuerda Sánchez: “Fue una luz de esperanza. Cuando salimos de los tratamientos y no teníamos mucho horizonte, el Che lo que hizo fue decir: Hay horizonte, hay que organizarse para alcanzarlo”. La primera conclusión, determinante para la historia posterior, fue comprender que la droga era esencialmente

un instrumento de dominación social, adormecedor de la rebeldía de la juventud, de su capacidad de lucha. Un segundo aprendizaje de esta etapa fue que la recuperación debían hacerla colectivamente, ayudándose entre quienes estaban “en proceso” (como lo denominan hasta hoy). De hecho, la casa de Pilar era administrada por un joven que también había pasado por el consumo. La vida comunitaria era capaz de sanar lo que la sociedad capitalista había roto. Son las raíces sobre las que maduró la idea de un nuevo método terapéutico: político y comunitario.

Así fue como Morreale y Sánchez impulsaron la conformación de un grupo militante al que se sumaron algunos jóvenes del barrio; entre otros, Estefanía Fernández, Celeste Galleli y Fernando Sánchez, quienes en la actualidad continúan desempeñándose en distintas tareas de la organización. En un inicio hacían más o menos lo mismo que otras múltiples experiencias de trabajo barrial que proliferaron en esos años (merendero, actividades recreativas, etc.), aunque siempre tuvieron como uno de sus objetivos luchar contra las drogas y tratar de recuperar a chicos que estuvieran en situación de consumo. Esta última meta comenzó a tornarse la más importante del grupo a medida que enfrentaban el problema y encontraban que no había respuestas acordes con sus ideales. El Estado no ofrecía nada y solo subsidiaba a granjas terapéuticas privadas dominadas por un enfoque médico hegemónico, centrado en la farmacología y el individuo. Tampoco las organizaciones sociales y políticas se hacían cargo del tema. Con base en esa insatisfacción, este puñado de jóvenes con poco más de veinte años gestó el proyecto de una casa comunitaria propia con un abordaje distinto en el tratamiento de las adicciones.

El 4 de junio de 2006 comenzó a funcionar “la casa madre”, la primera de las muchas que inauguraron con los años. El inicio fue absolutamente precario. Los intentos de obtener fondos de la entonces Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) fueron infructuosos. Decidieron avanzar de todos modos. El nombre elegido para la casa, que terminó definiendo a la agrupación y luego a la rama del MTE, provino de la frase dicha por Fidel Castro cuando desembarcó del Granma en Cuba: “Aquí soplan vientos de libertad”. Identificaron un lugar abandonado en Pilar, lo ocuparon y comenzaron a funcionar. La

falta de ingresos, debido a que no recibían ayuda del Estado ni cobraban a las familias de quienes estuvieran en proceso de recuperación, los obligaba a organizarse para salir a buscar donaciones, realizar rifas y actividades de financiamiento y recorrer las calles buscando muebles y otros materiales descartados. El secreto del método que desarrollaron estaba ahí: la solidaridad, la comunidad y la militancia son sanadoras. Por supuesto, acompañado de atención psicológica y una organización interna estricta en los horarios y las funciones de cada uno, de modo de ayudar a reordenar la mente y la vida de quienes así lo necesitaban. Lo primero contaba con la colaboración de profesionales y lo segundo era autogestionado entre las mismas personas que habitaban la casa. Incluso las guardias que se mantenían las 24 horas para responder a distintas demandas que puedan surgir eran sostenidas por ellos mismos.

Esta primera casa comunitaria en Pilar recibió en julio de 2008 la notificación de que iban a ser desalojados por la fuerza policial. Con unas cien personas que estaban en proceso de recuperación resolvieron trasladarse a un campo abandonado en General Rodríguez, donde continúa funcionando hasta la actualidad con unas instalaciones ya consolidadas. Pero al inicio fueron a vivir ¡en carpas! Tal era la precariedad en que se encontraban. Sin embargo, la mística del grupo, la sensación de estar haciendo algo que valía la pena y los frutos que veían en quienes culminaron el proceso los sostenían en medio de las dificultades. Y no solo eso, sino que comenzaron a soñar con un nuevo desafío: la puesta en marcha de una segunda casa comunitaria. Así fue como el 1 de agosto de 2013 concretaron la apertura de la casa de Marcos Paz, también en el oeste del conurbano bonaerense. Poco después entraron en contacto fortuitamente con el MTE.

Una de las formas que Vientos de Libertad tenía para convocar a jóvenes a iniciar el proceso de recuperación en sus casas comunitarias era mediante pasacalles. Alejandro Valenzuela, actual referente del área de juventud del MTE, recuerda cuando su mamá le mostró uno colgado enfrente de su casa en el barrio matancero de La Tablada. Poco después comenzó su proceso terapéutico. Como él, muchos llegaron por esos carteles distribuidos por el conurbano. Fue uno de esos pasacalles que vio Nicolás “Paragua” Caropresi y le llamó la atención que tuviera dibujada la cara del Che Guevara. Lo comentó a Sergio Sánchez, ya que sabía de un hijo de cartoneros de Villa Fiorito con problemas

de adicciones. Decidieron ir juntos, en la ambulancia de Senderos, a llevar al adolescente a la dirección que figuraba en el cartel. Como lo cuentan todos los involucrados, fue un amor a primera vista. A partir de ese primer contacto, los caminos de Vientos de Libertad y el MTE quedaron unidos.

La mutual de la CTEP ya trabajaba con una granja terapéutica, pero la cuota mensual era muy costosa. La aparición de Vientos de Libertad, con el que la obra social estableció un monto menor de aporte, posibilitaba abarcar a más chicos en situación de consumo. Además, ofrecía un método alternativo de abordaje terapéutico que estaba en sintonía con los principios ideológicos de las organizaciones populares, mientras que para Vientos de Libertad representaba, por primera vez, la posibilidad de tener un ingreso fijo para el sostén de sus actividades. Fue tan grande la afluencia, en especial de hijos y vecinos de cartoneros, que a los pocos meses salía los fines de semana un ómnibus desde Villa Fiorito a las casas comunitarias para las visitas de los familiares.

A partir de este momento comenzó una nueva etapa en la historia de Vientos de Libertad. Su incorporación como rama del MTE se concretó en 2015, lo que implicó comenzar a asumirse como parte de la economía popular en tanto trabajadores con tareas de cuidado. También les permitió “levantar la cabeza” del trabajo en las casas comunitarias y comenzar a realizar protestas, proyectar políticas y establecer relaciones más allá de las urgencias cotidianas. Un primer vínculo fue con los curas en la opción por los pobres, ya que uno de ellos, Juan Carlos Molina, había quedado al frente de la SEDRONAR en 2014. A partir de la experiencia que tenían en villas, impulsaron desde el Estado el Programa de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Se trataba de un financiamiento a los trabajos ambulatorios, sobre todo en barrios populares, con personas en situación de consumo problemático de sustancias. Originalmente estaba pensado para los centros barriales de Familia Grande Hogar de Cristo (FGHC), la organización católica que trabajaba el tema. Pero unos meses después de su lanzamiento, tras el fallecimiento de una chica por problemas de consumo, Vientos de Libertad realizó una acción de protesta en la SEDRONAR y logró ingresar al programa. Por primera vez en ocho años, recibían un financiamiento estatal, aunque módico, para el sostén económico de las casas comunitarias. El vínculo de trabajo en este tema

establecido con los curas villeros y FGHC, en el marco de las relaciones entre el MTE, el papa Francisco y sectores de la Iglesia, se mantuvo desde entonces con buenos frutos.

Como parte de este nuevo repertorio de actores y escenarios en que Vientos de Libertad comenzó a moverse se inscriben los sucesos de 2016. En abril de ese año cinco jóvenes murieron y decenas tuvieron que ser hospitalizados tras un festival de música electrónica llamado Time Warp, realizado en las lujosas instalaciones de Costa Salguero. Como es habitual en estas fiestas, hubo un alto consumo de drogas sintéticas, lo que, sumado a la falta de disponibilidad de agua en los baños, su venta a precios desmedidos y fallas en la atención médica provocó la tragedia. Si bien estaba en las antípodas de los sectores sociales con los que Vientos de Libertad trabajaba habitualmente, la organización encontró en esta coyuntura la posibilidad de instalar públicamente la magnitud de la problemática en materia de adicciones. Una primera acción, junto a la FACCyR y la Federación Universitaria de Buenos Aires, fue una presentación judicial denunciando al gobierno de la ciudad por su responsabilidad ante la falta de control en eventos masivos de este tipo. Como resultado, el juez Roberto Gallardo ordenó suspender las fiestas de la noche porteña hasta tanto el ejecutivo no tomara cartas en el asunto. Aunque la medida solo perduró durante dos fines de semana, sirvió para poner sobre el tapete la discusión.

A las pocas semanas, el MTE tomó una segunda iniciativa: un acampe en Plaza de Mayo seguido por una movilización muy particular. Luego de pernoctar en el centro político del país, se inició un silencioso cortejo fúnebre, encabezado por ataúdes reales, velas y coronas de flores, que finalizó en las instalaciones de la SEDRONAR. Se trataba, como señalaba el volante repartido, de un velorio simbólico para “lxs pibxs muertos por la desidia, el abandono, la inacción, la indiferencia y la complicidad del Estado Nacional”. Era una acción de protesta inédita que buscaba escenificar con mucha potencia la letalidad del consumo en la población joven y la limitación que evidenciaba la política estatal al respecto. Más allá de las gestiones destinadas a lograr un mayor financiamiento de las CAAC, el saldo más importante fue otro. Estas manifestaciones públicas dieron a conocer a Vientos de Libertad entre las organizaciones populares que tenían un trabajo sobre la misma problemática.

Las iniciativas de 2016 sirvieron como puntapié para comenzar a articular en torno a este tema en el marco del Tridente de San Cayetano. Así fue como empezó a funcionar una mesa de trabajo entre la CCC, el Movimiento Evita, FGHC, el Movimiento Popular La Dignidad y Vientos de Libertad. Desde allí se efectuaba un juego de pinzas. Por un lado, se establecieron diálogos y negociaciones formales con las autoridades de la SEDRONAR, a cargo de un funcionario macrista. Por el otro, se buscó poner en agenda de los movimientos populares la problemática e impulsar acciones de lucha para lograr sus objetivos. Este camino tuvo resultados favorables en el corto plazo. En diciembre de 2016 lograron el decreto nacional 1249 en emergencia en adicciones, lo que les permitió introducir modificaciones y ampliar el alcance del programa de las CAAC. Y la consolidación de esta mesa de trabajo condujo a su formalización como órgano consultivo de la SEDRONAR bajo el nombre de Consejo para el Abordaje Integral de las Políticas Públicas de Adicciones en Contextos de Alta Vulnerabilidad (CAIPPA).

Dos conquistas importantes se lograron en los años inmediatos a su conformación. La primera, interna al campo popular, tiene que ver con la instalación del tema por primera vez como una prioridad en la agenda de los movimientos populares. Esto se expresó en que uno de los cinco proyectos de ley impulsados por el Tridente de San Cayetano en 2018 era sobre este tema. Apenas unos años antes, prácticamente ninguna organización tenía una política al respecto. Ahora había una plataforma compartida de reivindicaciones. La segunda, fue la creación de la Escuela de Formación para el Abordaje de Políticas Públicas. Con la finalidad de fortalecer la calidad de trabajo de la red de Casas de Atención y Acompañamiento Terapéutico (CAAC), esta escuela fue constituida dentro de la SEDRONAR, pero era gestionada por el CAIPPA. Fue un espacio que sirvió, además, para ir dotando de mayor sistematicidad y robustez teórica al método de abordaje que habían desarrollado las organizaciones populares; tarea a la que se dedicaron, entre otros, la psicóloga social Noelia Straface de Vientos de Libertad y Gabriela Torres, titular de la SEDRONAR a partir del cambio de gobierno en 2019.

En ese marco, Vientos de Libertad fue definiendo con mayor precisión las especificidades del método político-terapéutico, hasta ese momento elaborado de un modo más bien intuitivo, para poder dotar

con esa concepción a las políticas públicas. Así, las CAAC se resignificaron como centros barriales y adquirieron una impronta propia: fueron pensados como espacios abiertos a la comunidad y orientados especialmente a la contención, el acompañamiento y la recreación de los jóvenes. Funcionaban como dispositivos complementarios a las casas comunitarias, un nexo con el barrio donde captar situaciones problemáticas de inmediato, hacer un seguimiento a quienes terminaron sus procesos en las casas, ofrecer un espacio que pudiera brindar un sentido de pertenencia, aportar a la construcción de proyectos de vida y prevenir, de este modo, situaciones de consumo. Asimismo, quienes estaban en las casas comunitarias podían realizar sus tareas comunitarias en estos centros barriales.

Por caso, algunos de los chicos que terminaron su proceso de acuerdo al método político-terapéutico iniciaron la organización de un Área de Jóvenes dentro del MTE. Adoptando el lema “Juventud despierta”, originario de Vientos de Libertad, comenzaron por la organización de campamentos con compañeros y compañeras de las distintas ramas de la economía popular con la finalidad de discutir colectivamente las problemáticas específicas que los atravesaban, formarse políticamente y ver cómo contribuir a la estrategia de construcción definida por el movimiento. En 2017, una delegación en representación del MTE, en particular de Vientos de Libertad, participó del primer encuentro nacional de la Juventud en Lucha, una coordinación nacional de organizaciones (a su vez asociada a una articulación internacional entre más de cuarenta países). Entre las agrupaciones participantes, la mayoría pertenecían al Tridente de San Cayetano. Ese mismo año, desde la juventud del MTE se participó por primera vez de la Marcha de la Gorra hacia el Congreso de la Nación. Se trata de una movilización, nacida en Córdoba, que se realiza desde 2007 en rechazo al gatillo fácil, la criminalización de la pobreza, la represión de las fuerzas de seguridad y otras expresiones de violencia institucional. Y, ya al año siguiente, este grupo juvenil impulsado desde Vientos de Libertad fue incorporado a la comisión organizadora del segundo encuentro nacional de la Juventud en Lucha.

Dos últimos saldos pueden destacarse en este período. Por un lado, la ampliación de dos a seis casas comunitarias de Vientos de Libertad. Una en 2016 en una isla de Tigre, tras una ocupación de un predio

ocioso del Estado nacional, protagonizada por chicos –en proceso de recuperación– de las casas de General Rodríguez y Marcos Paz, junto a cartoneros y militantes del MTE. Luego de algunas gestiones, lograron la autorización formal para funcionar allí hasta la actualidad. La otra, en 2018, destinada a mujeres y disidencias sexuales. Primero, alquilaron unas instalaciones en la localidad de Open Door, y luego ocuparon el edificio en desuso del Instituto Alvear en Luján, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Esta iniciativa echaba luz sobre un aspecto poco explorado: el consumo problemático en mujeres, muchas veces a cargo de sus hijos. Por lo que esta casa comunitaria implicó el desafío de incluir en la convivencia a niños y niñas con una atención adecuada a su edad, además de otras identidades sexogenéricas cuyo abordaje tiene también su especificidad. Otras dos casas fueron incorporadas en los municipios de Moreno y General Rodríguez a partir del acercamiento con la agrupación “Luchando por la vida”. Articuladas con estas seis casas comunitarias, operaban hacia 2019 unos cincuenta centros barriales. Para inicios de 2023, ya son 82 los centros barriales distribuidos en 19 provincias y trece las casas comunitarias en funcionamiento en Neuquén, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, en las cuales conviven, según el caso, entre veinte y setenta personas en tratamiento. Además, se acompañan con acciones comunitarias en el barrio, junto a las familias y otros lazos afectivos, a otras doscientas a trescientas personas más por casa.

Estas casas comunitarias y centros barriales son la muestra palpable de la viabilidad del método político-terapéutico de Vientos de Libertad, basado en la comunidad, la solidaridad, la escucha, el amor, la conciencia política y el compromiso militante. Los buenos resultados, probados en casi veinte años de práctica con miles de jóvenes, dan la pauta de que es un camino de recuperación superador al del paradigma médico hegemónico, el enfoque individualista y la lógica del castigo.⁴

Nuestro trabajo es el alimento del pueblo

La cuestión agraria ha tenido en Argentina un papel central en la economía desde sus inicios como país. De hecho, las pujas en torno

⁴ Para profundizar en esta experiencia, ver la entrevista a Morreale en Liaudat, Fontana y Tóffoli (2023b).

al destino de la renta extraordinaria del agro han definido momentos cruciales en la historia nacional. Pero solo en coyunturas excepcionales, como el Grito de Alcorta de 1912 o la irrupción de las Ligas Agrarias en la primera mitad de los setenta, los trabajadores de la pequeña producción lograron hacer oír sus demandas. Dado que ha estado mayormente vinculado al mercado interno, se trata de un sector clave para el abastecimiento de alimentos para la población. Pese a lo cual ha contado históricamente con poca asistencia del Estado, que siempre ha mirado más bien hacia el sector exportador y la gran producción agropecuaria. Los orígenes de la rama rural del MTE giraron en torno a la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de este sector de la economía popular y, en cierto sentido, ayudar a saldar la deuda histórica con estos trabajadores.

A diferencia del proceso cartonero y textil, cuyos orígenes se situaron entre Capital Federal y el conurbano sur, los comienzos de la rama rural deben rastrearse en la periferia oeste de La Plata a partir de la acción de un núcleo de ocho productores rurales: Wildo, Victorino, Ismael, Daniel, Armin, Ochoa, Antonio y Etcheverry. Junto a sus familias, se dedicaban a la producción de hortalizas a campo abierto o en invernaderos dentro del cinturón hortícola de la capital bonaerense, el más importante del país por su volumen y variedad de producción. Un par de militantes que provenían de la agrupación estudiantil Cambium, de la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de La Plata) habían tenido un primer contacto con estos productores en 2003. Ligados a la experiencia piquetera de los MTD Aníbal Verón (por la pertenencia de la agrupación al Frente Popular Darío Santillán), buscaron replicar con los trabajadores rurales formas organizativas como aquellas y, sobre todo, como las que conocían a partir de vínculos con el MST de Brasil y los movimientos campesinos de la Argentina.

Con base en ese encuentro se conformó en 2004 la Unión Agrícola. Una organización que presentaba dos rasgos similares al MTE que estaba surgiendo contemporáneamente: primero, estaba conformada por militantes de clase media universitaria y trabajadores de lo que luego se llamó la economía popular; segundo, la base social no era desocupada, sino que, por el contrario, estaba más bien en situación de explotación laboral en condiciones precarias y de desprotección estatal. No obstante, a diferencia de la organización cartonera, esta experiencia

rural se disolvió luego de unos años. En parte, esa desintegración se debió a que el movimiento popular todavía estaba hegemonizado por la lógica piquetera y tenía dificultades para encauzar una lucha que no encajaba bien dentro de esos marcos. Diez años después, cuando el debate se tornó hacia la economía popular como eje organizador, hubo mejores condiciones para la organización del sector.

Fue en ese nuevo contexto cuando la militancia vinculada a aquella experiencia colectiva retomó los viejos vínculos de la Unión Agrícola e impulsó la creación en 2014 del Movimiento de Pequeños Productores y Productoras (MPP). El marco organizativo también era otro: ahora se constituía como parte de Patria Grande, en momentos en que este agrupamiento estaba en un proceso de confluencia con el MTE. Por lo que, casi desde el inicio, se vio atravesada por el debate en torno a su integración a las estructuras de esta organización. Luego de algunos años de discusiones, terminó conformando la rama rural del MTE, desde donde tuvo un papel destacado en la construcción del sector dentro de la CTEP y luego la UTEP. Un factor externo que colaboró con la creación del MPP y su rápida masificación en el cordón hortícola platense fue la implementación en 2014 del Programa Cambio Rural II, destinado a proveer financiamiento y asesoramiento técnico a grupos de pequeños productores (Ambort, 2017).⁵ Mediante este mecanismo pudo financiarse la labor organizativa de técnicos y profesionales que, a su vez, eran militantes; además, se constituyó como una excelente puerta de entrada a las unidades productivas. A partir de ello y de las relaciones familiares y comunitarias preexistentes, el movimiento creció muy rápidamente al igual que otros, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que se desplegaron por la región en ese momento.

En un sector en el que no había un espacio común de trabajo, donde la distancia entre los campos desalentaba el encuentro, la dinámica organizativa buscó reconstruir lo colectivo a través de asambleas de trabajadores rurales. Mensualmente, se comenzó a reunir cada grupo de base compuesto por algunas decenas de productores, representado luego por un delegado o delegada en los espacios de coordinación del movimiento. En ese sentido, hay que destacar que estuvo presente desde el inicio la orientación de promover la formación de militantes desde

⁵El programa, inicialmente creado en 1993, dependía del INTA y era financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

la propia base popular, como reflejo de lo cual algunos productores fueron tomando tareas de creciente responsabilidad en la organización. Si ese rasgo nos recuerda la conformación de la organización cartonera, otra característica remite, en cambio, al sector textil. Al igual que los costureros, la mayoría de los trabajadores hortícolas eran bolivianos o sus descendientes, por lo que sufrieron, como aquellos, distintas formas de xenofobia. La invisibilidad de la tarea económica que realizan puede atribuirse, en buena medida, a ello. Por último, un tercer aspecto organizativo para destacar provino indudablemente del clima de época: la promoción de la igualdad de género. Casi desde el inicio hubo una preocupación por la participación de las mujeres quinteras en la toma de decisiones y por su formación política con miras a promoverlas como dirigentes. Una de las innovaciones en ese sentido fue la puesta en marcha de las llamadas “rondas de mujeres”, espacios de encuentro y discusión que permitieron, a su vez, problematizar las violencias de género en el ámbito familiar.⁶

Desde esas coordenadas organizativas, el MPP tuvo que enfrentar sus primeras luchas. En abril de 2015 acompañaron solidariamente una enorme toma de tierras en Abasto (La Plata) conducida por la CCC. Las viviendas de los productores rurales suelen ser casillas de madera debido a la dificultad para acceder a un terreno propio y la imposibilidad de construir en las quintas arrendadas. Por lo cual, cientos de familias horticultoras se sumaron espontáneamente a esa ocupación. Luego de unas semanas de tensión, el gobierno realizó un brutal desalojo mediante represión policial, pese a lo cual, más adelante la mayoría de los ocupantes recibió un terreno. Entre ellas, algunas familias que se incorporaron al MPP en el transcurso de la lucha.

Sin embargo, el bautismo de fuego de la organización se dio un año después. En los primeros meses de 2016, se acumularon una serie de acontecimientos cuyo corolario marcaría un antes y un después en la experiencia colectiva del sector. El cambio de gobierno había traído aparejado el aumento de las tarifas de los servicios públicos y una devaluación que aumentó drásticamente el precio de los insumos importados. Ambos factores aumentaron los costos para los pequeños productores rurales. Sumado a ese panorama adverso, se desató un

⁶Las rondas de mujeres eran reuniones que se realizaban durante los fines de semana en las quintas donde se combinaba la realización de actividades recreativas, de formación y sensibilización en torno a temáticas vinculadas al género (Condenanza Giuliano y Ambort, 2020).

temporal sobre las quintas, con fuertes ráfagas de viento, que arrasó con la producción y los invernaderos. Estas situaciones generaron el caldo de cultivo que propició la primera protesta masiva del sector. En un evento sin precedentes en la región, los productores nucleados en el MPP y otras organizaciones rurales fortalecidas en los años precedentes realizaron, el 31 de marzo de 2016, un paro activo. Esto implicaba no solo dejar de trabajar, sino bloquear la circulación de camiones que intentaran salir de la zona con la producción. Una parte de las reivindicaciones fue lograda, siendo la primera conquista material significativa de la lucha gremial y redundando en un mayor crecimiento para el MPP y las otras organizaciones. La productora Elsa Yanaje, quien en 2019 asumió como funcionaria nacional en representación del sector, lo recuerda afirmando que “era la primera vez que nosotros sentíamos cómo la fuerza nuestra se estaba plantando”.

Tras el paro quintero de 2016, el foco del movimiento estuvo puesto en encauzar la confluencia con el MTE. Desde Patria Grande se había definido que ese año debía culminar el proceso de integración de todos sus trabajos territoriales en el marco de la economía popular y del MTE como instrumento organizativo. Por lo que a principios de 2016 se inició la transición de ser MPP a convertirse en rama rural del MTE, hasta que en los primeros meses de 2017 se oficializó el cambio de nombre. Durante el período de acercamiento, los productores rurales habían participado de reuniones y plenarios del MTE, así como de cursos de formación de la ENOCEP. También se le dio importancia al encuentro con otros trabajadores de la economía popular en la movilización callejera. De hecho, durante el 2016 el MPP participó de las acciones de lucha planteadas por el Tridente de San Cayetano para lograr la Ley de Emergencia Social. Fue una novedad para el movimiento rural salir de la pelea inmediata y de su territorio y movilizarse hacia la ciudad de Buenos Aires. La perspectiva de lograr un Salario Social Complementario facilitó ese salto, en un contexto de fuerte vaciamiento de las políticas destinadas a la agricultura familiar y deterioro de las condiciones de vida de los pobres.

Como corolario de la acumulación y los debates entre 2014 y 2016, en febrero de 2017 se realizó el primer plenario nacional de la rama rural del MTE en la ciudad de Concepción, provincia de Corrientes. Como se evidencia por la locación, ya para entonces otros núcleos or-

ganizados en el campo, en distintas provincias, se habían comenzado a identificar con el MTE. En algunos casos, a partir de trabajos impulsados por exmilitantes de la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía (FAEA), relacionados en su época estudiantil con el grupo original que impulsó la creación del MPP. En otros casos, a partir de agrupaciones o cooperativas que se acercaban por la referencia del MTE o algún contacto mediante redes familiares o sociales. El alcance nacional de la rama implicó desde el inicio la complejidad de articular experiencias organizativas que expresan economías regionales y sujetos con características específicas: familias campesinas, comunidades de pueblos originarios, jornaleros y trabajadores golondrinas, apicultores, ganaderos, horticultores, pescadores y fruticultores. El crecimiento fue muy rápido y, en poco tiempo, alcanzaron a ser varias decenas de miles de productores rurales distribuidos en casi todas las provincias del país.

Un caso paradigmático de esta expansión, que se constituyó en un hito para el sector, fue el paro activo de los cebolleros realizado en julio de 2017 en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. El detonante que movilizó a más de cuatro mil productores de Mayor Buratovich, Pedro Luro, Ascasubi y Villalonga (localidades bonaerenses al sur de Bahía Blanca) fue el desplome del precio de la cebolla. Fue tal la caída que estaba en riesgo la supervivencia de las unidades productivas. Mediante redes familiares, militantes de la rama rural del MTE fueron convocados a colaborar con el abordaje de la problemática situación. Tras unos meses de preparación, ya bajo la bandera del MTE, se realizó el “cebollazo”, que incluyó, entre otras cosas, un desplazamiento de muchos kilómetros hasta la ruta nacional 3 para una gran manifestación. Como en el paro quintero, se lograron algunas conquistas materiales que permitieron paliar el difícil momento, lo que fortaleció la inserción del movimiento entre los productores.

Ante las políticas de ajuste del gobierno macrista, la flamante rama rural puso en marcha una estrategia de resistencia articulada a otras organizaciones del sector que incluyó movilizaciones y “verdurazos” o “feriazos” de la economía popular frente al Ministerio de Agroindustria, el Congreso nacional, la Plaza de Mayo y otros sitios con alta visibilidad pública.⁷ En ese marco, el MTE rural elaboró, en abril de 2019, el

⁷ En esta forma de protesta, impulsada inicialmente por la UTT, las cooperativas de trabajo de diversos rubros organizadas en la CTEP (luego de 2019 en la UTEP) instalan una feria en el centro de las grandes ciudades, alternando dos modalidades: la donación de sus productos a modo de protesta

proyecto de Ley de Protección de Cinturones Verdes Productivos, el cual fue presentado junto a otras organizaciones en marzo de 2020. El proyecto propone regular el avance de la urbanización sustentada en la especulación inmobiliaria en función de preservar las áreas productivas y el abastecimiento de alimentos frescos, sanos y accesibles. Hasta el momento esta iniciativa no ha alcanzado tratamiento legislativo.

La experiencia de trabajo en unidad, al menos desde el paro quintero de 2016 en adelante, y la resistencia conjunta al macrismo sentaron las condiciones para un paso muy importante para el sector rural, en el que el MTE tuvo un papel destacado. El 7 y 8 de mayo de 2019 se realizó el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular. En este encuentro, organizado por los movimientos de la economía popular, miles de personas vinculadas a la producción rural se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para debatir y construir colectivamente propuestas para una ruralidad alternativa a la del “modelo agroindustrial concentrado, extranjerizado y expulsivo” dominante en nuestro país, tal como señalaba el “Documento cero” del evento. Entre quienes asistieron había campesinos, indígenas, trabajadores rurales, comerciantes, consumidores, pequeños y medianos empresarios, cooperativas, técnicos y profesionales agrónomos, docentes rurales, trabajadores del Estado, académicos y científicos, medios de comunicación y la militancia social y política del sector. Finalmente, hay que destacar que, como continuidad de esa iniciativa, del 10 al 12 de marzo de 2023 se realizó el Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y la Casa Común desde la rama agraria de la UTEP, donde confluye el MTE Rural con decenas de otras organizaciones del campo.

A la cárcel no volvemos más

Entre la prisión y la economía popular existe un punto en común: la exclusión. En el capitalismo de descarte, la privación de la libertad opera como una forma de contención y disciplinamiento para quienes no tienen acceso a un trabajo en condiciones dignas. A través del encierro, confirma a ciertos sectores que no han sido beneficiados por el privilegio de la integración social. Y que, vía el estigma de los antece-

por medidas gubernamentales o la venta a precios populares, sin intermediarios entre el productor y el consumidor. Uno de los sentidos centrales de estas jornadas es la visibilización pública del sector.

dentes penales, tampoco lo van a ser al menos por diez años más luego de cumplir su condena. Un detenido debe cumplir el mandato de la “resocialización” una vez que salga en libertad, pero las herramientas provistas para ello son insuficientes, cuando no inexistentes. Al destino de la reincidencia es difícil darle batalla, aunque en los últimos años desde la economía popular se construyó una salida creativa a un problema al que no se le encontraba una respuesta. El proceso de conformación de la rama de liberados y liberadas del MTE tiene mucho que ver con esa solución.

Con 24 años, Luis “Araña” Magallanes salió en libertad y se puso a buscar trabajo. Aprendió el oficio de albañil en una empresa de construcción en Córdoba, luego retornó a Buenos Aires y trabajó de operario en un parque industrial. No lograba dar con un empleo estable, al igual que la mayoría de los jóvenes atravesados por la vivencia de la cárcel. En esa búsqueda viajó a Catamarca. Había conseguido una “changa” para restaurar una casa. En la biblioteca se encontró con libros que hablaban de sindicalismo, cooperativas y trabajo sin patrón. A su regreso a Barrio Derqui, en el distrito bonaerense de Tres de Febrero, buscó cambiar la historia. Corría 2014 cuando se juntó con otros jóvenes que habían estado detenidos, y decidieron comenzar entre todos a realizar tareas de construcción en el barrio. Así nació la Cooperativa de Trabajo “Los Topos”. Luego consiguieron que el gobierno local los incorporara en el plan de obras municipal. A partir del pago por el trabajo realizado, compraron herramientas para equipar la cooperativa y se abocaron solidariamente a mejorar la cancha de fútbol del barrio. Esta combinación entre trabajo cooperativo y comunitario fue constitutiva de Los Topos, lo que contribuyó a darle una gran legitimidad. De esa fusión surgió con el tiempo un merendero para niños, una murga y el Club Social Barrio Derqui. En 2016, en un paso importante para su consolidación, lograron la inscripción formal como cooperativa. Mientras tanto se habían incorporado un grupo de mujeres que constituyeron la cooperativa de reciclado “Las Topas”. Así, más de setenta exdetenidos y exdetenidas dejaron atrás la cárcel y la reincidencia y encontraron una salida en el trabajo colectivo y solidario.

En simultáneo, en la ciudad de La Plata, otro grupo de liberados hizo frente a la intemperie del pos encierro con la autoorganización. Marcelo “Lupo” Magallanes, hermano de Luis, dio impulso a la Coope-

rativa “Las Termitas”, siguiendo la experiencia de Barrio Derqui. Si en otros lugares de trabajo los antecedentes penales eran la excusa para no dejarlos entrar, acá sería la carta de presentación. Cargar con el estigma de peligrosidad fue puesto como una condición para ser incorporado a la cooperativa, pues se trataba de ayudarse entre los últimos, los que la tenían más difícil. En el mismo sentido, en una cárcel de la capital bonaerense surgió Riff, una cooperativa de serigrafía (técnica de impresión que permite reproducir imágenes sobre cualquier material) integrada inicialmente por cinco jóvenes guiados por el profundo deseo de salir de la prisión y no volver a entrar nunca más. Fue un proyecto motorizado a pulmón, sin contar con ningún apoyo del Servicio Penitenciario. Aprovechaban las salidas transitorias para recorrer comercios, difundir su trabajo y conseguir clientes. En ese camino comenzaron a generar lazos con otros grupos, como la Cooperativa “Hombres y Mujeres Libres”, que estaba en la misma búsqueda.

Para las personas liberadas, los antecedentes penales constituyen solo una parte de los problemas que deben afrontar en el pos encierro. En el caso de las mujeres, mandatos de género mediante, no solo se trata de la problemática del trabajo, sino también de la recomposición de los vínculos familiares. Al pesado estigma por haber estado presa se le suma el de mala madre, por los años de encierro en los que las responsabilidades de cuidado no han sido cumplidas tal como espera la sociedad. Las mujeres detenidas cargan así con una triple condena social: por pobre, por mujer y “por chorra”. Nora Calandra, actual referente de la rama de liberadas del MTE, fue una de las tantas mujeres que se rebeló frente a ello en su paso por la unidad 33 de Los Hornos (La Plata), donde cumplía su condena. Desde 2012 comenzó a organizarse, junto con otras detenidas, para denunciar las vulneraciones constantes de derechos a las que se someten a las presas y sus hijos e hijas, y luchar por cuestiones básicas como el acceso a la salud y a condiciones elementales de higiene. Nació así la Red Niñez Encarcelada.

A fines de 2016, estos cuatro casos de organización intra y extramuros se sumaron a muchos otros que resistieron el proyecto de reforma de la Ley 24 660 de Ejecución Penal. Impulsado por el gobierno de Cambiemos, se proponía endurecer las regulaciones de la privación de libertad en una dirección contraria al régimen de progresividad de la pena. Es decir, avanzar sobre garantías constitucionales por las que

se otorgaban beneficios a los presos, tales como salidas transitorias o libertad condicional. Esta situación encontró a exdetenidos, a familiares de personas encarceladas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos manifestándose contra la reforma. En paralelo, se realizaron huelgas de hambre desde algunas prisiones como forma de protestar frente a la discusión que se estaba dando en el Congreso de la Nación. Finalmente, el proyecto fue retomado en abril de 2017 y, a pesar del rechazo manifestado por muchos actores vinculados al tema, a las pocas semanas fue aprobado.

Sin embargo, este proceso de movilización tuvo un saldo positivo: en junio de 2017 se creó la Secretaría de Ex Detenidos/as y Familiares de la CTEP. La articulación que se había gestado en los años anteriores entre Patria Grande y el MTE resultó clave para comenzar a incorporar estas problemáticas en la agenda del sector de la economía popular. El primero de estos grupos contaba con un trabajo de muchos años ligado a la educación popular con personas detenidas, especialmente a través de la corriente universitaria Julio Antonio Mella y el Colectivo Atrapamuros. Gracias a su inserción en las cárceles tenían vínculos con las experiencias organizativas descritas anteriormente, con las cuales, en algunos casos, habían colaborado. De estos entrecruzamientos nació la idea de construir una secretaría dentro de la CTEP, convocando además a otras organizaciones de liberados y liberadas.

En correspondencia con este paso, el MTE se propuso incorporarlos dentro de su estructura organizativa, pero surgieron dificultades para ponerse de acuerdo al respecto. Algunos planteaban que cada liberado debía incorporarse como trabajador en la rama productiva en que se desenvolvía. Sin embargo, para la mayoría de los liberados no era la mejor idea. Había una especificidad que abordar, sin lo cual el proceso organizativo podía fracasar. José Ruiz Díaz, expreso, referente del sector y Secretario de Formación Política y Gremial de la UTEP, describe así esas particularidades del sujeto con el que trabajan:

Seguramente de chicos fueron a visitar a su padre a la cárcel, atravesaron un instituto del menor y de grande terminaron ellos en una cárcel de adultos. Entonces el encierro había atravesado su vida y esa identidad no la podían esconder. Y ahí fue un poco un debate que llevamos interno hasta que entendimos que el sujeto liberado tiene sus reivindicaciones como sujeto,

y tiene a quién disputarle reivindicaciones de derechos: el Ministerio de Justicia. Después hay otras reivindicaciones que son por su rama laboral.

Desde ese marco dieron la discusión para ser incorporados como una rama distinta. Implicó un proceso de entendimiento mutuo: por el lado del MTE, acerca de las singularidades de este tema, mientras que, por parte de los liberados, supuso ordenarse como grupo para dar el debate. “No nos sabíamos expresar, éramos mal llevados, contestadores”, relata José, dando cuenta de las marcas dejadas por la cultura carcelaria y la resistencia a los atropellos penitenciarios. Con el tiempo, pudieron construir un lenguaje común con el MTE para formular sus demandas y se fueron ganando un lugar en la organización. Así pues, como culminación de este proceso, en septiembre de 2018 realizaron el plenario que dio nacimiento a la rama de liberados y liberadas. En la difusión posterior al evento, afirmaron que era “la primera vez en la historia de nuestra Patria que las personas que atravesaron el encierro se reúnen con el fin de pensar política gremial para su sector y organizarse a través del trabajo para luchar por sus derechos”.

Desde entonces, hasta finales de 2022 se han expandido, crearon más de cincuenta unidades productivas en todo el país, en áreas como textil, estampado y serigrafía, marroquinería, construcción, carpintería, reciclado y herrería. En ellas participan alrededor de ochocientos liberados y liberadas, además de doscientas mujeres con arresto domiciliario. El método estuvo siempre basado en el trabajo como principio ordenador no solo de la organización sino de la vida. De hecho, uno de los logros que los enorgullece es que construyeron una fórmula infalible para eliminar la reincidencia. Desde que comenzaron a organizarse, compañero o compañera que se suma a una unidad productiva, no reincide. Pero para lograr consolidar esta perspectiva se precisa que se dé un triángulo virtuoso: formación laboral, gremial y política, incorporación a los polos productivos y contratación del Estado para garantizar la demanda de trabajo. Esta es la base de la primera política pública que fue impulsada desde la rama, junto a otras organizaciones de liberados, y se cristalizó en el Proyecto de Ley contra la Reincidencia presentado en el Congreso Nacional en noviembre de 2022. La iniciativa aún está a la espera de tratamiento parlamentario.⁸

⁸ Para conocer más sobre la rama liberados y liberadas, ver entrevista a José Ruiz Díaz (Tóffoli, Fontana y Liaudat, 2023).

Todo lo que no hace el Estado, lo hacemos nosotras

Paola Caviedes afirma que el trabajo sociocomunitario estuvo presente desde los comienzos del movimiento en 2002. Recuerda aquellos primeros tiempos en que los cinco locos empezaron con la olla popular en solidaridad con los cartoneros. Luego, comenzó a realizarse también en el barrio. Por lo que, si bien la impronta determinante fue gremial, en el tiempo hubo distintas actividades territoriales de un modo disperso, sin una organización centralizada. Recién durante el macrismo, cuando el ajuste comenzó a sentirse en los barrios populares, emergió la necesidad de estructurar y potenciar las labores de asistencia. Nació así, en 2018, la rama Sociocomunitaria del MTE, en tanto reúne a trabajadores –mayormente mujeres– de la economía popular en tareas de cuidado, recreativas y otras labores afines.

Los antecedentes se remontan a aquellas primeras tareas de asistencia alimentaria y otras narradas en capítulos anteriores. Entre ellos, deben destacarse la creación de centros de cuidado comunitario para niños y adolescentes, asociados a la actividad laboral de las ramas cartonera y textil. En el primer sector se constituyó en 2009 el jardín y guardería “El Amanecer de los Pibes”, en Villa Fiorito (Lomas de Zamora). Posteriormente, abrieron sus puertas los centros infantiles “Cartoneritos” (2013) y “Construyendo Futuro” (2019), ambos ubicados en Villa Caraza, partido de Lanús. Los tres funcionan hasta la actualidad. En cuanto a la rama textil, se conformaron cuatro Centros Infantiles de Recreación y Aprendizaje (CIRA) destinados al cuidado de los hijos de las costureras y costureros. Alrededor del sostén de estas iniciativas a lo largo de los años, se desarrollaron aprendizajes muy importantes y un grado de organización significativo. En ese sentido destacó también la puesta en marcha en 2019 del centro de jubilados “Rompe el Encierro”, en Villa Fiorito. Se trata del primer espacio del MTE, en articulación con la Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, destinado al cuidado, contención y promoción de derechos de los adultos mayores. Una de sus principales impulsoras fue la joven Natalia Zaracho, quien a fines de 2021 asumió como diputada nacional en el marco del salto a la política de algunos referentes de la organización (ver cap. 6).

Pese a estas importantes tareas sociocomunitarias, no existió una articulación de ellas hasta hace muy poco. La razón hay que buscarla en que estas actividades no eran entendidas como trabajos de la economía

popular, y, por ende, no quedaban inscriptas bajo una mirada sindical (por lo que las luchas por sus reivindicaciones eran vistas como complementarias). Así, a pesar de las similitudes en el tipo de labores que se realizaban con las construcciones territoriales de los movimientos de trabajadores desocupados, había una diferencia crucial. El trabajo sociocomunitario plasmado en espacios de asistencia alimentaria y cuidado no referían al barrio como ámbito de acumulación organizativa, sino que estaba puesto en función de mejorar las condiciones de trabajo en la economía popular. Es decir, era una actividad subordinada a los circuitos laborales reconocidos como parte de la economía popular. De este modo, centros de cuidado infantil, tareas de asistencia alimentaria y actividades barriales en general eran un medio antes que un fin en sí mismo, y respondían o bien a iniciativas individuales o bien se desprendían de la lucha sindical por mejores condiciones de trabajo (en el sector cartonero, textil, etc.). Desde esa matriz, en cierto punto el MTE incorporó a su identidad el “no contar con muchos comedores” como un elemento distintivo respecto a los movimientos de origen piquetero.

Dos factores confluyeron para que, finalmente, las actividades sociocomunitarias fueran reconocidas como una rama de la economía popular y, por lo tanto, del movimiento. En primer lugar, el reclamo feminista de entender como trabajo a las actividades ligadas al cuidado. En este caso, se trata de un “cuidado comunitario”, generalmente desempeñado por mujeres de modo no remunerado o escasamente retribuido. Reconocer el valor de estas tareas fue una forma de empezar a saldar esta deuda histórica e implicó empezar a considerar su retribución salarial como parte de las luchas de la economía popular. En esta esfera no solamente se producen prendas de vestir, alimentos o fardos de material reciclable, sino que existen actividades no mercantiles, como las sociocomunitarias. En segundo lugar, el contexto favoreció su organización como rama en dos sentidos. Por un lado, la crisis social y económica generada por las políticas macristas provocó un duro golpe en los barrios populares. De repente, reapareció con crudeza el problema del hambre y la subsistencia más elemental. Los comedores y merenderos comenzaron a recibir un número creciente de personas necesitadas, por lo que el Tridente de San Cayetano incorporó este tema en su agenda de luchas y negociaciones, con miras a dar una respuesta inmediata al problema. Fue el retorno de las ollas populares

al repertorio de protesta de las organizaciones sociales, una forma de manifestación que no se veía masivamente desde la crisis del 2001. El MTE no podía quedar fuera del intento de ayudar a quien padecía hambre, por lo que comenzaron a multiplicarse comedores y merenderos en los sitios donde el movimiento tenía presencia. Por otro lado, este proceso de expansión fue acompañado y fortalecido mediante la implementación del Salario Social Complementario en 2017. Desde entonces las tareas sociocomunitarias recibieron una remuneración y quedaron incorporadas dentro del universo de la economía popular.

En ese marco cobró fuerza la idea dentro del MTE de construir una rama específica que aglutinara a las experiencias surgidas como satélites de los otros sectores, más los trabajos barriales preexistentes provenientes de Patria Grande y los que se multiplicaron en los años macristas. De este modo, en octubre de 2018 se constituyó, con un primer plenario nacional, la Rama Sociocomunitaria. El crecimiento fue exponencial. Hacia fines de 2022 reunía alrededor de 750 comedores, merenderos y centros sociocomunitarios y nucleaba a unos 5500 trabajadores y trabajadoras integrados, desde principios de mayo de 2023, en la Federación Sociocomunitaria junto a otras organizaciones del sector.

Uno de los objetivos principales de la rama fue no reducir su actividad a la asistencia alimentaria, algo muy habitual en las organizaciones populares. Más bien se trató de aportar al sostenimiento de la comunidad en un sentido integral, a través de la promoción de derechos y la provisión de cuidados. En tal sentido se definió como línea de acción la conformación de centros comunitarios integrales, espacios de deporte y arte popular en los barrios. Así pues, cambió la concepción de estas actividades que dejaron de ser un medio para fortalecer a otras ramas y pasaron a ser un fin en sí mismo. Quienes las sostienen son mayormente trabajadoras y, en cuanto tales, deben recibir la misma atención a sus reivindicaciones que otros sectores de la economía popular.

Con base en esos primeros lineamientos de la rama, entre las muchas iniciativas que cobraron fuerza podemos destacar dos. Por un lado, el Club Villas Unidas. Se conformó a partir de un proyecto de promoción social del deporte en los barrios populares en articulación con la Escuela de Entrenadores “César Luis Menotti”. El club fue inscrito formalmente en enero de 2019 e inició sus actividades en el área metropolitana de

Buenos Aires, pero luego se extendió a distintas provincias. Por otro lado, la Orquesta Juvenil Tras Cartón. Luego de la interrupción en 2015 del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, no había un apoyo para estas iniciativas. Por lo que quien fuera su impulsor, el músico Rolando Goldman, se puso al hombro la tarea de poner en pie una orquesta en Villa Fiorito con los hijos de los cartoneros. Así fue como en marzo de 2019, comenzó a funcionar Tras Cartón. Este tipo de experiencias no son las primeras dentro de las organizaciones populares, pero tampoco son muy abundantes. Y con la fuerza y vitalidad que la pertenencia al MTE les imprime, han adquirido un vuelo particular que les permitió irrumpir en la escena mediática en algunos momentos.⁹

Ninguna familia sin techo, ningún trabajador sin derechos

En junio de 2019 la rama de construcción del MTE realizó su primera acción pública. Fue una movilización en la que trabajadores de distintas cooperativas de albañiles y trabajadores de oficios, con sus cascos y herramientas, reclamaron la reanudación de obras públicas, así como también la apertura de nuevas líneas al entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Pero ¿de dónde salieron esos obreros de la construcción organizados como MTE? Como veremos, por detrás existen trayectorias de larga data desplegadas a nivel federal. Estas nacieron como respuesta colectiva a la necesidad básica de vivienda e infraestructura y maduraron en los territorios de un modo disperso. Fueron los cimientos sobre los que se erigió la rama. En ese sentido, cabe destacar –al igual que en otros casos– cómo en la organización popular se cristalizan en acontecimientos visibles (como una movilización o un plenario) procesos subterráneos que pueden tener años, incluso décadas de gestación. Historias de encuentros y desencuentros, búsquedas incesantes que a veces conducen por caminos de crecimiento y otras de retroceso, a través de distintos contextos que pueden tornarse posibilidad de expansión o provocar la disolución. A

⁹ Entre las varias apariciones de prensa, pueden mencionarse la nota en Página12 del 2 de febrero de 2019 (“El fútbol como integración social”) y en TELAM del 30 de noviembre de 2019 (“Tras Cartón, una orquesta de hijos de cartoneros que postula un modelo musical federal”).

EL SUBSUELO

continúa
que dice



partientes

Imagen 14. Trabajadoras de la Rama Construcción del MTE (abril de 2023).
Fuente: área de prensa del MTE.

En la periferia de la ciudad de Luján se constituyó el primero de esos afluentes. Corría mayo de 2004 cuando vecinos de la zona ocuparon un terreno descampado. Ese fue el puntapié para el desarrollo de un trabajo barrial basado en talleres para niños y adolescentes y la apertura de un comedor popular. La incipiente organización adoptó el nombre de Movimientos de Trabajadores Comunitarios (MTC) y, al poco tiempo, se incorporó al Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Hacia 2009 vieron la oportunidad de sumarse a un plan de construcción de viviendas enmarcado en el Programa Federal de Emergencia Habitacional del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Lograron ingresar y, en una primera etapa, conformaron cooperativas de trabajo que se abocaron a la construcción de dieciséis viviendas, las cuales fueron entregadas a mediados de 2010 a las familias beneficiadas. Luego de esas obras, vinieron otras que gradualmente consolidaron al MTC en esas tareas. Pero, como recuerda Agustín Burgos, uno de los militantes que participó de ese proceso, no se trató de la organización de la economía popular, sino de la creación de puestos de trabajo como decisión del movimiento:

Nosotros no trabajábamos tanto con la expresión desorganizada de los trabajadores de economía popular, sino que buscábamos generar el trabajo, que es algo que sostenían los movimientos territoriales. Era un movimiento más territorial que gremial. No teníamos tantas herramientas para organizar a trabajadores preexistentes, no teníamos una línea clara que nos ayudara a hacer eso.

En ese contexto se estaba dando la transición entre los métodos piqueteros, de anclaje territorial, y la emergencia de un nuevo tipo de organización centrada en el trabajo. Debe recordarse que entre 2009 y 2010 se habían dado las luchas de los movimientos que estaban por fuera del kirchnerismo para ingresar al Programa Argentina Trabaja. Y comenzaron los debates en el seno de estos y otros agrupamientos para dar lugar a nuevas organizaciones de tipo sindical asociadas a la

idea de economía popular. El MTC fue pionero en esa transformación dentro del sector territorial del FPDS y, luego, de Patria Grande. Cuando en 2014 comenzó la confluencia con el MTE, no tuvo, a diferencia de otros trabajos barriales, mayores dificultades para empalmar con la nueva lógica e identidad.

Algo similar ocurrió con el segundo afluente. Al igual que en el caso anterior, surgió de una toma, aunque esta vez en las afueras de Mar del Plata. Ocurrió el 15 de enero de 2009 que cincuenta familias autoorganizadas llevaron adelante la toma de un barrio de viviendas a medio construir y abandonadas. Cansados de la precariedad en que vivían, dieron el paso hacia la lucha y la resistencia. Durante tres días fueron rodeados por un cerco policial. No tenían agua, luz ni comida, pero a su alrededor surgió una red de apoyo integrada por organizaciones barriales, culturales y estudiantiles que les permitieron sostener la ocupación. No obstante, la situación culminó con un violento desalojo policial en el mes de abril. Como en otros casos, no escatimaron el uso de la fuerza: además de balas de goma, detenidos y heridos, prendieron fuego algunas casas y bienes de las familias.

Tras este desenlace, los ocupantes fueron acogidos en el Centro Cultural América Libre (gestionado por grupos afines al FPDS). Desde ese momento, en la situación de precariedad en que se encontraban, adoptaron el nombre de “Los Sin Techo” e iniciaron un plan de lucha que combinó movilizaciones, negociaciones con la municipalidad y escraches a los funcionarios involucrados en la orden de desalojo. Gracias a ello, a finales de 2011 consiguieron que el municipio les otorgara algunas viviendas para los casos de emergencia y 41 lotes para el resto, dando inicio así a una nueva etapa: la pelea para conseguir fondos para la construcción de las casas y para acceder a los servicios públicos. Cintia Romero y Gabriel “Paco” Lema, dos de los protagonistas, recuerdan que no fue un proceso fácil: “Siempre fue presionando, nadie nos regaló nada (...). Nos dimos cuenta que, organizados y peleando por nuestros derechos, podíamos conseguir las cosas”. Hubo que transitar por distintas oficinas estatales, haciendo frente al desprecio o la indiferencia de muchos funcionarios, y realizar nuevas medidas de lucha, como acampes frente a los edificios gubernamentales. Mientras tanto había que sobrevivir trabajando en empleos informales, cuidar de los terrenos y mantener la organización con todo el esfuerzo que eso implica.

Una de las condiciones que Los Sin Techo ponían en las negociaciones es que las viviendas y las obras de infraestructura fueran realizadas por ellos mismos. El municipio quería licitarlas a empresas privadas. Pero los vecinos sabían que la negligencia empresarial había provocado el abandono de construcciones a medio hacer. Además, era una posibilidad para fortalecer la organización y ofrecer una salida laboral para los compañeros y compañeras del movimiento. Así fue como nació la Cooperativa de Construcción “15 de enero”; la que, finalmente, quedó al frente de las obras del barrio bautizado con el mismo nombre. Fue un triunfo que consolidó a Los Sin Techo y los llevó a soñar con hacer crecer la organización más allá del núcleo originario. Además, desde el 15 de enero de 2010 comenzaron a realizar anualmente, junto a otras organizaciones populares, la Caravana por la Tierra y la Vivienda. Esa visibilidad y los contactos familiares y sociales les facilitaron la expansión hacia distintos barrios. Como parte de ese proceso de consolidación y crecimiento en 2014 fueron parte de la creación de Patria Grande en la ciudad y, casi en simultáneo, se sumaron al MTE en el marco de las definiciones de aquel movimiento.¹⁰

Desde el mismo espacio político provino el tercer afluente. Patria Grande inició en 2015 un trabajo barrial en Villa Celina, partido de La Matanza. Entre las actividades que desarrollaban estaban un comedor comunitario, apoyo escolar y un espacio de radio. Se organizaban para asistir a los encuentros de mujeres y realizaban talleres culturales como una murga y danzas nortenas, en conjunto con la comunidad boliviana. Sobre esta base de trabajos, que por entonces en Patria Grande se definían como territoriales, quedaron aglutinados dentro del MTE. Luego de la realización del RENABAP entre 2016 y 2017 quedó en evidencia la crítica situación habitacional de muchas familias de la zona y de la infraestructura barrial. Ese fue el puntapié para que Gastón “Batará” Reyes, con experiencia en albañilería, decidiera impulsar la conformación de una cuadrilla destinada a participar de las posibilidades de financiamiento para obras que se abrieron a nivel nacional tras la conquista de la Ley de Integración Socio Urbana. Así fue como se inició el proceso cooperativo de trabajadores de la construcción que, en poco tiempo, logró crecer cualitativa y cuantitativamente.

¹⁰ Para conocer más sobre Los Sin Techo, ver entrevista a Cintia Romero y Gabriel Lema (Tóffoli, Liaudat y Fontana, 2023).

Por último, la cuarta vertiente provino de San Martín de los Andes. Los antecedentes de este proceso fueron reconstruidos en detalle en el capítulo anterior. Sin embargo, cabe traer nuevamente a colación esta experiencia de organización comunitaria por su relevancia para la conformación de la rama de construcción, pero también como caso testigo de la unidad estratégica construida entre las luchas de los pobres y de los pueblos originarios. Al igual que en las experiencias reseñadas anteriormente, el factor que dinamizó la organización fue la problemática de la tierra y la vivienda. Al calor del proyecto del Barrio Intercultural se conformaron las cooperativas de trabajo Newen Mapu y Cull Rañi, a través de las cuales los propios vecinos se convirtieron en constructores de sus propias viviendas. Tiempo después estas asociaciones y otras abonaron a un proceso de unidad que se expresó en el surgimiento de la Federación de Cooperativas de Construcción de San Martín de los Andes (liderada por Juan Martín Farías del MTE).

En julio de 2015, durante el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares realizado en Bolivia, la organización patagónica comenzó a tender puentes con las experiencias de Luján y Mar del Plata. En esos contactos comenzaba a pensarse ya la creación de una instancia organizativa común. Con el tiempo se sumó el desarrollo de La Matanza, siendo estas las cuatro vertientes que estuvieron en el origen del sector de construcción en el MTE, y las que alimentadas por tres elementos del contexto lograron una rápida expansión de la rama a nivel nacional. Primero, el programa de Tierra, Techo y Trabajo –impulsado por el papa Francisco y adoptado por el Tridente de San Cayetano– les daba un marco óptimo para avanzar en la necesidad de organizar como rama a los trabajadores de la construcción; de ahí salió el lema: “Ninguna familia sin techo, ningún trabajador sin derechos”. Segundo, la conquista de la Ley de Emergencia Social en 2016, en particular del Salario Social Complementario, fortaleció mediante una ayuda económica los trabajos en curso y les dio un instrumento de organización atractivo para sumar a nuevos compañeros. Por último, el avance reflejado en 2018 en la sanción de la Ley de Integración Urbana. Esta lucha incluyó un triunfo fundamental para la rama. Las cooperativas de construcción de la economía popular quedaron incorporadas como ejecutores de las obras de mejoramiento en los miles de barrios populares censados en el RENABAP.

Desde entonces, para fines de 2022 la rama se había extendido a veinte provincias, integrada por unas 75 cooperativas y unidades productivas y alrededor de 3600 trabajadores. La forma organizativa adoptada fue la cooperativa (incluyendo reparto igualitario de ingresos), con asambleas semanales y delegados por obra. Como parte de las discusiones feministas que marcaron la época puede destacarse que se estableció un cupo de género, algo novedoso en un sector altamente masculinizado como el de la construcción. Otro aspecto notable fue la realización de capacitaciones técnicas y en oficios entre los mismos obreros, con miras a mejorar la calidad de trabajo y poder avanzar sobre obras de mayor complejidad. Actualmente se está trabajando en el fortalecimiento de la federación de trabajadores del sector. Siguiendo el modelo de las ramas cartonera y textil, en abril de 2022 fue inscrita formalmente la Federación de Cooperativas de Construcción por la Integración Urbana de los Barrios Populares (FECCIUR). El presidente elegido fue Gastón “Batará” Reyes.

El trabajo no es delito

La última rama en conformarse en el MTE fue la de trabajadores de espacios públicos, que incluye a artesanos, artistas callejeros, vendedores ambulantes, feriantes y cuidacoche. Es decir, distintas labores que se desenvuelven en la vía pública. Se trata de uno de los primeros sectores de la economía popular que se ofrece como forma de supervivencia en situaciones de crisis económica. Aunque, más allá del contexto y dado el aumento de la pobreza estructural, se consolidó como un circuito permanente de comercialización y, en algunos casos, producción. Así pues, son miles y miles las personas en todo el país que encuentran el ámbito donde desarrollar su trabajo en plazas, transportes públicos, calles, avenidas y otros lugares de tránsito. Dada la irregularidad en que se encuentran en la mayoría de los casos, han estado expuestos repetidas veces a la violencia policial y el hostigamiento mediático. Como si fuera un retorno a los inicios, estos aspectos asemejan a esta última rama del MTE con la primera, la cartonera.

Entre los actores que la integran, artesanos, artistas, feriantes y, en menor medida, vendedores ambulantes tienen antecedentes organizativos, sobre todo en un plano defensivo. Diversas formas asociativas

han surgido en distintos momentos para resguardar su derecho al trabajo frente a intentos de desalojo o prohibición de sus actividades. En cambio, la organización de los cuidacoches es una experiencia inédita. Su trabajo se desarrolla en todas las grandes ciudades y alrededor de eventos deportivos o artísticos. Así, forman parte del paisaje urbano con que gran parte de la sociedad convive a diario. Sin embargo, no se le ha prestado mayor atención. Y cuando el Estado o los medios de comunicación pusieron el ojo en ellos, fue casi siempre para prohibirlos o demonizarlos. Un segundo aspecto novedoso de la rama es la adopción de una perspectiva sindical transversal a las distintas actividades que la componen. De la unidad nace la fuerza, por lo que juntar a unos y otros en una misma lucha, bajo una misma identidad de trabajadores de espacios públicos dentro del campo amplio de la economía popular, les otorga mejores posibilidades de enfrentar la represión, tomar la voz y conquistar derechos laborales.

Una de esas experiencias organizativas que precedieron a la conformación de la rama y que fue parte de su constitución se desarrolló en San Salvador de Jujuy. En 2010, un grupo de vendedores ambulantes fueron violentamente reprimidos por orden del gobierno municipal durante la Fiesta de los Estudiantes. Entre quienes buscaban conseguir un lugar para su carro y poder vender sus comidas en el marco de esos festejos multitudinarios estaba Ivonne Aparicio, actual referente de la rama del MTE. Tras el conflicto que siguió a la represión pudieron negociar con el gobierno un espacio en el centro de la ciudad para poder trabajar. Así fue como lograron armar un patio de comidas de vendedores ambulantes. Según sus palabras, ese día se constituyó en “el bautismo de los sueltos”, la primera lucha colectiva que ganaron y que sirvió a su constitución como grupo. Para identificarse, adoptaron el nombre de Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes (ATAVI).

Como en otros casos, la conquista hubo que defenderla ante las presiones de la intendencia que, bajo la forma de persecución, multas, coimas o requisitos excesivos para la habilitación municipal, puso obstáculos en distintos momentos. Cada una de esas peleas fue fogueando y consolidando a la organización con el paso de los años. Además, se fueron ampliando con la incorporación de vendedores ambulantes que realizaban su trabajo por fuera del espacio físico logrado. En ese marco,

y tras superar una crisis interna por malos manejos de dos exdirigentes, comenzaron un proceso de democratización a través de elecciones internas. Fue entonces cuando, en 2017, y a partir del contacto con una compañera de la rama rural, se integraron al MTE. En ese momento, ATAVI tenía alrededor de cuatrocientos integrantes. Actualmente, ya como regional del MTE, son más de mil los vendedores ambulantes organizados en Jujuy.

Meses después de la incorporación de ATAVI, en enero de 2018, cuatro vendedores senegaleses entraron corriendo a la sede central de la CTEP, en el barrio porteño de Constitución. Por orden del juez Rodolfo Ariza Clerici, habían allanado violentamente el hotel donde vivían, llevándose la mercadería para vender, sus ahorros y objetos personales; varias personas habían quedado detenidas. No era la primera vez que ocurría un episodio de estas características. Estas situaciones han sido recurrentes en la capital nacional, favorecidas por la inclusión en 2005 en el Código Contravencional de la ciudad de la venta ambulante como una actividad punible. Frente a lo cual, el pedido concreto de aquellos senegaleses era armar un sindicato que los defendiera. Entre ellos estaba Alpha Mamadou Diallo, quien rápidamente destacó como referente e impulsó un proceso organizativo inédito entre esa población migrante. Antes se habían realizado movilizaciones, siendo la más importante la de agosto de 2015 en protesta por la política represiva de la ciudad. Pero, en parte, ese proceso quedó trunco tras el asesinato a golpes en marzo de 2016 de Massar Ba, uno de sus principales referentes y defensores. El crimen impune era una sombra temible sobre nuevos intentos de resistencia organizada.

No obstante, enfrentando los temores, en 2018 se inició la lucha sindical, junto a tareas de asistencia a la comunidad senegalesa (cursos de español, ayuda en los trámites migratorios, etc.). La idea de economía popular calzaba perfectamente para su actividad y la experiencia y el método organizativo del MTE –organizar el trabajo realmente existente– era adecuado para este caso. Además, el marco de la CTEP podría brindarles una cierta protección gremial. Lo que no quiere decir que las cosas hayan resultado fáciles. Como pasó con los cartoneros, la primera pelea fue enfrentar el hostigamiento policial y del gobierno, con miras a garantizar el derecho al trabajo. Volvió a constituirse una guardia telefónica que se activaba ante situaciones de emergencia. Fue

en ese marco que fueron detenidos, en septiembre de 2018, reconocidos militantes del MTE como Juan Grabois, Jackie Flores y Sergio Sánchez, quienes cayeron en los calabozos de la Policía Metropolitana junto a algunos vendedores senegaleses.



Imagen 15. Movilización de la Rama de Trabajadores de Espacios Públicos del MTE en el aniversario del fallecimiento de Beatriz M. Flores (marzo de 2021). Fuente: área de prensa del MTE.

Sobre esa base inicial comenzó a ampliarse la organización de vendedores ambulantes hacia argentinos y, sobre todo, de otras nacionalidades, puesto que gran parte de este sector es de origen migrante. Por lo que no solo son víctimas de la criminalización de la pobreza, sino también de la xenofobia y el racismo. En todas partes se enfrentan al mismo ataque mediático, judicial y gubernamental, con el objetivo de deslegitimar sus planteos. El argumento utilizado es que detrás de la venta ambulante hay mafias o es una competencia desleal frente a los comerciantes que pagan impuestos. Con ese argumento y sin ofrecer una alternativa, continuaron los operativos de secuestro de mercadería, incluso en pandemia. En ese contexto, en marzo de 2020, Beatriz Mechato Flores, integrante del MTE, vendedora y jubilada de 73 años, falleció tras ser atropellada cuando intentaba evitar que los inspectores y policías le quitaran las medias que vendía en el Once.

No era la primera vez que ocurría: en 2018 había muerto en el mismo lugar e idénticas circunstancias la vendedora María Barrechea. Mientras que, en febrero de 2021, fue detenida la militante de la rama Agustina Mayansky en el marco de un operativo del gobierno de la ciudad en el barrio de Constitución.

Estas son algunas de las muchas situaciones violentas que enfrentan desde la organización en un contexto de deslegitimación del sector, por lo que la estrategia que la rama se ha planteado para su lucha es ampliar la perspectiva. Es difícil hacer frente a esa embestida únicamente desde la defensa gremial, por lo que se entendió que una vía podía ser valorizar el rol que cumple esta actividad laboral como fuente de ingresos y para el consumo popular. En ese sentido, Mayansky y Nicolás Villafañe, también militante de la rama, señalan que se trata de:

(...) resignificar el comercio popular y la comercialización en sí. Pasa por comprender qué significa el comercio popular, cuál es el valor social del comercio popular en términos de que es lo que genera a los compañeros que venden sus ingresos, que viven y comen de eso, y se mantienen y mantienen a sus familias, y quiénes son los que consumen, los que compran, por qué existen esos mecanismos y esos circuitos de comercio. (...) Hay una situación social objetiva que va generando también eso, una cultura popular del laburo, una cultura popular del consumo que nosotros creemos que es la que hay que valorar y legitimar.

Finalmente, un tercer sector que fue parte de la constitución de la rama fueron los cuidacoches (comúnmente llamados “trapitos”). Sin demasiados antecedentes, lograron poner en pie procesos de organización que aglutinaba hacia fines de 2022 a unos ochocientos trabajadores en las provincias de Río Negro, Córdoba, Tucumán, Salta, Entre Ríos y Buenos Aires. En algunos casos, como Bariloche y Luján, obtuvieron conquistas, como el reconocimiento estatal a su tarea y la inserción laboral a partir de sistemas de estacionamiento medido con inclusión social a nivel municipal. Desafortunadamente, al igual que en otras experiencias de organización de la economía popular que alberga el MTE, previo a ello tuvieron que superar la estigmatización de la actividad y el hostigamiento policial.

En resumen, estos son los marcos y objetivos en que se ha desarrollado la lucha de los trabajadores del espacio público desde su constitución como rama del MTE en 2018: defenderse del atropello

policial y gubernamental, lograr el reconocimiento y la regularización de su actividad y mejorar las condiciones de trabajo. Como medio fundamental aparece la organización colectiva y, como estrategia, la disputa cultural hacia el Estado y la sociedad respecto al modo en que se interpreta las labores en este sector de la economía popular, el cual muchas veces es la primera opción para quienes necesitan un ingreso de emergencia con el que “parar la olla”. Al igual que las restantes ramas del MTE, han avanzado en la conformación de una federación. Así pues, en diciembre de 2022 fue inscrita ante el INAES la Federación de Cooperativas de la Comercialización de la Economía Popular, cuyo presidente es Marcos del Pino.

Para cerrar, digamos que la reconstrucción de la conformación de las ramas del MTE (cada una de las cuales merece una historia en sí misma, con sus marcas de origen, sus hitos, actores y conflictos) nos permite señalar la ampliación de horizontes del movimiento. Por un lado, la noción de economía popular se fue enriqueciendo con la incorporación de nuevas realidades laborales, incluyendo esferas no mercantiles como las tareas sociocomunitarias. Por otro lado, la agenda de las 3-T permitió incluir problemáticas más allá de las reivindicaciones asociadas al trabajo. Por lo que economía popular y 3-T actuaron de conjunto brindando un marco de comprensión y un programa de acción que permitió la unidad en la diversidad, no solo al interior del MTE, sino en conjunto con el Tridente de San Cayetano y, en ocasiones, con el movimiento obrero. En tercer lugar, el método organizativo forjado al calor de la lucha cartonera (consistente en organizar el trabajo realmente existente) se mantuvo parcialmente; en algunas ramas hay una continuidad con esa idea, mientras que en otras se observa la creación de unidades productivas de cero. En los hechos, se verificó una diversificación del método de organización para albergar nuevos sujetos y sus especificidades. Por último, se destaca que en ese caldero de experiencias se cocinaron propuestas innovadoras de políticas públicas, algunas de las cuales lograron cristalizarse en el Estado (como la Ley de Integración Socio Urbana) y otras quedaron plasmadas como proyectos de ley. Estas formulaciones fueron la base programática para la etapa que se inició en 2019 con el salto a la política y la gestión estatal.

Capítulo 6

LA PROYECCIÓN

Un país jaqueado

A fines de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional cambió de manos nuevamente. La victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales puso fin a los años macristas. En cierto sentido, fue el retorno del kirchnerismo al gobierno nacional, pero en condiciones políticas, sociales y económicas muy distintas a las que tenía en 2015 cuando lo entregó. En lo político, se destacó la conformación de una coalición amplia, integrada por distintas vertientes del peronismo y la izquierda, entre quienes había oficialistas y opositores durante las presidencias de Cristina Fernández. Fue ella quien, a pesar de ser la figura con mayor caudal de votos, cedió el primer lugar de la fórmula a una persona que había devenido en opositora a sus gobiernos, Alberto Fernández. Se trató de un movimiento audaz con miras a ampliar la base de apoyo que le permitiera el triunfo en los comicios. Esta decisión fue acompañada por la extensión de la alianza “por derecha” hacia el justicialismo referenciado en Sergio Massa y “por izquierda” hacia movimientos que, o bien revalorizaron la experiencia kirchnerista durante la resistencia al macrismo, o bien entendieron que la prioridad era unirse para derrotar al neoliberalismo (entre estos, como veremos, el Frente Patria Grande, liderado por Grabois).

Indudablemente, a la luz de los resultados de octubre de 2019, la idea fue exitosa como táctica electoral. No obstante, las tensiones internas afloraron en el Frente de Todos a los pocos meses de asumir, provocando un desgaste enorme a la gestión propia. En especial, luego de la contundente derrota en las elecciones legislativas de 2021, las

peleas intestinas transmitieron la imagen de un gobierno desorientado, carente de articulación interna y sin proyecto claro. La falta de autoridad política del presidente de la nación –basada en una suma de errores e indecisiones– acentuó el cuadro de debilidad en un país con fuerte tradición presidencialista. Un clivaje en ese sentido ocurrió en junio de 2020 cuando, en conferencia de prensa, el propio Alberto Fernández anunció la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin, quebrada por la estafa de quienes la gerenciaban y fuertemente endeudada con la banca estatal. Tras recibir distintas presiones, en unas semanas el presidente se desdijo y derogó su propio decreto. Fue el primer recule de varios que signaron un estilo dubitativo de conducción. Lo cual, sumado al contraste con la carismática figura de su vicepresidente Cristina Fernández, generó la percepción de un presidente enclenque.

Por supuesto, los factores que condujeron a la inestabilidad política del Frente de Todos se profundizaron a raíz de un complejo escenario. Los cuatro años de macrismo habían empeorado todos los indicadores sociales y económicos, tales como la inflación, la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Además, produjeron un brutal incremento del endeudamiento externo, aparejado con el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) como inspector de nuestras decisiones. De yapa, sobre este panorama adverso y a solo tres meses de haber iniciado el nuevo gobierno, se anunció el primer caso de COVID-19 en la Argentina. La pandemia, en plena expansión, sacudió todos los órdenes de la vida de manera radical e inesperada. Al igual que la mayoría de los países, el gobierno tomó medidas de aislamiento para la población. Todo el 2020 y parte del 2021 tuvieron como primer tema de la agenda la crisis sanitaria y sus consecuencias. En particular, el empeoramiento de la situación social y económica. Fue en ese contexto particular que se desarrollaron las elecciones de medio término, en donde quienes habían hundido al país –rebautizados como Juntos por el Cambio– volvieron a presentarse como una alternativa y obtuvieron un aplastante triunfo.

Pese a todo, los signos de revitalización económica pos pandemia generaron cierta expectativa en que podía revertirse esa evaluación negativa de la sociedad de cara a los próximos comicios presidenciales. Pero el 2022 no deparó una mayor armonía al interior de la coalición de gobierno. A inicios de año, al conocerse los términos de la renegociación de la deuda con el FMI, se acentuaron las discrepancias. De hecho, tras

la renuncia del presidente del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, la parte de la bancada referenciada en la vicepresidenta no aprobó el acuerdo alcanzado con el organismo internacional. Desde entonces, el sector liderado por Cristina Fernández reclamó abiertamente mayor decisión en las medidas orientadas a la recomposición social y económica. Esta falta de sintonía en torno a un proyecto común se evidenció en constantes cambios de ministros y falta de articulación política en distintos momentos críticos de la gestión.

Sumado a estas dificultades internas, hubo un nuevo evento externo que condicionó fuertemente la administración de gobierno. La Guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, provocó, entre otras cosas, la aceleración de la inflación de los precios. El salto fue de un 50 % en 2021 a casi un 100 % de inflación anual en 2022. Asociado a este fenómeno se dio un aumento de la pobreza que, hacia fines de año, alcanzó al 40 % de la población; un 5 % más que cuando inició el gobierno. Este fue el escenario en que el choque de fuerzas al interior de la coalición oficial se hizo más explícito; lo que tuvo consecuencias, como veremos, sobre la unidad lograda por los movimientos de la economía popular en el período anterior.

En este marco comenzó a adquirir gran visibilidad pública una figura emanada del MTE: Juan Grabois. Si bien desde 2016 había comenzado a ocupar frecuentemente un lugar en los medios de comunicación a partir de su rol como dirigente social, fue en los últimos años que su nombre comenzó a ser conocido como referente político. Esa evolución tuvo que ver con la decisión personal y colectiva de sumarse a la lucha en ese terreno. Desde 2014, a partir de la confluencia con Patria Grande, este partido apareció como una opción para que cuadros del MTE pudieran proyectarse políticamente sin comprometer a la organización. Poco antes, la primera en dar el paso a ser candidata había sido la cartonera Jackie Flores en 2013, en el marco de una de las organizaciones que confluyó en Patria Grande. Pero luego que asumió Cambiemos, la lucha social volvió a imponerse por la urgencia de las circunstancias. Los años 2016 y 2017 fueron álgidos para el movimiento y todo el foco estuvo puesto en los avances logrados en las reivindicaciones de la economía popular. Además, Patria Grande se dirimía en una crisis entre dos tendencias –Nueva Mayoría y Vamos– cuyas causas eran ajenas al MTE y que amenazaron con el fin de ese grupo político. No

obstante, en 2018 se dio un punto de inflexión en un aspecto externo que incidió en lo interno del partido. Tras la validación del gobierno de Cambiemos en las elecciones de medio término, comenzó una segunda fase de su gestión en que se propusieron avanzar sobre más derechos sociales y en la guerra judicial contra Cristina Fernández y el kirchnerismo. La fraudulenta “causa de los cuadernos” fue el arma con la que durante un año la Justicia Federal golpeó a la expresidenta. En agosto de 2018, en el peor momento del ataque, cuando muchos querían despegarse de Cristina, Grabois hizo una sorpresiva aparición acompañándola a los tribunales. A los pocos días en una nota televisiva aclaró que no era ni había sido kirchnerista y que acudió por iniciativa propia y en solidaridad con ella y lo que representaba ante el hostigamiento judicial, político y mediático que padecía.

A partir de allí, Grabois empezó a jugar decididamente un papel político más que de dirigente social. El primer paso fue el armado de un espacio bajo su liderazgo llamado Frente Patria Grande (FPG). Lanzado en octubre de 2018, incluyó en sus filas a las dos tendencias de lo que era Patria Grande e incorporó a otros tres agrupamientos: Movimiento Popular La Dignidad, Tres Banderas y el Frente Popular Darío Santillán de Capital Federal.¹ Poco después, en diciembre, sus principales dirigentes se reunieron con Cristina Fernández, a quien le manifestaron su respaldo. Y bajo la consigna “Ella le gana” comenzaron tempranamente a trabajar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2019. De este modo, cuando se conformó el Frente de Todos, el FPG tuvo un lugar —aunque reducido— en las listas de candidatos y, más tarde, quedó incorporado en algunos cargos de importancia en la gestión gubernamental. Por primera vez estas organizaciones provenientes en su mayoría del 2001, que habían sido opositoras o ajenas a

¹ Con antecedentes que se remontan a fines de los noventa, el Movimiento Popular La Dignidad surgió en 2002 en la Capital Federal. Con el tiempo desarrolló un importante trabajo en villas y barrios populares y se extendió al conurbano bonaerense y nacionalmente. En 2020 tuvieron una ruptura entre un sector referenciado en Federico Fagioli, que adoptó la denominación de Movimiento Nuestra América y se mantuvo en el FPG, y un grupo encabezado por Rafael Klejzer, que mantuvo el nombre original y se alejó del espacio liderado por Grabois. En cuanto a la organización Tres Banderas, se conformó en paralelo a la creación del Frente Patria Grande y fue presentada también a fines de 2018. Con base en la ciudad de Buenos Aires, reunió a sectores peronistas vinculados con la prédica del papa Francisco. Su principal dirigente es Gabriela Carpineti, abogada de derechos humanos. Por último, el Frente Popular Darío Santillán de Capital Federal, cuya referente es la periodista Carina López Monja, provenía del viejo FPDS (al igual que Vamos, una de las tendencias de Patria Grande).

los gobiernos kirchneristas, quedaron incorporadas al proyecto político oficialista en el sector cercano a la vicepresidenta.

Este acercamiento al kirchnerismo –en algunos agrupamientos del FPG en curso desde antes– fue acelerado por cinco factores. Primero, la preocupación por los resultados electorales de 2017 y la posible continuidad del neoliberalismo con posterioridad al 2019. Segundo, el reclamo recogido en los barrios pobres de que retornara Cristina para tener, al menos, las condiciones de vida previas al 2016. Tercero, el deseo de llevar al terreno político nuevas voces que expresaran los importantes avances logrados en el terreno de la lucha social y la expansión expresada en la nacionalización y diversificación de las organizaciones de la economía popular. Cuarto, la evidencia, tras el abrupto cambio de orientación en el gobierno, de que la política es el escenario en donde se definen los proyectos de país que impactan transversalmente en toda la sociedad. Por último, la guerra jurídica (*lawfare*) contra distintos líderes populares de la región; en particular, Lula da Silva, puesto en prisión en abril de 2018, y la expresidenta argentina, fuertemente asediada a través de distintas causas judiciales.²

¿En qué medida esta evolución del FPG involucró al MTE? Al respecto, es posible identificar dos etapas. En la primera, entre 2018 y 2021, se nota una implicación parcial. Por un lado, se buscó preservar la separación entre la organización gremial y la partidaria, manteniendo estructuras orgánicas, identidad y mesas de dirección separadas. Hay que destacar que el MTE no se integró al FPG más allá de algunas personas puntuales que tenían el deseo de canalizar sus inquietudes políticas. Pero, por otro lado, algunos elementos de la impronta del MTE pueden observarse en el instrumento político. Por caso, la construcción de un programa centrado en las 3-T (Tierra, Techo y Trabajo) y la apuesta por el protagonismo popular. Lo primero se manifestó en un aporte concreto del movimiento a la construcción de objetivos y estrategias de gestión para las áreas en que contaba con experiencia y desarrollo. Lo segundo se expresó cuando los lugares obtenidos en la gestión pública, producto de las negociaciones al interior del Frente de

² En junio de 2018, en el marco de un viaje a Brasil invitado por organizaciones sociales de ese país, Juan Grabois se dirigió a Curitiba para visitar al ex presidente Lula da Silva en la prisión, pero no le fue permitido reunirse con él. Llevaba como presente un rosario bendecido por el papa Francisco, con quien se había reunido en el Vaticano un mes antes. La situación del líder popular brasileño habría sido un aliciente fundamental para que Grabois en agosto decidiera acompañar a Cristina Fernández a los tribunales.

Todos, fueron mayormente ocupados por compañeras y compañeros del MTE que expresaban esos lineamientos.

En la segunda etapa, desde 2022 en adelante, tendieron a desdibujarse más las fronteras entre el MTE y la proyección política en el FPG. El cambio radicó en que la principal figura de ambos espacios, Juan Grabois, comenzó a jugar un papel cada vez más importante en el escenario nacional, ya no desde lo sectorial, sino en el debate político más general. Desde marzo de ese año comenzó a recorrer el país realizando actos en los que participó habitualmente el MTE con sus banderas. Asimismo, el movimiento tuvo participación activa en la organización de muchas de esas actividades. Estas dos cosas no ocurrían, al menos de modo generalizado, en la fase anterior. En esta “politización” destacan un factor interno y algunos externos. El primero es el entusiasmo espontáneo que la candidatura de Grabois despertó entre las bases del movimiento. Los elementos externos remiten a distintos sucesos acaecidos en torno a Cristina Fernández en 2022. Por un lado, el derribamiento de las vallas policiales el 27 de agosto que impedían la vigilia en apoyo a la vicepresidenta; acción en la que militantes del MTE tuvieron un papel destacado. Por otro lado, su intento de asesinato el 1 de septiembre por parte de extremistas de derecha, aparentemente vinculados a sectores de Juntos por el Cambio. Por último, su condena a prisión el 6 de diciembre y su posterior renuncia a ser parte de las listas para las elecciones del año entrante. Estos acontecimientos revelaron la fragilidad de depositar en Cristina la superación de la crisis del Frente de Todos y de un cambio de rumbo, y la necesidad de sumar esfuerzos y nombres propios a esas tareas.

Otro factor para tener en cuenta en esta “politización” del MTE es que prácticamente la totalidad de los movimientos identificados con la idea de la economía popular se incorporaron al oficialismo y ejercieron roles de gestión o representación en el Estado. Entre ellos, las principales caras visibles de lo que fue el Tridente de San Cayetano: Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa asumió como diputado nacional, Daniel Menéndez de Barrios de Pie como Subsecretario de Políticas de Integración y Formación y Emilio Pérsico del Movimiento Evita como Secretario de Economía Social, ambos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La única excepción entre quienes lideraron las principales agrupaciones del tridente fue

Grabois, que decidió no desempeñar ningún cargo público. Por debajo de estas figuras centrales, hubo muchos y muchas que ingresaron en distintas funciones del gobierno. De esos grandes movimientos, solo el Evita había sido parte del oficialismo durante la totalidad de los años kirchneristas (con ciertos reparos en la última etapa), mientras que Barrios de Pie participó hasta 2008. Es decir, que se trató de la incorporación de organizaciones que habían estado más bien distantes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Detrás de la decisión de estos movimientos de sumarse al oficialismo pesaron algunos factores en común con los que enumeramos para el MTE y el FPG y otros específicos de sus trayectorias e identidades.

¿Somos esenciales?

Con la gestión de gobierno del Frente de Todos se abrió una nueva etapa de reconocimiento para la economía popular. Por primera vez en la historia un presidente de la nación la mencionó explícitamente en su discurso de asunción:

La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social, no de otro modo. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del Salario Social Complementario, puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo (Alberto Fernández, 10 de diciembre de 2019).

Incluso en la etapa de armado del gabinete circuló públicamente la idea de conformar un Ministerio de la Economía Popular. Esta propuesta finalmente no prosperó, pero dio cuenta del grado de instalación alcanzado por la problemática del sector. A los pocos meses este reconocimiento se expresó en una nueva línea de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En marzo de 2020 se lanzó el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, que pretendió dar un nuevo impulso al componente laboral en la economía popular y cambiar el enfoque puesto durante el macrismo en la capacitación individual como condición para la mejora de la empleabilidad.

Pero, en simultáneo al anuncio de este programa, se registraron los primeros casos de COVID-19 en el país. Para hacer frente a la propagación del virus y ganar tiempo para fortalecer el sistema sanitario, a fines de ese mismo mes el poder ejecutivo decretó medidas de aislamiento. Se establecieron restricciones a la circulación de la población y la suspensión de muchas actividades estipuladas como “no esenciales”. Naturalmente, la dinámica económica se resintió, afectando a algunos sectores más que a otros y comprometiendo seriamente a los pobres y los trabajadores de la economía popular. Frente a lo cual el gobierno respondió desde abril con una serie de políticas destinadas a amortiguar los efectos de la parálisis económica. A nivel del empleo registrado y las empresas privadas, las iniciativas más destacadas fueron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y, unos meses más tarde, el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO II). Mediante estos esfuerzos, el Estado subsidió una parte del salario de los trabajadores, entre otras cosas.



Imagen 16. Confección de barbijos en un polo textil del MTE en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 (abril de 2020). Fuente: área de prensa del MTE.

Mientras que, para quienes estaban más desprotegidos, en la pobreza o por fuera del mercado formal de trabajo, se dispusieron medidas de transferencias de ingresos, tales como el aumento de los montos del Programa Alimentar y de las asignaciones familiares y el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Pese al carácter acotado de este auxilio económico, alrededor de nueve millones de personas entre 18 y 65 años lo solicitaron, sobrepasando con creces las previsiones del gobierno al respecto. Un número abrumador, sobre todo si consideramos que quienes percibían el Potenciar Trabajo quedaron excluidos de ese programa. De este modo, la crisis sanitaria puso en evidencia lo que las organizaciones populares señalaban desde hacía mucho tiempo: aproximadamente un tercio del país –considerando las franjas etarias no incluidas en esos subsidios– vive en condiciones de subsistencia. Para estos sectores, la consigna gubernamental de la cuarentena (“Quedarse en casa”) era un privilegio, ya que en los barrios populares se presentaban situaciones de hacinamiento, precariedad de la vivienda o falta de acceso a servicios básicos.

Estas circunstancias se hicieron visibles al poco tiempo en dos hechos que adquirieron notoriedad pública. El primero, en mayo de 2020, fue el fallecimiento por coronavirus de Ramona Medina. La referente barrial del movimiento La Poderosa en el Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31) de la ciudad de Buenos Aires había pasado más de diez días sin agua potable e imposibilitada de cumplir con los cuidados mínimos. Como muchas otras, Ramona había continuado con sus tareas comunitarias durante el aislamiento. Su muerte sirvió para arrojar luz sobre el trabajo de miles de personas –sobre todo, mujeres– en centros barriales, que son el primer lugar al que los pobres acuden en situaciones de crisis. Con su nombre como emblema, las organizaciones de la economía popular impulsaron un proyecto de ley para lograr un reconocimiento salarial extra para esas trabajadoras de comedores y merenderos populares. La iniciativa fue implementada a fines de 2020 como parte de las medidas de protección social durante la pandemia. Un segundo hecho ocurrió en julio de ese mismo año, cuando se produjo una ocupación masiva de tierras en Guernica, una localidad del sur del Gran Buenos Aires. Alrededor de dos mil familias alcanzadas por la crisis habitacional –agravada en el particular contexto sanitario– ingresaron a un predio ocioso de la zona. Tras unos meses

de negociación con distintos actores estatales, sociales y políticos, la toma fue violentamente desalojada en octubre por las fuerzas policiales. Una vez más quedaba expuesta la precariedad de las condiciones de vida de quienes, pese a estar transitando una pandemia, debían buscar solución por su cuenta a problemas elementales de la supervivencia.

En este marco, las organizaciones populares tuvieron un papel central en trabajos de cuidado de la población en los barrios populares; algo que venía ocurriendo al menos desde 2001, pero que adquirió especial gravitación. A través de los movimientos llegaron a los territorios gran parte de la ayuda estatal y las medidas sanitarias. En el caso del MTE, esto provocó que las labores sociocomunitarias adquirieran una centralidad que nunca habían tenido: hacia 2021 tenía en funcionamiento alrededor de novecientos comedores y merenderos en todo el país (en el pico del ajuste macrista habían alcanzado a ser unos setecientos). Además de la asistencia alimentaria, en los centros barriales y unidades productivas de la organización se colaboraba con la continuidad educativa de niños y adolescentes, se acompañaban situaciones de violencia de género y familiar, se elaboraban barbijos, se repartían insumos de higiene, entre otras cosas. Por su parte, en las casas comunitarias de Vientos de Libertad hubo que adecuar la infraestructura para continuar con los procesos terapéuticos en curso y continuar recibiendo a más personas en situación de consumo. Este conjunto de tareas de parte de los movimientos populares no solo no se interrumpió durante la pandemia, sino que se expandió. Fue tal su importancia que el gobierno tuvo que declararlas entre las actividades “esenciales”; o sea, entre aquellas que no tenían las restricciones derivadas del aislamiento. Así, estos trabajos, históricamente invisibles, fueron reconocidos por su valor social, aunque la jerarquización simbólica fue poco reflejada en lo económico (aun con el subsidio de la Ley Ramona).

Esta valorización de tareas realizadas mayormente por mujeres reforzó la instalación transversal de la perspectiva de género en las distintas ramas del MTE. El entrecruzamiento entre economía popular y feminismo no era algo nuevo dentro del movimiento. La organización ya contaba con un recorrido vinculado a las problemáticas de género, aunque en buena medida no estaba explicitado como tal. Esta impronta estaba presente desde los inicios de la organización, con acciones tendientes a reducir las desigualdades entre trabajadores y trabajadoras

(por caso, la creación de guarderías), promover que las compañeras ocuparan tareas de representación o dirección (tales como delegadas en las rutas del sistema de reciclado) o tuvieran sus espacios propios (por ejemplo, el Programa de Promotoras Ambientales y la Cooperativa Anuillan). Sin embargo, en una época donde la cuestión de género no tenía la relevancia que adquirió en los últimos años en el debate público, al interior del MTE circulaba cierta mirada prejuiciosa acerca de este tipo de discusiones, que conducía a reafirmar el carácter gremial de la organización que se estaba conformando, como si fueran aspectos mutuamente excluyentes. Así, las discusiones de género estaban subordinadas a la construcción gremial, y los avances mencionados eran vistos como parte de los derechos laborales por conquistar. Un ejemplo gráfico de esta supeditación se dio en la primera diplomatura realizada en la ENOCEP en octubre de 2014. El tema de género no estaba incorporado e ingresó por un evento fortuito. Un docente no pudo asistir y generó un hueco en el cronograma que fue llenado con la realización de un taller sobre feminismo. A partir de allí se incorporó esta perspectiva en los cursos de formación de la escuela.

Dos años después, en octubre de 2015, un grupo de mujeres participó por primera vez como MTE del Encuentro Nacional de Mujeres. En esa oportunidad asistieron a Mar del Plata alrededor de cuarenta trabajadoras cartoneras y textiles. Para muchas de ellas, era la primera vez que viajaban solas, que dormían un fin de semana fuera de sus casas o que tenían tiempo libre para divertirse junto a sus compañeras. Fue un espacio, además, donde podían expresar las situaciones de violencia de género que en algunos casos estaban atravesando personalmente o que conocían en la propia rama. Como corolario, en un contexto marcado por el ascenso del movimiento feminista tras el Ni Una Menos del 3 de junio de ese mismo año, estas problemáticas específicas fueron ganando legitimidad en la agenda de la organización. Lo que se expresó en la creación en 2016 del Área de Mujeres del MTE, desde donde se colaboró con la conformación de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la CTEP. En este ámbito se trabajó por primera vez en iniciativas sobre estos temas desde la perspectiva de las organizaciones de la economía popular. Por caso, el Proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género, presentado en ambas cámaras del Congreso de

la Nación en mayo de 2019 y en apoyo del cual se realizó una juntada masiva de firmas (el proyecto, finalmente, no avanzó en el parlamento).

El desafío que se presentó a las primeras compañeras que impulsaron estos debates fue cómo articularlos con las realidades de la economía popular. Existía una cierta resistencia en el MTE a un feminismo visto como liberal en tanto abordaba una agenda de las mujeres de clase media y alta que no contemplaba a las pobres. Así fue como comenzó a madurar la idea de un feminismo popular; planteo que tenía antecedentes en otras organizaciones, pero que en el MTE adquirió un sentido bien definido. Violeta Pastoriza, militante del área, lo sintetiza del siguiente modo: “Las demandas de nuestro feminismo tienen más que ver con Tierra, Techo y Trabajo que con una demanda específica. En esa lucha hay que tener siempre presente que a las mujeres hay que ponerlas en el centro. Tierra, Techo y Trabajo sigue siendo la agenda prioritaria para el feminismo popular”. Como vemos, se trata de hilvanar ambas luchas y evitar la fragmentación de temas y organizaciones que se produjo en otros casos.



Imagen 17. Participación del MTE en la movilización feminista “Ni Una Menos” (junio de 2021). Fuente: área de prensa del MTE.

En síntesis, sobre esos avances previos, el efecto de la visibilización del trabajo sociocomunitario de las mujeres de los barrios pobres colaboró con la instalación de la discusión de género en las distintas ramas del MTE. Como resultado de los esfuerzos de los últimos años, el Área de Mujeres y Diversidad cuenta actualmente con tres casas de refugio ubicadas en las provincias de Neuquén, Jujuy y Buenos Aires, que están destinadas al alojamiento y acompañamiento a mujeres en situación de violencia (con sus hijos, en caso de ser necesario). Además, entre otras cosas, se inició un programa de formación de promotoras de género que busca capacitar a mujeres para que puedan asesorar y contener adecuadamente a aquellas que lo necesitan. Desde su primera edición en 2018 hasta 2022, unas 480 integrantes del MTE realizaron esta capacitación, primero focalizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires; luego, a nivel nacional.

Marchas y contramarchas de la economía popular

El 21 de diciembre de 2019, a días de que asumió el nuevo gobierno, se lanzó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEPE) en un acto con la presencia de miles de delegados del sector, dirigentes políticos y sindicales. En la construcción de esta nueva herramienta confluyeron las organizaciones del Tridente de San Cayetano que habían protagonizado importantes luchas y obtenido conquistas significativas durante el período macrista. Retomando la idea que dio inicio a la CTEP en 2011, se planteó la creación de un instrumento sindical de la economía popular, pero para darle mayor amplitud asumió otra denominación y una nueva identidad. Esto facilitó que se incorporaran Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros grupos de menor tamaño. Gran parte de las organizaciones del sector, la mayoría de ellas con orígenes en torno a la crisis del 2001, quedaron integradas en una estructura y concepción gremial. Por primera vez, luego de casi dos décadas, un universo tan amplio de movimientos confluyó bajo un mismo “paraguas” organizativo. Este paso sustantivo fue posible de la mano del proyecto de construir un sindicato unificado de la economía popular. Como vimos antes, el MTE fue uno de los pioneros de esa idea, amasada durante sus primeros años de existencia.

El primer desafío fue avanzar en la institucionalización gremial. Esto suponía tres planos de acción, en cierto punto concatenados entre sí: uno interno, otro en relación con la CGT como central sindical y, finalmente, de cara al Estado. En el primer nivel, se realizaron distintos esfuerzos orientados a dotar a la UTEP de una estructura orgánica similar a las de los gremios tradicionales. Así, se realizó un proceso de afiliación sindical, se acordó un organigrama basado en secretarías nacionales y seccionales por región, se eligieron autoridades de Consejo Directivo y a Esteban “Gringo” Castro como secretario general. En el segundo plano, no se pudo avanzar de la misma manera. Pese a las energías colocadas en reuniones e, incluso, iniciativas conjuntas, no se logró que la CGT aceptase su integración en la confederación obrera. Más allá de algunas discusiones conceptuales, el freno provino de sectores sindicales temerosos del modo en que la incorporación de la economía popular puede alterar los equilibrios internos de la confederación, dado que la UTEP sería uno de sus gremios con más volumen de afiliados. Pese a ello, se logró que algunos sindicatos importantes dentro de la CGT manifestaran estar de acuerdo con su integración.

En el tercer plano, correspondiente al reconocimiento estatal, pudo avanzarse parcialmente. En marzo de 2021, tras largas gestiones, se logró la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, y en agosto la inscripción y otorgamiento de la personería social a la UTEP. Aunque no se logró la figura gremial, fueron pasos significativos en el reconocimiento oficial del sindicato. A través de esa personería, la UTEP se convirtió ante el Ministerio de Trabajo en la interlocutora formal de los conflictos, las negociaciones y las políticas orientadas a la economía popular. Fue un avance importante, aunque el objetivo de ser interpelados desde lo laboral —y no tanto desde la condición de pobres a través del Ministerio de Desarrollo Social— fue logrado a medias. Lo que se evidencia en que buena parte de las organizaciones de la UTEP fueron incorporadas en la gestión de gobierno en esta última cartera ministerial.

Pero estos resultados en los tres planos, satisfactorios en parte, se chocaron con dificultades de nuevo tipo. Mientras que durante el macrismo fue fácil lograr la unidad de concepción y de acción, caracterizada por la resistencia al neoliberalismo, con el Frente de Todos en el ejecutivo nacional los acuerdos se volvieron más dificultosos

dentro de la UTEP. Las disputas al interior de la coalición de gobierno se trasladaron gradualmente al sindicato, en especial desde fines de 2021 e inicios de 2022 cuando recrudecieron las tensiones luego de la derrota en las elecciones legislativas y las discrepancias en torno a los arreglos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional, tras lo cual se fueron delineando dos posiciones: una favorable al presidente Alberto Fernández y su estrategia de búsqueda de consensos, y otra, con mayor simpatía hacia la vicepresidenta Cristina Fernández, que reclamaba medidas más confrontativas. En el primer grupo encontramos como principales exponentes al Movimiento Evita y Barrios de Pie, y en el segundo al MTE y otras organizaciones sociales ligadas al FPG, independientes y movimientos kirchneristas. En cuanto a la CCC, no se alineó con ninguno de los bloques. Además, estos posicionamientos provocaron rupturas y reacomodos en distintas organizaciones.

En ese escenario se generaron, naturalmente, dificultades para coordinar estrategias de lucha. No obstante, en quienes creyeron en la importancia de la UTEP más allá de las diferencias coyunturales, hubo intentos de proponer temas para trabajar en común. Pueden mencionarse seis líneas en que ese esfuerzo pudo consolidarse en iniciativas. Primero, las tareas asumidas de conjunto de cara a la institucionalización gremial que referimos anteriormente. Segundo, la aprobación de la reforma de la Ley Nacional de Barrios Populares en octubre de 2022; un importante logro de cara a la profundización de las políticas de integración socio urbana. Tercero, reivindicaciones específicas de distintas ramas, en torno a las cuales se pudieron realizar movilizaciones y otras medidas de protesta, proyectos de ley, encuentros y foros masivos. Estos tres primeros ejes de trabajo, si bien son importantes, refieren a cuestiones que estaban en curso desde antes y no ameritaban conceptualmente nuevos debates. En cambio, los siguientes tres temas fueron novedades de este período que requieren, por lo tanto, una presentación un poco más exhaustiva: la propuesta del Salario Básico Universal, el proyecto de la Universidad Latinoamericana de las Periferias y el Plan de Desarrollo Humano Integral (que se aborda en el siguiente apartado). En todos ellos, el MTE fue promotor y protagonista destacado.

La iniciativa del Salario Básico Universal (SBU) se nutrió, por un lado, de la demanda masiva expresada ante el anuncio del Ingreso Fa-

miliar de Emergencia y, por el otro, de la propuesta de salario universal incluida en la Carta a los Movimientos Populares del papa Francisco fechada el 12 de abril de 2020. A días del lanzamiento del IFE y del mensaje papal, en una declaración de la UTEP alusiva al día del trabajador se afirmó que:

(...) el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) expuso una situación que venimos planteando hace tiempo, este sistema de descarte excluye a una gran masa de personas que no gozan de derechos básicos y es momento de avanzar con un Salario Universal. Garantizar un piso salarial y de ingresos para el conjunto de la población que dé un paso más hacia la justicia social y la conquista de tierra, techo y trabajo.

Era evidente que el Salario Social Complementario y otras políticas sociales no alcanzaban a toda la población necesitada y que las medidas excepcionales como el IFE eran insuficientes. Por lo que se empezó a dar forma a la idea de que el Estado estableciera un ingreso mensual ligado a la variación del salario mínimo, vital y móvil, y destinado a quienes lo necesitaran y estuvieran por fuera del mercado de trabajo y de la economía popular organizada. Si bien no contemplaba a la totalidad de la sociedad, el carácter universal de la propuesta refería a garantizar un ingreso básico al amplio conjunto de quienes estaban desamparados de otras formas de protección social. De ese modo, la población del país quedaría “universalmente” cubierta. Vinculado a esto, una innovación que introdujo la propuesta fue que iba a ser implementada –al igual que la Asignación Universal por Hijo– como una contribución directa a los beneficiarios. Es decir, no debía existir la mediación de las organizaciones ni de los municipios para evitar malos manejos. Por último, abarcaría a aquellas personas, mayormente mujeres, que realizan trabajo doméstico y tareas de cuidado. Sin dudas, la inclusión de esta problemática era una novedad que reflejaba los avances de las discusiones de género y tendía un puente entre los dos principales actores movilizados de los últimos años: la economía popular y el feminismo.

Sobre esas bases, la demanda del SBU se instaló con más fuerza desde mediados de 2021, cuando la pandemia comenzó a retroceder y las políticas de asistencia económica por la crisis sanitaria quedaron atrás. Desde entonces se inició un trabajo al interior de la UTEP con miras a lograr los consensos necesarios y durante 2022 la conquista del

Salario Básico Universal dio un horizonte compartido detrás del cual volver a la lucha conjunta como en años anteriores. Distintas jornadas de protesta, con ollas populares y asambleas en los barrios populares, se articularon con grandes movilizaciones en los centros urbanos. En ese marco, en mayo de 2022 el Proyecto de Ley para la Creación del SBU fue presentado por el diputado del Frente Patria Grande, Itai Hagman.³ Luego de lo cual, otros sectores sociales y sindicales y dirigentes políticos del Frente de Todos se fueron sumando a esta iniciativa y el debate se instaló en los medios de comunicación y la esfera política.

No obstante, el trámite parlamentario en la Cámara Baja no prosperó. En buena medida, por diferencias dentro de la coalición de gobierno al respecto. La política de austeridad fiscal de los ministros de Economía, en el marco de los límites impuestos por el acuerdo con el FMI, fue el mayor impedimento para avanzar.⁴ Pero incluso surgieron diferencias con sectores del kirchnerismo. En un acto realizado el 2 de julio en la ciudad de Ensenada, Cristina Fernández se pronunció a favor de un ingreso básico universal. El cambio de denominación no fue un accidente, sino que se refería a una concepción distinta. No obstante, para tratar de alcanzar parcialmente la meta, los autores originales del proyecto (principalmente, Grabois y Hagman) acordaron la reformulación del proyecto: se limitaría su alcance poblacional y se plantearía como un refuerzo transitorio de ingresos destinado a bajar los índices de indigencia, luego de lo cual se realizó, a inicios de agosto, una nueva presentación, esta vez en la Cámara Alta, cuya autora fue la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

Pese a estos esfuerzos, el posicionamiento favorable de la vicepresidenta de la nación y las promesas de altas autoridades del gobierno para avanzar con alguna medida de este tipo, ninguno de los dos proyectos prosperó. El anuncio en noviembre de 2022 de un Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos fue entendido por algunos como un paso favorable. Sin embargo, con el transcurso de los meses, se fue diluyendo el ímpetu inicial, se impuso la política de restricción

³ Proyecto de Ley para la Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante la Creación del Salario Básico Universal (SBU): <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2022/PDF2022/TP2022/2083-D-2022.pdf>

⁴ En medio de la discusión por el SBU se dio un cambio al frente del Ministerio de Economía de la Nación. El 2 de julio de 2022 renunció Martín Guzmán, por un breve lapso quedó al frente de la cartera Silvina Batakis, hasta que finalmente el 3 de agosto asumió en su lugar Sergio Massa (quien en 2023 sería competidor en las elecciones primarias presidenciales de Unión por la Patria con Juan Grabois).

presupuestaria exigida por el FMI y otros temas de una agenda dominada por las urgencias y los imprevistos se sobrepusieron a ese. A pesar de esto, los proyectos instalaron un debate muy importante y son un valioso antecedente que puede ser retomado en otras circunstancias.

En cuanto al proyecto de creación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias (ULPE), representó un avance notable en materia educativa desde la economía popular. Sobre la base de la experiencia acumulada en la ENOCEP y otros desarrollos educativos (por caso, los bachilleratos populares), surgió la ambiciosa idea de crear una institución capaz de ampliar el universo de destinatarios y jerarquizar y profundizar los debates y propuestas en torno al programa de Tierra, Techo y Trabajo. Al igual que la idea de la SBU, se nutrió del pensamiento de Francisco, de quien el proyecto tomó el poliedro como símbolo. Esta figura había sido utilizada por el papa en la encíclica *Evangelii Gaudium* de 2013 para reflejar la potencia del encuentro, desde las diferencias que nos constituyen, en la búsqueda del bien común. Su referencia fue, además, clave para que se articulara la UTEP y la organización Familia Grande Hogar de Cristo (vinculada a los curas villeros) en la concreción de este proyecto, que contó, además, con el apoyo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.⁵ No fue casualidad, entonces, que el sitio elegido para hacer la presentación pública del plan de universidad haya sido el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, organizado por el Vaticano, en julio de 2021.

La propuesta se fundamentó en un diagnóstico crítico acerca del modelo de educación superior predominante. Así lo afirma su presentación institucional: “Las universidades y centros de formación intelectual en general están lejos de la realidad de los barrios populares: se reproduce, en muchas ocasiones, un conocimiento descontextualizado y desconectado de las preguntas y problemas que allí acontecen”. Con base en esta mirada, se proponen un tipo de educación y un modo de producción de conocimiento que reconozca y recupere los saberes populares construidos al calor de luchas sociales, los procesos de organización comunitaria y las experiencias de resistencia, en diálogo

⁵ Esta última es una dependencia creada en el Vaticano en 2017 a partir de la fusión de cuatro consejos pontificios surgidos del Concilio Vaticano II: i) para la Pastoral de los migrantes e itinerantes, ii) para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, iii) Cor Unum y iv) para la Justicia y Paz. En este último órgano participó como consultor Juan Grabois. Luego, en 2021, fue incorporado como miembro pleno del dicasterio. El director de este organismo es el cardenal africano Peter Turkson, quien a su vez fue uno de los organizadores de los encuentros mundiales de movimientos populares (ver cap. 4).

con los bagajes teóricos y conceptuales que puedan nutrir esos procesos. Además, se proponen una formación que no sea meramente abstracta, sino que apunte a la resolución de los problemas a partir de la intervención comunitaria y las políticas públicas. Es decir, se le da una primacía a la praxis.

De ahí que se pretende un modelo universitario en el cual docencia, extensión e investigación estén articulados detrás de las problemáticas por abordar. Con estas premisas, se busca romper con el academicismo, la tecnocracia, la formación de profesionales liberales—aquellos que solo piensan en sus carreras y el éxito económico— y el eurocentrismo que descontextualiza nuestra educación. En su corta trayectoria, ha avanzado fundamentalmente con una oferta de cursos y seminarios, algunos con reconocimiento formal a través de convenios con universidades nacionales. Las temáticas trabajadas al momento refieren a economía popular, integración sociourbana, consumo, adicciones y cuidados, acceso integral a la justicia, agroecología y producción rural comunitaria y gestión ambiental orientada a ecología integral. Actualmente, la ULPE se encuentra tramitando los pasos iniciales para lograr su formalización, en primera instancia, como Instituto Superior de Formación Docente de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Matanza, mientras amplía su oferta educativa a partir de la creación de tecnicaturas, seminarios de posgrado, cátedras abiertas y otras actividades formativas a través de acuerdos con distintas unidades académicas.

Un Plan Marshall criollo

Bajo esa expresión, aquel famoso programa de reconstrucción europea impulsado por los Estados Unidos en la segunda posguerra fue puesto como referencia para legitimar el planteo de las organizaciones sociales y sindicales que, en agosto de 2020, presentaron el Plan de Desarrollo Humano Integral. Si bien la idea de elaborar una propuesta de estas características venía de antes en el MTE, el contexto pandémico colaboró a ponerla en el centro de la agenda de los movimientos populares. La angustia, la incertidumbre y la sensación extendida de que la voracidad capitalista había tenido que ver con la crisis a la que llegamos como humanidad, provocaron durante unos meses un clima favorable a la crítica social y al ejercicio de la imaginación política. En

ese marco, los trabajadores, expresados en una veintena de organizaciones de la CGT y la UTEP, irrumpieron en el escenario con una propuesta de reconstrucción nacional para la pospandemia. Entre otros aspectos notables, se destacó que la construcción del plan partió de la recuperación de saberes y experiencias de los sectores obreros y populares.



Imagen 18. Sindicatos y organizaciones de la economía popular presentan el Plan de Desarrollo Humano Integral (agosto 2020). Fuente: Página oficial del PDHI.

Se trató de una iniciativa inédita en dos sentidos. Por un lado, fue una propuesta de desarrollo más elaborada que las promovidas anteriormente por el movimiento sindical argentino. En realidad, lo que había existido previamente eran punteos programáticos. Entre ellos destacaron por su radicalidad los aprobados por el Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT en La Falda (Córdoba) en 1957, el del Plenario Nacional de las 62 organizaciones en Huerta Grande (Córdoba) en 1962 y el Programa del 1 de mayo presentado por la CGT de los argentinos en 1968. Ya después del retorno democrático en los ochenta, la CGT, bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini, propuso el Programa de los 26 puntos para la Unión Nacional (1986). Finalmente, luego del Grito de Burzaco en 1992, que dio nacimiento a la CTA, hubo distintas formulaciones programáticas en el marco de esa central y, más acá en el tiempo, la CGT conducida por Hugo Moyano planteó los “21 puntos para una Argentina con Justicia Social” (2012).

Sobre ese trasfondo, el surgimiento del Plan de Desarrollo Humano Integral, con propuestas concretas de políticas públicas en distintas áreas, representó una novedad.

Por otro lado, expresó un paso en la sinergia entre organizaciones de la economía popular y movimiento obrero. Luego de compartir las calles en algunas protestas coordinadas durante el macrismo, se logró un piso de confianza suficiente como para avanzar en la construcción de un programa de estas características. Es decir, la unidad de acción antecedió a la unidad de concepción necesaria para este trabajo conjunto. El paraguas de las 3-T y la figura del papa Francisco, apreciada por igual en ambos sectores, colaboró con ese pasaje, así como una común adscripción al oficialismo en el gobierno. Asimismo, ayudó la recuperación de antecedentes provenientes de la historia del peronismo en materia de planificación (en particular, los Planes Quinquenales). Para dar cuenta de la magnitud de los actores intervinientes, destaquemos que, de la economía popular, participaron los principales movimientos de la UTEP, mientras que de la CGT fueron parte importantes gremios, tales como el Sindicato de Camioneros, la Unión Obrera de la Construcción, la Unión del Personal Civil de la Nación, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, la Unión Ferroviaria, el Sindicato de Comercio, el Sindicato de Luz y Fuerza, Obras Sanitarias, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, entre otros.

El punto de partida del Plan de Desarrollo Humano Integral fue la elaboración de un diagnóstico compartido acerca de la dramática situación socioeconómica argentina, exacerbada por la pandemia. Pero también se focalizó en las dificultades de la gestión estatal en materia de coordinación y planificación de políticas. En ese marco, y sobre la base de la legislación existente y la experiencia acumulada por las organizaciones, el plan incluyó propuestas tendientes a la creación de cuatro millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 000 en el mercado formal, el repoblamiento federal del territorio, la integración urbana de barrios populares, la reactivación de la producción industrial a través de la creación de asentamientos productivos, el acceso a la tierra y la vivienda mediante nuevas urbanizaciones y comunidades rurales, el rediseño del sistema de transporte y el cuidado del medioambiente

(en términos de Francisco, “la Casa Común”). Como puede observarse, se trata de un avance considerable en el grado de complejidad respecto a las tradicionales reivindicaciones sectoriales levantadas por cada gremio o sector por separado.

Tras ser anunciado en público a mediados de 2020, durante un año el plan fue presentado ante referentes políticos y gubernamentales, organismos internacionales, medios de comunicación y distintas instancias sociales. Pero nunca fue considerado seriamente de parte de las autoridades gubernamentales. Lo que, sumado al retorno a cierta normalidad pospandémica a fines de 2021, condujo a que la mayoría de los grupos que fueron parte del plan adoptaran otras agendas como prioridad. No obstante, el MTE continuó trabajando en esa perspectiva a partir de la incorporación de un actor inesperado. Desde el Ministerio del Interior de la Nación se estaba elaborando en paralelo un plan federal de desarrollo, focalizado en las necesidades provinciales. Ante lo cual, el MTE propuso al ministro “Wado” de Pedro unir esfuerzos y comenzar a elaborar conjuntamente una planificación con participación popular. Ese fue el origen de las Asambleas por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que comenzaron a realizarse desde inicios de 2022 en distintas provincias. Encabezadas por De Pedro y Grabois, en estas reuniones abiertas se abordaron las problemáticas regionales expresadas por los referentes locales, las cuales quedaron incorporadas para su elaboración de parte de un grupo compuesto por militantes de ambos espacios.

Conceptualmente, el Plan de Desarrollo Humano Integral introdujo dos novedades que cabe destacar. Por un lado, a diferencia de los planes difundidos desde las carteras de economía o producción en distintos momentos, impregnados de una visión tecnicista y economicista, el PDHI abordó de manera articulada la preocupación por el desarrollo, la comunidad y la dignidad humana. Esto se vio reflejado en la búsqueda de participación popular en la definición de objetivos, el modo de entender los problemas y las propuestas de solución. Por otro lado, se reconocieron los déficits del Estado en materia de gestión e intervención en los territorios. Diagnosticar la ineficacia estatal suele ser un lugar común en el discurso liberal, pero aquí esta crítica es apropiada por las organizaciones populares como parte de un llamado a robustecer al Estado debilitado tras el neoliberalismo. En particular, aparece arti-

culado al reclamo de recuperar su capacidad de planificación. Como señaló Grabois en una entrevista realizada en abril de 2021:

La espontaneidad en las acciones beneficia a las mal llamadas “fuerzas del mercado”, porque hoy no son del mercado, sino de los poderes concentrados económicos, los monopolios fundamentalmente financieros (...). Pero nosotros, los países dependientes, si no recuperamos esa capacidad de gobernar nuestro propio futuro, que alguna vez tuvimos a través de la planificación democrática, participativa, pero con una fuerte autoridad política, no tenemos ninguna posibilidad de ser protagonistas de nuestro destino (Liaudat, Bilmes y Carbel, 2022: 188-189).

En síntesis, el MTE fue determinante en el impulso y la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Integral y quien más lo sostuvo en el tiempo. Si bien no logró implantarse como política pública, significó un salto cualitativo para las organizaciones de trabajadores y representa un antecedente que, en el futuro, puede ser retomado en circunstancias más favorables.⁶

Sacudir las estructuras del Estado

El aporte del Frente Patria Grande al triunfo electoral de 2019 y su temprano apoyo a Cristina Fernández permitió la inserción de militantes del MTE en la gestión de la nueva coalición de gobierno. Esta decisión implicó la apertura de un escenario de acción inédito para el movimiento. En coherencia con sus planteos, buscó espacios en los que tenía una trayectoria de lucha y experiencia para volcar en la administración pública y colocó al frente de ellos a representantes de la economía popular. Así, como Directora Nacional de Economía Popular asumió la cartonera María Castillo, al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana quedó Fernanda Miño de la Villa La Cava (San Isidro), como subsecretario en la SEDRONAR fue Sebastián Morreal, uno de los fundadores de Vientos de Libertad, y la productora rural Elsa Yanaje se hizo cargo de la Dirección de Comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. A estos cuatro casos se le sumaron otro número similar de militantes en cargos de igual o menor jerarquía, además de quienes se incorporaron

⁶ Para profundizar en el PDHI, ver entrevista a Grabois en Liaudat, Bilmes y Carbel (2022).

para acompañar a quienes estuvieron en esos puestos de gestión. Dos años más tarde, se sumaron otras dos cartoneras del MTE en puestos públicos. En diciembre de 2021, Natalia Zaracho se convirtió en diputada nacional y, en febrero de 2022, Jackie Flores quedó al frente de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la provincia de Buenos Aires.

El MTE no había surgido como un partido político orientado a ingresar en la gestión pública, sino para organizar a los trabajadores excluidos y luchar por sus derechos. Durante casi dos décadas ese fue el ámbito por excelencia de sus acciones, en algunos casos contribuyendo a la elaboración de políticas públicas y normas legislativas vinculadas al sector y articulando procesos de cogestión con el Estado, sobre todo, en relación con el reciclado. En el transcurso de la pelea reivindicativa maduró propuestas relativas a cómo abordar determinados problemas y qué tipo de respuestas institucionales se precisaban. Incluso, en algunas ramas, había avanzado en la construcción de esas soluciones mediante la creación de dispositivos originales. Por caso, el modelo de intervención político-terapéutico frente a las adicciones, los centros de cuidado infantil adecuados al ritmo de la economía popular, los polos textiles y otras unidades productivas, los mecanismos de comercialización directa del productor rural al consumidor, las cooperativas de liberados y liberadas, entre otros. El desafío era ahora traducir esas iniciativas y propuestas sectoriales en políticas a ser llevadas adelante desde el Estado. Algo que ya habían hecho en ciertas materias (por caso, las leyes de Emergencia Social y de Integración Socio Urbana), pero presionando “desde afuera” a quienes tomaban las decisiones. Con el ingreso a la función pública, el MTE pasó a ser responsable directo en las áreas bajo su incumbencia.

Este paso fue acompañado de acciones y decisiones internas tendientes a delimitar propósitos y modalidades de trabajo de los funcionarios propuestos por el movimiento. El esfuerzo fue por no reproducir los vicios de una clase política vista mayormente como ineficiente, improvisada e insensible al dolor de los excluidos. Con ese objetivo, durante 2019 y previo a las elecciones presidenciales, el Frente Patria Grande, con el aporte del MTE, se abocó al diseño de los Programas de Buen Gobierno. Además de los militantes propios, participaron de las discusiones distintos invitados, tales como referentes sociales,

políticos, académicos y de gestión. El producto de un año de debates y elaboraciones fue un libro de 469 páginas que resume las propuestas respecto a techo, trabajo, tierra, educación, cultura y deporte, comunicación, ecología integral, salud y lucha contra las adicciones, género, justicia, relaciones internacionales y hasta un diagnóstico de rehabilitación para la cuenca contaminada del río Matanza-Riachuelo (que afecta a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y los municipios vecinos). De este modo, el FPG y el MTE establecieron metas precisas que debían ser seguidas por sus militantes en caso de que les tocara ejercer la función pública.⁷

También existió una preocupación relativa a definir pautas de trabajo. Con base en la ética militante construida por el movimiento, se planteó la construcción de un estilo de funcionario que fuera un servidor, no un privilegiado. El cargo no podía ser visto como un paso en la carrera personal de un individuo, sino que era parte de un proceso de acumulación colectiva. Pero tampoco debía ser puesto en ventaja de la propia organización, sino en pos de lograr avances para los sectores populares. La búsqueda del beneficio propio, sea para el individuo o para el grupo, tenía que evitarse a toda costa. Ambos desvíos desacreditan la función pública y la política, contribuyen a debilitar al Estado y alejan la perspectiva de un cambio social. Estas reglas fueron claramente tributarias de la ética militante construida al calor del proceso organizativo del MTE y es uno de los acervos que enorgullecen al movimiento. En ese sentido, puede observarse el esfuerzo por plantear una continuidad entre estar dentro y fuera del Estado. En síntesis, se trató de construir un perfil de funcionario impregnado de pueblo, con una lógica “anticasta”; o sea, sin caer en los vicios y malas prácticas de muchos de quienes han ejercido la función pública.

⁷ Los Programas de Buen Gobierno están disponibles en: <https://mteargentina.org.ar/wp-content/uploads/2019/12/PBG.pdf>



Imagen 19. Asunción de la cartonera Natalia Zaracho como diputada de la nación (diciembre de 2021). Fuente: área de prensa del MTE.

De la mano con la definición de objetivos y un perfil de funcionario, se planteó una exigencia de representatividad social. Es decir, que quienes fueran a ocupar un cargo de gobierno fueran exponentes de los sectores destinatarios de las políticas de su área. Es otra manifestación del viejo precepto del MTE de dar lugar al protagonismo popular. Así, el movimiento definió que fueran los mismos excluidos –quienes conocieron y vivieron los padecimientos de los pobres, se organizaron y lucharon contra ellos– los que ocuparan los puestos alcanzados en el gobierno. Esta política, sumada a la ética de la austeridad que caracterizó a la organización desde sus orígenes, dio lugar a funcionarios en altos cargos nacionales de origen cartonero o campesino o que continuaron viviendo en la villa o el barrio popular. Esta mirada, cuestionada por esencialista o “pobrista”, fue entendida por el MTE como un anticuerpo frente a la insensibilidad y otros defectos de la política tradicional. Así lo explica María Castillo:

Los que entienden cómo es esa necesidad y cómo se debe desarrollar son los compañeros, somos nosotros. Esa es la realidad. Siempre digo, cuando a vos te falte el plato de comida, ahí vas a entender por qué esa persona va en busca de sus derechos. ¿Cuál es nuestra base? Trabajamos para el otro,

no para nosotros mismos. Yo no soy “María funcionaria”, que tiene un rol esencial y bla, bla, bla. No, yo soy “María cartonera” que está cumpliendo funciones para representar al sector (Fontana, Liaudat y Tóffoli, 2023).

La ajenidad respecto de los problemas que atraviesan la vida de los pobres es vista como una falta moral, pero sobre todo por sus consecuencias sobre el diseño de políticas públicas en términos de errores de diagnóstico y de implementación. En efecto, muchas dificultades se siguen de iniciativas estatales surgidas en los despachos o en las teorías, sin contacto con el territorio. En cambio, el MTE se había caracterizado siempre por una visión pragmática y resolutiva. O sea, priorizar los resultados concretos, no las deliberaciones abstractas. Por lo tanto, no intentar aplicar recetas o modelos preconcebidos sino partir de la comprensión de la realidad para desarrollar una estrategia de intervención. Agustín Burgos, militante de la rama construcción devenido en funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, lo sintetiza del siguiente modo: “Hemos tratado de construir un programa muy vinculado a lo práctico: no cómo querés que se llame el sistema de reciclado, sino cuántas prensas hay que comprar, cuántos galpones hay que construir”. Así pues, el éxito en la gestión pública debía ser medido por las respuestas que brindó a problemas concretos, y no por debates conceptuales o anuncios altisonantes, pero vacíos de realidad.

De la mano con lo anterior, quienes asumían como funcionarios debían tener, en palabras de Grabois, un “espíritu de misión” para enfrentar las adversidades y los obstáculos. La imagen que primaba entre la militancia del MTE era que los mecanismos burocráticos del Estado son una “máquina de impedir”, al ralentizar las decisiones y los procesos. El dinamismo descontracturado y comprometido de la militancia tenía que enfrentar esas trabas y desafiar los márgenes de maniobra dispuestos por las reglas de la administración estatal e, incluso, por el contexto y las relaciones de fuerza en el Frente de Todos. Como ejemplo en ese sentido, podemos mencionar el malestar acumulado por Fernanda Miño, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana, mientras estuvo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. La indecisión y parálisis ministerial dificultaron la realización de obras elementales, por lo que tuvo que dar la pelea para cambiar de dependencia. Finalmente, en septiembre

de 2020 logró el pase al Ministerio de Desarrollo Social, desde donde lograron dinamizar distintas políticas.⁸

La vehemencia de estos militantes-funcionarios se montaba sobre la idea de la urgencia, de que no había tiempo que perder. Por caso, es una verdad aceptada en el ámbito de la gestión gubernamental que solo los recursos económicos mueven los engranajes burocráticos. Frente a lo cual, el Estado, incluso para quienes ejercían los cargos públicos, aparece por momentos como “lo otro”, una entidad cuyas lógicas era necesario cambiar para poder transformar el orden de cosas existente. En este sentido, Sebastián Morreale, subsecretario en la SEDRONAR, señalaba que “nosotros venimos de militar con dos chupetines y un caramelo; o sea que estamos acostumbrados a que, si no hay plata, se hace igual. Eso nos lleva a conflictos con distintos ministerios por temas burocráticos que traban, impiden o hacen todo muy lento”. Así pues, los funcionarios del MTE se desarrollaron dentro del Estado, pero también contra el Estado y más allá del Estado. Esta situación contradictoria no es patrimonio exclusivo de estos casos, sino que se ha planteado para otras experiencias de participación de movimientos populares en en la gestión estatal. Quizá lo más destacado de esta organización sea el grado de cumplimiento de sus premisas disruptivas en un contexto social y político más bien contrario a ese espíritu.

Por último, un aspecto que el MTE tuvo que afrontar fue el de las capacidades técnicas de gestión. El movimiento no desconocía, porque en su misma historia lo había aprendido, que la pertenencia de clase media brinda un diferencial en competencias formales e informales, del cual los excluidos carecen por su misma condición. El acceso a los distintos niveles educativos, pero también ciertos elementos culturales y sociales, constituyen recursos de clase que es necesario movilizar para lograr ciertos objetivos. Para afrontar esto sin sustituir, como habitualmente ocurre, a los pobres por sectores universitarios, el movimiento desarrolló una idea original. En cada área de gestión conformó un binomio “café con leche”: duplas integradas por un o una militante originado de la economía popular y otro de clase media, casi siempre con formación universitaria. Esta última persona, en algunos casos con un cargo de gestión subordinado, realizaría el acompañamiento

⁸ Miño narra con detalle esta situación en Fontana, Tóffoli y Liaudat (2023). La expresión “máquina de impedir” es de Morreale y refiere a conflictos con las dinámicas burocráticas del Estado (Liaudat, Fontana y Tóffoli, 2023b).

militante y el apoyo técnico, sin sustituir en la referencia pública o la toma de decisiones a quien proviene de la economía popular.

Traducir el poder popular a la gestión estatal

En su participación en la gestión gubernamental, el MTE trasladó prácticas y principios que ya formaban parte de su cultura militante y buscó reflejarlas en un estilo propio de funcionario. De este modo, la organización no generó un proceso meramente adaptativo en relación con su inserción en el Estado, sino que buscó afrontar las tareas de gobierno sobre bases similares a aquellas pergeñadas al calor de la lucha reivindicativa y la construcción colectiva. Esto condujo en distintos momentos a tensiones por el carácter disruptivo respecto a la dinámica burocrática, pero también a la forma preestablecida de hacer política en los espacios institucionales. En ella domina muchas veces la búsqueda de ascenso en la carrera política o profesional y la acumulación en beneficio propio o del grupo de pertenencia. Y los cargos se reparten en función de criterios ajenos a la pertinencia de la persona designada para la función, con lo que la improvisación termina imponiéndose. A contrapelo de esto, el MTE intentó delimitar claramente los ejes sobre los que sus funcionarios debían trabajar. Así, la planificación –a través de los Programas de Buen Gobierno y, luego, del Plan de Desarrollo Humano Integral– enmarcaron las tareas que debían realizar y sobre las cuales debían rendir cuentas. A continuación, haremos un breve repaso de los principales logros en ese sentido.

Desde la Dirección Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de María Castillo, se afrontó la tarea de proyectar a todo el país la experiencia del sistema de recolección diferenciada de la ciudad de Buenos Aires, como una vía para la dignificación del trabajo cartonero en todo el país. En ese sentido su principal iniciativa fue el Programa Argentina Recicla, lanzado a fines de 2020, a través del cual se promocionó la creación de sistemas de reciclado a escala municipal en cogestión con las asociaciones cartoneras. Este desafío tiene distintas etapas, desde encarar la realización de un censo que les permitiera identificar la población destinataria (calculada en torno a las 150 000 personas) hasta la elaboración de una Guía para la Implementación de la Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos

Urbanos. Además, en función de lograr su implementación efectiva, la dirección brindó asistencia financiera, técnica y logística a municipios y cooperativas de recicladores urbanos en lo que respecta al equipamiento de los trabajadores, las herramientas de trabajo, la producción de valor agregado y la comercialización. Y se trabajó sobre la puesta en funcionamiento de unas trescientas plantas de reciclado en estado de abandono o infrautilizadas en todo el país.

En la misma línea se desarrolló el trabajo de Jackie Flores al frente de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. El principal foco de su reciente gestión, iniciada en febrero de 2022, ha sido la promoción de sistemas de reciclado locales a través del Programa “Mi Provincia Recicla”. También se avanzó en un Plan Provincial de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, un tipo de desechos especialmente contaminantes y con escaso procesamiento en la Argentina. Para lo cual trabajó en un Registro de Refuncionalizadores con miras a valorizar el entramado alrededor de este tipo de residuos. Por otra parte, se proyectó el trabajo de las promotoras ambientales –programa impulsado por Jackie Flores originalmente en la ciudad de Buenos Aires– a nivel provincial.

Desde la SEDRONAR, en una gestión con un fuerte protagonismo de las organizaciones sociales y eclesiales que confluyeron en el Consejo para el Abordaje Integral de las Políticas Públicas de Adicciones en Contextos de Alta Vulnerabilidad (CAIPPA), se avanzó en la institucionalización de las casas comunitarias sostenidas por organizaciones populares como esquema alternativo al modelo médico hegemónico y mercantil expresado en las granjas de rehabilitación. Para lo cual, se creó el Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales mediante el cual se les brinda un financiamiento, lo cual ha favorecido la apertura de nuevas casas comunitarias en distintas provincias. Además, se amplió el Programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) creado en 2014 y se fortaleció la capacitación a través de la Escuela de Formación para el Abordaje de Políticas Públicas (Escuela de Red de CAAC), puesta en marcha en 2018. En ambas iniciativas las organizaciones habían tenido participación. Ahora estaba la posibilidad de articularlas desde la gestión misma en el marco de un abordaje integral, comunitario y con perspectiva de derechos.

Finalmente, entre otras iniciativas, puede destacarse el lanzamiento en agosto de 2020 del Programa Potenciar Acompañamiento, articulado al Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, a través del cual se propusieron contribuir al desarrollo de proyectos de vida y laborales de los jóvenes en proceso de recuperación.

En cuanto a la Dirección de Comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el principal foco de la gestión estuvo centrado en el reconocimiento institucional y el fortalecimiento de este sector, en el que se produce el grueso de los alimentos que se consumen en el mercado interno. Algunas políticas desplegadas desde la rama rural del MTE –como los proyectos productivos autogestivos, la creación de salas de valor agregado, la apertura de un puesto de los productores en el Mercado Central o las estrategias de venta directa del productor al consumidor– constituyeron antecedentes que buscaron ser proyectados desde la gestión pública. Asimismo, políticas no relacionadas directamente con la cuestión productiva, pero centrales desde una mirada integral del sujeto agrario, también se constituyeron como insumos para la gestión. Por caso, las experiencias de acompañamiento a mujeres rurales atravesadas por situaciones de violencia de género, la promoción de derechos de las personas migrantes y la articulación de experiencias de producción colectiva de pueblos originarios. Es el caso de políticas como el Programa En Nuestras Manos, enmarcado en el Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR), destinado al apoyo económico y técnico de grupos asociativos de productoras rurales. También puede nombrarse el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), el cual impulsaba la creación de unidades productivas de la agricultura familiar, la descentralización de la producción y el abastecimiento local de alimentos.⁹

Por último, desde la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) se ha dado continuidad al proceso iniciado en 2016 con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la sanción en 2018 del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana

⁹ Cabe señalar que quienes asumieron por el MTE tareas al frente de la Dirección de Comercialización se alejaron de la organización a mediados de 2022 en el marco de una ruptura en la rama rural del movimiento. Producto de diferencias metodológicas y de concepción, un grupo importante de ese sector decidió escindir y crear otra organización bajo el nombre de Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Así, tras veinte años de historia, el MTE tuvo su primera ruptura, aunque acotada a una de sus ramas.

(conocida como Ley de Barrios Populares). A través de esa norma, conquistada por la lucha del Tridente de San Cayetano, se había creado la SISU como organismo responsable de implementar las medidas destinadas a la integración socio urbana de los barrios populares. Sin embargo, su presupuesto fue escaso durante el macrismo, apenas destinado a sostener la estructura administrativa, y con pocas intenciones de cumplir lo pautado por la normativa.

El cambio de gobierno en 2019 ofreció un nuevo marco para volver a la carga sobre este tema crucial. La asunción de Fernanda Miño al frente del organismo, junto a Fernanda García Monticelli, una de las fundadoras del MTE, como subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales permitió dar un giro en el ritmo de la gestión. En especial, tras el traspaso al Ministerio de Desarrollo Social y el ingreso de los recursos provenientes del Impuesto PAIS a la compra de dólares, creado en diciembre de 2019, y del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, sancionado como ley en diciembre de 2020 con el impulso del diputado Máximo Kirchner. Desde entonces, la SISU contó con un financiamiento que le permitió encarar obras en barrios populares de todo el país. El marco para la gestión estuvo dado por los Programas para el Buen Gobierno, donde se retomaba lo fundamental del Plan Nacional de Integración Socio Urbana surgido en la Mesa Nacional de Barrios Populares (compuesta por las organizaciones que impulsaron las luchas en este tema desde 2016). Asimismo, se encontraba en sintonía con los preceptos del Plan de Desarrollo Humano Integral en lo que hace a las metas, pero también a principios rectores como la promoción de la participación comunitaria, la perspectiva de género, la transparencia en el uso de recursos y la evaluación de las políticas.

Entre sus objetivos, la SISU contempla fundamentalmente la realización de obras de infraestructura, acceso a servicios básicos y mejoramiento de espacio público en los más de cinco mil barrios populares censados por el RENABAP (registro que, a su vez, fue actualizado con algunas mejoras metodológicas). En ellos se calcula que viven unas cinco millones de personas, siendo esa la población destinataria de las políticas de la secretaría. Las distintas obras respondían a las demandas de municipios y provincias en todo el país a través de los Proyectos Ejecutivos Generales (PEG) para trabajos de gran envergadura. Pero, además de las entidades de gobierno, también las organizaciones

sociales podían proponer trabajos a través de los Proyectos de Obra Temprana (POT), lo que sirvió para fortalecer a las unidades productivas de la economía popular.

Otras dos iniciativas de la secretaría pueden mencionarse. Por un lado, la creación del Programa Mi Pieza, que brindó asistencia económica para que mujeres de los barrios populares pudieran mejorar o ampliar sus viviendas. Se trató de una política con perspectiva de género que enlaza el feminismo con la economía popular. Por otro lado, el Programa Lote.ar como política de acceso al suelo urbano destinada a los pobres mediante la cual el Estado nacional adquiere tierras o financia obras de municipios, provincias y organizaciones sociales para la generación de lotes con servicios públicos (luz, agua, gas, etc.). Entre otros beneficios, de concretarse la magnitud que el programa se propuso, permitiría combatir el hacinamiento en los barrios populares y prevenir las ocupaciones ilegales de tierras. Dentro de este programa, a su vez, se abrió en 2022 una línea específica dirigida a organizaciones populares y conocida como Proyecto ARCAS. Mediante esta iniciativa se comenzó a llevar adelante un tipo de urbanización distinta, centrada en la vida comunitaria. En varios puntos del país ya se dio inicio a la construcción de las arcas, pero lo incipiente de esta política no permite aún realizar un balance.

Como vemos, los procesos de gestión encabezados por militantes del MTE estuvieron articulados alrededor de la agenda de las 3-T y su traducción en los planes de gobierno y de desarrollo humano integral. Es decir, que lejos de los conocimientos expertos, fueron los saberes populares los que definieron las orientaciones. Por supuesto, lo técnico fue incorporado siempre que hizo falta para el diagnóstico o la instrumentalización de una idea. La búsqueda de este diálogo entre clases sociales, en reemplazo al monólogo tecnocrático, ha sido uno de los elementos característicos del MTE en su historia y lo reflejó en sus experiencias de gestión. Así como el esfuerzo porque la política estatal refuerce a la organización comunitaria y no la reemplace, la desconozca ni mucho menos la ataque. Esto puede observarse en otras formas de diálogo: por un lado, aquella que se daba entre los funcionarios y las instancias de articulación de las organizaciones (por ej., la Mesa Nacional de Barrios Populares o el CAIPPA). Y, por otro lado, en las iniciativas que apuntaron a reforzar el tejido organizativo, así

como la vida comunitaria (por ej., la exigencia de participación social mediante asambleas de vecinos para discutir las obras de mejoramiento en el barrio).¹⁰

Por último, y en paralelo a las labores en instancias del poder ejecutivo, el MTE impulsó iniciativas para la construcción de políticas públicas por la vía legislativa. Esto no era algo nuevo para el movimiento, que había tenido participación en el diseño y negociación de normas al menos desde 2005. Pero con la asunción del Frente de Todos pasó a contar con dos diputados nacionales muy ligados a la organización a través de sus pertenencias al Frente Patria Grande y una historia compartida. Ellos eran Itai Hagman, en relaciones estrechas desde que su espacio político –por entonces la Corriente Julio Antonio Mella, luego Patria Grande– comenzó a articular con el MTE en 2012, y Federico Fagioli, originario del Movimiento Popular La Dignidad –luego, Movimiento Nuestra América–, con quien la organización coordinaba en lo reivindicativo desde hacía varios años. A estos dos se sumó en diciembre de 2021 una diputada propia, Natalia Zaracho, cartonera de Villa Fiorito. Con estas figuras dentro de la Cámara Baja, el MTE –junto al FPG, la UTEP u otras alianzas según el caso– impulsó o acompañó distintos proyectos referidos al sector que representa. Entre estos, podemos destacar, además de la Ley Ramona y el proyecto sobre Salario Básico Universal, cuatro iniciativas: la modificación de la Ley de Barrios Populares, la Ley de Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, la Ley de Envases con Inclusión Social y la Ley de Prevención de la Reincidencia. Las dos primeras fueron sancionadas y reglamentadas, mientras que las dos últimas no lograron aún su aprobación. A continuación, se presenta un resumen de cada una de ellas.

En primer lugar, mediante la Ley 27 694 sancionada en octubre de 2022, se reformó la legislación de barrios populares. Es considerado uno de los logros más significativos de la UTEP en este período, al consolidar la perspectiva de integración sociourbana establecida en 2017 a propuesta de las organizaciones populares. Haber obtenido, al

¹⁰ Estas no son todas las áreas de gestión en que el MTE colocó funcionarios, pero fueron las más importantes y tuvieron a representantes de la economía popular a cargo. En otros casos los lugares fueron ocupados por militantes muy comprometidos, como Juan Martín Carpenco, al frente de la Coordinación de Proyectos de Innovación Socioeconómica, o Agustín Burgos, con tareas en la Secretaría de Economía (ambas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Para profundizar en los procesos de gestión pública encabezados por militantes del MTE, ver entrevistas en Fontana, Liaudat y Tóffoli (2023), Fontana, Tóffoli y Liaudat (2023) y Liaudat, Fontana y Tóffoli (2023a, 2023b).

igual que en aquel año, el apoyo de casi la totalidad del arco político indica que se constituyó como una política de Estado; es decir, con continuidad pese a los cambios de gobierno. Entre los avances conseguidos en esta oportunidad se contaron la prórroga por diez años de la suspensión de los desalojos, la declaración de la utilidad pública de los nuevos barrios relevados en el RENABAP, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y la promoción del acceso a los servicios públicos a través del establecimiento de la tarifa social para todos los barrios incluidos en el registro.

En segundo lugar, la Ley 27 654 para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo fue sancionada en diciembre de 2021 y reglamentada en abril de 2023. Desde una perspectiva de derechos humanos, la norma presentada por el diputado Fagioli estableció la creación de una red nacional de centros de integración social de atención permanente y de un sistema nacional de atención móvil donde la integridad física, la identidad personal, el acceso a servicios básicos y a la vivienda sean derechos garantizados para personas en riesgo de o en situación de calle. Asimismo, plantea la creación de un sistema nacional de atención telefónica, la realización de un relevamiento nacional con participación de organizaciones sociales para conocer la magnitud de la problemática y la participación de los movimientos populares en el desarrollo y evaluación de las políticas públicas. Su muy reciente reglamentación no permite aún hacer un balance sobre el alcance efectivo de su implementación.

En tercer lugar, el proyecto de Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores fue presentado en octubre de 2021 por impulso, centralmente, del MTE, la FACCyR, las agrupaciones ecologistas y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Se trata de un tema que viene siendo abordado por el movimiento desde una década atrás y que ha pasado por distintas reformulaciones en busca de lograr los apoyos legislativos para la aprobación de la ley. En la actual versión, se establece la implementación de una tasa ambiental para productores y empresas que pongan en circulación envases en el mercado, con el objetivo de utilizar este instrumento de recaudación fiscal para fortalecer la creación de sistemas de reciclado con inclusión social. Así se obtendrían resultados favorables en tres planos: por un lado, se desin-

centiva la producción industrial de envases descartables, disminuyendo el volumen de desechos; por el otro, se aumentan las capacidades de reciclaje, propiciando la reutilización y la economía circular; por último, se mejoran las condiciones de trabajo de los cartoneros. Pese a estos beneficios sociales y ambientales evidentes y contar con un amplio consenso social, el lobby empresarial y la complicidad de sectores políticos con estos intereses privados generaron que el tratamiento de la ley fuera frenado en la Cámara de Diputados. Para evidenciar el peso de los actores en juego, hay que señalar que uno de los portavoces destacados de la postura empresaria fue la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (*AmCham Argentina*). Esto se debe a que muchas de las compañías que deberían pagar la tasa establecida por ley son norteamericanas.

Por último, el proyecto de Ley de Prevención de Reincidencia propone la creación del programa nacional para la reducción de este problema mediante la inclusión sociolaboral. Fue presentado en noviembre de 2022 por la diputada Zaracho, con el impulso de la rama de liberados del MTE junto a otras agrupaciones que trabajan sobre estos temas. Proyectando como política pública lo que se viene haciendo en la economía popular, en la iniciativa se incluyeron mecanismos para la capacitación e inserción laboral en polos productivos a personas que estuvieron en prisión. La evidencia señala que quienes son incluidos en estos procesos colectivos no reinciden en el delito. Por eso José Ruiz Díaz, referente nacional de la rama de liberados del MTE, señala que “lo que nosotros hacemos es una política de seguridad y sale más barato”. Como en el caso anterior, pese a las ventajas comprobadas de esta política, el proyecto no tuvo aún tratamiento legislativo.

La acción directa no pasa de moda

La etapa abierta a partir de la asunción del gobierno del Frente de Todos enfrentó al MTE al desafío de participar en la gestión del Estado “desde adentro”, impulsando políticas públicas en áreas claves para avanzar en la agenda de Tierra, Techo y Trabajo. Esto implicó ir a contracorriente de las inercias burocráticas, buscando generar un perfil de funcionario y funcionaria acorde a los principios y dinámica del movimiento. Desde esos ámbitos, que reflejan trayectorias y acumulaciones

previas, se lograron plasmar algunas políticas que enorgullecen a la organización. Y a pesar de que se trata de dependencias gubernamentales escasamente vinculadas entre sí, se articuló alrededor de un programa común con el desarrollo humano integral como horizonte estratégico.

Ahora bien, en la matriz del MTE estaba la idea de que el involucramiento en tareas de gobierno no debía reemplazar al protagonismo popular y a la protesta callejera. Esas manifestaciones del poder popular eran vistas como antídoto frente a los procesos de burocratización, en cierto modo inevitables si se abandona la pelea “desde fuera” del Estado. Por eso, en distintas circunstancias las iniciativas impulsadas por el MTE y sus aliados desde el poder ejecutivo o legislativo fueron acompañadas de movilizaciones. Ahora bien, además de este tipo de expresiones colectivas, el movimiento mantuvo en su repertorio la apelación a la acción directa como forma de instalar públicamente una problemática o tratar de avanzar en una conquista.

Como vimos, se trata de una metodología que fue revalorizada a fines de los noventa, pero luego, con la reinstitucionalización de la política, cayó en descrédito. No obstante, el MTE mantuvo un ejercicio en ese sentido en circunstancias específicas. Por caso, las ocupaciones momentáneas de edificios públicos o la recuperación de predios o instalaciones estatales en desuso. Pero en esos momentos la organización no era parte de los oficialismos ni tenía cargos de gobierno. Lo novedoso de la etapa actual fue la combinación de la gestión estatal, la participación en la coalición gobernante y la apelación a la acción directa. Es decir, aun en contexto de institucionalización de la economía popular y su inclusión política en la coalición oficialista, el MTE mantuvo formas de protesta que remiten a sus primeras épocas como organización y al espíritu rebelde del 2001. A continuación, nos detendremos en dos acciones que tuvieron una alta resonancia pública en el país: el Proyecto Artigas en Entre Ríos y el acceso al Lago Escondido a través de la propiedad de Joe Lewis en Río Negro. Y al final haremos alusión a otro tipo de iniciativas que también pueden comprenderse como formas de acción directa, pero en el plano internacional.

El 15 octubre de 2020, unas cuarenta personas, entre ellos integrantes de la rama rural del MTE y agrupaciones ambientalistas, ingresaron sorpresivamente a la estancia Casa Nueva, de la poderosa familia Etchevehere en Entre Ríos. Entre quienes entraron se encontraba

Dolores Etchevehere, una de las herederas del campo y, por lo tanto, copropietaria de este. Fue ella quien, luego de infructuosas demandas judiciales, se acercó al estudio jurídico de Grabois unos meses antes y le informó de las injusticias que padecía de parte de sus hermanos (entre otras, el incumplimiento de sus derechos hereditarios), pero sobre todo, de las tierras mal habidas, del enriquecimiento fraudulento y del vaciamiento de *El Diario de Paraná* en manos de su familia. Estos datos eran sumamente valiosos por su potencial impacto político, dado que Luis Miguel Etchevehere, uno de los hermanos de Dolores, había sido presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017 y ministro de Agroindustria de la nación entre 2017 y 2019, durante el gobierno macrista.

Luego de procesar esta información, el MTE vio una oportunidad para avanzar con una de las 3-T (el derecho a la tierra) y otros debates asociados, como la concentración de la propiedad rural en el país y el modelo del agronegocio. Después de evaluar distintas alternativas, se hizo un acuerdo formal con Dolores para ayudarla con su reclamo a cambio de la donación del 40 % de su participación hereditaria para el desarrollo de una unidad productiva agroecológica y cooperativa a cargo de familias campesinas, tras lo cual se terminó de modelar el proyecto bajo el nombre de José Gervasio Artigas, en honor al líder de la Banda Oriental que, en el contexto revolucionario de 1810, impulsó políticas de distribución de tierras en favor de los pobres. Con esa bandera ingresaron pacíficamente a la estancia junto a una de sus dueñas, por lo que, legalmente hablando, no hubo delito alguno.

Esta acción provocó reacciones inmediatas de los representantes de los sectores económicos concentrados. Durante unas semanas estuvo en la agenda mediática y abrió una discusión que excedió por mucho a la propiedad de Casa Nueva. Por un lado, con este caso salieron a la luz las vinculaciones espurias entre la oligarquía rural, el poder judicial y político y los medios de comunicación. Un entramado mafioso que incorporó, en julio de 2022, al narcotráfico a partir de la detención de un reconocido colaborador de Luis Miguel Etchevehere con un cargamento de drogas. Por otro lado, más allá de develar a estos criminales de guante blanco, se abrió una discusión en torno a temas como la reforma agraria, la soberanía alimentaria y el modelo agropecuario. Como afirmaron desde el proyecto, “la historia de la Estancia Casa

Nueva es la historia del modelo de agronegocios que impera en Argentina, que concentra la tierra, destruye la naturaleza, envenena a las comunidades con el uso de agrotóxicos, quema humedales y expulsa a miles de familias campesinas”.¹¹ Es decir, el caso particular sirvió para dar una discusión más amplia; debates que, en buena medida, estaban restringidas a círculos militantes y organizaciones del sector trascendieron y se volvieron de alcance masivo.

En la búsqueda de instalar esta polémica puede afirmarse que el Proyecto Artigas cumplió, al menos en parte, su cometido. Pero, en cuanto a la creación de una unidad productiva agroecológica en la estancia, fue derrotado. Con pocos apoyos públicos desde el oficialismo y un feroz ataque mediático y político desde la oposición, la versión que se instaló públicamente fue que el grupo dentro de Casa Nueva estaba usurpando la propiedad familiar de los Etchevehere. Por lo que después de dos semanas, el mismo día en que a cientos de kilómetros la policía desalojaba la toma de tierras en Guernica, los integrantes del Proyecto Artigas abandonaron la estancia en cumplimiento de una orden de la jueza provincial María Carolina Castagno. Se puso fin a la permanencia en la estancia, pero no al proyecto que continuaría con su lucha por las vías legales y mediante la instalación de experiencias agroecológicas en otros parajes.¹²

La segunda acción directa sobre la que vamos a detenernos se inició el 27 de diciembre de 2022. Al atardecer, un grupo de militantes del FPG y del MTE –entre ellos, Fagioli y Grabois– irrumpieron súbitamente en la estancia privada Hidden Lake, ubicada en zona cordillerana de la provincia de Río Negro. Atravesaron sin permiso el portón principal e iniciaron un acampe a orillas del Lago Escondido, un importante espejo de agua de seiscientas hectáreas de superficie y 22 kilómetros de perímetro que se encuentra dentro de la propiedad del británico Joe Ted Lewis. La medida de protesta fue definida por sus protagonistas como “un acto de reafirmación de la soberanía nacional”.

¹¹ Disponible en la página web del Proyecto Artigas: <https://proyectoartigas.ar/>

¹² Si bien no fue parte del Proyecto Artigas, cabe señalar que, en marzo de 2023, productores de la rama rural del MTE junto a profesionales agrónomos y agrupaciones ambientales tomaron posesión de un campo en Mar del Plata. El predio fue adjudicado formalmente por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por lo que no se trató de una acción directa. Pese a ello, los medios de comunicación opositores y referentes políticos de la derecha comenzaron un feroz ataque sobre esta iniciativa destinada a la puesta en marcha de una unidad de producción agroecológica y tendieron a identificarla con lo sucedido en Entre Ríos como forma de lograr su deslegitimación.

La causa de esto es que la estancia se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con Chile e impide el acceso público al lago; aspectos que han sido motivo de creciente discordia política y jurídica desde 2015. Por un lado, la Ley 23 554 de Defensa Nacional establece que las áreas limítrofes (denominadas “zonas de seguridad de fronteras”) deben estar en manos de ciudadanos argentinos. Y esta propiedad se encuentra a solo 6,6 kilómetros del límite internacional. Por otro lado, al impedir el acceso al lago se incumple con el Código Civil y Comercial de la Nación que obliga a establecer el camino de sirga; o sea, una vía de libre circulación hacia la laguna y su franja costera. Los voceros de Hidden Lake alegan que ya brindan derecho de paso. Pero los lugareños señalan que el camino es de muy difícil acceso y, por lo tanto, en los hechos no se cumple la normativa.

Además de estas irregularidades, hay otros elementos que agregan un manto de sospecha sobre los propósitos del empresario multimillonario en Argentina. Primero, Lewis cuenta con otras dos grandes estancias rurales ubicadas en áreas estratégicas de nuestro país: una propiedad en Sierra Grande, provincia de Río Negro (donde construyó una pista de aterrizaje para aeronaves de gran porte), y otra en la provincia de Santa Cruz lindante al Estrecho de Magallanes, ambas sobre la costa marítima.¹³ Segundo, a inicios de diciembre de 2022 se filtraron públicamente intercambios escritos vía mensajería instantánea entre jueces federales, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, exjefes de inteligencia durante el gobierno macrista y altos ejecutivos del Grupo Clarín. En ellos se referían a un encuentro realizado unos meses antes en Hidden Lake. De este modo, quedó expuesto el *modus operandi* del *lawfare*, cuyo centro de operaciones resultó ser la estancia de Joe Lewis, el “amigo” de Mauricio Macri (como reiteradas veces el expresidente lo consideró públicamente). De hecho, la condena a prisión a Cristina Fernández se conoció casi al mismo tiempo que las escandalosas conversaciones de esta mafia que combina actores judiciales, políticos, mediáticos y de inteligencia.

¹³ Cabe señalar que la Ley 26 737 estableció el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta norma, conocida como ley de tierras, fue sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández. Entre otras cosas, limitó para todo el territorio argentino la cantidad de hectáreas rurales que podían ser de titularidad de extranjeros. Pero en 2016 el gobierno macrista, a través del decreto 820 del Poder Ejecutivo Nacional, introdujo modificaciones tendientes a flexibilizar las restricciones establecidas.

Por todo esto, y ante el incumplimiento de distintos fallos judiciales de parte de Hidden Lake, el MTE y el FPG decidieron hacer la acción directa. Bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también”, se buscó interpelar a la sociedad argentina respecto a la suma de irregularidades mencionadas. Se sumaron así a una serie de protestas en el mismo sentido, como la protagonizada a orillas del Lago Escondido por la CTEP el 1 de mayo de 2016 (con la participación del MTE y Grabois) y las sucesivas marchas al mismo sitio, desde 2017, organizadas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA). Finalmente, la acción de diciembre de 2022 culminó tras permanecer 24 horas en el predio, en donde recibieron todo tipo de amenazas de parte del personal de la empresa. El objetivo de lograr un impacto mediático y abrir un debate público al respecto había sido alcanzado, luego de lo cual se retiraron pacíficamente.¹⁴

Iniciativas como las del Proyecto Artigas y la irrupción en Hidden Lake forman parte del repertorio de acciones que el MTE ha hecho jugar en distintos momentos en la lucha reivindicativa. Las novedades al respecto en esta etapa de su historia son dos. Por un lado, ahora el movimiento era parte de la coalición de gobierno, tenía funcionarios en la gestión y representantes en el poder legislativo. La institucionalización de las organizaciones populares muchas veces ha ido en detrimento de su radicalidad e, incluso, de la protesta callejera. El MTE entiende que eso es un riesgo, en tanto se pierde el factor de presión externo, aquel que permite a un gobierno avanzar con medidas más audaces. Por otro lado, se trató de temas novedosos para la agenda de la organización, lo cual también da cuenta del proceso de crecimiento de los años precedentes. En ambas acciones se puso en juego la diversificación por ramas, la nacionalización y desarrollo en distintas provincias y la inclusión de cuestiones estratégicas para el desarrollo nacional más allá de la economía popular.

Por último, sin ser una línea de acción directa vinculada estrictamente al MTE, sino más bien al Frente Patria Grande y organizaciones afines, pueden mencionarse las Misiones Internacionales de Solidaridad

¹⁴ Como dato complementario a estos hechos, puede agregarse que unos meses más tarde, en julio de 2023, Joe Lewis fue detenido en los Estados Unidos. Se lo acusó de proporcionar información confidencial sobre empresas —que cotizan en bolsa— a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones. A las pocas horas, bajo una fianza de trescientos millones de dólares, quedó libre nuevamente.

y Observación de Derechos Humanos en países de la región. Hasta ahora realizaron cuatro. En noviembre de 2019, se viajó a Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales y la asunción ilegítima de Jeanine Áñez al frente del gobierno. En mayo de 2021, se fue a Colombia a raíz de las violentas represiones desatadas por el presidente Iván Duque en respuesta a un estallido social. En junio de 2022, concurrieron a Ecuador para denunciar la represión a los manifestantes del paro nacional de parte del gobierno de Guillermo Lasso. Por último, en febrero de 2023, una delegación fue a Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo y la ola de asesinatos producidos por la violencia policial bajo el gobierno de Dina Boluarte. En todos los casos, Grabois fue parte de la delegación (aunque en Colombia no le fue permitido ingresar al país) al igual que la cartonera Alicia Montoya en representación de la FACCyR, mientras que en la primera de las misiones participó Zaracho por el MTE.

Se trató de experiencias inéditas en que los movimientos populares hacen la tarea que instancias nacionales e internacionales creadas al efecto no están realizando. En ese punto, pueden asemejarse a acciones directas, ya que ocurrieron por fuera de las vías institucionales y ante el fallo de estas. Como resultado de esas misiones y a partir de los relevamientos en territorio, se produjeron informes sobre la situación de derechos humanos tras esos acontecimientos. Esos reportes fueron presentados a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organización de las Naciones Unidas, presidentes de la región, juristas de renombre internacional, medios de comunicación, entre otros destinatarios. Cabe destacar que en los juicios que se llevaron adelante contra los represores en Bolivia y Colombia fueron usados como evidencia. La reacción no se hizo esperar. Además del hostigamiento *in situ* que han sufrido en varios casos, en marzo de 2023 el gobierno de Dina Boluarte les ha prohibido el reingreso a Perú a todos los integrantes de la misión.¹⁵

¹⁵ Además de estas labores internacionalistas, hubo otra con participación del MTE. En junio de 2022, Sebastián Sánchez, uno de los fundadores de Vientos de Libertad, viajó a Haití para aportar su experiencia en el abordaje de los problemas de adicciones. En el empobrecido país caribeño funciona desde 2009 la Brigada Internacionalista Dessalines, que brinda asesoramiento técnico y organizativo a los movimientos populares. Está compuesta por militantes de La Vía Campesina, principalmente del MST de Brasil. Desde Argentina han participado con estadías de entre uno y dos años varios militantes provenientes de Patria Grande y el FPG.

Palabras finales

I

En este libro nos propusimos reconstruir la trayectoria del Movimiento de Trabajadores Excluidos desde sus inicios en 2002 hasta la actualidad. Para ello tuvimos en cuenta su relación con el escenario social y político y con el entorno de las organizaciones populares en Argentina. En función de este objetivo, realizamos una investigación exhaustiva que se nutrió fundamentalmente de la realización de entrevistas en profundidad a 45 militantes, referentes y dirigentes de la organización, del análisis de fuentes documentales, legislativas y periodísticas, y de visitas a espacios productivos, centros comunitarios y plenarios.

Narrar las profundas transformaciones que atravesaron al MTE, desde sus raíces en la experiencia cartonera hasta su paso por la gestión gubernamental, pudo haber sido un recorrido lineal por acontecimientos significativos y anécdotas relatadas por los integrantes de la organización. Sin embargo, afrontar esta tarea nos expuso a un desafío mucho más grande. Indagar en la singularidad del MTE, dentro del prolífico mundo de las organizaciones populares de la Argentina, nos permitió comprender la constitución de uno de los emergentes sociales más relevantes de los últimos tiempos: el movimiento en torno a la economía popular. Desde sus orígenes, el MTE ya conceptualizaba actividades hoy inscriptas en la economía popular como trabajo y a quienes las realizaban como trabajadores; algo que aún hoy continúa siendo mayormente mal enfocado, cuando no directamente ignorado, en el debate político y mediático. En los momentos cruciales, el rumbo seguido por el MTE fue decisivo para dar cuenta del modo en que se

configuró el sujeto de la economía popular: sus marchas y contramarchas, sus etapas de resistencia y ofensiva, sus potencialidades y tensiones constitutivas. Así pues, y luego de diez años de construcción casi exclusiva en el sector cartonero, tras la emergencia de la CTEP el pulso del MTE se imprimió sobre un espacio de movilización cada vez más amplio.

Para concluir el libro, a continuación, recapitulamos los aportes centrales de cada capítulo (II-VII). Luego, reponemos las principales contribuciones realizadas en torno a la comprensión de la singularidad del MTE y su papel gravitante en relación con procesos sociales que lo exceden ampliamente (VIII). Por último, se presentan una serie de nudos problemáticos y reflexiones que se desprenden del recorrido realizado (IX y X).

II

Los inicios del Movimiento de Trabajadores Excluidos se remontan a un contexto de crisis social y económica sin precedentes como la que se expresó en el estallido social de 2001 y en los meses inmediatamente posteriores. Situamos la emergencia del MTE en el marco de los procesos de organización y movilización popular que proliferaron por esos años con el objetivo de enfrentar la desarticulación del mundo del trabajo y el profundo deterioro socioeconómico. Estos se expresaron en distintas experiencias colectivas, entre las cuales la que se cristalizó en el MTE adquirió rasgos específicos.

El trabajo cartonero fue una de las respuestas con la que miles de personas buscaron hacer frente a la falta de trabajo y al deterioro de las condiciones de vida. Las primeras acciones del MTE en torno a la actividad de acopio y recolección de material reciclable tuvieron lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estas fueron posibles gracias a lo que caracterizamos como un “encuentro entre clases sociales”. Por un lado, un pequeño núcleo de cartoneros y cartoneras que, como tantos otros, se trasladaban diariamente desde localidades del conurbano bonaerense lindantes a la capital porteña –principalmente de la zona sur– para poder recolectar material. Por otro, un reducido grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, interpelados no solo por la creciente presencia cartonera en las calles de la ciudad,

sino, sobre todo, por los niveles de estigmatización social y violencia policial que esta traía aparejado. Esta etapa estuvo caracterizada por la construcción de vínculos de confianza entre ambas partes, y la realización de las primeras actividades como ollas populares y reuniones.

La organización en torno al trabajo cartonero adquirió un papel central en los primeros años de existencia del MTE. A través de esta experiencia el movimiento adoptó una impronta específica que, a grandes rasgos, sostuvo en toda su historia y lo distingue de otras organizaciones populares. En primer lugar, se buscó favorecer el protagonismo social y político de los trabajadores cartoneros, en detrimento de la constitución de los militantes de clase media como conducción o dirigencia del proceso. En segundo lugar, en un período donde las organizaciones de trabajadores desocupados –piqueteros– tuvieron gran relevancia en el espacio público y, a nivel sectorial, la estrategia privilegiada fue la creación de cooperativas cartoneras de alcance reducido, el MTE eligió una tercera vía. Se propuso centrar el objeto de la organización en el reconocimiento del trabajo cartonero y la mejora de sus condiciones desde una concepción gremial. El objetivo de fondo era ampliar el alcance de las conquistas obtenidas, en lugar de quedar limitado al establecimiento de una cooperativa de trabajo. Con esta finalidad, a diferencia de la experiencia piquetera (con eje en la desocupación y el trabajo territorial), había que tomar como punto de partida el trabajo “realmente existente”, defendiendo el carácter laboral de la actividad cartonera. En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, el MTE configuró un método organizativo singular enraizado en las lógicas presentes en el circuito de trabajo cartonero, reconociendo los liderazgos naturales y las estructuras orgánicas que la propia actividad había generado.

III

El pasaje desde la legislación prohibitiva de la actividad cartonera –todavía vigente en 2002– hasta el establecimiento del sistema de reciclado con inclusión social en la ciudad autónoma de Buenos Aires (el primero en América Latina) estructuró una fase de la historia del MTE. Al calor de este agitado recorrido el movimiento consolidó un núcleo militante, una estrategia organizativa y una agenda reivindicativa propia, así como también forjó algunos rasgos constitutivos de su

identidad que se mantienen hasta hoy. Dicha etapa comenzó con las luchas defensivas frente al hostigamiento estatal y la persecución policial, aun a pesar del reconocimiento al trabajo cartonero provisto por la ley porteña 992, sancionada a fines de 2002. Junto a la movilización cartonera, la intervención de “los abogados” –tal como eran conocidos los jóvenes militantes entre los cartoneros y cartoneras– en la defensa frente al accionar mafioso de la policía y la violencia de la unidad de control del espacio público selló a fuego la alianza entre unos y otros.

La consolidación del movimiento cartonero se abrió paso en un escenario todavía adverso al tratamiento integral y no punitivo de la cuestión cartonera. Junto a una serie de logros en materia de gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Buenos Aires, aquellos avances organizativos fueron una condición indispensable para el tratamiento y sanción en 2005 de la Ley 1854 de Basura Cero. La reglamentación de la nueva normativa en 2007, luego de mucha pelea, sentó las bases de la coordinación entre Estado y cooperativas cartoneras para la gestión de residuos sólidos urbanos, así como puso en evidencia la dimensión ambiental del fenómeno (posicionando a los cartoneros como actores relevantes también en ese plano). Como corolario de este proceso, en 2008 se inauguró una nueva etapa para el MTE: la puesta en marcha del primer sistema de reciclado con inclusión social en la ciudad de Buenos Aires. Fue un momento de franca expansión cualitativa y cuantitativa del movimiento, a contramano del proceso de declive en que se encontraban las organizaciones piqueteras que se mantenían por fuera del oficialismo (al igual que el MTE).

Por último, de manera paralela al conflicto con el gobierno porteño, a lo largo del período comprendido en el capítulo 2 el MTE desplegó un conjunto de acciones que expandieron los límites de su agenda y desbordó su anclaje inicial en la lucha gremial cartonera. Por un lado, de manera similar a las organizaciones territoriales, el movimiento desarrolló un incipiente trabajo barrial centrado en actividades educativas y recreativas para niños y adolescentes, asistencia alimentaria e intervenciones en conflictos de tierras. Por otro, se involucró en los escraches impulsados por La Alameda para denunciar la trata de personas con fines de explotación laboral y la esclavitud laboral en talleres textiles. Con el tiempo, el MTE se distanció de estas acciones por diferencias conceptuales y metodológicas con esta organización.

Sin embargo, en esta etapa se constituyó como una relación valiosa que abonó al proceso de conformación de la CTEP y al acercamiento a las problemáticas del sector textil.

IV

La creación y posterior fortalecimiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular capturó buena parte de las energías del MTE entre 2011 y 2015. Los efectos de la crisis financiera global de 2008 habían evidenciado los límites del modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por el kirchnerismo. En ese marco, el movimiento se propuso contribuir a la creación de la organización gremial de los trabajadores sin patrón y sin derechos garantizados. Se trataba de una búsqueda por constituir un espacio de representación de un sector de la clase trabajadora que, por la propia dinámica del capitalismo dependiente, no iba a ser absorbido por el mercado formal. Cabe destacar que la emergencia de la CTEP estuvo acompañada por la maduración del concepto de economía popular, a lo cual contribuyó particularmente el MTE.

Al horizonte indefinido del pleno empleo –compartido por la conducción del movimiento obrero y la gestión gubernamental– se le contrapuso la imperiosa necesidad de reconocer el trabajo realmente existente y brindar, a quienes habitaban la economía popular, los derechos que faltaban. Fue este acuerdo programático elemental el que permitió aglutinar a organizaciones populares de distintas tradiciones. Se trató de un proceso de articulación inédito hasta ese entonces para el MTE. El movimiento encontró en la confederación la posibilidad de amplificar algunos de sus principios fundacionales, tales como el reconocimiento de las actividades laborales de la economía popular, el trabajo como eje ordenador de la organización colectiva y el anclaje en lo gremial (sin subordinarlo a lo político). Al mismo tiempo, vio contenidas sus principales reivindicaciones en una agenda mucho más amplia, que incluía a otros sectores que padecían las mismas problemáticas que el núcleo cartonero.

Por otra parte, la fundación en 2011 de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, junto a otras cooperativas y asociaciones cartoneras, puede leerse como otra expresión de la estrategia

general de sindicalización que el MTE adoptó. La puesta en marcha de la FACCyR fue una correa de transmisión a nivel federal de la experiencia cartonera en el Área Metropolitana de Buenos Aires, abonando de este modo a la nacionalización del movimiento. Fue este el marco que propició la presentación de un proyecto —esbozado unos años antes— como el Programa Nacional de Reciclado con Inclusión Social. La cogestión del sistema de reciclado en CABA ofició como caso testigo de la posibilidad real de articular el abordaje de la cuestión ambiental a la cuestión social en procesos con participación estatal y popular. La resignificación del trabajo cartonero en esta clave se profundizó a partir de la inclusión de la promoción ambiental como una dimensión central para el fortalecimiento de los sistemas de reciclado.

V

Una década después del surgimiento del MTE, las articulaciones producidas en torno al mundo cartonero y la economía popular ampliaron los horizontes de la organización. Entre ellas, destacó el vínculo que comenzó a gestarse entre la organización cartonera y La Mella/Marea Popular a partir de 2012 y, luego, con Patria Grande, desde 2014. Estas nuevas relaciones dieron aires al reducido núcleo militante que mostraba claros signos de agotamiento por exceso de tareas. Entre los frentes abiertos con la puesta en marcha de la CTEP, se encontraban la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular y la Mutual Senderos. Ambas iniciativas centrales para el fortalecimiento del perfil gremial de la confederación fueron firmemente impulsadas por el MTE.

En sus primeros años de desarrollo, la organización de la economía popular no contaba con muchos adeptos en el mundo político partidario ni sindical. Una de las primeras figuras en respaldar este proceso organizativo fue el arzobispo porteño Jorge Bergoglio. La construcción de este vínculo se vio expresada en la celebración de las misas cartoneras desde 2008. La etapa abierta con la emergencia de la CTEP —y, sobre todo, con la asunción en 2013 de Bergoglio como papa Francisco—, profundizó el diálogo y la articulación con esta figura eclesial en el marco de su apuesta por renovar el vínculo de la Iglesia con sus seguidores (apelando a un acercamiento a los pobres desde la

Doctrina Social de la Iglesia y la teología de raíz latinoamericana). De este modo, lo que comenzó siendo una relación coyuntural, terminó abonando a una alianza estratégica. Entre otras cosas, esto se cristalizó, desde 2014, en la coordinación de los sucesivos encuentros mundiales de movimientos populares y en la participación continua de una delegación de la CTEP (luego UTEP) en cada una de sus ediciones. A tal punto que la consigna “Tierra, Techo, Trabajo”, lema de este evento internacional, fue apropiada por la CTEP para sintetizar los principales ejes de su agenda.

El vínculo con la Iglesia fue uno de los andariveles por los que transcurrió la proyección internacional del MTE. Una segunda vía fue la de la Organización Internacional del Trabajo, a través de la participación en sus conferencias de 2014 y 2015. Casi como un corolario de las discusiones y avances logrados en este evento, la CTEP obtuvo la personería social otorgada por el Ministerio de Trabajo de la Nación; un reconocimiento institucional vital para ejercer la representación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por último, la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores (Red LACRE) fue, con sus alcances y limitaciones, el tercer espacio en el que el MTE apostó a las articulaciones políticas internacionales. En relación con este ámbito, aunque con un alcance mucho mayor, se creó en 2018 la Alianza Global de Recicladores.

VI

En un contexto regresivo para las mayorías populares como el que se abrió a fines de 2015 con la asunción del macrismo, la dinámica reivindicativa de la CTEP y el Tridente de San Cayetano marcó en buena medida el ritmo de la movilización callejera, en general, y la agenda del MTE, en particular. En esta clave pueden enmarcarse luchas y conquistas tan significativas como la Ley de Emergencia Social, el Registro Nacional de Barrios Populares y la Ley de Integración Socio Urbana que tuvieron lugar en este período. La unidad de acción y de concepción al interior del sector alcanzó su pico y culminó con la creación en 2019 de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): la unificación de un vasto conjunto de organizaciones populares bajo una misma estructura organizativa gremial. También permitió

instancias de coordinación con el movimiento obrero organizado en la CGT y las dos CTA.

La sincronización del MTE con la dinámica de la CTEP no se acotó solamente a estos planos. Por estos años, emulando la estructuración de la CTEP en ramas, el MTE se diversificó hacia distintas realidades laborales. En otras palabras, cruzó las fronteras del mundo cartonero para tender puentes con procesos de organización colectiva anclados a otras actividades de la economía popular: trabajo textil, construcción, cuidado comunitario, abordaje de consumos problemáticos, pequeña producción rural, trabajo en espacios públicos y construcción. Es innegable que la reconfiguración interna del MTE permitió robustecer en términos cuantitativos y cualitativos a la CTEP. En paralelo, la consolidación organizativa de la CTEP posibilitó afrontar las principales luchas reivindicativas y conflictos de cada rama, en unidad con otras organizaciones representativas del sector.

La diversificación del MTE fue resultado asimismo de la confluencia con Patria Grande y de la nacionalización del movimiento habilitada por la FACCyR. En algunos casos, el germen de nuevas ramas ya estaba contenido en el propio desarrollo del MTE. En otros, la emergencia de novedosos núcleos organizativos más allá del mundo cartonero se desencadenó en el encuentro –muchas veces azaroso– entre la acción militante y los intrincados entramados sociales del mundo popular. En muchos casos, eran procesos –que cambiaron la vida de las personas y en los que el MTE también se transformó– no inscriptos originalmente como parte de la economía popular, pero que, posteriormente, encontraron allí un lenguaje común desde el cual reivindicar su existencia y organizarse por sus derechos.

Sin dudas, el surgimiento de nuevas ramas al interior del MTE posibilitó ampliar la perspectiva de la organización. La incorporación de nuevos sujetos y realidades laborales y regionales implicó explorar nuevos métodos de trabajo organizativo y repertorios de lucha, expandiendo el horizonte de lo posible para el movimiento. Y tuvo entre sus principales repercusiones la elaboración de “políticas desde abajo” que la organización impulsó para mejorar las condiciones de trabajo y pelear por derechos para cada subsector, logrando en algunos casos su conversión en políticas públicas y, en otros, su formulación, como programas y proyectos de ley.

VII

La asunción del gobierno del Frente de Todos en 2019 inauguró una nueva etapa de participación de los movimientos sociales en el Estado, proceso en el que incorporó a diversas organizaciones de la economía popular. En el caso del MTE, el peso adquirido en la resistencia al macrismo, así como la participación de algunos de sus militantes en el Frente Patria Grande (espacio político creado en 2018 y referenciado en Juan Grabois), le permitió insertarse en lugares de gestión claves para traducir reivindicaciones del sector en instrumentos de política pública. Este acontecimiento supuso una revisión de aquella concepción que el MTE había esbozado desde sus inicios en la lucha cartonera, permeada por cierto rechazo y desconfianza hacia la política institucional.

La incursión en el Estado puede ser pensada no solo como disrupción, sino también como continuidad en la organización. En efecto, los funcionarios y funcionarias provenientes del MTE buscaron traducir sus propios saberes y experiencias militantes y organizativas en insumo para la elaboración de políticas públicas. Rasgos característicos han sido el espíritu de misión, el cumplimiento de una agenda programática, la ética de austeridad y la lógica antiburocrática, “anticuerpos” que el movimiento produjo para replicar en la gestión pública un estilo militante forjado al calor de las luchas sociales.

Otro de los aspectos más significativos de esta etapa tuvo que ver con la creación de la UTEP como cristalización del proceso de unidad de las organizaciones populares gestado durante la etapa macrista. La confluencia del Tridente de San Cayetano y otros movimientos en una misma estructura organizativa reeditó las tareas que la CTEP había asumido desde su conformación en 2011: institucionalización gremial, incorporación a la CGT y reconocimiento estatal. Además, por supuesto, de proponer avances en las reivindicaciones del sector, algunos de los cuales fueron logrados. El desafío más importante fue procesar, sin paralizarse, las tensiones emergentes entre actores de la UTEP por diferencias en relación con la valoración del gobierno.

La irrupción de la pandemia de COVID-19, pese a lo adverso del contexto, generó un escenario favorable para visibilizar en el debate público el valor social de las actividades de la economía popular. Para el MTE fue el marco propicio para proponer discusiones y medidas estructurales que permitieran revertir la crítica situación social y

nacional. Fue así como, en el intento por ampliar el horizonte de lo posible, impulsó el Plan de Desarrollo Humano Integral, al que fueron integrados distintas organizaciones de la economía popular y sindicatos de la CGT. En el mismo sentido, como respuesta al grave cuadro socioeconómico evidenciado en la pandemia, se impulsó la creación del Salario Básico Universal. A pesar de los importantes apoyos obtenidos, esta iniciativa no logró ser aprobada.

Finalmente, si bien en este período la intervención en la esfera ejecutiva y legislativa adquirió un lugar inédito en la historia del MTE, pudimos ver que esta se combinó con la apelación a formas de acción directa donde la organización contaba con una experiencia que se remontaba a las primeras acciones de resistencia cartonera ante el abuso policial. En este sentido, aun frente al proceso de institucionalización producido a partir de su inscripción estatal, el movimiento conjugó participación en la gestión gubernamental con acción directa y trabajo gremial de base, lo cual es entendido por la organización como otro de los “anticuerpos” frente al riesgo de burocratización.

VIII

El itinerario recorrido nos permitió dar cuenta de un fenómeno profundamente novedoso en el campo de los movimientos populares de Argentina en seis sentidos. En primer lugar, se trata de un proceso de construcción de poder popular *sui generis*, que no se canalizó ni por la vía sindical tradicional ni por la territorial, a pesar del peso que ambas formas organizativas tuvieron históricamente en el país. Los cartoneros, sector originario en torno al cual se constituyó el MTE, eran en buena medida invisibles para las centrales sindicales. Por su parte, las organizaciones de trabajadores desocupados se propusieron como un espacio de lucha, movilización y representación en torno al problema del desempleo. En contraposición a ello, la problemática central que aglutinó al MTE fue el “derecho al trabajo y el trabajo sin derechos” en un sector estructuralmente excluido del mercado laboral, y no ya desempleado por causas meramente coyunturales. Mientras que las organizaciones articuladas alrededor de la desocupación tuvieron como principal demanda la creación de puestos de trabajo, para el MTE el objetivo era conquistar los derechos laborales sobre la base de

un trabajo preexistente que no era reconocido como tal. Esta es la base sobre la cual el movimiento construyó un perfil gremial.

En segundo lugar, una singularidad del MTE radica en sus esfuerzos por materializar el protagonismo popular como principio organizativo, entendido como una lógica de construcción donde la participación de los más humildes se vuelve indispensable en la toma de decisiones y tareas de referencia (a contramano de la tendencia a la sustitución tan frecuente en distintos tipos de organizaciones). Esta fue la base sobre la cual se impulsó que roles tan diversos como las autoridades de las cooperativas, las figuras públicas de cada rama, las delegaciones o los cargos de gestión estuvieran a cargo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Pero, además, no puede soslayarse que este principio ha propiciado el protagonismo de las mujeres en el MTE desde sus inicios. Sobre esta base se sustenta un feminismo popular expresado en priorizar a mujeres y diversidades de la economía popular en los roles de referencia, vocería y en la función pública, así como también el desarrollo de una agenda y una política gremial con perspectiva de género.

En tercer lugar, esta lógica organizativa está en la base y retroalimenta a una exigente ética militante, entendida como las pautas morales que delinearían las “buenas prácticas” de los y las integrantes del movimiento. Erigirse como una organización de y para los trabajadores excluidos implica una alta entrega cotidiana, un rechazo a la cultura del consumo y una búsqueda de una vida en austeridad. Supone, además, una forma de vivir la militancia como expresión de un espíritu de servicio, antes que como parte de una carrera o aspiración personal. También una vocación pragmática expresada en la determinación por obtener avances concretos y poco adeptos a lidiar con disquisiciones teóricas, muchas veces inconducentes, con ideas brillantes pero impracticables. Recientemente, con la inserción de cuadros del MTE en la gestión gubernamental, el alcance de estas pautas se ha extendido y adaptado al ámbito estatal, abonando a la configuración de un estilo de funcionario propio. A las máximas planteadas para todo militante del movimiento se le adosan: no utilizar al Estado como medio de acumulación político-material de la organización, seguir un criterio de representatividad social en los cargos públicos (estos deben ser ocupados, primordialmente, por los sectores sociales cuyos intereses se representa) y de responsabilidad

hacia dentro del movimiento y con el programa por el cual fueron designados en tal función. En buena medida, esta ética militante es la que ha posibilitado incontables logros para el sector.

En cuarto lugar, el MTE ha construido una perspectiva que siempre apuntó a lo general. Es decir, desde sus orígenes se propuso desarrollar políticas de amplio alcance, cuyos beneficios no quedarán circunscriptos a los integrantes del propio movimiento o del sector organizado. Esto se ha visto expresado en dos elementos. Por un lado, en la adopción de una estrategia de representación gremial en relación con el sector, centrada en las cuestiones reivindicativas y distanciada de cualquier intento de capitalización en clave político-partidaria. Lo que habilitó un tipo de articulación gremial con otras organizaciones, expresado en las federaciones por rama y las confederaciones de la economía popular (CTEP, UTEP). Por otro lado, como se ha visto plasmado en toda su historia, existió un esfuerzo permanente por traducir reivindicaciones corporativas en leyes y políticas públicas destinadas a la totalidad del sector y, más recientemente, al conjunto de la sociedad. Un rasgo notable de algunas de estas iniciativas es que fueron procesos de codiseño y gestión de políticas públicas entre movimientos populares y Estado.

En quinto lugar, quizá el aporte más significativo del MTE consistió en su contribución a la emergencia de la economía popular como sujeto social y político. Con diversas denominaciones, este sector existe como un dato de la estructura sociolaboral argentina al menos desde los ochenta a esta parte. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de su irrupción como uno de los movimientos sociales más relevantes de los últimos tiempos. La aparición de la economía popular como problema público, la construcción de demandas colectivas y de un repertorio de acción propio, su instalación como un lenguaje que provee nuevos sentidos a la acción política y social de los excluidos, su constitución como un espacio de representación y movilización de las clases populares, entre otros aspectos, dan cuenta de ello.

En sexto lugar, otro elemento distintivo de la trayectoria del MTE es la maduración de un programa político con miras a la transformación de la sociedad actual. La organización supo trascender la mirada sectorial acerca de los problemas nacionales e identificar sus conexiones con el problema del desarrollo (energía, transporte, etc.), el funcionamiento del Estado, las desigualdades territoriales y la cuestión ambiental, entre

otros. Fruto de la sinergia con el papa Francisco emergió, en primer término, la agenda de las 3-T (tierra, techo, trabajo), que quedó plasmada en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares y dio proyección internacional al MTE. Posteriormente, este proceso habilitó a nivel nacional el Plan de Desarrollo Humano Integral, presentado junto a otras organizaciones de la economía popular y del movimiento obrero organizado. De este modo, el MTE fue más allá de las reivindicaciones acotadas al trabajo, incorporando otros aspectos centrales para una vida digna.

IX

La evolución del MTE lo enfrenta a una serie de nudos problemáticos que se encuentran en la base de los desafíos de la organización en esta etapa. Como podrá evidenciarse en lo que sigue, se trata de situaciones que, en buena medida, atraviesan a las organizaciones populares en su conjunto. El primero de ellos remite a la ambivalencia de la economía popular: es tanto un estado de cosas existente como una propuesta normativa donde se encuentra contenida la dimensión emancipadora. Es decir, refiere a la precariedad más extrema que genera el capitalismo contemporáneo y, al mismo tiempo, a la capacidad de los excluidos por “inventarse el trabajo” y a la posibilidad de que –bajo el paraguas organizativo– las unidades productivas y los circuitos de comercialización popular estén permeados por una lógica comunitaria, autogestiva y ambientalmente sostenible. En ese sentido, se combina un aspecto de resistencia táctica (pelea gremial, lucha defensiva) con un horizonte estratégico (nuevos valores, otra economía). Es decir, el desafío es evitar retroceder casilleros en los pisos de dignidad y, al mismo tiempo, correr el horizonte de lo posible hacia una economía popular con derechos plenos en el marco de una sociedad organizada en torno al desarrollo humano integral.

En efecto, la evolución de las organizaciones de la economía popular durante las últimas dos décadas puede ser comprendida a partir del esfuerzo por ampliar los alcances de la segunda dimensión frente a la primera. Sin embargo, no es una tarea fácil, ya que no depende simplemente de lo que los movimientos puedan lograr. Necesariamente deben tenerse en cuenta las disputas entre proyectos políticos y sus

reflejos en las estructuras institucionales del Estado en el contexto de un capitalismo dependiente que, tendencialmente, provoca una creciente exclusión social. En ese sentido, las organizaciones de la economía popular juegan un partido en el que “la cancha siempre está inclinada” en contra de los más humildes.

Ese marco permite entender un segundo nudo problemático emergente en la historia más reciente del MTE. La separación entre lo social (gremial) y lo político (partidario) fue un rasgo distintivo del movimiento no solo al interior del campo de la economía popular, sino también en el escenario de las organizaciones sociales en Argentina. La preocupación por mantener la herramienta reivindicativa y la política como canales diferenciados de organización, participación y movilización popular estuvo puesta en función de prevenir la utilización partidaria de los pobres y sus necesidades con fines electorales, al tiempo que favoreció la construcción de una amplia unidad en torno a la economía popular, sobre la base del acuerdo en la agenda reivindicativa. Este principio de separación entre lo social y lo político fue sostenido por el MTE en distintos momentos de su trayectoria organizativa: desde la inicial experiencia cartonera, pasando por su apuesta por la construcción de la CTEP y la UTEP, hasta la articulación con Marea Popular y las agrupaciones que venían del Frente Popular Darío Santillán y formaron Patria Grande.

Con el retorno del neoliberalismo al gobierno y, sobre todo, tras la incorporación al oficialismo del Frente de Todos, se dieron las condiciones para que esas fronteras entre lo social y lo político se volvieran más difusas. Este proceso se expresó en los vasos comunicantes que articularon al MTE y al Frente Patria Grande a partir del salto a la política de algunos referentes constituidos al calor de la lucha reivindicativa. En este escenario, no son pocas las tensiones entre los tiempos del conflicto gremial y los de la política institucional, entre la dinámica del movimiento social y del gobierno. Y se han expuesto con crudeza en momentos donde la orientación económica asumida por la gestión de Alberto Fernández ha sido puesta en el centro de la discusión. De hecho, la UTEP quedó entrampada, en buena medida, en las peleas al interior de la coalición oficialista. En ese sentido, existe el riesgo de que lo político termine imponiéndose sobre lo social y erosione los cimientos sobre los que se construyó la organización popular. El

desafío, en este caso, parece ser cómo alcanzar un equilibrio entre ambas dimensiones.

El tercer y último nudo problemático sobre el que nos interesa profundizar se encuentra vinculado al punto anterior y remite a la etapa abierta con la inserción del MTE en la gestión pública. La institucionalización tiene un doble filo: permite convertir iniciativas surgidas “desde abajo” en políticas estatales y, simultáneamente, tiende a neutralizar el componente disruptivo, de radicalidad, inherente a la lucha social. Existe un peligro de burocratización al encorsetar la dinámica del movimiento popular en las rígidas vías institucionales, muchas veces al costo de quitarle vitalidad, flexibilidad y capacidad creativa.

El menor protagonismo en la protesta callejera de parte de la economía popular en el último ciclo de gobierno (contrapuesto al auge que se evidenció entre 2014 y 2019) puede ser leído como una manifestación de este fenómeno. En cierto sentido, el ciclo abierto por las organizaciones de la economía popular se encuentra en un momento bisagra, que será transitado de acuerdo al modo en que se resuelva la articulación entre la lógica institucional y la del movimiento social. El desafío parece ser cómo mantener la acción directa como un recurso disponible, aun cuando se participe en instancias de gestión gubernamental, como reaseguro frente al peligro de burocratización.

X

A lo largo de estas páginas recorrimos la historia de organización de la economía popular en Argentina siguiendo los pasos de uno de sus protagonistas más destacados: el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y, más allá de su itinerario particular, cruzamos la frontera invisible y nos adentramos en el vasto universo de los marginados, de aquellos a quienes se los suele señalar, con desprecio, como vagos, violentos, planeros. Esos que, desde las situaciones más extremas, enfrentan al capitalismo del descarte y se rebelan contra el triste papel que este sistema les depara. Hemos visto cómo se organizan por trabajo y vida digna, cómo construyen poder y políticas públicas, cómo sueñan con un futuro deseable para todos y todas. Desde el campo de la investigación social, pero también desde el compromiso político e

intelectual con las luchas populares, esperamos haber contribuido a dar a conocer esta verdadera epopeya de nuestro tiempo.

En cierto modo, solo se trató de prestar oído a lo que tienen para decir. La escucha ocupó un lugar privilegiado en esta obra, en sintonía con una de las cualidades militantes más valoradas y ejercitadas por el movimiento. No debería sorprendernos: todo diálogo que se precie de tal consiste, ante todo y primeramente, en saber escuchar. De lo contrario, si no hay una circulación efectiva de la palabra, la conversación no se realiza. Pese a ello, la capacidad de escucha constituye una *rara avis* en momentos en que se nos propone como regla de vida alcanzar el estatus de *influencers* y ser “visibles” para la mayor cantidad de seguidores. Entre otros ámbitos, esta sordera frente al grito doliente de los más humildes es evidente en la vida académica, inmersa la mayoría de las veces en el soliloquio exasperante de su torre de marfil. Pero también se evidencia con fuerza en el espectro militante, incluso dentro de las agrupaciones sociales y políticas populares o de izquierda, donde suelen imponerse –bajo ciertas inercias vanguardistas– diversas formas de “sustitucionismo”. O sea, un monólogo de la militancia “blanca”, de clase media, habitualmente universitaria, que, con las mejores intenciones, termina ocupando los lugares jerárquicos, de conducción, y tiende a hablar en nombre de los pobres.

A contramano de estas tendencias, el MTE otorgó centralidad a la escucha y concedió un rol protagónico a las bases sociales del movimiento. Como vimos, una singularidad que es posible rastrear desde los orígenes, cuando se constituyó como una caja de resonancia de las voces y urgencias de los más humildes. Bajo esa impronta inicial, en los excluidos fue floreciendo el ímpetu por hacer valer sus derechos de cara a la sociedad y al Estado. Revivió, de ese modo, una pedagogía de la escucha en la mejor tradición de los movimientos populares. El tiempo, las luchas, los dolores y las conquistas fueron tallando así una enseñanza fundamental: la transformación social nace de la unión entre integrados y excluidos, para luego crecer y madurar al calor de la unidad de la clase trabajadora.

En los descartados, entre ellos, en la pelea diaria cara a cara de la vida contra la muerte es donde, paradójicamente, se están amasando los valores de otro mundo posible. Porque, como dijo el poeta,

*Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.*

Hoy nacerás del pueblo como entonces.

*Hoy saldrás del carbón y del rocío.
Hoy llegarás a sacudir las puertas
con manos maltratadas, con pedazos
de alma sobreviviente, con racimos
de miradas que no extinguió la muerte,
con herramientas hurañas
armadas bajo los harapos.*

(Pablo Neruda, “América insurrecta”, *Canto General*)

Anexo metodológico

A continuación, se presentan en orden alfabético las personas entrevistadas, con breve información relativa a su lugar en la organización, en la UTEP o en la función pública (al momento de hacer la entrevista), fecha y duración de la conversación. En los casos que fueron publicadas, se coloca la referencia bibliográfica entre paréntesis. Aquellas entrevistas realizadas a más de una persona en simultáneo, se presentan de conjunto.

Ambort, María Eugenia. Rama Rural. 4 de abril de 2022. 120 min.

Aparicio, Ivone y Angelo, Juan. Referentes de Jujuy. 24 y 26 de agosto de 2021. 164 min.

Bonus, Gabriela y Márquez, Diego. Rama Sociocomunitaria. 30 de agosto de 2021. 138 min.

Burgos, Agustín. Mesa de Relaciones y funcionario en la Secretaría de Economía Social de la Nación. 3 y 10 de junio y 8 y 15 de julio de 2021. 292 min.

Calandra, Nora. Rama Liberados y Liberadas. 7 de septiembre de 2021. 117 min.

Cánepa, María Gimena. ENOCEP y ULPE. 13 de julio de 2021. 75 min.

Caropresi, Nicolás. Mesa de Relaciones. 10 y 17 de agosto de 2021. 220 min.

Carpenco, Juan Martín. Mesa de Relaciones y Director de Proyectos de Innovación Socioproductivos de la Nación. 6 de octubre de 2021. 98 min.

Castillo, María. Rama Cartonera y Directora de Economía Popular de la Nación. 25 de marzo de 2022. 180 min. (Fontana, Liaudat y Tóffoli, 2023)

Caviedes, Paola. Rama Sociocomunitaria. 14 de agosto de 2021. 105 min.

Cibelli, Laura. Mesa de Relaciones. 31 de agosto de 2021. 100 min.

De Mingo, Juan Martín. Mesa de Relaciones. 9 de septiembre de 2021. 50 min.

Echeverri, Juan Andrés y Rodríguez, Andrea. Rama Textil y Mesa de Relaciones respectivamente. 24 de septiembre de 2021. 137 min.

- Engelberger, Nurit. Vientos de Libertad. 13 de enero de 2021. 79 min.
- Errubidarte, Horacio. Referente de Misiones. 5 de marzo de 2021. 141 min.
- Espínola García, Epifanía. Rama Textil y Presidenta de la Federación de Costureros, Indumentaria y Textiles. 2 de mayo de 2022. 106 min.
- Fariás, Juan Martín. Rama Construcción y Referente de San Martín de los Andes. 11 de marzo de 2021. 83 min.
- Flores, Jackie. Rama Cartonera y Subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la provincia de Buenos Aires. 16 y 22 de julio de 2021. 265 min. (Liaudat, Fontana y Tóffoli, 2023a)
- García Monticelli, Fernanda. Mesa de Relaciones y Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Nación. 19 de julio, 10 de agosto, 24 de agosto y 14 de septiembre de 2021. 400 min. (La entrevista de septiembre fue publicada en Liaudat, Bilmes y Carbel, 2022)
- Grabois, Juan. Mesa de Relaciones y Frente Patria Grande. 8 de diciembre de 2021. 180 min. Y entrevista el 19 de abril de 2022, 52 min. (publicada en Liaudat, Bilmes y Carbel, 2022).
- Leveratto, Lautaro. Rama Rural. 15 de abril de 2022. 180 min.
- Mateu, Manuel. Rama Cartonera y Coordinador de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Nación. 5 y 12 de agosto de 2021. 162 min.
- Miño, Fernanda. Secretaria de Integración Sociourbana. 28 de agosto de 2021. 235 min. (Fontana, Tóffoli y Liaudat, 2023)
- Morreale, Sebastián. Vientos de Libertad y Subsecretario de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de la Nación. 17 de julio y 8 de agosto de 2021. 220 min. (Liaudat, Fontana y Tóffoli, 2023b)
- Nejamkis, Rafael. Mesa de Relaciones. 13 y 28 de mayo, 2 y 30 de junio y 8 de julio de 2021. 552 min.
- Palacio, Carolina. Rama Cartonera y responsable de relaciones internacionales de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. 29 de abril de 2022. 59 min.
- Reyes, Gastón. Rama Construcción. 21 de agosto de 2021. 135 min.
- Rodríguez, Andrea y Pastoriza, Violeta. Área de Mujeres y Diversidades. 25 de junio de 2022. 120 min.
- Romero, Cintia y Lema, Gabriel. Referentes de Mar del Plata y Los Sin Techo. 26 de abril de 2022. 90 min. (Tóffoli, Liaudat y Fontana, 2023)
- Ruiz Díaz, José. Rama Liberados y Liberadas y Secretario de Formación Política y Gremial de la UTEP. 14 y 20 de agosto de 2021. 209 min. (Tóffoli, Fontana y Liaudat, 2023)

Sánchez, Sebastián. Vientos de Libertad y Secretario de abordaje de políticas integrales de los consumos de la UTEP. 29 de junio y 21 de julio de 2021. 225 min.

Sánchez, Sergio. Rama Cartonera y presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. 12 de abril de 2022. Duración: 102 min.

Settembrino, Yanina Beatriz. Rama Rural y Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación. 12 y 27 de julio de 2021. 232 min.

Tévez, Juan. Mesa de Seguimientos Regionales. 12, 13 y 14 de enero de 2021. 246 min.

Valenzuela, Alejandro. Vientos de Libertad y Área de Juventud. 24 de septiembre de 2021. 110 min.

Villafañe, Nicolás y Mayansky, Agustina. Rama de Espacios Públicos. 11 de octubre de 2021. 114 min.

Yanaje, Elsa. Rama Rural y Directora de Comercialización de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación. 12 de enero de 2021. 163 min.

Zaracho, Natalia. Rama Cartonera y Diputada de la Nación. 28 de julio de 2021. 55 min.

Zarate, Edith. Rama Cartonera. 24 de enero de 2022. 75 min.

Leyes, resoluciones y decretos reglamentarios

Ley Nac. N° 23 551/88. Asociaciones Sindicales. B.O. 14/04/1988.

Decreto DNU N.º 565/02. Programa Jefes de Hogar. B.O. 04/04/2002.

Ley CABA N.º 992/02. Servicio de Higiene Urbana. B.O. 29/01/2003.

Res. MDS N° 1375/04. Plan Nac. de Desarrollo Local y Economía Social (Manos a la Obra).

Decreto P.E.N. 189/04. Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. B.O. 17/02/2004.

Res. MTEySS 203/2004. Programa Trabajo Autogestionado. B.O. 01/04/2004

Ley CABA N° 1854/05. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. B.O. 29/01/2006.

Ley Nac. N° 26 117/06. Microcréditos. B.O. 17/07/2006.

Res. INAES N° 3026/06. Actas constitutivas de cooperativas de trabajo que se constituyan en el marco de planes sociales. B.O. 26/09/2006.

Ley Nac. N° 26 223/07. Monotributo Social. B.O. 10/04/2007.

Ley Nac. N°26 355/08. Marca Colectiva. B.O. 25/03/2008.

Decreto P.E.N. 1067/09. Prog. Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja). B.O. 19/08/2009.

Res. MTEySS 1094/2009. Programa de Empleo Independiente y Entramados Locales. B.O. 23/11/09

Ley Nac. N° 26 725/11. Transferencia de tierras a la comunidad mapuche Curruhuinca. B.O. 03/01/2012.

Ley Nac. N° 26 737/11. Tierras Rurales. B.O. 28/12/2011.

Ley CABA N° 4200/12. Semana del Reciclado y Día del Recuperador. B.O. 10/08/2012.

Ley Nac. N° 27 118/14. Agricultura Familiar. B.O. 20/01/2015.

Res. MTEYSS N° 32/16. Personería Social CTEP. B.O. 02/02/2016.

Ley Nac. N° 27 345/16. Emergencia Social. B.O. 23/12/2016.

Decreto P.E.N 358/17. Registro Nacional de Barrios Populares. B.O. 23/05/2017.

Ley Nac. N° 27 453/18. Integración Socio Urbana (Barrios Populares). B.O. 29/10/2018.

Ley Nac. N° 27 519/19. Emergencia Alimentaria. B.O. 30/09/2019.

Res. MDS N° 121/20. Potenciar Trabajo. B.O. 20/03/2020.

Res. MDS N° 408/20. Reg. Nac. de Trabajadores de la Economía Popular. B.O. 04/02/2021.

Res. MTEYSS N° 449/21. Personería Social UTEP. B.O. 06/08/2021.

Ley Nac. N° 27 654/21. Personas en situación de calle. B.O. 24/12/2021.

Ley Nac. N° 27 694/22. Reforma de Ley de Barrios Populares. B.O. 28/10/2022.

Referencias

Abal Medina, P. (2016) Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas. *Revista Nueva Sociedad*, 264, 72-86.

Alabarces, P. (2004). *Crónicas del aguante. Fútbol, violencia y política*. Capital Intelectual.

Barattini, M. (2010). Trabajo esclavo y organización: el caso de la Unión de Trabajadores Costureros en Argentina. *Estud. demogr. urbanos*, 25, 2, 461-481. <https://doi.org/10.24201/edu.v25i2.1357>

Bruno, D. P.; Cohelo, R.; Palumbo, M. M. (2017). Innovación organizacional e institucionalización conflictiva de las organizaciones de la economía popular. El caso de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

- Argumentos*, 19. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/2766>
- Carenzo, S.; Fernández Álvarez, M. I. (2011). El asociativismo como ejercicio de gubernamentalidad: “cartoneros/as” en la metrópolis de Buenos Aires. *Argumentos (México, DF)*, 24 (65), 171-193. <https://www.redalyc.org/pdf/595/59519896007.pdf>
- Carenzo, S.; Míguez, P. (2010). De la atomización al asociativismo: reflexiones en torno a los sentidos de la autogestión en experiencias asociativas desarrolladas por ‘cartoneros/as’. *Maguaré*, 24.
- Condenanza Giuliano, L. M.; Ambort, M. E. (2020). Las rondas de mujeres agricultoras de La Plata. Sistematización de una experiencia de feminismo y educación popular. *Confluencia De Saberes*, 2, 175-190. <https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/article/view/2814>
- Cross, C. (2007). Los procesos de organización colectiva y la construcción de las demandas: reflexiones a partir del estudio de una organización piquetera en el periodo 2002-2005. *Runa*, 27, 7-22. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/2638/2274>
- Ecologistas en Acción (2012). Denuncian las consecuencias de la actividad de fundaciones supuestamente filantrópicas. 28 de abril de 2012. <https://www.ecologistasenaccion.org/23123/denuncian-las-consecuencias-de-la-actividad-de-fundaciones-supuestamente-filantropicas-2/>
- Escalante Albertali, L.; Pavese, J.; Rodríguez, A. C. (2018). Sin salud popular no hay justicia social. La experiencia de la Asociación Mutual Senderos. *XXXIII Congreso FAMG*. <http://www.famg.org.ar/documentos/congresos/premiados/2018/Sin%20salud%20popular%20no%20hay%20justicia%20social.pdf>
- Fernández, C. (2009). Discurso de lanzamiento del Plan Ingreso Social con Trabajo. <https://www.casarsada.gob.ar/informacion/archivo/21305-blank-42382375>
- _____. (2013). Discurso de lanzamiento del Plan Ellas Hacen. <https://www.cfkargentina.com/cristina-presento-el-programa-ellas-hacen-en-tecnopolis/>
- Fontana, J.M.; Liaudat, S.; Tóffoli, M. (2023). Entrevista a María Castillo: orgullo cartonero. *Agencia Paco Urondo*. <https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/maria-castillo-orgullo-cartonero>
- Fontana, J.M.; Tóffoli, M.; Liaudat, S. (2023). Entrevista a Fernanda Miño: la funcionaria con tantas responsabilidades es la misma pibita que jugaba en el basural de la puerta de su casa. *Agencia Paco Urondo*. <https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/fernanda-mino-la-funcionaria-con-tantas-responsabilidades-es-la-misma-pibita-que-jugaba-en>
- Fontevicchia, J. (2017). Entrevista a Juan Grabois: la violencia es una herramienta de supervivencia. *Perfil*, 21 de agosto de 2017. <https://www.perfil.com/>

noticias/periodismopuro/juan-grabois-la-violencia-es-una-herramienta-de-supervivencia.phtml

Francisco, P. (2013). *Evangelii Gaudium*. https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

_____. (2015). *Laudato Si*. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si.html

Grabois, J. (2010). Punteros somos todos: una reflexión sobre la dinámica del Estado y los movimientos sociales. *Blog personal de Juan Grabois*. <https://juan-grabois.blogspot.com/2010/10/punteros-somos-todos-parte-i.html>

_____. (2012). Capitalismo Popular: la respuesta liberal a la crisis de la sociedad salarial. *Blog personal de Juan Grabois*. <http://juangrabois.blogspot.com/2012/09/capitalismo-popular-la-respuesta.html>

_____. (2015). Qué es la CTEP. *Resumen latinoamericano*. <https://www.resumenlatinoamericano.org/2015/02/08/argentina-que-es-la-ctep/>

_____. (2016). *La personería social: perspectivas en torno al nuevo régimen de agremiación para los trabajadores de la economía popular*. Facultad de Derecho (UBA).

----- (2018). *La clase peligrosa: retratos de la Argentina oculta*. Planeta. 200 p.

_____. (2022). *Los peores*. Sudamericana. 288 p.

Grabois, J.; Pérsico, E. (2015). *Trabajo y organización en la economía popular*. CTEP. 192 p.

Gradin, A. (2018). *Estado, territorio y participación política: Los estilos de gestión del Movimiento Barrios de Pie (2003-2009)*. Teseo. 372 p.

<https://www.criticayresistencias.com.ar/index.php/revista/article/view/57/50>

Lazarte, J. (2017). *Nuestra central: La CTEP*. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1398/te.1398.pdf>

Liaudat, S.; Bilmes, J.; Carbel, A. (Coords.) (2022). *Planificación, gestión y política pública: quince entrevistas y la yapa*. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Trabajo Social. 253 p. <https://doi.org/10.35537/10915/140080>

Liaudat, S.; Fontana, J.M.; Tóffoli, M. (2023a). Entrevista a Jackie Flores: quisiera que nunca me agarre el egoísmo, porque a mí el amor me cambió la vida, el amor de los hermanos. *Agencia Paco Urondo*. <https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/jackie-flores-quisiera-que-nunca-me-agarre-el-egoismo-porque-mi-el-amor-me-cambio-la-vida>

_____. (2023b). Entrevista a Sebastián Morreale: la lucha contra las drogas desde una mirada política y comunitaria. *Agencia Paco Urondo*. <https://www.>

agenciapacourondo.com.ar/militancia/sebastian-morreale-la-lucha-contras-las-drogas-desde-una-mirada-politica-y-comunitaria

- Lof, B.; Bortnik, V. (2020). Las aulas de la economía popular. *AMEP*. <https://www.amepargentina.com.ar/las-aulas-de-la-economia-popular/>
- Longa, F. (2019). *Historia del Movimiento Evita: la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle*. Siglo XXI.
- Mazzeo, M. (2014). *Piqueter@s. Breve historia de un movimiento popular argentino*. Quadrata. 192 p.
- Muñoz, M.A.; Villar, L.I. (2017). Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017). *Crítica y Resistencias*, 5, pp. 22-52. <https://www.criticayresistencias.com.ar/revista/article/view/57>
- Natalucci, A.; Morris, M. B. (2019). ¿Superando la fragmentación? Un análisis de las estrategias de articulación entre la CGT y la CTEP (2009-2017). *Astrolabio*, 23. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/23556>
- Pacheco, M. (2010). *De Cutral Có al Puente Pueyrredón: una genealogía de los Movimientos de Trabajadores Desocupados*. El colectivo. 480 p.
- Pascucci, S. (2010). Avances y límites de la acción político-sindical en la industria de la confección de indumentaria en la actualidad. Una caracterización de la UTC-Alameda. *Actas de las VI Jornadas de Sociología de la UNLP*. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5167/ev.5167.pdf
- Ramonet, I. (2014). Impresiones de una jornada histórica. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2014/10/31/opinion/024a1pol>
- Schamber, P. J. (2008). *De los desechos a las mercancías: una etnografía de los cartoneros*. SB. 283 p.
- Schamber, P. J.; Bordagaray, M. E. (2017). Notas acerca de la experiencia del Centro de Acopio de Residuos Reciclables (AMBA, 1999-2006). *Revista de ciencias sociales*, 9(31), 157-177. <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/2050011807/1681>
- Socco, N. (2017). La salud en los sectores populares. En: Pésico et al., *Economía popular: los desafíos del trabajo sin patrón*. Colihue.
- Svampa, M.; Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Biblos.
- Tóffoli, M.; Fontana, J.M.; Liaudat, S. (2023). Entrevista a José Ruiz Díaz: a la cárcel no volvemos más, la economía popular como salida. *Agencia Paco Urondo*. <https://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/lacarcel-no-volvemos-mas-la-economia-popular-como-salida>
- Tóffoli, M.; Liaudat, S.; Fontana, J.M. (2023). Entrevista a Cintia Romero y Gabriel Lema (Los Sin Techo): hay que luchar y resistir, pero también crear. *Agencia*

Paco Urondo. <https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/los-sin-techo-hay-que-luchar-y-resistir-pero-tambien-crear>

Villanova, N. (2014). La organización política de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires: 1997-2012: Aportes para una caracterización en su desarrollo político. *Cuadernos del CENDES*, 31(87), 127-156. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/8658

Cronología

AÑO	CONTEXTO POLÍTICO y NORMATIVO	ENTORNO ORGANIZATIVO	MTE
2001	Anual: masificación cartonera. Diciembre: estallido social. Renuncia Fernando de la Rúa a la presidencia de la Nación.	Anual: se multiplican las cooperativas cartoneras. Alta conflictividad social. “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.	Diciembre: el grupo del ILSE asiste a las protestas del 19 y 20.
2002	Enero: Eduardo Duhalde presidente de la nación. Fin de la convertibilidad peso-dólar. Marzo: Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Abril: resistencia popular al golpe de Estado en Venezuela. Se radicaliza la Revolución Bolivariana. Junio: Masacre de Avellaneda. Mueren Darío y Maxi. Crisis del duhaldismo. Diciembre: Ley 992 formaliza el trabajo cartonero en CABA.	Anual: auge piquetero. Se multiplican asambleas barriales y otras experiencias organizativas. Primeras articulaciones entre cooperativas cartoneras. Diciembre: ruptura de la Coordinadora Aníbal Verón. Se forman CTD Aníbal Verón y MTD Aníbal Verón.	Junio: jóvenes porteños inician olla popular en Abasto en solidaridad con cartoneros. Nace el MTE. Relación con la agrupación estudiantil NBI (Derecho UBA).
2003	Enero: Lula asume la presidencia de Brasil. Mayo: Néstor Kirchner presidente de la nación. Agosto: derogación de leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Inician juicios por delitos de lesa humanidad. Diciembre: Aníbal Ibarra es reelecto jefe de gob. de CABA.	Anual: fuertes reacomodos entre las organizaciones populares a partir de las primeras medidas de avance que toma el gob. de Kirchner.	Anual: defensa de los cartoneros frente al hostigamiento y la coima policial. “Guardia legal”. Marzo: 1er. número de la revista “Nuevos Aires” del MTE.

<p>2004</p>	<p>Febrero: Registro Nac. de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Marzo: derogación Ley de Flexibilización Laboral. Abril: Plan Nac. de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Diciembre: Tragedia de Cromañón.</p>	<p>Junio: encuentro en Avellaneda del “bloque afinidad” de los MTD. Asiste al MTE. Noviembre: nace el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Reúne bloque de afinidad MTD Aníbal Verón + MUP + agrup. estudiantiles y otros grupos territoriales.</p>	<p>Anual: continúa el conflicto cartonero con la policía. Diciembre: manifestación frente a comisaría 9na. CABA. Triunfo cartonero.</p>
<p>2005</p>	<p>Julio: Ibarra crea la Unidad de Recuperación del espacio público (RECEP). Octubre: amplio triunfo del kirchnerismo en las elecciones legislativas. Noviembre: Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata. No al ALCA. Noviembre: Ley 1854 de “Basura Cero” (CABA).</p>	<p>Agosto: Plan Nac. de Lucha Piquetera de parte de mov. piqueteros que se mantienen en la oposición al gob. (CCC, PO, FPDS, MTD A.V., etc.). Derrota y fin del auge piquetero. Diciembre: Arzobispo Jorge Bergoglio realiza homilía por niños cartoneros.</p>	<p>Junio: primera movilización cartonera del MTE a Plaza de Mayo. Agosto-octubre: conflicto con el gob. porteño por becas para niños cartoneros. Noviembre: insc. de la Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”.</p>
<p>2006</p>	<p>Enero: Kirchner saca al FMI de la Argentina tras pago de deuda. Evo Morales asume la presidencia en Bolivia. Marzo: Ibarra es destituido. Jorge Telerman asume como jefe de Gob. Abril: Plan Patria Grande de Regularización de Inmigrantes. Septiembre: desaparece Jorge Julio López, testigo en juicio por delitos de lesa humanidad. Octubre: Ley Educ. Sexual Integral (ESI). Diciembre: Ley de Educación Nacional.</p>	<p>Marzo: incendio taller textil en Caballito (CABA). La Alameda y la UTC inician denuncias. Mayo: Ley de Expropiación del Frigorífico SUBPGA de Berazategui. Nace Coop. de Trabajo. Agosto: nace la Corriente Universitaria Julio Antonio Mella (UBA).</p>	<p>Anual: pelea por la reglamentación de la Ley de Basura Cero. Mayo: toma de tierras en Barrio Gabriel Miró (Lomas de Zamora). Solidaridad del MTE. Junio: 1ra Casa Comunitaria de Vientos de Libertad (Pilar). Diciembre: corte del MTE en ex Puente Alsina. Represión.</p>
<p>2007</p>	<p>Abril: Monotributo Social. Mayo: reglamentación de la Ley de Basura Cero (CABA). Diciembre: Cristina Fernández de Kirchner (CFK) asume como presidenta de la nación. Mauricio Macri asume como jefe de gob. porteño.</p>	<p>Anual: acciones coordinadas entre grupos cartoneros en el marco de la Federación Ecológica de Cartoneros y Recicladores (FECYR). Antecedente de la FACCyR.</p>	<p>Febrero: insc. Cooperativa “El amanecer de los cartoneros”. Marzo: ocupación en el barrio ACUBA de Villa Caraza (Lanús). Solidaridad del MTE. Septiembre: denuncia de MTE a Lucho Avilés.</p>

2008	<p>Marzo-julio: Resolución 125. Conflicto del campo. Mayo: nace la UNASUR. Septiembre: Macri rebautiza la RECEP/UORCEP como UCEP. Denuncias de org. de DD.HH. Noviembre: reestatización del sistema previsional. Fin de las AFJP. Diciembre: reestatización de Aerolíneas Argentinas.</p>	<p>Enero-febrero: acampes cartoneros por cierre del Tren Blanco. Represión y desalojo. Abril: La Alameda lleva adelante el primer escrache a un cabaret, con acompañamiento del MTE. Junio: Vientos de Libertad muda su primera casa a General Rodríguez. Julio: misa cartonera en La Boca. Actividad entre La Alameda, MTE y Bergoglio.</p>	<p>Julio: convenio entre Amanecer de los Cartoneros/gob. de CABA. Octubre: apertura del Sistema de Reciclado con Inclusión Social en CABA.</p>
2009	<p>Enero: Obama presidente de los EEUU. Febrero: Monotributo Social Agropecuario. Marzo: Ley de Protección Integral a las Mujeres. Agosto: Programa Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja" (PRIST-AT). Octubre: derrota del kirchnerismo en las elecciones bonaerenses. Triunfo de Unión-PRO. Octubre: Asignación Universal por Hijo. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios).</p>	<p>Enero-Abril: toma de viviendas en Mar del Plata. Represión y desalojo. Alojamiento en Centro Cultural América Libre (afín al FPDS). Nacen Los Sin Techo.</p>	<p>Abril: primeras elecciones de la Cooperativa "El Amanecer de los Cartoneros". Septiembre: apertura del primer centro infantil cartonero "El amanecer de los pibes".</p>
2010	<p>Julio: Ley de Matrimonio Igualitario. Octubre: fallecimiento de Néstor Kirchner.</p>	<p>Enero: primera caravana del 15 de enero por la tierra y la vivienda en Mar del Plata. Febrero: Frente de Lucha por Cooperativas Sin Punteros pelea para ingresar al PRIST-AT. Abril: nace Embarriarte, Barrio La Cava de San Isidro. Noviembre: ruptura de la Central de los Trabajadores Argentinos. Se forman CTA Autónoma (predominan estatales) y CTA de los Trabajadores (predominan docentes).</p>	

<p>2011</p>	<p>Octubre: Cristina Fernández es reelecta como presidenta de la nación. Mauricio Macri es reelecto como jefe de gob. porteño. Noviembre: Ley 26 725. Transferencia de tierras a la comunidad mapuche Curruhuinca. Diciembre: Ley 26 737 de Protección de Tierras Rurales. Nace la CELAC.</p>	<p>Marzo: nace la Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Auto-gestivxs y Precarizadxs (AGTCAP). Mayo: acto en Teatro Verdi. Anuncio Mesa Promotora de CTEP. Agosto: nace la CTEP. Acto en Hospital Israelita. Diciembre: CTEP moviliza a la CGT para solicitar su incorporación a la central sindical. Se inaugura la sede de la CTEP en Constitución.</p>	<p>Enero: programa de radio “Cartoneando” por FM La Tribu. Diciembre: se crea formalmente la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FAC-CyR).</p>
<p>2012</p>	<p>Febrero: Tragedia de Once. Mayo: estatización parcial de YPF. Ley de Identidad de Género. Junio: lanzan plan PROCREAR. Paro nacional del sindicato de camioneros en reclamo por la suba del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias. Noviembre: 1er paro general de la CGT a CFK.</p>	<p>Enero-febrero: protestas contra la megaminería en La Rioja y Catamarca. Mayo: comienzan los cursos de formación sindical de la CTEP destinados a los/as trabajadores/as de cada sector. Junio: se establece la Semana del Reciclado y el Día del Recuperador Urbano en CABA. Octubre: Centro Verde en Barracas (la Nasa cartonera). Diciembre: nace Marea Popular (Corriente Univ. J. A. Mella + Rebelión + Socialismo Libertario). Comienza a funcionar la Mutual Senderos (CTEP).</p>	<p>Abril: MTE y Corriente J. A. Mella en conjunto se oponen al desalojo de la “Fábrica de Sueños”. Julio: marcha cartonera por un Plan Nac. de Reciclado con Inclusión Social. Agosto: 1er. Enc. Nac. de Recuperados Urbanos. Se lanza la Federación Argentina de Carreteros, Cartoneros y Recicladores (FACCyR).</p>

2013	<p>Marzo: fallece Hugo Chávez. Jorge Bergoglio asume como papa Francisco. Abril: Proy. de Ley para el Uso Sustentable de Envases y Gestión Integral de sus Residuos. Octubre: Sergio Massa se impone en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo preserva mayorías en el Congreso. Noviembre: Encíclica "Evangelii gaudium". Diciembre: se lanza el Programa Cambio Rural II del INTA</p>	<p>Enero: ruptura del FPDS. Nace FPDS-Corriente Nacional. Mayo: CTEP moviliza masivamente al Ministerio de Trabajo en el Día del Trabajador. Agosto: reunión entre Emilio Pérsico, Juan Grabois y el Papa Francisco en el Vaticano. Noviembre: Poder Ejecutivo porteño lanza Programa de Promoción Ambiental.</p>	<p>Marzo: Sergio Sánchez viaja a la asunción del papa Francisco. Abril: surge Trascartón diseño. Mayo: se rechaza el Programa de Promotoras Ambientales en la Legislatura porteña. Agosto: 2da. casa comunitaria de Vientos de Libertad (Marcos Paz). Agosto: Jacky Flores participa como precandidata a legisladora con Marea Popular. Septiembre: se crea el jardín comunitario Cartoneritos en Barracas (CABA).</p>
2014	<p>Enero: Programa PROGRESAR. Abril: 2º paro general de la CGT a CFK. Junio: Corte Suprema de EE.UU. valida fallo de Juez Griesa a favor de fondos buitres. En los siguientes meses el conflicto escala a distintas instancias. Diciembre: Ley de Agricultura Familiar.</p>	<p>Marzo: Taller Latinoamericano de Org. de Trabajadores/as Informales / Populares de cara a la 103 conferencia de la OIT. La CTEP moviliza al INAES en reclamo del reconocimiento de cinco federaciones gremiales. Abril: Grabois y Pérsico publican Cuadernos de Formación de la CTEP. Nace el Movimiento Misioneros de Francisco. Julio: CTEP en Enc. Sindical Internacional Antiimperialista (Bolivia). Nace el Movimiento Popular Patria Grande. Octubre: Primer Enc. Mundial de los Movimientos Populares (Vaticano). Nace la ENOCEP. Primera diplomatura. Noviembre: CTEP realiza Foro Nac. de Productores de la Economía Popular. CTEP realiza el 1er. Enc. Nac. de Tierra y Techo.</p>	<p>Junio: Paola Caviedes participa por primera vez en la 103.a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, Suiza. Julio: lucha cartonera en Bahía Blanca. MTE participa por primera vez en un conflicto cartonero fuera de AMBA.</p>

<p>2015</p>	<p>Enero: muerte de Alberto Nisman, fiscal involucrado en la Causa AMIA. Oposición acusa al gob. Marzo: 4to. paro general de la CGT a CFK. Mayo: Encíclica “Laudato Si” del papa Francisco. Octubre: reforma de la Ley de Educación Superior. Gratuidad de la enseñanza. Diciembre: Ministerio de Trabajo otorga la personería social a la CTEP. Mauricio Macri es presidente de la nación. Cambiemos asume el gob. de los principales distritos del país.</p>	<p>Abril: incendio de taller textil en Flores (CABA). Inicia proceso de lucha de trabajadores del sector. Productores hortícolas se movilizan a la Legislatura bonaerense. Mayo: Carpa por Trabajo Digno frente al Congreso de la Nación. Junio: movilización por Ni Una Menos. Julio: 2do. Enc. Mundial de los Movimientos Populares (Bolivia). Septiembre: registro de la FAC-CyR en el INAES.</p>	<p>Marzo: 1er. polo textil (barrio Miró, Lomas de Zamora). Junio: Grabois como consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Septiembre: movilización “el polo para trabajar, el hogar para habitar”. Octubre: 1ra. participación del MTE en el Enc. Nac. de Mujeres.</p>
<p>2016</p>	<p>Enero: Milagro Sala es detenida en Jujuy. Macri deshace por decreto la Ley de Medios. Abril: Proyecto de Ley de Emergencia social. 1er Paro de CGT al gob. de Macri. Agosto: Dilma Rousseff es destituida de la presidencia en Brasil. Asume Michel Temer. Octubre: Paro de Mujeres. Diciembre: sanción de la Ley de Emergencia Social. Creación del Salario Social Complementario y del Consejo de la Economía Popular. Se decreta la emergencia en adicciones</p>	<p>Febrero: CTEP es inscripta en el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas. Marzo: 1er paro quintero en La Plata. Creación de la Obra Social de los Trab. de la Economía Popular (OSTEP). Mayo: CTEP regional Cordillera Andina se moviliza al Lago Escondido. Agosto: Marcha de San Cayetano. Conformación del tridente CTEP, CCC y Barrios de Pie. 1ra Marcha Federal contra las políticas del macrismo. Inicia Relevamiento Nac. de Barrios Populares (RE-NABAP). Noviembre: 3er. Enc. Mundial de Movimientos Populares (Vaticano). Diciembre: lucha en contra de la reforma de la Ley de Ejecución Penal. Se decreta la Emergencia Nac. en materia de adicciones.</p>	<p>Abril-Mayo: Tragedia de Time Warp. Vientos de Libertad impulsa acciones de lucha. Julio: 1er. plenario de la rama textil. Apertura de la 3ra. Casa Comunitaria de Vientos de Libertad (Tigre).</p>

2017	<p>Marzo: Marcha Federal Educativa. Mayo: manifestación masiva contra el beneficio del “2x1” para delitos de lesa humanidad. Julio: Lula Da Silva es condenado a prisión. Agosto: desaparece Santiago Maldonado en el contexto de una represión policial. Octubre: amplio triunfo oficialista en las elecciones legislativas. Noviembre: hundimiento del submarino ARA San Juan. Diciembre: jornadas de protesta frente al Congreso Nacional en rechazo a la reforma previsional. 2º paro de CGT al gob. de Macri.</p>	<p>Enero: Consejo para el Abordaje Integral de las Políticas Públicas de Adicciones en Contextos de Alta Vulnerabilidad (SEDRONAR). Febrero: plenario nacional de la CTEP. Participan miembros de la CGT. Marzo: Escuela de Formación para el Abordaje de Políticas Públicas (SEDRONAR). Abril: CTEP moviliza al Ministerio de Agroindustria en el marco de una jornada nacional de lucha en defensa de los pequeños productores y las economías regionales. Mayo: Tridente de San Cayetano marcha por tierra, techo y trabajo con motivo del día del trabajador. Registro Nac. de Barrios Populares y el Certificado de Vivienda Familiar. Junio: Secretaría de Ex Detenidos/as y Familiares de la CTEP. Agosto: Primer Enc. Nacional de la Juventud en Lucha (Miramar). Octubre: nace la Federación de Costureros, Indumentaria y Textiles. Noviembre: Rafael Nahuel de la CTEP es asesinado por fuerzas federales en el marco de un operativo de desalojo en Río Negro.</p>	<p>Febrero: 1er. plenario de la Rama Rural. Marzo: ataque policial en comedor (Lanús). Abre el primer Centro Integral de Recreación y Aprendizaje (CIRA) de la rama textil. Junio: Bachillerato Popular Cartonero “Anuillán”. Julio: “Cebollazo” (sur PBA) y “verdurazo” en Jujuy. Pelea al aire entre Lanata vs. Grabois por informe televisivo. Noviembre: Área de Juventud MTE participa por primera vez de la Marcha de la Gorra. Diciembre: Grabois publica “La personería social”.</p>
------	---	---	--

<p>2018</p>	<p>Anual: Causa de los Cuadernos contra CFK. Se intensifica el <i>lawfare</i>. Febrero: masiva movilización impulsada por sindicato de camioneros en rechazo a las políticas del gob. Junio: el gob. acuerda con el FMI un préstamo de más de cincuenta mil millones de dólares. 3er. paro de CGT al gob. de Macri. Septiembre: movilización y paro general junto de las centrales sindicales y economía popular. 4º paro de CGT a gob. de Macri. Diciembre: Ley de Integración Socio Urbana.</p>	<p>Enero: vendedores senegaleses acuden a la CTEP a pedir ayuda en la sindicalización. Marzo: 3er. paro internacional de mujeres. Junio: 2da Marcha Federal por pan y trabajo. Paquete de cinco leyes de la economía popular. Septiembre: nace Frente Patria Grande (FPG) liderado por Grabois. Octubre: nace la Alianza Global de Recicladores. Diciembre: se crea la Secretaría de Adicciones de la CTEP.</p>	<p>Enero: vendedores senegaleses buscan refugio en la sede de CTEP frente a un violento allanamiento policial. Mayo: Vientos de Libertad ocupa Instituto Alvear en Luján para Casa Comunitaria de mujeres y disidencias. Agosto: apertura del Centro de Jubilados en Villa Fiorito. Septiembre: 1er plenario de la rama de liberados. Intercambio Global de Organizaciones de Cartoneros. Octubre: 1er. plenario de la rama sociocomunitaria.</p>
<p>2019</p>	<p>Abril: Proy. de Ley de Protección de Cinturones Verdes Productivos. Mayo: 5to paro de CGT al gob. de Macri. Mayo: Proy. de Ley Nacional de Emergencia en Violencia contra las Mujeres. Septiembre: Ley de Emergencia Alimentaria. Diciembre: Alberto Fernández asume la presidencia de la nación.</p>	<p>Mayo: Primer Foro Nac. por un Programa Agrario, Soberano y Popular. Agosto: CTEP al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Octubre: abre sede de la ENOCEP en Jujuy. Noviembre: Programas de Buen Gobierno del FPG. Misión de solidaridad ante el golpe de Estado en Bolivia. Diciembre: nace la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).</p>	<p>Enero: nace Club Villas Unidas. Julio: 1ra. movilización de la Rama de Construcción. Septiembre: 1er. plenario nacional de Rama Espacios Públicos. Diciembre: asumen funcionarios del MTE en SEDRONAR y Agricultura Familiar.</p>

2020	<p>Marzo: medidas de aislamiento por la pandemia. Marzo: Programa Potenciar Trabajo. Abril: Ingreso Familiar de Emergencia. Carta del papa Francisco a los Movimientos Populares propone Salario Básico Universal. Junio: Registro Nac. de Trabajadores/as de la Economía Popular (RENATEP). Octubre: Encíclica papal "Fratelli Tutti". Diciembre: Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ley Ramona.</p>	<p>Marzo: UTEP lanza la Secretaría de Mujeres y Diversidad. Mayo: muere por COVID-19 Ramona Medina, referente barrial de La Poderosa. Junio: nace la Universidad Latinoamericana de las Periferias (ULPE). Julio-agosto: toma de tierras de Guernica. Agosto: se presenta Plan de Desarrollo Humano Integral.</p>	<p>Enero: Fernanda Miño es Sec. de Integración Socio Urbana. Marzo: vendedora ambulante del MTE muere huyendo de operativo policial. Mayo: María Castillo es Directora Nacional de Economía Popular. Octubre: Proyecto Artigas (Entre Ríos).</p>
2021	<p>Julio: Proy. de Ley de Envases con Inclusión Social. Noviembre: amplio triunfo opositor en las elecciones legislativas. Diciembre: Ley para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo.</p>	<p>Mayo: misión de solidaridad en Colombia ante estallido social y represión. Agosto: personería social a la UTEP. Agosto: abre sede de ENO-CEP en Misiones. Octubre: gran marcha cartonera en el marco del tratamiento del Proy. de Ley de Envases. 4to Enc. Mundial de Movimientos Populares (virtual).</p>	<p>Abril: Grabis miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Agosto: Escuela Nac. de Agroecología de rama rural. Diciembre: Natalia Zaracho asume como diputada nacional.</p>
2022	<p>Enero: se conocen los términos del acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI. Crisis en Frente de Todos. Febrero: inicia la Guerra en Ucrania. Mayo: Proy. de Ley para la Creación del SBU. Agosto: Proy. de Ley de Refuerzo de Ingresos. Octubre: reforma de Ley de Barrios Populares. Noviembre: Proy. de Ley de Prevención de la Reincidencia. Noviembre: Proyecto de Ley de Trabajo en Espacios Públicos.</p>	<p>Abril: inscripción de la Fed. de Coop. de Construcción por la Integración Urbana de los Barrios Populares. Junio: misión de solidaridad a Ecuador en el contexto de represión a jornadas de protesta masivas. Septiembre: parte de la Rama Rural del MTE se escinde y crea la Federación Rural. Diciembre: inscripción de la Fed. de Coop. de la Comercialización de la Economía Popular.</p>	<p>Febrero: Jackie Flores asume como Subsec. de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular (PBA). Marzo: plenario nacional del MTE a veinte años de su nacimiento. Junio: Sebastián Sánchez de Vientos de Libertad viaja a Haití en misión de solidaridad. Diciembre: ingreso a propiedad de Joe Lewis en Lago Escondido.</p>

Acerca de los autores

Santiago Liaudat es Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ), Especialista en Estudios Latinoamericanos (ENFF-UFJF, Brasil), Diplomado en Filosofía de la Liberación (UNJu) y Profesor de Filosofía (UNLP). Profesor Titular de Introducción a la Filosofía (FTS UNLP) y Profesor Adjunto de Extensión Universitaria (UTN FRLP). Investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (LE-CyS FTS UNLP). Integra la coordinación de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS), del Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano y de la revista Ciencia, Tecnología y Política. Su producción científica está disponible en distintos repositorios académicos (SEDICI, Researchgate, etc.). Su libro “Stevia: conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital” (editorial Prometeo, 2021) obtuvo el premio Marcel Roche de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Además, es autor del podcast “Ideas en Jaque” (Spotify) y sus columnas de opinión política se encuentran en la Agencia Paco Urondo. <https://linktr.ee/santiago.liaudat>

Magdalena Tóffoli es licenciada en sociología (UNLP), docente universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP) y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). Forma parte de los proyectos de investigación “Proyecto neoliberal, dinámicas sectoriales y organización político sindical en la Argentina reciente (2015- 2019)” y “Demandas, movilizaciones y respuestas políticas durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). Lo laboral, lo territorial y lo ciudadano en la disputa por la

hegemonía en Argentina”. Sus temas de investigación se centran en los procesos de organización colectiva, construcción de demandas y movilización de las clases populares en la Argentina contemporánea, con especial foco en el sector de la economía popular. Su producción académica se encuentra disponible en SEDICI, el repositorio institucional de la UNLP.

Juan Manuel Fontana: es Especialista en Epistemologías del Sur (CLACSO). Diplomado Universitario en Filosofía de la Liberación (UNJu). Profesor de Filosofía (UNLP). Maestrando en Políticas de Desarrollo (UNLP). Profesor Adjunto en la cátedra de Introducción a la Filosofía (FTS). Cuenta con años de ejercicio docente en diversos niveles educativos. Integra el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano (FPNL) y el proyecto de investigación “Dependencia epistémica, eurocentrismo y colonialidad del saber: hacia un pensamiento situado” (UNLP). Su producción está disponible en repositorios académicos (SEDICI, Researchgate, etc.). Sus temas de investigación se centran en la problemática del desarrollo, con especial interés en la economía popular.

Quienes formamos parte del día a día de Prometeo Editorial creemos en la palabra escrita,
en la magia de las ideas y en el pensamiento crítico.
Soñamos herramientas que puedan ayudar a mejorar la humanidad
y hacerla más democrática, más justa y solidaria.
Pensamos que en el sur del mundo aún hay mucho por decir, por hacer y por cambiar.
Deseamos que este libro forme parte de hermosas bibliotecas que sabrán hacer de él
un sólido instrumento de reflexión.



Impreso por TREINTADIEZ S.A. en 2023
Pringles 521 (C1183 AEI)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: 4864-3297 / 4862-6794
editorial@treintadiez.com